

Capitalismo antidrogas

Una guerra contra el pueblo

Dawn Marie Paley

Epílogo inédito de la autora
Traducido por Jorge Comensal



Libertad bajo palabra
Proyecto autónomo para el acopio
y dispersión de nuestras voces e historias



Paley, Dawn Marie

Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo, Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos y Libertad bajo palabra, México, 2018

272 págs.; 16 x 23 cm.

Edición y diagramación:

Libertad bajo palabra

libertadbajopalabra@riseup.net

Fotografía de portada:

Doctora Atli

Todos los derechos son de todxs.



Índice

Prefacio del traductor	5
Capítulo I	
Capitalismo antidrogas	7
Capitalismo de la guerra antidrogas en México	18
Iniciativa Mérida: del discurso a la acción	29
Capítulo II	
Definir la guerra antidrogas	41
Imperio y narcotráfico	47
Drogas y ocupación extranjera	50
Capítulo III	
Colombia: una mirada hacia el sur	57
El Plan Colombia y la guerra antidrogas	60
El conflicto paramilitar de Colombia	68
Las medidas de éxito del Plan Colombia	79
Gas y petróleo en Colombia	82
De la guerra antidrogas a la franca ocupación	87
Capítulo IV	
México: las reformas de la guerra antidrogas	91
¿Las reformas de Peña Nieto?	104
Extracción	110
Reformas legales	115
¿Quién se beneficia?	119
Capítulo V	
Plan México y la Militarización	123
Programas policiacos que apoya EUA en México	128
Prisiones	142
La frontera	144

Ganancias	147
Extractivismo militarizado	150
Territorio, policía comunitaria y grupos de autodefensa	154
Capítulo VI	
México: paramilitarización y guerra antidrogas	159
La violencia y los pequeños negocios	162
Migración paramilitarizada	168
Extracción paramilitarizada	173
Desplazamiento y bienes raíces	184
Aguacates y limones a punta de pistola	187
Capítulo VII	
El capitalismo de la guerra antidrogas en Guatemala	193
Empieza la guerra antidrogas	199
El factor petrolero	205
Los US Marines más allá de Mérida	209
Capítulo VIII	
El capitalismo narco en Honduras	221
Historia militar estadounidense en Honduras	224
1990: la década transnacional	228
La oligarquía hondureña y el golpe de 2009	231
Resistencia política vía LIBRE	236
Control pandillero y asesinatos	239
Violencia rural y control social	243
Conclusión:	
Pensar desde la paz en tiempos de guerra	249
Epílogo:	
México después de Ayotzinapa	257

Prefacio del traductor

A dos meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, me encontré con este libro recién publicado por la estupenda cooperativa AK Press. Comencé a leerlo con hambre, con ansias de que me ayudara a comprender la violencia que estaba (y sigue) devastando México y Centroamérica.

Al terminar de leer *Drug War Capitalism* (el 5 de diciembre de 2014), me apresuré a buscar en internet el correo electrónico de la autora, y le escribí para decirle que deseaba traducirlo al español. La indignación y la impotencia ante los efectos de la guerra contra las drogas en México me causaban una enorme frustración, y contribuir a divulgar el trabajo de Dawn Paley me pareció una forma constructiva de protesta.

En mi carta, le comenté a Dawn que yo vivía en la ciudad de México, y ella me respondió esa misma tarde para proponerme que nos viéramos el lunes siguiente en un café de Coyoacán (entonces no sabía que ella, de origen canadiense, vivía en la ciudad de Puebla). Así empezó el camino hacia *Capitalismo Antidrogas*.

Traducir el libro fue penoso y terapéutico a la vez. Por un lado, me dolía leer y reescribir el testimonio de las víctimas entrevistadas por la autora, así como las cínicas declaraciones de los que han promovido esta guerra; por el otro, me consolaba pensar que este ejercicio serviría para desmentir la idea de que la guerra contra el narco es un esfuerzo legítimo por controlar el tráfico de drogas y el crimen organizado, cuando en realidad se trata de una campaña bélica que sólo sirve para incrementar el control socioeconómico de las élites (narcos, políticos y capitalistas) sobre la población.

Los acontecimientos de los últimos años confirman la tesis sostenida por el libro: que el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y otros programas transnacionales, lejos de disminuir la producción y exportación de drogas hacia Estados Unidos, multiplican la violencia contra la sociedad civil, contribuyen al despojo territorial de los pueblos originarios, y modifican las leyes y dinámicas económicas en favor de los grandes capitales: mineras y agroindustrias que expolian los territorios desocupados, maquiladoras que explotan a los trabajadores reprimidos por el clima de violencia, empresas demasiado grandes para ser víctimas de la extorsión.

Daré un ejemplo sintomático: tras un robo millonario de oro en una mina de Sinaloa a principios de abril de 2015, Rob McEwen, dueño de la empresa que explota la mina, declaró en la televisión canadiense: “Los cárteles están activos allá abajo [refiriéndose a esa región de México]. Generalmente tenemos una buena relación con ellos. Si queremos ir a explorar a algún lado, les preguntamos, y te dicen ‘No’, pero luego dicen, ‘Regresen en un par de semanas, cuando terminemos lo que estamos haciendo’”.

Aunque el escándalo producido por esta declaración obligó al empresario canadiense a retractarse, sus palabras revelan que los poderosos inversionistas extranjeros no se sienten amenazados por los cárteles del narcotráfico; a los que sí temen son a los líderes sociales que se oponen al despojo de los recursos naturales: a Mariano Abarca, el líder chiapaneco al que un sicario vinculado con la minera canadiense Blackfire asesinó en 2009; o a Javier Cruz, campesino defensor de los bosques de Petatlán, Guerrero, asesinado en 2011 presuntamente por órdenes de Rogaciano Alba Álvarez, a quien Cruz había denunciado como autor intelectual del feminicidio contra la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa. Rogaciano Alba fue líder ganadero y alcalde priista de Petatlán, aliado al mismo tiempo de la maderera estadounidense Boise Cascade (contra la que Javier Cruz y otros ecologistas amenazados protestaban), del cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana.

Casos como los anteriores son una muestra de los complejos vínculos entre los narcos, el Estado y el capital trasnacional; este libro es una aportación muy valiosa para entender el papel que la guerra antidrogas juega en este contexto.

En la oscuridad de esta guerra han desaparecido decenas de miles de personas, entre ellas los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ojalá que este trabajo sirva como una luz para seguir buscándolas.

Jorge Comensal

Capítulo I

Capitalismo antidrogas

A principios de 2014 estuve en el único restaurante de Santo Domingo –un rústico local casi vacío, con tres mesas de plástico, dos congeladores llenos de refrescos y cervezas, y un bastidor de chorizos secándose al sol. Afuera había perros dormidos bajo los retazos de sombra; un hombre maduro con la playera colgada al hombro estaba sentado al otro lado de la calle, mirando camiones y motocicletas pasar de vez en cuando. Para los conductores, Santo Domingo es uno más de los muchos pueblos insignificantes en la ruta a través de las praderas del norte de Colombia. Junto al restaurante se erige un monumento de piedra en memoria de la población asesinada por la Fuerza Aérea colombiana en diciembre de 1998.

El 12 de diciembre de 1998, una persecución aérea condujo algunos helicópteros militares a este poblado de alrededor de 200 personas que pertenece a la municipalidad de Tame, en Arauca, Colombia. Era día de fiesta en el pueblo, pero nadie pasó esa noche a gusto, pues el escándalo de las aeronaves, explosiones y metrallas mantuvo a la gente despierta y asustada. En algún momento de la madrugada el escándalo hizo una pausa, y volvió a empezar alrededor de las 5 a.m. Conforme el ruido aumentaba, las personas comenzaron a congregarse en la farmacia, justo enfrente del restaurante donde yo me encontraría quince años después.

María Antonia Reyes Beltrán vivía en una casa con techo de palma cerca de la farmacia, y se acuerda de haber escuchado el vuelo de las naves y de haber tratado de convencer a sus vecinos mayores para que evacuaran sus casas, pero ellos habían sido desplazados antes y ya no estaban dispuestos a claudicar. Reyes Beltrán dejó su casa y caminó al sitio de reunión. A las 10:02 a.m., una bomba en racimo de la Segunda Guerra Mundial, hecha de seis granadas de fragmentación, fue lanzada desde un helicóptero al camino donde los pobladores estaban reunidos. 17 personas murieron mientras trataban de refugiarse en la farmacia. Otras 27, incluidos 15 niños, salieron heridos. “Iban a ser las diez de la mañana, yo estuve escuchando el programa [de radio] cuando pasó el helicóptero, y todos los muchachos ahí estaban en la orilla de la carretera, se pararon y hacían señas así, que van botando una cosa pa’abajo, pero que no sabía qué era. Era brillante, resulta que era

la bomba que mató la gente”, dijo ella en una entrevista realizada en la escuela de la comunidad, a menos de 200 metros del sitio donde sucedió la explosión. “Ya en ese momento pues a mí casi también, como yo estaba recostada contra unas tablas y en eso pasó una esquirla, y casi también me mata a mí en ese momento. Yo estaba ahí cuando miré a los muchachos diciendo ‘¡auxilio, auxilio!’”

Mientras abajo los pobladores de Santo Domingo trataban de evacuar a los heridos, arriba los pilotos de un avión Skymaster transmitían por la señal de radio militar el mensaje de que había guerrilleros entre la gente, por lo que los helicópteros continuaron disparándole a los caídos.¹ “El helicóptero siguió echando plomo, ahí por la carretera arriba seguía echando plomo. La muchacha quedó muerta ahí, y otras y otras”, me explicó Reyes Beltrán. Todos los sobrevivientes fueron expulsados de Santo Domingo y se refugiaron en una escuela cercana hasta el 5 de enero, cuando se atrevieron a regresar a establecerse de nuevo en su comunidad.

La misma mañana del bombardeo, dos ciudadanos de Estados Unidos se habían reunido con miembros del ejército colombiano dentro de las instalaciones del proyecto Caño Limón de Occidental Petroleum. Ahí planearon el ataque. Bárbaro José Orta y Charlie Denny trabajaban para AirScan Inc., una compañía estadounidense de seguridad privada que Occidental había contratado para defenderla de ataques guerrilleros a lo largo del oleoducto. Al margen de su misión de vigilancia, los dos hombres terminaron dirigiendo una flota de cinco helicópteros militares colombianos rumbo a Santo Domingo, a más de 100 kilómetros de distancia de las instalaciones de la petrolera. A las 6:53 a.m., uno de los norteamericanos se comunicó desde el avión Skymaster que piloteaba, y sugirió que había guerrilleros ocultos entre la gente que se estaba congregando para protegerse del bombardeo. Dijo: “Tengo un grupo de personas aquí, pero todos son civiles, no puedo ver ningún [...] todas las personas aquí parecen ser civiles. Se cambiaron, todos se cambiaron de ropa, ése es el problema que tenemos, estos tipos entraron al edificio y se cambiaron de ropa”²

De acuerdo con el testimonio judicial de uno de los tripulantes colombianos, el Skymaster pertenecía a Occidental Petroleum (Oxy). En esa época, Oxy financiaba al Ejército Colombiano con alrededor de 750,000 dólares en efectivo y en especie, y “proveía, directamente o por medio de contratistas, transportación de efectivos, planeación estratégica y

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Case No. 12.416 Santo Domingo Massacre Colombia”: 14. <https://www.cidh.oas.org/demandas/12.416ENG.pdf>

2 *Ibid.*, 11.

combustible para aeronaves del ejército colombiano, así como la tripulación del helicóptero acusado de tirar la bomba”.³ Aunque supuestamente estaban limitados a vigilar ductos, los pilotos y el equipo de AirScan regularmente ayudaban a la Fuerza Aérea colombiana a perseguir guerrillas sospechosas. “Con frecuencia se desviaban de sus misiones para apoyarnos en operaciones contra las guerrillas. El avión iba, revisaba y verificaba patrullas [guerrilleras] y avisaba, ‘Hey, aquí hay gente’” le dijo al *Los Angeles Times* en 2002 uno de los colombianos acusados de participar en la masacre.⁴ Tras los bombardeos de 1998, la propiedad de las naves Skymaster fue transferida a la Fuerza Aérea colombiana.⁵

Después del ataque, la milicia colombiana declaró que los fallecidos eran miembros de fuerzas guerrilleras, versión que nadie creyó. Posteriormente los militares cambiaron su historia y dijeron que de hecho eran las guerrillas las que habían bombardeado Santo Domingo. Ninguno de los norteamericanos que iba en el Skymaster aquel día ha enfrentado cargos o encarcelamiento en Estados Unidos. Algunos familiares de las víctimas recibieron compensaciones por sus muertos, pero personas como Reyes Beltrán, cuya casa de palma se consumió en llamas por una bengala lanzada desde un helicóptero, no recibieron nada.

El gobierno colombiano nunca se ha disculpado oficialmente por el ataque con los pobladores. Todo lo contrario: en 2013, la Fuerza Aérea emprendió una nueva campaña de bombardeos en el área. Entrevisté a cerca de una docena de personas de distintas partes de Santo Domingo que acudieron a compartir sus testimonios a la cafetería escolar –un cuarto sin paredes ni nada más que mesas de cemento y sillas.

Daniel Zavala, un agricultor de rostro pecoso con penetrantes ojos verdes y tradicional sombrero *mueliao*, me explicó lo que le sucedió a su vecino en marzo de 2013: “Hay una casa donde un vecino, no estoy exagerando y de pronto pues lástima que no está acá, y no me deja mentir, aproximadamente a unos 50 metros de la casa el helicóptero rafagueó esa vaina, como, hablando literalmente era una lluvia de plomo. Ahí había niños, había una familia que tiene un peladito como de 12 años y una niña de 8 años, es tremendísimo”. Mientras Zavala hablaba de cómo los sobrevuelos angustiaban a los niños de la comunidad, más y más personas de la comunidad iban llegando. Algunos me sugirieron que visitara uno de

3 Christian T. Miller, “A Colombian Town Caught in the Crossfire”, *Los Angeles Times*, 17 de marzo, 2002. <http://articles.latimes.com/2002/mar/17/news/mn-33272/3>

4 *Ibid.*

5 InfoMil Prensa, “Aeronaves de Inteligencia en Colombia: C-337 Skymaster”. <http://www.webinfomil.com/2012/05/aeronaves-de-inteligencia-en-colombia-c.html>

los sitios bombardeados, y discutieron entre ellos cuál sería más apropiado. Finalmente decidieron llevarme a un área atacada el 7 de diciembre de 2013 —un lugar llamado Lusitania.

Subí a la parte trasera de una moto, y tres hombres y yo arrancamos. Después de diez minutos sobre la carretera, viramos hacia un delgado camino de pasto, con puentes rústicos de madera y vacas pastando a ambos lados. A la media hora hicimos una parada para mostrarme la escuela, una amplia palapa sin electricidad ni agua corriente. Continuamos otros veinte minutos hasta llegar a la pequeña casa de Joel Armando Estrada, en la que viven siete niños y cinco adultos. Cuando llegamos, algunos niños estaban dibujando y los más chicos estaban jugando en el patio. A menos de dos minutos de la casa, caminando hacia la selva, había dos cráteres, fácilmente de 20 metros de diámetro y diez metros de profundidad cada uno, evidencia del ataque reciente. Una serpiente de gran tamaño salió del fondo de un cráter que se había llenado de agua, y dos muchachos fueron por ella y comenzaron a turnarse tratando de matarla con una roca.

“A las 4 de la mañana estábamos dormidos cuando llegaron aviones a bombardear, y los niños míos, a todos ellos casi les dieron náuseas, por la misma explosión que casi los revienta. Vomitó el más pequeñito”, me dijo Armando Estrada con su mano posada en el hombro de su hijo más joven. Hora y media después de la explosión, los soldados aterrizaron el helicóptero, allanaron la casa y revisaron todo. Le preguntaron a Estrada dónde había escondido a los guerrilleros —algo que el agricultor, que cultiva plátanos, yuca y maíz, dijo que su familia nunca ha hecho. Miguel Otero, que vive con Estrada, me contó que él ya estaba despierto cuando comenzó el bombardeo, y que al asomarse justo después de la primera detonación, vio una bola de fuego de entre 60 y 70 metros a una cuadra de su casa. Momentos después, una ráfaga de metralla empezó a caer y rebotar sobre el techo. Los niños recogieron más tarde cientos de pequeñas esquirlas redondas de hierro, y me mostraron los pedazos de bombas que encontraron en el patio. Al menos una de las esquirlas perforó la delgada pared de la choza, y muchas otras se incrustaron en los árboles de alrededor.

“Después, imagínese cómo quedamos nosotros, totalmente enfermos psicológicamente, nunca habíamos vivido una situación de éstas, así tan terrible”, dijo Otero. “Cuando en eso llegaron los soldados, los militares echaron a llegar, y la verdad llegaron como siempre, agresivos, insultándonos, que dónde estaba el tipo que se metía adentro, que quién estaba ahí adentro. Ellos llegaron bravos, como si nosotros fuéramos el objetivo de ellos, quizás pareciera”.

“Tal vez eso es la persecución contra guerrillas o grupos, nosotros en el lugar no encontramos rastros de ningún ser humano muerto por ahí, nada. Ni tampoco pisoteo donde ha habido guerrilla o algo. No vimos eso, nada”, explicó Otero, que estaba sentado enfrente de mí jugando con una hoja de papel mientras hablaba. “De manera tal que no entendemos por qué la verdad bombardearon en ese lugar donde no había nadie. Cosa que yo no sé”.

La posibilidad de que haya exploración petrolera en los terrenos que rodean Santo Domingo le parece a otros el motivo detrás de la violencia: “Ésa es como una política del gobierno, despojar el territorio de lo que es nuestro, que somos los campesinos, de lo que es la población indígena, porque hay muchas comunidades indígenas también que les quitan su territorio a costa de la guerra, del terror que infunden en la comunidad, para desalojarnos de nuestro territorio para poder venir a extraer los recursos naturales”, dijo Fernando Roa, un agricultor que fue elegido vicepresidente del Consejo de Acción Comunal de Santo Domingo. Roa y otros que permanecen en el territorio se dan cuenta de que quedarse es un acto de resistencia. “Nosotros el motivo es seguir y mantenernos en nuestro territorio, y luchar y defender nuestros derechos, que nosotros tenemos derecho a la educación, a la salud, o sea todas las cosas que tenemos derecho y que son a migajas lo que nos dan”.

Con frecuencia, los conflictos y la violencia en Colombia, México y otros países provocan tanta confusión, miedo y dolor que es difícil tomar distancia y entender los hechos en su contexto económico y político. Escuchar las palabras de Roa mientras la brisa soplaba a través de la cafetería escolar me confirmó la importancia de la investigación y escritura críticas sobre estos temas. Una de las motivaciones de este libro es reunir estas líneas de análisis para entender la violencia en el marco de las luchas por el territorio, la tierra y los recursos. Enterarme de la tragedia humanitaria que se cierne sobre Santo Domingo y escuchar a Roa decir que él y muchos otros creen que los bombardeos están vinculados con el petróleo, fue un recordatorio de la enorme importancia de hacer estas conexiones.

No obstante el devastador bombardeo de 1998 en Santo Domingo y las campañas bélicas en curso, Colombia sigue siendo el aliado más cercano de Washington en la región. Con el pretexto de armar al Estado en su lucha contra el cultivo y tráfico de drogas —así como contra las guerrillas disidentes—, el apoyo estadounidense a Colombia aumentó en la primera década del milenio. Sin embargo, como expondré en este libro, más que detener el narcotráfico, el financiamiento de la guerra contra las drogas ha

propiciado una estrategia bélica que asegura el acceso de las corporaciones trasnacionales a los recursos, a través del despojo y el terror. Por medio de la Iniciativa Mérida y la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI), Estados Unidos auspició una réplica de la guerra al estilo colombiano en México y Centroamérica. Este libro no trata de infiltrarse a los grupos criminales o de sacar a la luz información interna sobre los cárteles; no busca reproducir las narrativas dominantes sobre la guerra antidrogas ni decir qué cartel hace qué y dónde, pues esos datos son tan volubles y efímeros como el viento. Por el contrario, este libro busca exponer los impactos sociales de la guerra antidrogas, una tarea extremadamente compleja.

Capitalismo antidrogas surge de un deseo de considerar motivaciones y factores alternativos para la guerra antidrogas, específicamente la expansión capitalista hacia territorios y espacios sociales nuevos o previamente inaccesibles. Además de enriquecer a los bancos estadounidenses, financiar campañas políticas, y alimentar un redituable comercio de armas, la imposición de políticas antidrogas puede beneficiar a empresas petroleras, gaseras y mineras trasnacionales, así como a otras grandes corporaciones. Hay también otros sectores beneficiados por la violencia: las industrias maquiladoras y las redes de transporte, así como un segmento del sector comercial y de venta al menudeo representado por empresas como Walmart, e intereses en bienes raíces en México y Estados Unidos. La guerra antidrogas es un remedio a largo plazo para los achaques del capitalismo, que combina legislación y terror en una experimentada mezcla neoliberal para infiltrarse en sociedades y territorios antes no disponibles para el capitalismo globalizado. Mi propuesta es repensar la llamada guerra antidrogas: no se trata de la prohibición ni de la política de narcóticos. En cambio, señalo cómo el terror es usado en esta guerra contra la población de la ciudad y el campo, y cómo, al lado de esta política de terror y el pánico resultante, se implementan políticas que facilitan la inversión extranjera directa y el crecimiento económico. Esto es el *capitalismo antidrogas*. Pillaje, ganancia y saqueo han sido pilares de la guerra desde tiempos precoloniales, pero se ha prestado poca atención al papel de las finanzas y la economía en la guerra. Mats Berdal y David M. Malone escriben que, en las investigaciones publicadas sobre la generación y mantenimiento de los conflictos, se hacen muy pocos estudios sistemáticos de los intereses económicos involucrados.⁶

⁶ Mats Berdal y David M. Malone, "Introducción" en *Greed & Grievance: Economic Agendas in Civil Wars* de Mats Berdal y David M. Malone (eds.), Boulder: Lynne Rienner, 2000, <http://web.idrc.ca/openebooks/421-5/>

En el caso de la guerra antidrogas, el análisis económico en la interpretación de los conflictos se ha reservado generalmente a la especulación sobre las ganancias de los narcotraficantes y al lavado de dinero en grandes bancos. Pero, como Berdal y Malone declaran, para entender las guerras actuales adecuadamente, “*El papel del sector privado internacional es crucial, en particular el de las industrias extractivas (petróleo y minería)*”.⁷

El objetivo que anima este proyecto es crear un marco teórico más útil para entender la guerra antidrogas al sur de la frontera México-Estados Unidos, donde la violencia se deriva de la militarización estatal y de los cárteles del narcotráfico, a los que también me refiero como grupos paramilitares. Un elemento clave en la comprensión de cómo las guerras contra el narco fortalecen a los grupos armados clandestinos es que estos grupos a veces surgen para proteger a los narcotraficantes, y posteriormente empiezan a trabajar para cualquiera que pueda pagarles. Un día podrían estar en la nómina de los narcotraficantes, y al día siguiente en la de ciertas élites que buscan ejecutores de represión extrajudicial. Estas élites podrían incluir políticos luchando entre sí por el poder, o terratenientes que desean expulsar a cierta población vulnerable de sus tierras. Tal como se documenta en este libro, existen factores estructurales que permiten que ciertos grupos armados clandestinos extorsionen e infundan terror con total impunidad cuando esos actos benefician el capitalismo transnacional o la política exterior de Estados Unidos.

En México, Los Zetas comenzaron a transformar el significado original de “cártel”, proveniente del italiano *cartello*, diminutivo de *carta*, que en 1887 se usó en Alemania para denominar a una coalición entre partidos conservadores y nacionalistas, el *Kartell*. A partir de ahí se acuñó la acepción que ahora encontramos en el diccionario: “Convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial”.⁸ Los cárteles no existen solamente para regular el mercado y los precios, aunque esto no impide el uso continuado de la palabra. En el caso de México, grupos como Los Zetas son denominados “cárteles”, aunque sus actividades van mucho más allá del narcotráfico; también llevan a cabo extorsiones (de negocios y migrantes), secuestros, masacres, control de los distribuidores de artículos pirata, etcétera. Los Zetas son un grupo paramilitar, una organización armada oficialmente fuera del control estatal, financiada en parte por el narcotráfico, pero con raíces profundas en la estructura militar del ejército.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Diccionario de la Real Academia Española* en línea.

La idea de que existe una clara división entre el Estado y el crimen —y de que la corrupción y el contubernio son el producto de algunas personas deshonestas— es un mito hegemónico promovido por los Estados-nación y los medios de comunicación oficiales. Desmentir esta falsa dicotomía se puede lograr escuchando a las personas cuyas vidas han sido directamente afectadas por grupos armados que actúan impunemente. La impunidad no es el resultado de un Estado débil o deficiente, sino que es concedida activamente a una amplia gama de grupos armados que cometen crímenes y actos de terror contra ciudadanos y migrantes, en especial los más pobres. Proveer impunidad a los grupos armados alineados con el capitalismo es parte de la razón de ser de un Estado-nación moderno.

Javier Sicilia, el activista mexicano por la paz cuyo hijo fue asesinado en 2011, recomienda no entender la violencia en México como una lucha de policías contra cárteles. “Hay una guerra entre el Estado, y Estados paralelos”, declaró durante una entrevista en la Ciudad de México, en 2014. “Mientras no entendamos que el crimen organizado no son delincuentes, son células de Estado paralelo, con capacidad de fuego, con capacidad de sometimiento, y algunas con bases sociales. Si no se ve que es una lucha por el territorio y por el control de la vida ciudadana, no vamos a entender el problema”. Le pedí a Francisco Chavira, activista y educador que vive en Reynosa, Tamaulipas, que me explicara cómo la narcoguerra interactúa con el Estado en México: “Desde mi punto de vista, yo opino que el verdadero delincuente, el verdadero capo en México, es el presidente de la república y los gobernadores son los [capos] en su respectivo estado, y los jefes de plaza vienen siendo los alcaldes. Todos llegaron con financiamiento por su campaña con dinero de procedencia ilícita. Se protegen entre ellos, son los mismos”.

Un medio clave por el que el capitalismo globalizado penetra nuevos territorios y ámbitos sociales es el uso del terror contra la población. El diccionario define “terrorismo” como “Dominación por el terror; sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, y eso es justamente lo que sucede en las masacres y la exposición pública de cadáveres, técnicas de terror practicadas desde hace siglos por gobiernos y fuerzas irregulares, con frecuencia para imponer regímenes políticos y económicos. El terror juega un papel específico en el ejercicio del control sobre la ciudadanía. “En todas sus formas, el terror fue diseñado para aplastar al espíritu humano. Ya sea en Londres en el nacimiento del capitalismo, o en Haití actualmente, el terror infecta la imaginación colectiva, generando un abanico de demonios y monstruos”.⁹ Se trate de cadáveres colgados sobre avenidas, partes de

⁹ Marcus Rediker y Peter Linebaugh, *The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners and*

cuerpos tiradas en autopistas, explosiones o masacres que dejan docenas de civiles heridos o muertos, México ha sufrido una cadena escalofriante de episodios sin precedentes a partir de que el expresidente Felipe Calderón lanzara la guerra contra las drogas en diciembre de 2006.¹⁰

El terror abona el terreno para sembrar nuevas formas de control social. También afecta la movilidad —entendida como la capacidad de las personas para desplazarse libremente según su voluntad—, que se ve restringida por una creciente vigilancia fronteriza, retenes policiacos y militares, así como por el miedo generado a través del asesinato indiscriminado de pasajeros en autobuses, balaceras en las calles y desaparición de viajeros. La movilidad reducida es uno de los primeros efectos del terror que afecta a la gente. Mientras tanto, la migración forzada y el desplazamiento involuntario aumentan conforme la transición a una sociedad más represiva cobra víctimas y amenaza a los sobrevivientes.

Estos drásticos mecanismos de terror y represión proveen las bases para el avance e intensificación capitalista en México y el resto de Latinoamérica. Los Estados y el capital transnacional recurren a la represión terrorista con el fin de despojar a los pueblos de América y el mundo de sus tierras comunales y territorios. Como apunta el teórico social uruguayo Raúl Zibechi, “Será difícil que el capitalismo sobreviva si no logra consolidar nuevas formas de control y subyugación”.¹¹ De acuerdo con el geógrafo David Harvey, la expansión del capitalismo depende de la acumulación por despojo,¹² que puede incluir desplazamiento forzado, privatización de tierras públicas o comunales, la supresión de formas indígenas de producción y consumo, y el sometimiento por medio del crédito y la deuda, entre otros.¹³ Todos estos fenómenos están ocurriendo actualmente en México y muchos otros países, y, como veremos a lo largo del libro, la guerra antidrogas está contribuyendo a la aceleración de muchos de estos procesos.

Desplegar al ejército para luchar contra un enemigo interno, en este caso los narcotraficantes, representa un paso fundamental para que un Estado formalmente democrático justifique el ataque de soldados contra civiles en su propio país, bajo el argumento de que se trata de criminales.

the Hidden History of the Revolutionary Atlantic. Boston: Beacon Press, 2000, 53.

10 Daniel Hernández, “Calderón’s War on Drug Cartels: A Legacy of Blood and Tragedy”, *Los Angeles Times*, 1 de diciembre, 2012. <http://articles.latimes.com/2012/dec/01/world/la-fg-wm-mexico-calderon-cartels-20121130>

11 Raúl Zibechi, *Territories in Resistance: A Cartography of Latin American Social Movements*. Oakland: AK Press, 2012, 39.

12 David Harvey, *Spaces of Global Capitalism*. Nueva York: Verso, 2006, 91.

13 David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press, 2005, 159.

La historia nos enseña que el denominado entrenamiento y gasto antidrogas puede ser usado para muchos otros propósitos. En su libro sobre Colombia, Doug Stokes entrevistó a Stan Goff, veterano instructor de las Fuerzas Especiales de EUA, que fue inusualmente cándido sobre lo que el entrenamiento antinarcoóticos significaba para él: “Te decían, y le decían al público norteamericano, si es que les decían algo, que esto era entrenamiento antinarcoóticos. El entrenamiento que yo realizaba era cualquier cosa menos eso. Se trataba más bien de doctrinas de contrainsurgencia actualizada al estilo de Vietnam. Nos sugerían que esto era lo que haríamos, y nos sugerían además que nos *refiriéramos* a ello como entrenamiento antinarcoóticos, si alguien preguntaba. Era totalmente claro para nosotros que el asunto antinarcoóticos era una pantalla oficial de encubrimiento”.¹⁴ El senador republicano John McCain declaró algo semejante en un discurso de 2002: “Gracias al Presidente, la política norteamericana ha prescindido de la ilusión de que el gobierno colombiano está peleando dos guerras separadas, una contra el narcotráfico y otra contra los terroristas domésticos. El gobierno democrático de Colombia ha insistido desde hace tiempo en que es el nexo entre los terroristas y el narcotráfico el que amenaza a la sociedad colombiana. La política exterior norteamericana ya reconoce esa realidad, y abandona cualquier distinción ficticia entre operaciones antinarcoóticos y contrainsurgentes”.¹⁵

La creación de fuerzas policíacas y unidades militares antidrogas, así como el gasto en la lucha contra el narco en general, debe entenderse dentro del contexto del capitalismo global y la guerra transnacional. Así, la adquisición de territorios y recursos, incluyendo el mayor control sobre grupos sociales y la fuerza de trabajo, es una motivación crucial. Los discursos de la guerra antidrogas promovidos por los Estados y transmitidos por los medios de comunicación masiva crean una eficiente pantalla de humo, provocando pánico moral entre la gente, lo cual también puede endurecer y acentuar las divisiones dentro de las comunidades (entre aquellos que están involucrados en actividades ilícitas y los que no, por ejemplo), y afectar interacciones dentro de los barrios, grupos comunitarios y organizaciones campesinas.

Sabemos que la cantidad de drogas introducidas a Estados Unidos no disminuyó significativamente a partir del Plan Colombia. Sin embargo, esto no significa un fracaso estratégico, porque el modelo del Plan Colombia tiene como objetivo mejorar las condiciones para la inversión extranjera directa y la expansión del capitalismo, más no detener el flujo de drogas.

¹⁴ Doug Stokes, *America's Other War: Terrorizing Colombia*. Londres: Zed Books, 2013, 121.

¹⁵ John McCain, “Speech by Sen. John McCain (R-Arizona)”, 6 de junio de 2002, <http://archive.is/WNO9d#selection-273.112-273.469>

Tratándose de represión y terror en México, las tácticas empleadas por el aparato coercitivo del Estado llegan mucho más lejos que las de Colombia, y están inspiradas en muchas generaciones de acción bélica imperialista, tanto de Estados Unidos como del resto del mundo.¹⁶ En este contexto, creo que las experiencias de las guerras de contrainsurgencia respaldadas por Estados Unidos en Centroamérica (Guatemala en particular), son de enorme importancia para entender lo que está pasando en México actualmente. Aunque casi nunca se les vincula, estos conflictos deben considerarse parte de una memoria represiva que ha sido activada para realizar la guerra antidrogas en curso en México, Centroamérica y otros lugares. Algunas de las mismas fuerzas represivas y técnicas utilizadas contra la sociedad centroamericana en los años 80 pueden atestiguar en la guerra antidrogas. Este fenómeno existe a nivel global. Como Laleh Khalili argumenta en su trabajo sobre Palestina y la contrainsurgencia, “Oficiales y soldados de a pie, tecnologías de control y recursos, viajan no sólo entre colonias y metrópolis, sino también entre diferentes colonias del mismo poder colonial y entre diferentes metrópolis coloniales, por lo cual burócratas y élites militares activamente estudian y comparten técnicas y se aconsejan mutuamente sobre las prácticas de dominación más efectivas”.¹⁷

Hay ciertas líneas de continuidad entre las guerras (incluidos los genocidios) centroamericanas en los años 70, 80 y 90, y el México de hoy. Por ejemplo, algunas granadas usadas por los Zetas en ataques en México han sido rastreadas hasta los años ochenta, cuando fueron vendidas por Estados Unidos al ejército salvadoreño.¹⁸ Otro lazo entre la guerra de 36 años en Guatemala y la actualidad son los kaibiles, el cuerpo militar guatemalteco de élite cuyos miembros fueron responsables de horribles masacres y que ahora están activos tanto como una fuerza especial gubernamental y como parte de grupos criminales. Un veterano kaibil fue acusado de dirigir el acto más violento relacionado con el narcotráfico en Guatemala. Hugo Gómez Vásquez fue acusado de supervisar la masacre en la Finca Los Cocos, departamento de El Petén, en mayo de 2011, cuando 27 agricultores fueron asesinados, presuntamente debido a una disputa territorial entre Otto Salguero, un propietario local, y Los Zetas.¹⁹ Además de estos ejemplos

16 Jasmin Hristov, *Blood and Capital: The Paramilitarization of Colombia*. Toronto: Between the Lines, 2009.

17 Laleh Khalili, “The Location of Palestine in Global Counterinsurgencies”, *International Journal of Middle East Studies* 42, no. 13 (2010): 413–414.

18 Consulado de Monterrey, “Mexico: Tracking Narco-grenades”, Marzo 3, 2009, <http://cablegate-research.net/cable.php?id=09MONTERREY100#para-3961-4>

19 Dawn Paley, “Strategies of a New Cold War”, *Toward Freedom*, 20 de diciembre de 2012, <http://www.towardfreedom.com/31-archives/americas/2997-strategies-of-a-new-cold-war-us->

concretos, muchas de las prácticas de terror usadas por ejércitos como el guatemalteco han vuelto a la vida en México y Centroamérica, en manos de grupos criminales. En la guerra de hoy, la “Capitalismo antidrogas”, la violencia desplegada contra civiles —especialmente migrantes y pobres— viene de las tropas oficiales, uniformadas, así como de las fuerzas irregulares que incluyen a los cárteles del narcotráfico y a los grupos paramilitares. Y en Colombia, el país modelo para este tipo de combate, la violencia proviene del cielo, al tiempo que la fuerza aérea continúa regando bombas desde arriba sobre los campesinos.

Capitalismo de la guerra antidrogas en México

“Así es como se sintió el comienzo del neoliberalismo”, me dijo Raquel Gutiérrez cuando la entrevisté en 2012, refiriéndose a lo que significa tratar de entender la guerra que hay en México. Gutiérrez, que actualmente es profesora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, era una militante clandestina en Bolivia a mediados de los ochenta, cuando las primeras medidas neoliberales se pusieron en práctica y empobrecieron a la clase trabajadora. Han pasado poco más de diez años desde que volvió a México. Estamos conversando en el comedor de su departamento. Raquel hace una pausa y le da una calada profunda a un cigarrillo, como si tratara de recuperar un lenguaje perdido. No vuelve. Me pregunta si he leído el libro *La doctrina del shock* de Naomi Klein. Asiento. Silencio. “El asunto —me dice— es que en México los shocks no han funcionado”. No es que hubiera escasez de shocks, que según Klein incluyen desde desastres naturales hasta crisis económicas aprovechadas para fortalecer el orden neoliberal. En *La doctrina del shock* explica: “El caso más dramático hasta la fecha sucedió en 1994, un año después del golpe de Yeltsin, cuando la economía mexicana sufrió un serio desplome conocido como el *Efecto Tequila*: los términos del rescate estadounidense incluían privatizaciones urgentes, y *Forbes* anunció que el proceso había forjado 23 nuevos multimillonarios... También abrió México a una ola de adquisiciones extranjeras sin precedentes: en 1990, sólo uno de los bancos de México era propiedad de extranjeros, pero ‘para el año 2000 veinticuatro de treinta estaban en manos extranjeras’”.²⁰ La transformación tuvo efectos particularmente graves en los medios rurales.

marines-and-the-drug-war-in-guatemala

20 Naomi Klein, *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. Toronto: Knopf, 2007, 248–249.

“Estas políticas neoliberales auspiciaron una nueva era de producción industrial de frutas y vegetales de exportación, nuevas formas de control de la tierra, una reformulación de las relaciones laborales bajo la agricultura por contrato, y una sustancial emigración de pequeños campesinos que ya no eran competitivos”.²¹

La primera ola de políticas económicas neoliberales se dio en forma de programas de ajuste estructural al final del llamado “Milagro Mexicano”, un periodo de firme crecimiento económico, industrialización, sustitución de importaciones y precios altos del petróleo. “De 1980 a 1991, México recibió trece préstamos de ajuste estructural de parte del Banco Mundial, más que ningún otro país”, escribió Tom Barry en 1995. “También firmó seis acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, todos los cuales incrementaron la presión para liberalizar el comercio y la inversión”.²² En los años ochenta, a veces llamados “la década perdida”, los precios del petróleo colapsaron junto con el valor del peso. “De más de mil empresas estatales en 1983, el Estado mexicano pasó a ser dueño de alrededor de doscientas en 1993... En 1991, el plan de privatización llevó más dinero a las arcas del gobierno mexicano (\$9.4 mil millones de dólares) que la suma de las ventas de todas las demás empresas públicas en Latinoamérica”.²³ Para 1988, la economía mexicana ya era considerada una de las más abiertas a la inversión extranjera en el mundo.²⁴ Muchas de las privatizaciones más importantes sucedieron durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que llegó a la presidencia en 1988 gracias a una elección que muchos consideraron fraudulenta. México experimentó una serie de eventos que Klein denomina *shocks*, y algunos sectores como la banca y las telecomunicaciones fueron cabalmente privatizados. No obstante lo anterior, al comienzo de la guerra contra las drogas en México, grandes corporaciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) —la petrolera número diecisiete del mundo por sus reservas,²⁵ y la octava más grande según otros parámetros²⁶— continuaban siendo totalmente controladas por

21 Donna Chollett, “From Sugar to Blackberries: Restructuring Agro-export Production in Michoacán, Mexico”, *Latin American Perspectives* 36, no. 3 (mayo, 2009): 79.

22 Tom Barry, *Zapata's Revenge: Free Trade and the Farm Crisis in Mexico*. Boston: South End Press, 1995, 43.

23 Judith Teichman, *Privatization and Political Change in Mexico*. Pittsburgh: University of Pittsburgh, Digital Research Library, 2009, <http://digital.library.pitt.edu/cgi-bin/t/text/text-idx?idno=31735055592376;view=toc;c=pittpress>

24 Juan Carlos Moreno-Bird, “La Economía Mexicana Frente a la Crisis Internacional”, *Nueva Sociedad* 220 (marzo-abril, 2009): 64.

25 Petro Strategies Inc., “World’s Largest Oil and Gas Companies”, http://www.petrostrategies.org/Links/worlds_largest_oil_and_gas_companies.htm

26 S. McCrummen, “Mexican President Proposes Historic Changes to State-owned Pemex

el gobierno; comunidades campesinas e indígenas conservaban la propiedad comunal de tierras ricas en recursos; una amplia clase media poseía pequeñas y medianas empresas; y las familias más ricas del país controlaban amplios sectores de la economía. Los inversionistas mexicanos fueron favorecidos en las privatizaciones del periodo de Salinas, pues se dieron antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).²⁷ De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, las diez familias más ricas de México “no son el único obstáculo para mejorar la competitividad de la economía mexicana”.²⁸ Aunque debilitadas por reformas constitucionales que Salinas realizó antes de que el TLCAN entrara en vigor, las organizaciones de bienes comunales, junto con ejidos y comunidades indígenas, no han sido totalmente desarticuladas por la política neoliberal. Al término de 1994, México había entrado al TLCAN, atestiguado el levantamiento zapatista y sufrido otra grave devaluación de la moneda, pero a principios del siglo XXI el territorio y la economía aún no se habían abierto por completo a la inversión extranjera. Vicente Fox, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) ganó la presidencia en 2000, lo que puso fin a 71 años de gobierno ininterrumpido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, según algunos, inauguró la democracia en México.

Además de las corporaciones aún por privatizar en México, hay otros atractivos para el capital trasnacional: la localización estratégica del país, por ejemplo. La frontera México-Estados Unidos mide un poco más de 3,100 km, una línea que corre del Pacífico al Atlántico, de Tijuana–San Diego a Ciudad Juárez–El Paso y Brownsville–Matamoros. En algunos tramos la frontera está cercada, y en otras partes el desierto inclemente la vigila.²⁹ La frontera estadounidense con México puede y debe ser considerada un valioso recurso económico; la mano de obra barata al sur de la frontera, a un paso de Estados Unidos, aunada a los bajos costos de transporte, resulta una combinación muy atractiva. De esa manera, México es cada vez más un jugador significativo en la manufactura estadounidense y mundial. La

Oil Monopoly”, *Washington Post*, 12 de agosto de 2013, http://www.washingtonpost.com/world/mexican-president-proposes-historic-changes-to-state-owned-pemex-oil-monopoly/2013/08/12/7f848d4c-0380-11e3-bfc5-406b928603b2_story.html

27 Carlos Slim, “5. ¿Es cierto que Carlos Salinas de Gortari le vendió Telmex a cambio de un favor?” <http://www.carlosslim.com/05.html>

28 Departamento de Estado de EUA, “08MEXICO2187, Who Are Mexico’s Wealthiest Business Leaders?”, 16 de julio de 2008, <http://wikileaks.org/cable/2008/07/08MEXICO2187.html#par21>.

29 La desértica zona fronteriza cerca de Tucson, Arizona, es el área más mortal para los migrantes. 6,029 de ellos murieron tratando de cruzar la frontera entre 1998 y 2014, de acuerdo con la patrulla fronteriza de EUA.

industria automotriz es un buen ejemplo, pues está distribuida en la frontera y al interior del país, y “México se está convirtiendo en el nodo exportador de las Américas –no sólo para Norteamérica, sino también Sudamérica”, de acuerdo con el presidente ejecutivo de Nissan, Carlos Ghosn.³⁰

Una tarde, mientras conducíamos por la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, un activista local señaló un puente y comentó que más de una vez han colgado cadáveres ahí. Recordé haber visto fotos del sitio en internet, pero con una enorme diferencia: enfrente de donde se tomaron las fotos, una fábrica de Sony ocupa una cuadra entera, con banderas de Japón, Estados Unidos y México izadas en la entrada. Que Sony tenga una fábrica a escasos metros de donde se han expuesto públicamente cuerpos humanos me pareció un elemento muy significativo. Saber que el puente no se encuentra en un paraje abandonado de la ciudad, sino enfrente de una concurrida planta de ensamble, permite inferir que los trabajadores que entran y salen de la fábrica al amanecer, cuando suelen encontrarse los cuerpos colgados, han atestado estas perturbadoras escenas. Como veremos más adelante, mientras que la violencia en México por lo general no ha impactado mucho a los dueños de corporaciones transnacionales, sí ha afectado a los trabajadores. La decisión de los trabajadores de continuar o no trabajando en ambientes hostiles, donde se usa el terror contra los residentes, puede afectar la fuerza laboral disponible para la industria maquiladora. De acuerdo con un reporte de 2010 hecho por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, solamente en Ciudad Juárez “el número aproximado de personas que han abandonado sus casas es de 230,000. Se cree que alrededor de la mitad han emigrado a Estados Unidos, lo que dejaría alrededor de 115,000 personas viviendo como población interna desplazada (IDP)”.³¹ El hecho de que la violencia pueda afectar el tamaño de la fuerza laboral disponible en estas áreas también significa que puede evitar la organización sindical, manteniendo los salarios deprimidos a lo largo de la frontera –ambos factores son importantes para determinar el futuro de un sector vital de la economía estadounidense.

También están los recursos naturales. México no lleva mucho tiempo de haberse abierto a la minería industrial moderna. Según datos del gobierno, México produjo cerca de 22 toneladas de oro en 2001, mientras que diez años

30 Elinor Comlay, “Mexico Becoming Nissan’s Export Hub for Americas: CEO”, *Reuters*, 12 de noviembre de 2013, <http://www.reuters.com/article/2013/11/13/us-autos-mexico-nissan-idUSBRE9AC03G20131113>

31 IDMC, “Briefing Paper by the Norwegian Refugee Council’s Internal Displacement Monitoring Centre on Forced Displacement in Mexico Due to Drug Cartel Violence”, diciembre de 2010, <http://internal-displacement.org/p.1briefing/mexico/>

después fueron 84 toneladas, la mayoría extraídas por compañías mineras canadienses. La producción de plata se duplicó en el mismo periodo. La Cámara Minera de México afirma que México es el cuarto destino mundial en inversión minera, detrás de Canadá, Australia y Estados Unidos. Visto desde los intereses de la élite estadounidense, la condición macroeconómica de México, con su puñado de corporaciones estatales muy rentables y un territorio rico en minerales (gran parte del cual pertenece comunalmente a los campesinos), es sinónimo de grandes oportunidades para hacer dinero. William I. Robinson, autor de *Una teoría sobre el capitalismo global*, entre otros libros, explicó el objetivo general de la política exterior estadounidense en una entrevista de 2010: “Toda la evidencia demuestra que lo que EUA está haciendo es dirigir la organización de un nuevo sistema capitalista mundial, una nueva fase del capitalismo global”. Según Robinson, el capitalismo mundial era un sistema en el que los circuitos de producción existieron primero dentro y después entre naciones. El capitalismo global, que es el sistema de nuestros tiempos, consiste en circuitos transnacionales de producción y comercio en los que la manufactura se realiza a través de las naciones en vez de dentro de ellas. En el capitalismo mundial, por ejemplo, en México se tejían prendas hechas de algodón cultivado en México, mientras que en el capitalismo global la tela se importa, las prendas se fabrican parcialmente en México y se exportan para ser terminadas en EUA.

En el libro *Promoting Polyarchy* de 1996, Robinson explica que “el poder político y económico tiende a gravitar hacia nuevos grupos asociados a la economía global, ya sea directa o indirectamente por medio de aparatos locales de Estado reorganizados que funcionan como ‘bandas de transmisión’ para los intereses transnacionales. En cada región del mundo, tanto en el norte como en el sur, de Europa del Este a Latinoamérica, Estados, economías y procesos políticos se están transnacionalizando e integrando bajo el control de esta nueva élite”.³² Por otro lado, señala que “‘globalizarse’ le permitió al capital eludir las constricciones que el capitalismo de Nación-Estado había impuesto a la acumulación, así como deshacerse de los compromisos de clase y concesiones que le habían sido impuestos por las clases trabajadoras y populares y por los gobiernos nacionales en la etapa anterior”.³³ Como hemos visto, en México muchos de estos compromisos y concesiones han sobrevivido hasta el siglo XXI a la imposición del TLCAN y del neoliberalismo.

32 William I. Robinson, *Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention and Hegemony*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 33.

33 William I. Robinson, *Latin America and Global Capitalism: A Critical -Globalization Perspective*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2008, 15.

En México hacía falta algo más que un shock económico: se necesitaba una estrategia comprehensiva, capaz de incrementar la inversión extranjera directa. Entre otras cosas, esta estrategia tenía que asegurar que la policía local y el ejército, y en última instancia todo el sistema legal, operara de acuerdo con los estándares norteamericanos. Una estrategia similar ya había sido desarrollada por medio del Plan Colombia —una guerra antidrogas cuidadosamente planeada y respaldada por EUA. Durante los años recientes, la privatización de grandes compañías estatales se ha llevado a cabo en paralelo con ataques contra la población trabajadora a lo largo de la frontera México-EUA, desplazamiento y asesinato de pequeños propietarios y dueños comunales. La guerra antidrogas puede entenderse como el fundamento del shock permanente en México.

En diciembre de 2006, inmediatamente después de tomar posesión, el presidente Felipe Calderón lanzó una nueva fase de la guerra contra los cárteles de la droga y el crimen organizado en México. Fue un momento álgido de movilización social en la Ciudad de México y en el resto del país, ya que su llegada al gobierno sucedió entre protestas masivas contra el fraude electoral, lo que llevó a muchísimas personas, incluido el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, a tomar las calles de la capital. Ese año, El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emprendió la Otra Campaña, un recorrido por el país para ponerse en contacto con los mexicanos de abajo y a la izquierda. “Había también otra guerrilla, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), habían surgido movimientos sociales como Atenco, por ejemplo, que fue reprimido en 2006, y provocó a su vez solidaridad. Y surge, de junio a noviembre de 2006 en Oaxaca, todo un movimiento social que intenta echar abajo el gobierno de Ulises Ruiz”, me comentó Carlos Fazio, profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). “En 2006 se puede decir que hay grandes manifestaciones de masas, de fuerzas sistémicas y antisistémicas, de gente que quiere un cambio”.

Después de 2006, los movimientos sociales disminuyeron de intensidad en México, y la violencia y el terror se volvieron los protagonistas de la vida pública. Los costos sociales de la guerra antidrogas han sido enormes: uno de los pocos conteos independientes, realizado por Molly Molloy, bibliotecaria en la New Mexico State University, revela que desde diciembre de 2006 más de 153,000 personas han sido asesinadas en México.³⁴ En una conferencia de prensa en marzo de 2012, el Secretario de la Defensa de EUA, León

34 Molly Molloy, “Q & A with Frontera List’s Molly Molloy”, *Frontera List*, 22 de agosto de 2014, <http://fronteralist.org/2014/08/22/q-a-with-frontera-lists-molly-molloy/>

Panetta, declaró que la violencia era tremenda, y que oficiales mexicanos le habían dicho que había 150,000 personas muertas a causa de la violencia por las drogas.³⁵ La cifra de caídos que reportan los medios de comunicación masiva es mucho menor, y hasta mediados del 2014 refieren 60,000 víctimas de la guerra antidrogas.³⁶ Ésta es una cantidad muy engañosa, pues se sabe que menos del cinco por ciento de todos los crímenes en México son investigados. Por otro lado, muchos cuerpos han sido enterrados en secreto en fosas comunes, mientras que otros han sido disueltos con químicos, y todos ellos no han llegado a las morgues para ser contados. El número de homicidios se disparó cuando la ayuda del ejército estadounidense se hizo efectiva –aumentando de 10,452 a más de 25,000 en 2010 y más de 27,000 en 2011.³⁷ Aunque los medios alardearon de que la guerra antidrogas declinó cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia en diciembre de 2012, el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que 22,732 personas fueron asesinadas en México en 2013.³⁸

Además de los muertos, un conteo oficial ubica el número total de desaparecidos en 42,300, más de 27,000 de ellos en los últimos seis años.³⁹ De acuerdo con una encuesta realizada por el INEGI en 2012, hubo 105,682 secuestros, y menos del 2 por ciento fueron denunciados ante las autoridades ese año.⁴⁰ En estas cifras no se incluyen los secuestros de migrantes de paso por México: de septiembre de 2008 a febrero de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 9,758.⁴¹ Algunos activistas calculan que el número de migrantes extranjeros desaparecidos en México desde 2006 podría superar los 70,000.⁴² La mayoría de los muertos

35 Departamento de Defensa de EE.UU., “News Transcript”, 27 de marzo de 2012, <http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=5000>

36 William Booth y Nick Miroff, “Mexico’s Drug War is at a Stalemate as Calderón’s Presidency Ends”, *Washington Post*, 27 de noviembre de 2012, http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/calderon-finishes-his-six-year-drug-war-at-stalemate/2012/11/26/82c90a94-31eb-11e2-92f0-496af208bf23_story.html

37 INEGI, “Boletín de Prensa núm. 288/13”, 30 de julio de 2013, <http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2013/julio/comunica9.pdf>

38 Susana González, “En 2013 hubo casi 23 mil homicidios en México: INEGI”, *La Jornada*, 23 de julio de 2014, <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/23/en-2013-hubo-casi-23-mil-homicidios-en-mexico-informo-el-inegi-1229.html>

39 SEGOB, “Programa Nacional de Derechos Humanos 2014–2018”, 30 de abril de 2014, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014

40 INEGI, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE)”, 30 de septiembre de 2013, <http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comunicados/especiales/2013/septiembre/comunica15.pdf>, 21

41 CNDH, “Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México”, febrero de 2011, http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2011_secnigrantes_0.pdf, 12

42 Movimiento Migrante Mesoamericano, “Caravana de Madres Centroamericanas 2012”, 9 de octubre de 2012, <http://www.movimientomigrantemesoamericano.org/carava->

son civiles, y sus asesinos con frecuencia pertenecen a las fuerzas del Estado, aunque se nos dice una y otra vez que las bajas en esta guerra son de criminales. También nos dicen que la guerra antidrogas está hecha de luchas intestinas entre cárteles que transportan narcóticos de Colombia a través de Centroamérica y México hacia Estados Unidos. Pocos análisis exploran más hondo para ver cómo esta violencia interactúa con el capitalismo, el poder del Estado y la extracción de recursos. Llenar este vacío es el propósito de *Drug War Capitalism*.

Estados fronterizos como Baja California Norte, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, han sido fuertemente afectados por la guerra antidrogas. Estados interiores como Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Michoacán también padecen mucha violencia, y el resto del país ha sentido sus efectos en mayor o menor medida. En encuestas nacionales de 2010 y 2011, más del 60 por ciento de los consultados por el INEGI afirmaron sentir que la seguridad pública era peor o mucho peor que doce meses antes, y la minoría sentía que seguía igual o había mejorado.⁴³

La escalada de conflictos asociados supuestamente a la violencia entre cárteles y al ataque gubernamental al narcotráfico va más allá de México; la violencia está aumentando también en Centroamérica, donde la inseguridad campea. Masacres asociadas al narcotráfico han perturbado Guatemala en los años recientes, y en 2011 Honduras tuvo el índice más alto de asesinatos en el mundo.⁴⁴ El perfil de los responsables de la violencia en diferentes partes de México y Centroamérica no es necesariamente consistente, como tampoco lo son sus métodos, que varían dependiendo de la región y el contexto. En territorio centroamericano, a diferencia de México, Estados Unidos despliega abiertamente sus fuerzas, como demuestra la actividad de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Honduras durante la primavera de 2012 y el despliegue de marinos estadounidenses en Guatemala ese mismo año. Siete bases militares dentro de Colombia fueron designadas para uso de tropas norteamericanas en el marco del fin del Plan Colombia. Algunos dicen que esto podría ser parte de un plan para desestabilizar países de gobiernos de izquierda como Venezuela, Bolivia y Ecuador.

na-de-madres-centroamericanas-2012-2/

43 INEGI, “Índice de percepción sobre la seguridad pública: Cifras durante diciembre de 2011”, 5 de enero de 2012, <http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Percepci%F3n%20sobre%20Seguridad%20P%FAblica/2012/enero/comunica.pdf>

44 UNODC, “Global Study on Homicide, 2011”, 2011, http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf, 23

El panorama general es éste: en Colombia (Bolivia y Perú también) se producen drogas, particularmente cocaína, y se envían al norte, con frecuencia por medio de avionetas y lanchas motorizadas. Las organizaciones traficantes deben cooperar con al menos un segmento de las autoridades locales en cada país de paso, pagando sobornos para que su producto cruce las fronteras sin ser decomisado. El Estado y sus fuerzas de seguridad no son entidades monolíticas —mientras que algunos políticos y jueces tratan de detener la corrupción, otros están profundamente involucrados en facilitar el narcotráfico, el lavado de dinero y otros negocios ilícitos. De manera similar, en ciertos casos, unidades del ejército o de la marina se enfrentan contra la policía involucrada en el narcotráfico. Las grandes rutas de transporte de narcóticos sólo pueden existir donde existe cooperación suficiente con las autoridades. Cuando la complicidad oficial se termina o interrumpe, se desata la violencia. Un estudio de 2012 descubrió que en los municipios donde el partido de Felipe Calderón (PAN) derrotó al PRI por un margen estrecho en las elecciones de 2007 y 2008, la probabilidad de homicidios relacionados con las drogas aumentó en un 8.4 por ciento. Según el estudio, “Los análisis utilizando información sobre la organización industrial de tráfico sugieren que la violencia refleja intentos de traficantes rivales de ganar el control del territorio tras los vacíos de poder provocados por el debilitamiento de los traficantes establecidos a manos de los alcaldes del PAN”.⁴⁵ La evidencia empírica indica que la elección municipal del PAN provocó un incremento de la violencia, aunque la idea de una crisis de poder causada por los alcaldes del PAN, revela sólo una faceta de los impactos de la política antidrogas a partir de 2006. No obstante lo anterior, carecemos de información suficiente para entender con claridad la configuración de redes alternativas del narcotráfico operando con el apoyo y la complicidad del PAN, incluido el nivel local. La interrupción del narcotráfico no implica la desaparición del flujo de drogas, sino que conduce a la aparición de nuevas rutas en otros lugares.

Una lógica similar se aplica al cultivo: en los años 90 los programas de erradicación de plantaciones empujaron la siembra de coca para producir cocaína de Bolivia y Perú hacia Colombia. La siguiente generación de programas en Colombia llevó la siembra de coca de regreso a Perú y Bolivia.⁴⁶ Al final, la cantidad total de cocaína producida prácticamente no disminuyó. Esto se traduce en que tanto la erradicación de plantaciones

45 Melissa Dell, “Tracking Networks and the Mexican Drug War”, diciembre de 2012, <http://scholar.harvard.edu/files/dell/files/121113draft.pdf>, 2

46 *Ibid.*, 3.

como la interrupción del narcotráfico producen un desplazamiento de esas prácticas a otras regiones. Además de asegurar el suministro de narcóticos a Estados Unidos y otros mercados, desviar el tráfico y producción permite la militarización de regiones nuevas bajo el pretexto de luchar la guerra antidrogas.

A lo largo de los años 80 hasta mediados de los 90, los medios de comunicación dominantes y las narrativas del gobierno sostuvieron que los cárteles colombianos de la droga, organizaciones jerarquizadas bajo el mando de líderes célebres como Pablo Escobar, y con influencia en altos mandos del gobierno, controlaban la mayor parte del tráfico de drogas. Incluso entonces era evidente para los involucrados en el narcotráfico que la figura del capo del cártel estaba siendo exagerada para el consumo popular. Gustavo Salazar, quien trabajaba como abogado de traficantes de Medellín en Colombia, le dijo al periodista Ioan Grillo “Los cárteles no existen. Lo que hay es una multitud de narcotraficantes. A veces trabajan juntos, y a veces no. Los fiscales norteamericanos los llaman cárteles simplemente para facilitarse la tarea de armar sus casos. Todo es parte del juego”.⁴⁷ Tras el asesinato de Escobar a mediados de los 90, las organizaciones antes descritas como cárteles se dividieron en grupos más pequeños que mantuvieron la cocaína fluyendo a Estados Unidos.

Los grupos narcotraficantes más viejos de México, antes conocidos como los “cuatro grandes” (cárteles de Juárez, Golfo, Sinaloa y Tijuana) también se han desintegrado en distintos grados a causa de la guerra antidrogas, produciendo un aproximado de entre 60 y 80 grupos traficantes.⁴⁸ Los Zetas, que se independizaron del Cártel del Golfo en 2010, presuntamente se han establecido a lo largo de México y Guatemala, donde frecuentemente trabajan en connivencia con fuerzas de seguridad locales y regionales, así como con oficiales del gobierno.⁴⁹ Aun cuando los grupos armados varían según el lugar, desde hace tiempo es claro que la diferencia entre grupos estatales y criminales es difusa, y cada uno fortalece al otro. Existen soldados

47 Ioan Grillo, *El Narco: Inside Mexico's Criminal Insurgency*. Nueva York: Bloomsbury, 2011, 61.

48 Univisión, “Los cárteles se multiplicaron en el sexenio de Calderón, dice fiscal”, 20 de diciembre de 2012, <http://noticias.univision.com/narcotrafico/noticias/articulo/2012-12-19/los-carteles-se-multiplicaron-en-sexenio-de-calderon#axzz2FdDn53NS>

49 La colaboración de las fuerzas policíacas locales y el ejército con Los Zetas y otros cárteles puede darse de muchas formas que se analizarán más adelante. En Guatemala, el funeral de José Luis Fernández Ligorria provee un ejemplo del reconocimiento de las autoridades de alto nivel hacia Los Zetas: Fernández mismo fue líder de Los Zetas antes de su muerte, y en su funeral en enero de 2011, Mauricio López Bonilla, ministro de gobierno de Otto Pérez Molina, pronunció su elogio fúnebre y le entregó a la viuda de Fernández una boina conmemorativa de las fuerzas especiales de élite Kaibiles.

y policías disidentes, como los que fundaron Los Zetas, y también está el fenómeno del servicio doble —policías en la nómina de los criminales y del Estado al mismo tiempo. En algunos lugares, cuerpos enteros de policía han resultado trabajar para ambos bandos.⁵⁰ A veces los uniformados de policía son en realidad soldados o criminales, y cada vez hay más militares al mando de cuerpos policiacos urbanos, como el coronel Julián Leyzaola Pérez, antes en Tijuana y luego en Ciudad Juárez. También hay corporaciones de seguridad y mercenarios privados, cuyos miembros pueden identificarse en ocasiones por sus chamarras, botas y vehículos. Y por último están las policías comunitarias, armadas en defensa de sus localidades (con frecuencia indígenas) con el beneplácito de las autoridades, y los grupos de autodefensa, que suelen ser grupos formados de manera más espontánea en áreas rurales. En esta guerra, distinguir a unos de otros (y de otros y otros) y saber quién está peleando contra quién, es muy difícil y peligroso.

El complejo papel del Estado en el narcotráfico y la actividad ilegal llega muy hondo. “Se sabe que no es posible movilizar toneladas de cocaína, lavar miles de dólares, mantener una organización de cientos de personas armadas funcionando clandestinamente, sin un sistema de protección política y policiaca, sin crecientes alianzas con el aparato productivo y financiero”, escribió en 1996 la periodista Yolanda Figueroa, en su historia seminal del Cártel del Golfo.⁵¹ En efecto, no hay razón para asumir una división tajante entre fuerzas estatales y cárteles. Por eso, a lo largo del texto me refiero a lo que el discurso oficial llama “cárteles de la droga” con diferentes términos que incluyen grupos paramilitares, grupos del crimen organizado y cárteles. Las acciones de los “cárteles” pueden fortalecer el control del Estado, y puesto que muchas veces incluyen a exmiembros de fuerzas especiales o tropas militares, pueden considerarse grupos paramilitares. Otra razón por la que no siempre uso el término “cárteles de la droga” es que en México esos grupos son responsables de acciones que tienen poco o nada que ver con el narcotráfico, como atacar y extorsionar a civiles, migrantes, periodistas y activistas.

El nombre “guerra contra las drogas” es a todas luces problemático, y consideré usar otros términos para describir la llamada guerra antidrogas ya que, como argumento a lo largo del libro, claramente es una guerra contra

50 Como ejemplo tómesese a la Policía Municipal de San Fernando, Tamaulipas, cuyos miembros son acusados de haber protegido a Los Zetas las veces en que han sacado pasajeros de los autobuses, los han masacrado y enterrado en fosas comunes. Rubén Mosso, “Detienen a 16 policías por proteger matanzas de Los Zetas en San Fernando”, *Milenio*, 13 de abril de 2011, <http://www.entretodos.com.mx/notacompleta.php?id=57608>

51 Yolanda Figueroa, *El Capo del Golfo: Vida y captura de Juan García Abrego*. México: Avelar Editores, 1996, 137. Figueroa, su esposo y sus tres hijos fueron asesinados menos de seis meses después de publicado el libro.

el pueblo, implementada con intereses mucho más amplios que el control de sustancias ilícitas. Al final decidí quedarme con la conocida “guerra antidrogas” para asegurarme de que el contenido sea comprensible para aquellos que lean secciones aisladas del libro. El término “guerra antidrogas” es la etiqueta más visceral para lo que está pasando a la par de las políticas implementadas por EUA en nombre de detener el flujo de narcóticos. En 2009 el *Wall Street Journal* publicó una nota titulada “El Zar de la Casa Blanca llama al fin de la ‘Guerra contra las drogas’”. El texto explica que la administración de Obama ha intentado distanciarse del concepto de la guerra antidrogas. “Independientemente de cómo trates de explicarle a la gente que es una ‘guerra contra las drogas’ o una ‘guerra contra un producto,’ las personas ven la guerra como un ataque contra ellas” dijo Gil Kerlikowske, que entonces era el zar antidrogas de EUA. “No estamos en guerra contra las personas de este país”.⁵² Justamente, las personas que padecen los efectos de la guerra contra las drogas en EUA y otros lugares comprenden que se trata de una guerra contra ellos y sus comunidades. Con respecto a la clarificación de Kerlikowske sobre que el gobierno estadounidense no está en guerra con su pueblo, recuerdo una sentencia del reportero Claude Cockburn: “Nunca creas en nada hasta que sea negado oficialmente”. Por estas razones, y para asegurar la accesibilidad y legibilidad, uso el término guerra contra las drogas para describir estas políticas lideradas por EUA, y **capitalismo antidrogas** para subrayar las conexiones entre estas políticas y los intereses económicos de los poderosos.

Iniciativa Mérida: del discurso a la acción

Un viernes de septiembre en 2006, justo después de ser elegido presidente, Felipe Calderón y su esposa invitaron a cenar a Antonio Garza, entonces embajador de EUA en México, y a su esposa. En algún momento de la velada, Calderón le dijo al embajador que mejorar la seguridad sería parte crucial de su gobierno. Cuando Garza les refirió la conversación a los mandos del Departamento de Estado, incluyó el comentario de Calderón, al que, de acuerdo con sus propias notas, el embajador replicó: “los avances en competitividad, educación y empleo podrían ser rápidamente opacados por el crimen organizado del narcotráfico”. Para impulsar la economía de México, “tenían que asegurar tanto a extranjeros como mexicanos

⁵² Gary Fields, “White House Czar Calls for End to ‘War on Drugs’”, *Wall Street Journal*, 14 de mayo de 2009, <http://online.wsj.com/news/articles/SB124225891527617397>

que el Estado de Derecho prevalecería”.⁵³ Lo que se convertiría en la Iniciativa Mérida fue discutido primero por los presidentes George W. Bush y Felipe Calderón en Mérida, Yucatán, en la primavera de 2007. La Iniciativa Mérida fue diseñada en negociaciones secretas llevadas a cabo durante el verano. “Estas negociaciones no eran públicas, y se reporta que congresistas de EUA y México han expresado su frustración por no ser involucrados en las discusiones”.⁵⁴ El Departamento de Estado estadounidense abiertamente reconoce el éxito del Plan Colombia como un factor importante en la creación de la Iniciativa Mérida, la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central y otros planes semejantes. “Gracias al trabajo que Estados Unidos ha sostenido en Colombia y ahora en México sabemos que el buen liderazgo, las inversiones proactivas y las alianzas comprometidas pueden cambiar el rumbo” les dijo Hillary Clinton a los delegados de la Conferencia de Seguridad Centroamericana en la ciudad de Guatemala en 2011.

Tan pronto como Felipe Calderón asumió la presidencia de México en diciembre de 2006, anunció que golpearía al narcotráfico. Menos de un año después, México hizo pública la Iniciativa Mérida, un programa bilateral antinarcóticos financiado por Estados Unidos y México. Los críticos inmediatamente comenzaron a llamar el acuerdo Plan México, en nombre de su predecesor, el Plan Colombia, que terminó en 2006. En 2007 Estados Unidos mudó su atención prioritaria en la guerra contra las drogas de Colombia a México, Centroamérica y el Caribe. La guerra antidrogas en México tiene algunas características que la distinguen de la de Colombia, la más importante de las cuales es la existencia de una frontera física con Estados Unidos. Una dinámica inherente a la guerra antidrogas en México, ausente de Colombia, es la inclusión de los migrantes indocumentados (la mayoría de Centroamérica) como parte del conflicto. El incremento de los ataques y asesinatos de migrantes en México ha coincidido con la aparición de estructuras de control paramilitar a nivel nacional, particularmente de Los Zetas. La paramilitarización en México difiere de la de Colombia debido a los diversos orígenes históricos, territoriales, políticos y económicos de las fuerzas paramilitares y de resistencia. En muchas ocasiones habían

53 Embajada de México, “Ambassador’s Private Dinner With President-elect Calderon”, 29 de septiembre de 2006, <https://cablegatesearch.wikileaks.org/cable.php?id=06MEXICO5607#para-4964-1>

54 Colleen Cook, Rebecca Rush y Clare Ribando Seelke, “Mérida Initiative: Proposed U.S. Anticrime and Counterdrug Assistance for Mexico and Central America”, *Servicio de Investigación del Congreso de los EE. UU.*, 18 de marzo de 2008, <http://fpc.state.gov/documents/organization/103694.pdf>, 1.

surgido grupos paramilitares a la par de movimientos sociales en distintas partes de México, pero el fenómeno nunca había estado tan extendido como hoy en día. Las guerrillas mexicanas históricamente han sido mucho más pequeñas y aisladas que las colombianas, en parte porque el reparto de la propiedad de la tierra ha sido más equitativo en México que en Colombia. En el plano económico, el Producto Interno Bruto de México en 2010 fue arriba de 3.5 veces más grande que el de Colombia, y la economía mexicana es mucho más compleja.⁵⁵ A pesar de las diferencias, hay importantes precedentes de la guerra antidrogas en Colombia que ahora se están aplicando en México.

Desde una perspectiva crítica, se puede considerar que la Iniciativa Mérida y la actividad que ha inspirado en México está compuesta de tres elementos primarios: 1) reformas legales y políticas, 2) militarización y 3) paramilitarización.

La Iniciativa Mérida es el medio principal por el que el *Capitalismo antidrogas*, como se desarrolló en Colombia y se aplicó en México, se ha consagrado entre EUA y México. A la par del aumento de la cooperación (y el gasto) en seguridad, la violencia se disparaba y extendía por México, y el conteo de muertos comenzó a incrementarse. De acuerdo con Shannon O’Neill del Consejo de Relaciones Exteriores, “Cuando se firmó la Iniciativa Mérida en 2007, había poco más de dos mil homicidios relacionados con drogas cada año; para 2012 el número ya superaba los doce mil. La violencia también se diseminó de alrededor de 50 municipios en 2007 (la mayoría en la frontera y en Sinaloa) a unos 240 municipios por todo el país en 2011, incluyendo el antes seguro centro industrial de Monterrey y ciudades como Acapulco, Nuevo Laredo, y Torreón”.⁵⁶ Los reportes en la prensa local y estadounidense generalmente omiten la conexión entre la inversión de EUA en la guerra antidrogas y la violencia aumentada, incluso cuando la tendencia puede observarse en Colombia, México y otros países. El vínculo entre la militarización apoyada por Estados Unidos del narcotráfico y la geografía cambiante de la actividad criminal (y por lo tanto de la violencia) es uno que el gobierno mismo de EUA ha admitido: “Al igual que el Plan Colombia ayudó a desplazar el foco de la presencia y actividad criminal hacia México, el impacto de la Iniciativa Mérida empujó esas mismas actividades hacia Centroamérica”, dijo William Brownfield, secretario asistente del US

55 ECLAC, “Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean, 2011”, Naciones Unidas, <http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/45607/LCG2513b.pdf>, 81.

56 Shannon O’Neill, “Refocusing U.S.-Mexico Security Cooperation”, *Council on Foreign Relations*, 18 de junio de 2013, http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/ONeil_Testimony.pdf.

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), en marzo de 2013.⁵⁷ Un texano desgarrado de ojos azules, Brownfield es un diplomático de carrera que fungió como embajador en Colombia justo después de que concluyera el Plan Colombia (2007–2010).

La justificación inicial de la Iniciativa Mérida fue la necesidad de “confrontar a las violentas pandillas transnacionales y a los sindicatos del crimen organizado que asolan la región entera y que amenazan directamente los intereses de seguridad de EUA”, por medio del desmantelamiento de organizaciones criminales: fortalecimiento de controles aéreos, marítimos y fronterizos; reformando el sistema de justicia; y disminuyendo la actividad pandillera mientras se va reduciendo la demanda de drogas.⁵⁸ En 2010, la Iniciativa Mérida fue remodelada con base en cuatro pilares, que continúan siendo: interferir con los grupos del crimen organizado; institucionalizar reformas para mantener el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos; crear una frontera del siglo XXI; y construir comunidades fuertes y resistentes. Pero veremos a lo largo del libro que la guerra contra las drogas financiada por EUA, y todas sus justificaciones, no está lejos de su guerra contra el terrorismo, con la que el gobierno estadounidense afirma estar liberando a las mujeres y promoviendo la democracia. La socióloga canadiense Jasmin Hristov formula esto particularmente bien al explicar que “Los esfuerzos de la élite para eliminar cualquier desafío al *status quo* han hallado expresión en varios modelos político-económicos a lo largo de la historia. Las características comunes a todos ellos han sido la estructura socioeconómica profundamente desigual que consiste en fuerza armada, leyes represivas, e ideología anti-subversiva, administradas con diversos nombres –Guerra contra el Comunismo, Guerra contra las Drogas, Guerra contra el Terror”.⁵⁹ La guerra contra las drogas tiene un lugar específico dentro del triunvirato de “guerras contra” algo descritas por Hristov, ya que sus promotores pueden usar argumentos de salud para justificarla, algo con lo que cada uno de nosotros se puede conectar personalmente. El discurso de la Guerra contra el Terror no es útil tratándose de México, que comparte una frontera de 3000 km con EUA, donde viven 30 millones de personas

57 William Brownfield, “Remarks at the Council of the Americas”, 22 de marzo de 2013, <http://www.state.gov/j/inl/rls/rm/2013/207231.htm>.

58 John Feeley, “U.S.-Mexico Security Cooperation: An Overview of the Mérida Initiative, 2008–Present”, 13 de mayo de 2013, <http://docs.house.gov/meetings/FA/FA07/20130523/100907/HHRG-113-FA07-20130523-SD001.pdf>, 2; Clare Ribando Seelke, “Mérida Initiative for Mexico and Central America: Funding and Policy Issues”, *Servicio de Investigación del Congreso de los EE. UU.*, 19 de abril de 2010, <http://fpc.state.gov/documents/organization/141560.pdf>.

59 Hristov, *Blood and Capital*, 202.

de origen mexicano.⁶⁰ Engrandecer el espectro de los cárteles y pandilleros es la estrategia de EUA en el hemisferio occidental para retratar sociedades enteras como amenazas para sus ciudadanos. En palabras de la coalición *Stop the Injunctions* [*Detengan los mandatos judiciales*, un grupo que trabajó contra la política de capturas masivas de supuestos miembros de pandillas utilizado en California], “Cultural y políticamente, las diferencias entre ‘terrorista’, ‘insurgente’, ‘inmigrante’ y ‘pandillero’ han sido agresivamente distorsionadas”.⁶¹

Los debates alrededor de la guerra contra las drogas tienden a suceder entre dos posiciones contrastantes: una que defiende la prohibición de las drogas (gobierno federal de EUA) y otra, más liberal, que propone su descriminalización. Aunque éste es un debate importante, oscurece la naturaleza militarizada de la guerra antidrogas, lo cual mantiene la disputa en el ámbito de las ideas y elude discutir la legitimidad práctica de la guerra. Por eso urge profundizar nuestra comprensión de este tipo de fenómeno bélico; debemos entenderlo en el macrocontexto de los intereses transnacionales y estadounidenses en el hemisferio, y conectar las políticas antidrogas con la expansión social y territorial del capitalismo. Al igual que los movimientos en contra de la guerra reconocieron exitosamente el nexo entre la invasión de Irak y el petróleo, conviene esclarecer las conexiones entre el apoyo de EUA a la guerra contra las drogas en México, y los recursos naturales del país, su fuerza de trabajo y su posición geográfica estratégica. “En México y de manera más general, hay una economía internacional del crimen que subyace la economía considerada legal... EUA ha podido, por medio del narcotráfico y la excusa de tratar de controlarlo, [invertir] decenas de millones, y ahora cientos de millones en seguridad mexicana, y en las fuerzas armadas de México, y esto está cambiando por completo la naturaleza de la sociedad. La sociedad mexicana está siendo militarizada”, me dijo el Dr. Robinson en una entrevista en 2010.⁶² “E insisto en que lo están haciendo en el nombre de combatir el narcotráfico, pero... parte del rostro del capitalismo global son sociedades cada vez más militarizadas en función de mantener el control social cuando las

60 Sharon Ennis, Merarys Ríos-Vargas y Nora Albert, “U.S. Census Bureau: The Hispanic Population, 2010 Census Briefs”, mayo de 2011, <http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf>.

61 Stop the Injunctions Coalition, “Our Oakland, Our Solutions”, en *Life During Wartime: Resisting Counterinsurgency* de Kristian Williams, Lara Messersmith-Glavin, y William Munger (eds.). Oakland: AK Press, 2013, 150.

62 Dawn Paley, “Interview: Dr. William I. Robinson on Power, Domination and Conflicts in Mexico”, *Upside Down World*, 7 de diciembre de 2010, <http://upside-downworld.org/main/mexico-archives-79/2811-interview-dr-william-i-robinson-on-power-domination-and-conflicts-in-mexico>

desigualdades y la miseria se vuelven tan extremas que no queda otra manera de mantener a la sociedad controlada más que a través de medios militares y coercitivos”.

Parte del sistema de control social impuesto por la guerra contra el narco incluye extorsiones en varias zonas del país, que imponen la clausura de los negocios familiares y conducen a los consumidores a las grandes cadenas comerciales. La violencia desplegada por el Estado y que se justifica con la bandera del combate al narcotráfico puede conducir al desplazamiento de la población urbana y rural, alterando la propiedad de la tierra, el valor del terreno y despejando el territorio para que las corporaciones extraigan recursos naturales. La guerra contra el narco crea un ámbito donde los miembros de movimientos de resistencia y los periodistas pueden ser asesinados o desaparecidos con el pretexto de que estaban involucrados en el comercio ilegal. También funciona como un mecanismo para controlar el número de migrantes (principalmente centroamericanos) que cruzan México rumbo a EUA, y que se encuentran a merced de la severa administración desempeñada por los criminales. Por último, la narcoguerra crea las condiciones institucionales (legales y sociales) que garantizan la protección para la inversión extranjera directa, creando el ambiente necesario para la expansión capitalista y la acumulación flexible. Además de la violencia que impacta desproporcionadamente a los pobres, obreros y migrantes, la militarización de la narcoguerra favorece a ciertos sectores de la élite más que a otros, provocando en algunos lugares que los poderosos luchan entre sí para mantener el control y la territorialidad necesaria para continuar aprovechando la acumulación del capital. “Lo que está sucediendo en territorios mexicanos es parte de un proceso global que trasciende la territorialidad... Es una expresión, sin duda, de una lucha intercapitalista... y continuará siéndolo por mucho tiempo”, se lee en un reporte publicado por un colectivo de investigación mexicano a fines de 2011.⁶³

La frontera México-EUA se ha vuelto uno de los factores clave en la narcoguerra. Algunas de las ciudades mexicanas más violentas están situadas directamente en la frontera, mientras que del lado estadounidense las ciudades fronterizas se encuentran entre las más seguras (aunque algunas están también entre las más pobres) en el país. En uno de los textos en inglés más críticos de la narcoguerra, el profesor de la Universidad de Texas en El Paso, Howard Campbell, usó el término “Drug War Zone” (“Zona

63 Equipo Bourbaki, “El Costo Humano de la Guerra por la Construcción del Monopolio del Narcotráfico en México, 2008–2009”, febrero de 2011, <http://redporlapazyjusticia.org/directorioinfo/InformeBourbaki.pdf>

de guerra contra las drogas”) para describir lo que llama el mundo cultural de los narcotraficantes y la policía antidrogas. Escribe: “Esta zona es especialmente prominente y físicamente reconocible en la frontera EUA-México, pero el término también aplica para cualquier lugar o situación en la que los narcotraficantes, consumidores de drogas, y agentes antidrogas se confrontan, evitan o intentan subvertir entre sí”.⁶⁴ Campbell agrega que él evita el término “guerra contra las drogas” puesto que es usado de una manera hipócrita y engañosa por el gobierno estadounidense. Aunque el concepto de una zona de narcoguerra de Campbell puede considerarse una mejora de la noción de la guerra contra el narco, deja mucho que desear, por dos razones. Por un lado, ignora el papel de los ejércitos y marinas y otras organizaciones estatales especiales no judiciales en la narcoguerra; por otro, aún más importante, ignora el sector de la población que desesperadamente necesita hacerse visible en el contexto de esta guerra: el pueblo. Se trata de los obreros, familias, campesinos, migrantes y jóvenes que han sido víctimas de la policía, el ejército o los grupos paramilitares en la guerra antidrogas. En Guatemala y Honduras, poblaciones enteras han sido denominadas *narcocomunidades* para justificar desalojos masivos.

Recorrí Colombia, Honduras, Guatemala y la frontera México-EUA recopilando historias sobre los impactos de las guerras contra el narco. He hallado tres características que identifican este tipo de guerra. Primero, en todas las regiones donde hay violencia por la guerra antidrogas, el dolor, miedo y sufrimiento producidos por la militarización y paramilitarización afectan en mayor medida a los pobres, la población trabajadora y los migrantes. Está claro que aunque tengan poco o ningún contacto con las sustancias controladas, la violencia y el terror de la narcoguerra ocurren principalmente contra ellos. Segundo, uno de las más tempranos, duraderos y tangibles impactos de la violencia es la restricción de la movilidad, ya sea el movimiento por el propio barrio, viajar de una ciudad a otra, cruzar la frontera de EUA (en ambas direcciones) o migrar. Tercero, en cada lugar donde la violencia resultante de la guerra contra el narco se ha incrementado, la libertad de expresión –individual y colectiva, a través de actos públicos, medios de comunicación comunitaria y masiva, entre otros– ha sido atacada. Mientras que estos tres factores en conjunto constituyen las más accesibles y consistentes narrativas de la guerra en contra el narco para cualquier reportero familiarizado personalmente con la situación, estas narrativas no son las que dominan los reportes del narcotráfico y la guerra

⁶⁴ Howard Campbell, *Drug War Zone: Frontline Dispatches From the Streets of El Paso and Juárez*. Austin: University of Texas Press, 2009, 6.

auspiciada por EUA. En lugar de contar las experiencias de los afectados por la narcoguerra, los periódicos, grupos de reflexión y gobiernos suelen producir reportes dominados por historias de los cárteles (criminales o grupos criminales) en guerra unos con otros por el control de las rutas de trasiego y territorios. Llamo a esta narrativa *discurso de la guerra entre cárteles*, que incluye algunas características sobresalientes, entre otras: el recurso casi exclusivo a las fuentes de información del Estado y del gobierno; una vía del tipo “culpables hasta no ser probados inocentes” y “las víctimas estaban metidas en el narco”; una creencia fundamental en que los policías corruptos son la excepción y no la regla; y que más policías mejoran la seguridad.⁶⁵ El discurso de la guerra entre cárteles es la narrativa hegemónica y dominante de la guerra contra las drogas, fundada en que las fuerzas del Estado buscan destruir los cárteles y en que la gran mayoría de las víctimas de la violencia están involucradas en el narcotráfico.

Los reportajes televisivos en EUA llevan los más horribles actos de guerra a las pantallas de millones de norteamericanos: 52 personas quemadas vivas en un casino, cientos de cadáveres descubiertos en fosas comunes, etc. Las víctimas generalmente son retratadas como parte de alguna actividad criminal, o al menos relacionadas con alguien relacionado con una actividad criminal, una formulación que prácticamente criminaliza comunidades enteras. En los medios masivos, rara vez se presenta el testimonio de la gente común y corriente. Por el contrario, la sociedad civil está obligada a publicar anónimamente en las redes sociales, Twitter, blogs, etc., si quieren expresar su opinión, aunque incluso eso puede ser peligroso.⁶⁶ Si denuncias a miembros de un cártel, según el editor de un periódico de Reynosa, “Te van a levantar; te van a torturar durante horas; te van a matar y descuartizarte. Y tu familia se queda esperando que regreses a casa”.⁶⁷ Estos atentados criminales contra los medios se realizan con total impunidad, y los perpetradores son protegidos por un Estado que no quiere o no puede investigar. Contar historias que difieren del guión oficial puede ser mortal. Para empezar,

65 Dawn Paley, “Insight Crime & the Mexicanization of Cartel War Discourse”, 11 de marzo de 2013, <http://dawnpaley.tumblr.com/post/45119662682/insight-crime-the-mexicanization-of-cartel-war>

66 En 2011, dos personas en Veracruz fueron acusadas de terrorismo por sus publicaciones de Twitter y Facebook, en las que equivocadamente reportaron una toma de rehenes en una escuela. Los cargos en su contra fueron retirados posteriormente. BBC News, “Mexico ‘Twitter terrorism’ Charges Dropped”, 22 de septiembre de 2011, <http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-15010202>

67 Carlos Lauría y Mike O’Conner, “Silence or Death in Mexico’s Press: Cartel City”, Committee to Protect Journalists, 8 de septiembre de 2010, <http://cpj.org/reports/2010/09/silence-death-mexico-press-cartel-city.php>

muchas fuentes prefieren no hablar, pues temen que serán torturadas, desaparecidas y asesinadas si lo hacen de manera pública. También hay otros elementos disuasivos para los periodistas. La organización para la libertad de prensa Artículo 19 registró cincuenta periodistas asesinados en México entre enero de 2007 y diciembre de 2013.⁶⁸ Es casi el doble que todos los periodistas asesinados durante el sexenio anterior, durante la presidencia de Vicente Fox.⁶⁹ En el mismo periodo, se reportaron 726 actos de agresión y 213 amenazas contra periodistas y medios de comunicación. De acuerdo con un reporte del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en México “periodistas en todo el país le han dicho a CPJ que evitan cubrir casos de crimen y corrupción para no perder la vida”.⁷⁰

En zonas intervenidas por la guerra contra las drogas, no sólo prevalece el discurso de los medios dominantes, sino que es extremadamente peligroso para los comunicadores alejarse mucho de él. Una revisión de los reportajes mediáticos revela que la información que inculpa a los cárteles del narco por la violencia y terror generalmente proviene de un puñado de fuentes oficiales, es decir, elementos del aparato coercitivo del Estado mexicano y de EUA (policía, ejército, fiscales, fuerzas antinarcóticos), así como de brazos civiles del gobierno, las Naciones Unidas, y *think tanks* como la desacreditada firma de inteligencia basada en Austin, Stratfor.⁷¹ El hecho de que la mayoría del trabajo periodístico refleje el discurso dominante sobre el narcotráfico y la narcoguerra no es algo nuevo. De hecho, la frecuencia con la que las narrativas dominantes de la narcoguerra son reproducidas por la prensa podría considerarse una de las razones fundamentales de la longevidad del discurso de la guerra entre cárteles.⁷² “La mayor parte de la información

68 Artículo 19, *Informe 2013*, marzo de 2014, http://www.articulo19.org/wp-content/uploads/2014/03/Art19_Informe2013web.pdf, 30

69 Redacción, “Panismo: 102 periodistas asesinados o desaparecidos”, *Contralinea*, 13 de septiembre de 2011, <http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/13/panismo-102-periodistas-asesinados-o-desaparecidos/>

70 Committee to Protect Journalists, “Getting Away With Murder: CPJ’s 2013 Impunity Index”, 2 de mayo de 2013, https://www.cpj.org/reports/impunity_index2013.pdf

71 Hristov, *Blood and Capital*, 27. Stratfor fue hackeada y cinco millones de correos electrónicos internos fueron publicados por Wikileaks a principios de 2012. “La revelación más sorprendente de la última exposición no es simplemente el complejo industrial-militar que conspira para espiar a los ciudadanos, activistas y agitadores, sino la extremadamente mala calidad de la información disponible al mejor postor”, escribió Pratap Chatterjee (“WikiLeaks’ Stratfor Dump Lifts Lid on Intelligence-industrial Complex”, *The Guardian*, 28 de febrero de 2012, <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2012/feb/28/wikileaks-intelligence-industrial-complex>).

72 A los estudiantes de la maestría en periodismo de la Universidad de la Columbia Británica nos enseñaban una y otra vez que las declaraciones de los policías y oficiales son fuentes primarias muy valiosas –suficientes para apuntalar una historia. Durante una breve temporada de trabajo

sobre el narcotráfico es proveída por el *Miami Herald* y otros periódicos estadounidenses que usan a la DEA como fuente de información”, escribió el historiador colombiano Germán Alfonso Palacio Castañeda en 1991. “Ese tipo de medios suelen seguir la orientación estratégica de la DEA, que es empíricamente inaceptable”.⁷³ Han pasado más de 20 años desde que Palacio escribió estas palabras, y desafortunadamente aún son vigentes. Por ejemplo, a principios de 2011 conocí a un fotógrafo establecido en Monterrey, una ciudad más que se sumió en violencia de narcoguerra a partir de 2010. Él no quería declarar oficialmente, pero habiendo pactado su anonimato, ya no se refrenó. Me dijo que los fotógrafos con frecuencia se instalan con el ejército y esperan a que los soldados visiten la escena de un crimen para ir con ellos, pues no hay otra forma de llegar con seguridad a ciertos lugares. Me contó cómo una vez tomó fotos de cadáveres en un rancho cerca de la ciudad para que pareciera que habían estado disparando armas automáticas que en realidad habían sido sembradas por los soldados. Él y otros fotógrafos no cuestionaron el montaje ni se negaron a publicar las imágenes que tomaron, por temor a represalias.

Sin que las amedrenten los riesgos, las voces críticas de las guerras en México, Centroamérica, Colombia y el resto de Sudamérica se están volviendo más articuladas conforme el tiempo demuestra su impacto perdurable. Los nexos entre las políticas de la narcoguerra y el mejoramiento del entorno para las corporaciones transnacionales son cada vez más inteligibles, especialmente porque los resultados de la intervención norteamericana en Colombia, sobre todo entre 2000 y 2006, son alabados, refinados y reproducidos en otros sitios. La primera fase del Plan Colombia oficialmente terminó en 2006; al año siguiente, la Iniciativa Mérida (o Plan México) comenzó. La Iniciativa Mérida debe haberse fraguado temprano en la presidencia de Felipe Calderón (2006–2012), si no es que desde antes; fue anunciada en el otoño de 2007. Originalmente incluía a Centroamérica, pero en 2011 Estados Unidos estableció de manera independiente la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI), que cubre Belice, Costa Rica, El Salvador,

en el *Globe and Mail*, periódico principal de Canadá, me fue demostrado que los comunicados de prensa de la policía son tomados como Sagrada Escritura –no se les debía cuestionar ni verificar sus datos antes de ser procesados para imprimirse en el periódico. La confianza de los medios tradicionales en las fuentes policíacas y oficiales, en combinación con las amenazas, el acoso y la aniquilación de periodistas y fotógrafos que se atreven a operar al margen de este discurso, aseguran una reproducción casi perfecta de las versiones oficiales sobre la narcoguerra.

73 Germán Alfonso Palacio Castañeda, “Institutional Crisis, Parainstitutionality, and Regime Flexibility in Colombia: The Place of Narcotrafficking and Counterinsurgency”, en *Vigilantism and the State in Modern Latin America: Essays on Extralegal Violence*, Martha Huggins (ed.). Portsmouth, NH: Greenwood Publishing Group, 1991, 108.

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Estados Unidos financió la CARSI con 496 millones de dólares entre 2008 y 2013.⁷⁴ En abril de 2009 fue anunciada la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), y desde entonces el Caribe se ha ido convirtiendo en un escenario principal de la guerra antidrogas.⁷⁵ Puede verse la continuidad entre estos paquetes de “ayuda” estadounidense. Aunque este libro sólo trata de algunos de los países afectados por los planes capitalistas de narcoguerra, los resultados de estas estrategias son similares en donde quiera que se apliquen.

Según Gian Carlo Delgado Ramos y Silvina María Romano, el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida pueden entenderse como dos casos más de la intervención estadounidense en Latinoamérica. En el nombre de proteger su seguridad nacional, EUA promueve políticas que le favorecen en los países elegidos. Esto no sólo es una contribución a los procesos históricos de expoliación, saqueo, explotación y transferencia de riqueza de Latinoamérica, sino que conduce a la reorganización de las relaciones internas de poder entre grupos civiles y militares en las naciones donde se implementan estos programas.⁷⁶ La atención de este trabajo se centra en México, Honduras, Guatemala y Colombia, pero la guerra antidrogas sucede alrededor del mundo. Esto es patente en el hecho de que en 2012 la DEA de EUA colaboró con 65 países.⁷⁷ En algunos lugares la guerra antidrogas está latente, y en otros (como EUA), su principal característica es la criminalización y el encarcelamiento masivo, particularmente de hombres jóvenes de color. En diciembre de 2012, el gobierno de Perú anunció que iba a gastar 300 millones de dólares para enfrentarse al “terrorismo y narcotráfico” en su país.⁷⁸ Naciones como Afganistán y Burma también han estado explorando el terreno para el capitalismo de la guerra contra las drogas, y mientras escribo estas líneas, el Departamento de Estado norteamericano, en conjunto con el Instituto Woodrow Wilson y otros, está promoviendo la expansión de este

74 Bureau of Western Hemisphere Affairs, “The Central America Regional Security Initiative: A Shared Partnership”, 25 de abril de 2013, <http://www.state.gov/p/wha/rls/fs/2013/208592.htm>.

75 La Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI) cubre Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, San Vicente y Las Granadinas, Suriname, y Trinidad y Tobago.

76 Gian Carlo Delgado Ramos y Silvina María Romano, “Political-Economic Factors in U.S. Foreign Policy: The Colombia Plan, the Mérida Initiative, and the Obama Administration”, *Latin American Perspectives* 38, no. 4 (julio de 2011): 93, 94.

77 Executive Office of the President of the United States, “National Drug Control Strategy, 2012”, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/2012_ndcs.pdf 32.

78 Correo, “Destinarán US\$ 300 millones a lucha contra terrorismo y narcotráfico”, *Diario Correo*, 19 de diciembre de 2012, <http://diariocorreo.pe/movil/ultimas/noticias/2732815/edicion+lima/destinaran-us-300-millones-a-lucha-contra-t>.

tipo de guerra a África.⁷⁹ México y Centroamérica son las regiones que hoy están experimentando la peor parte de la explosiva violencia física asociada a las políticas para impedir el paso de drogas a Estados Unidos. En estos lugares, la guerra contra las sustancias ilegales está sirviendo de base para consolidar la militarización preexistente, así como para mejorar los términos de la inversión y el comercio internacionales. Colombia es generalmente vista por los analistas pro-guerra como una historia de éxito, a pesar de que poco ha cambiado en términos de la cantidad de coca producida ahí.⁸⁰ Como veremos, Colombia se ha vuelto el jardín de entrenamiento sobre cómo los actores paraestatales armados pueden usarse para controlar la disidencia y conquistar territorio. Bajo esta luz se vuelve más sencillo apreciar cómo la guerra contra las drogas facilita la continuación de un modelo económico capitalista justificado en la seguridad, en parte gracias a la creación de un discurso público que permite la militarización estatal con el pretexto de implementar medidas de seguridad para proteger a la sociedad civil de las abominaciones cometidas por el crimen organizado.

79 Charlie Savage y Thom Shankar, “U.S. Drug War Expands to Africa, a Newer Hub for Cartels”, *New York Times*, 21 de julio de 2012, http://www.nytimes.com/2012/07/22/world/africa/us-expands-drug-fight-in-africa.html?_r=0.

80 Un reporte del gobierno estadounidense confirma que en el periodo 2000-2006 aumentó la cantidad de coca cultivada en Colombia: Government Accountability Office. “Plan Colombia Drug Reduction Goals Were Not Fully Met, but Security Has Improved; U.S. Agencies Need More Detailed Plans for Reducing Assistance” GAO-09-71. <http://www.gao.gov/new.items/d0971.pdf>. pp. 4-5.

Capítulo II

Definir la guerra antidrogas

Si realmente hubiera una guerra contra las drogas, no tendría mucho *rating* en los medios: los paquetes de cocaína (o cigarros) no sangran al ser apuñalados, y las noticias sin sangre no venden periódicos. “Guerra antidrogas” es un nombre inexacto, pues “guerra” implica un conflicto armado entre al menos dos grupos de personas, y no entre un grupo y una sustancia. Como veremos, en México, Colombia y otros países, las víctimas principales de la llamada “guerra antidrogas” no son las drogas sino las clases trabajadoras, los migrantes, los agricultores campesinos e indígenas.

Desde que la administración de Richard Nixon declaró que Estados Unidos emprendería una “guerra contra las drogas” en 1969, la frase se ha instalado en la imaginación popular.¹ Tras la declaración de guerra de Nixon se aprobó una Ley Comprehensiva para la Prevención y Control de la Drogadicción, que funge como base legal de las políticas antidrogas estadounidenses en la actualidad.² La guerra de Nixon se inspiró en leyes diseñadas a principios del siglo XX, como la Ley Harrison de 1914 y la Convención Internacional del Opio, firmada en La Haya en 1912. La Ley Boggs, aprobada en 1951, clasificó la marihuana en el mismo grupo que la heroína y cocaína, e impuso la pena de muerte para los que la vendieran a menores.³ A fines del siglo XIX, San Francisco prohibió fumar opio, y Nueva York proscribió los fumaderos de opio –leyes que perjudicaron principalmente a los inmigrantes de China.⁴ De manera similar, los primeros intentos de controlar el uso y distribución de marihuana en Estados Unidos estaban inspirados por una aversión hacia los inmigrantes mexicanos. A la legislación de 1969 siguió, el 6 de julio de 1973, la creación de la DEA, una agencia nacional antidrogas que, en palabras de Nixon, emprendería

1 Julia Buxton, *The Political Economy of Narcotics: Production, Consumption & Global Markets*, Black Point, NS: Fernwood Publishing, 2006, 62.

2 David Courtwright, *Dark Paradise: A History of Opiate Addiction in America*, Cambridge: Harvard University Press, 2001, 163.

3 Matthew Robinson y Renee Scherlen, *Lies, Damned Lies, and Drug War Statistics*, Albany: State University of New York Press, 2007, 25.

4 “Los historiadores coinciden en que los esfuerzos para limitar el consumo de opio se originó en un esfuerzo por controlar a los inmigrantes chinos y su influencia en los estadounidenses (blancos)”. *Ibid.*, 20.

“una guerra global sin cuartel contra la amenaza de las drogas”.⁵ Beriah Empire y Lydia Anne M. Bartholow usan la imagen del Caballo de Troya para describir el propósito de la guerra antidrogas: “A pesar de la falta de evidencia de una crisis nacional por los narcóticos, la guerra antidrogas fue el Caballo de Troya de la Casa Blanca para intensificar la participación federal en las tareas policiales. Le permitió a Nixon aplicar su consigna electoral de ser duro contra el crimen y al mismo tiempo obstaculizar la rebelión política organizada”.⁶

La guerra antidrogas se inició a la luz de 1968, cuando las protestas y movimientos estudiantiles cimbraron el mundo, de la Ciudad de México a París y San Francisco. Llegó en un momento crítico de la guerra de Vietnam (para el otoño de 1971, la mitad de todos los soldados estadounidenses en Vietnam habían probado la heroína, y cada mes morían en promedio dos de ellos por sobredosis),⁷ y una época en la que la juventud experimentaba con drogas legales e ilegales “a un nivel sin precedentes en la historia norteamericana”.⁸ Las décadas del 60 y el 70 vieron el apogeo del activismo contra la guerra y el imperialismo, y los esfuerzos antinarcóticos existentes se adaptaron para aplastar la protesta. “Las leyes antidrogas estrictas, la aplicación dura y las medidas punitivas de enjuiciamiento permitieron suprimir y controlar la disidencia”, escribe Julia Buxton en su libro *The Political Economy of Narcotics*.⁹

No solamente EUA desplegó medidas antidrogas para sacar a los manifestantes, hippies y radicales de las calles. Buxton explica que las políticas antidrogas en ese periodo “sirvieron para unificar sistemas tan diversos como los gobiernos comunistas de China y del Bloque del Este, las dictaduras militares de derecha en Sudamérica, España y Portugal, y los gobiernos elegidos democráticamente de Australia, EUA y Escandinavia”.¹⁰

Desde entonces, Estados Unidos ha enfocado sus esfuerzos internacionales de control antinarcóticos en la reducción del suministro, partiendo del supuesto de que esto reducirá la oferta disponible, haciendo que los precios se eleven y la demanda disminuya. Tómese por ejemplo la Operación Intercepta, que la administración de Nixon presentó como

5 DEA, “DEA History”, <http://www.justice.gov/dea/about/history.shtml>.

6 Beriah Empire y Lydia Anne Bartholow, “Raze the Walls”, in *Life During Wartime: : resisting counterinsurgency*, Oakland, CA : AK Press, 2013, 189.

7 David T. Courtwright, *Dark paradise : a history of opiate addiction in America*, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2001, 168.

8 *Ibid.*, 165.

9 Julia Buxton, *The political economy of narcotics : production, consumption and global markets*, Black Point, Canada : Fernwood Pub., 2006, 61.

10 *Ibid.*

una estrategia para detener el flujo de marihuana desde México. Incluso en ese momento temprano de su existencia, la guerra antidrogas ya estaba entrelazada con el control de la frontera y la migración de mexicanos a Estados Unidos. Según Kate Doyle, del Archivo de Seguridad Nacional de EUA, “la Operación Intercepta fue urdida en secreto para generar una disminución sin precedentes de todo el tráfico aéreo, automotriz y peatonal –legítimo o no– que fluía de México al sur estadounidense. Para lograr sus metas, los altos consejeros ejecutivos del presidente desplegaron miles de agentes fronterizos, aduanales y migratorios extra a lo largo de los 3,200 km que separan los países desde el norte de Tijuana hasta Brownsville, Texas. Ya asignados a su localidad, los agentes recibían la orden de detener e inspeccionar todo lo que se moviera”.¹¹ G. Gordon Liddy, un viejo consejero administrativo de Nixon que sería condenado por su participación en Watergate, escribió: “Por razones diplomáticas, el verdadero propósito de la acción nunca fue revelado. Operación Intercepta, con su masiva disrupción económica y social, podía ser sostenida por EUA mucho más tiempo que por México. Fue un ejercicio de extorsión internacional, puro, simple y efectivo, diseñado para someter a México a nuestra voluntad”.¹²

En las siguientes décadas, la DEA habría de realizar variados experimentos de intercepción de drogas y destrucción de plantíos en México, los cuales se describirán más adelante. Dentro del país, Ronald Reagan revivió la guerra contra las drogas una década después, en 1982, lo que inició el proceso de erradicación y prohibición de cultivos en Sudamérica. En 1986, Reagan firmó la *Decisión Directiva 221 de Seguridad Nacional*, a partir de la cual el narcotráfico se consideraba legalmente una amenaza a la seguridad nacional de EUA.¹³ Esa directiva fue actualizada en 1989 por George Bush padre, y expandió el papel de las tropas estadounidenses en actividades antinarcóticos en Latinoamérica, permitiéndoles hacer patrullajes en vez de estar restringidos a sus cuarteles.¹⁴ En un discurso tras la invasión de Panamá en 1989, Bush dijo: “Los objetivos de Estados Unidos han sido salvaguardar las vidas de los norteamericanos, defender la democracia en Panamá, *combatir el narcotráfico*, y proteger la integridad del Tratado del Canal de Panamá. Se han hecho muchos intentos de resolver esta crisis por medio de la diplomacia y

11 Kate Doyle, “Operation Intercept: The Perils of Unilateralism”, National Security Archive, 13 de Abril, 2003, <http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB86/>

12 *Ibid.*

13 Ted Carpenter, *Bad Neighbor Policy: Washington's Futile War on Drugs in Latin America*, Basingstoke, UK: Palgrave, 2003, 29.

14 *Ibid.*, 37.

las negociaciones. Todos fueron rechazados por el dictador de Panamá, el general Manuel A. Noriega, *un narcotraficante procesado*.¹⁵

Con Reagan, una nueva ola de encarcelamientos raciales masivos comenzó en Estados Unidos y continúa hasta la fecha. “Entre 1980 y 2005, el número de personas en prisiones y cárceles de EUA por cargos asociados a las drogas aumentó un 1,100 por ciento. En 2010 había dos millones de personas encarceladas en todo el país”, de acuerdo con John Gibler.¹⁶ “El uso de la prohibición para el control social racializado es el origen de la era moderna de la prohibición de drogas”, concluye. De acuerdo con Michelle Alexander, profesora de derecho y autora de *The New Jim Crow*, “El aspecto racial del encarcelamiento masivo es su característica más sobresaliente. Ningún otro país en el mundo recluye a tantos miembros de sus minorías étnicas o raciales. Estados Unidos encarcela a un porcentaje mayor de su población negra que Sudáfrica en el apogeo del apartheid. En Washington, D.C., la capital de nuestra nación, se estima que tres de cada cuatro hombres negros jóvenes (y casi todos de los barrios más pobres) pueden esperar ser llevados a prisión. Tasas similares de encarcelamiento pueden encontrarse en las comunidades negras a lo largo de Norteamérica”.¹⁷ Para febrero de 2014, 50.1 por ciento de todos los reclusos federales en EUA habían sido encarcelados por delitos relacionados con las drogas.¹⁸

El número de prisioneros en Estados Unidos se disparó junto con los presupuestos de la guerra antidrogas. También lo han hecho los consumidores de drogas, como lo admite la DEA en un reporte de 2008: “en 1960, sólo cuatro millones de estadounidenses habían probado las drogas alguna vez. Actualmente ese número ha llegado a más de 74 millones”.¹⁹ Mientras tanto, la DEA goza de un presupuesto de más de \$2,000 millones de dólares (a partir de los \$75 millones que tenía cuando fue creada) y emplea a 5,000 agentes (comparados con sus 1,470 agentes en 1973).²⁰

Los consumidores de drogas son sentenciados a prisión bajo el pretexto de proteger del impacto de las drogas a sus comunidades. Sin embargo, en su investigación pionera sobre el abuso de drogas, el Dr. Carl Hart enfatiza

15 Robinson y Scherlen, *Lies, Damned Lies, and Drug War Statistics*, 31 (énfasis en el original).

16 John Gibler, *To Die in Mexico: Dispatches from Inside the Drug War*, San Francisco: City Lights Books, 2011, 43.

17 Michelle Alexander, *The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness*, New York: New Press, 2010, 15.

18 Federal Bureau of Prisons, “Offenses”, 22 de febrero, 2014, http://www.bop.gov/about/statistics/statistics_inmate_offenses.jsp.

19 DEA, “A Tradition of Excellence: 1970–1975”, <http://www.justice.gov/dea/about/history/1970-1975.pdf>.

20 DEA, “DEA History”.

que la drogadicción de hecho no es la que devasta a las comunidades, como frecuentemente se nos hace creer. “El problema era la pobreza, la política antidrogas, la falta de empleos –un amplio espectro de causas. Y las drogas eran un tipo de componente que no contribuía tanto como habíamos dicho”, declaró en una entrevista en enero de 2014. “Una de las cosas que me impresionó cuando empecé a entender lo que pasaba, fue descubrir que entre 80 y 90 por ciento de las personas que de hecho consumen drogas como crack, cocaína, heroína, metanfetaminas, mariguana, no eran adictos. Pensé: ‘Espérenme tantito. Yo creía que una vez que prueban estas drogas, todos se hacen adictos, y que por eso teníamos estos problemas.’ Esa fue una cosa de la que me enteré. Otra cosa que descubrí es que si se ofrecen alternativas a las personas –trabajos, otro tipo de opciones–, no abusan tanto de drogas como éstas”.²¹

Alrededor del mundo se está probando con abolir la prohibición: mariguana legalizada en Colorado y Washington, EUA, absoluta descriminalización de los narcóticos en Portugal, y sitios de inyección segura y supervisada, incluyendo uno en Vancouver, Canadá, mi hogar por mucho tiempo. En 2014, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo que legalizó la producción, venta y consumo de mariguana, en un abierto desafío a las convenciones internacionales de control de narcóticos de las Naciones Unidas. Una y otra vez la evidencia demuestra que la adicción es un tema de salud, y que la criminalización de los consumidores y adictos a las drogas exagera los daños personales y sociales. Prácticamente no hay ninguna prueba convincente de que la guerra antidrogas haya funcionado para evitar adicciones o disminuir significativamente el suministro de narcóticos a mediano o largo plazo. Un amplio estudio hecho por *The Lancet* encontró que la erradicación de cultivos hizo muy poco por reducir el suministro de cocaína en Estados Unidos, que las costosas campañas de prohibición sólo proveen una reducción temporal del suministro, y que había “cierta evidencia pero rendimientos decrecientes del encarcelamiento más allá de niveles específicos”.²²

En lugar de realmente controlar sustancias ilegales, la guerra antidrogas es un concepto inventado y promovido por el gobierno de EUA (y una etiqueta adoptada por otros gobiernos) para servir a sus intereses, tanto

21 Amy Goodman, “‘Drugs Aren’t the Problem’: Neuroscientist Carl Hart on Brain Science & Myths About Addiction”, *Democracy Now!*, http://www.democracynow.org/2014/1/6/drugs_arent_the_problem_neuroscientist_carl.

22 John Strang, Thomas Babor, Jonathan Caulkins, et al. “Drug Policy and the Public Good: Evidence for Effective Interventions”, *The Lancet* 379, no. 9810 (Enero 7, 2012): 71–83, www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673611616747.pdf.

domésticos como en el extranjero. Según el historiador de las drogas Paul Gootenberg, “Aunque su genealogía no ha sido rigurosamente investigada, la metáfora contemporánea de la ‘guerra contra las drogas’ se adecuó a una versión reformista y progresista universal antes de la Segunda Guerra Mundial; una versión típica de la ideología socialmente arraigada en la Guerra Fría, de los años 50 a los 70 (asociada a la contención *del comunismo*); fundiéndose en una fantasía antidrogas reaganesca de victoria absoluta tipo ‘Star Wars’ en los años ochenta y más allá”.²³ Como ya dije, la presidencia de Obama ha intentado alejarse de la terminología de la guerra antidrogas, y Gil Kerlikowske, el exdirector de política nacional en materia de drogas de la Casa Blanca, desaprobó el término en su primera entrevista sobre el tema. Aunque el discurso ha cambiado, y el Memorándum Holder modifica los mínimos obligatorios en el caso de ciertas drogas, ha habido pocos cambios concretos en términos de las políticas federales estadounidenses.²⁴

Cuando se trata de la guerra antidrogas y la militarización doméstica, vale la pena señalar que los cárteles colombianos de la droga sirvieron en 1981 como pretexto para la modificación de la Ley *Posse Comitatus* en EUA, la cual prohibió la participación militar en la vigilancia doméstica. Ciertas enmiendas a la ley “permiten [al Departamento de Defensa] apoyar a fuerzas civiles del orden y a la Guardia Costera. Aunque no se determina explícitamente, la intención del congreso fue clara: el ejército necesitaba apoyar a los agentes del orden para combatir el contrabando de drogas”.²⁵

Fuera de los cincuenta estados de la Unión Americana, está claro que la guerra antidrogas es el instrumento con el que los Estados están librando una guerra contra la gente pobre, los trabajadores y migrantes, entre otros. El modelo de guerra antidrogas dentro de EUA provee un mecanismo de control social por medio de la criminalización y el encarcelamiento masivo, enfocado en las comunidades de color. En México, Centro y Sudamérica, el modelo de la guerra antidrogas se basa en el uso del terror para imponer control social.²⁶

23 Paul Gootenberg, “Talking About the Flow: Drugs, Borders, and the Discourse of Drug Control”, *Cultural Critique* 71 (Winter 2009): 36–37.

24 Holder, Eric. “Retroactive Application of Department Policy on Changing Mandatory Minimum Sentences and Recidivist Enhancements in Certain Drug Cases”. Office of the Attorney General. 29 de agosto, 2013. <http://www.fd.org/docs/select-topics/sentencing-resources/august-29-2013-holder-memo-on-retroactivity-of-mandatory-minimum-charging-policy.pdf?sfvrsn=4>

25 Evan Munsing y Christopher Lamb, “Joint Interagency Task Force–South: The Best Known, Least Understood Interagency Success”, Institute for National Strategic Studies, Strategic Perspectives 5 (julio 2011), <http://www.ndu.edu/press/lib/pdf/strategic-perspectives/Strategic-Perspectives-5.pdf>, 7–8.

26 Dawn Paley. “Repressive Memories: Terror, Insurgency and the Drug War”. Occu-

Imperio y narcotráfico

Si dejamos de lado el concepto de guerra antidrogas por un momento, incluso la palabra “drogas” es problemática en sí misma. En el libro *Forces of Habit*, David Courtwright usa “drogas” “como un término conveniente y neutral para referirse a una extensa lista de sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas, suaves o potentes, aprovechadas para fines médicos y no médicos”.²⁷ Courtwright procede a escribir sobre lo que llama los “tres grandes” (alcohol, tabaco y caféina) y los tres chicos (opio, cannabis y coca). El comercio de los primeros tres fue un pilar esencial del proyecto colonial europeo —en 1885, los impuestos sobre la bebida, el tabaco y el té constituían la mitad de los ingresos del gobierno británico.²⁸ “Los historiadores de las mercancías saben que ciertos estimulantes —especies exóticas, café, tabaco, chocolate— jugaron papeles clave en el consumo y los estilos de clase en la construcción del capitalismo europeo”, escribe Gootenberg.²⁹

Courtwright resume las conexiones entre los narcóticos y el proyecto colonial de manera sucinta: “Las élites en gran parte responsables de promover el cultivo y uso de drogas fueron europeas. No podrían haberse diseminado por el mundo tan rápido, ni dominarlo de forma tan completa, sin la producción de alcohol a gran escala y el cultivo de drogas y azúcar, esta última usada con frecuencia, o directamente convertida en, licores. Con estos productos psicoactivos pagaron sus cuentas, sobornaron y corrompieron a sus opositores nativos, pacificaron a sus trabajadores y soldados, y suministraron sus plantaciones con mano de obra”.³⁰ En las Américas, la introducción de la caña de azúcar por parte de los españoles fue de la mano con la esclavización de millones de personas de origen africano a lo largo del Caribe, Centro y Sudamérica. La colonización de Norteamérica fue posible en parte gracias a la introducción del alcohol a las comunidades indígenas. Hoy en día, el café cubre 44 por ciento de la tierra agrícola cultivable en Latinoamérica.³¹ Y los comerciantes europeos exportaron de La Española la costumbre de fumar tabaco, que terminó por volverse un cultivo comercial en las tierras colonizadas alrededor

ped London. Fall, 2013. dawnpaley.ca/2013/10/27/repressive-memories-terror-insurgency-and-the-drug-war/.

27 David Courtwright, *Forces of Habit: Drugs and the Making of the Modern World*, Cambridge: Harvard University Press, 2001, 3.

28 *Ibid.*, 4–5.

29 Paul Gootenberg, “Talking About the Flow”, 16.

30 *Ibid.*

31 *Ibid.*, 21.

del mundo. Pero cuando escuchamos hablar de drogas, sobre todo en el contexto de una guerra contra ellas, no pensamos en estas sustancias, vitales en la creación y sustento imperiales.

Por el contrario, dentro del marco estatal de la guerra antidrogas, se induce al público a temer los derivados de los que Cartwright llama las tres chicas: opio, cannabis y coca. Cada una de ellas ha sido aprovechada por comunidades indígenas en todo el planeta desde hace mucho. El opio se usaba para curar enfermedades en Europa y el norte de África antes de que los comerciantes árabes lo introdujeran en China hace más de dos milenios. La cannabis, una robusta planta que no sólo produce flores y hojas de marihuana, sino también resistentes fibras de cáñamo, se usó por mucho tiempo en India y el resto de Asia. Los pueblos nativos de los Andes ingieren hojas de coca para aplacar el hambre y aumentar las fuerzas y energías.

La coca, el opio y la marihuana han participado en diferentes medidas en la formación de élites y Estados, al igual que sus parientes legales. En las mesetas andinas, los conquistadores españoles comerciaban cosechas de coca para que los mineros tuvieran acceso al estimulante.³² Las guerras del opio en China fueron cruciales para el colonialismo británico, y los colonialistas ingleses y norteamericanos defendieron su derecho de obtener ganancias a partir de ese comercio. “No pretendo justificar la práctica del comercio del opio desde un punto de vida moral y filantrópico, pero como comerciante insisto en que ha sido un negocio justo, honorable y legítimo; y para decir lo peor de él, es susceptible de objeciones no más profundas ni contundentes que la importación de vinos, brandis y licores en Estados Unidos, Inglaterra, etc”, escribió Warren Delano II, abuelo de Franklin Delano Roosevelt, y cuya firma Russell and Company tenía participación en el tráfico de opio en el siglo XIX (contrabando hacia China).³³

El papel de los gobiernos y en particular del gobierno estadounidense en determinar cuáles son las drogas ilegales y los mercados ilícitos es un elemento crucial de la guerra antidrogas. “Los Estados monopolizan el poder de criminalizar: las leyes preceden y definen la criminalidad. Por medio de su autoridad legislativa y judicial, los Estados imponen las reglas del juego incluso aunque no puedan controlarlo por completo”, escribe el académico Peter Andreas.³⁴ La facilidad con que las sustancias pueden ser prohibidas

32 Paul Gootenberg, “Cocaine in Chains” en *From Silver to Cocaine: Latin American Commodity Chains and the Building of the World Economy, 1500–2000* de Steven Topik, Carlos Marichal, y Zephyr Frank (eds.), Durham: Duke University Press, 2006, 323.

33 Courtwright, *Forces of Habit*, 34.

34 Peter Andreas, “Illicit Globalization: Myths, Misconceptions, and Historical Lessons”, *Political Science Quarterly*, Vol. 126, no. 3, 2011, 7.

por el Estado es la misma con la que se pueden legalizar, un detalle que no pasa desapercibido para los reformadores de la política de narcóticos y los estudiosos de historia. “Por ejemplo, las redes de contrabando de alcohol que vinculaban Estados Unidos a proveedores en Europa, Canadá, México y el Caribe crearon un reto estratégico inmenso durante la era de la prohibición –y fueron derogadas con la simple firma de la Ley Volstead en 1933”.³⁵

Es importante recordar el contexto histórico mismo del cultivo de narcóticos, ya que también ha sido determinado en buena parte por los intereses norteamericanos y europeos. La morfina, heroína y codeína fueron aisladas a partir del opio por químicos europeos en el siglo XIX, y fueron comercializadas por compañías farmacéuticas que aún existen. Los primeros laboratorios que transformaron hojas de coca en concentrado de cocaína fueron montados por científicos alemanes, y el proceso fue inventado para evitar que las hojas se pudrieran durante el viaje a los centros coloniales. Los gobiernos de EUA y Alemania, junto con el de Perú, fueron los actores centrales de la promoción de las exportaciones de coca y cocaína. “En la década de 1890, los agregados comerciales de EUA en Lima fortalecieron sus contactos con productores locales de cocaína... Y le ayudaron a los peruanos a modernizar las técnicas de secado de hojas y transporte”.³⁶ En 1902, 2,400 kilogramos de cocaína se produjeron en la región andina, y Merck, una empresa farmacéutica alemana, controlaba una cuarta parte del mercado.³⁷ En la misma época, un aproximado de 600 a 1,000 toneladas de coca se importaban en Estados Unidos, la mayoría para ser un ingrediente de la Coca-Cola.³⁸ Bayer fue la primera en sacar al mercado la heroína como inhibidor de la tos, y después, Smith, Kline & French de Philadelphia promovió las anfetaminas como remedio para el resfriado común.³⁹ Entonces no existía control legal del comercio y venta de fármacos, o sobre las declaraciones que la industria farmacéutica hacía sobre nuevos medicamentos milagrosos como la cocaína.⁴⁰ No fue hasta el siglo XX que la comunidad internacional se organizó, a petición de Estados Unidos, para crear un régimen global de prohibición.

35 *Ibid.*, 8.

36 Gootenberg, “Cocaine in Chains”, 330.

37 *Ibid.*, 325.

38 *Ibid.*, 329.

39 Courtwright, *Forces of Habit*, 78.

40 Joseph Spillane, “Making a Modern Drug: The Manufacture, Sale, and Control of Cocaine in the United States, 1880–1920”, in *Cocaine: Global Histories* de Paul Gootenberg (ed.), London: Routledge, 1999, 21.

Drogas y ocupación extranjera

Los procesos colonialistas modernos que se remontan a cuando Nixon declaró la guerra antidrogas por primera vez han dado forma a la geografía de la producción de drogas y narcotráfico. Fue en ese periodo que contrabandistas estadounidenses sembraron nuevos cultivos de marihuana en México. Don Henry Ford, un contrabandista de ojos azules convertido en granjero orgánico en Texas, me contó sobre la imposición de semillas a los agricultores mexicanos de la Sierra Madre Occidental, que separa Chihuahua de Sonora, Sinaloa y Durango: “Yo fui uno de los que lo hizo. Mire, yo bajaba a Sinaloa, y les enseñaba el dinero. Yo les decía: aquí tienen algunas semillas, por qué no las siembran, esto es lo que queremos”.

Ford y yo nos reunimos en una pequeña población ranchera en Texas, cerca de San Antonio. Pasó a recogerme a la estación de autobuses Greyhound en una camioneta con la caja llena de paja, y nos dirigimos a un clásico restaurante tejano de barbacoa, donde conversamos entre carnes, pepinillos y ensalada de col. “La cosa era decirles: si ustedes me cultivan esta mierda en lugar de esta otra, yo puedo venderla mejor. Nosotros fuimos los que inventamos la demanda... Uno les decía: Te voy a pagar un chingo de dinero, cien dólares el kilo o lo que fuera, ¿me entiendes?”

Aunque había traficantes solitarios como Don Henry Ford, que terminó pasando un tiempo en la cárcel por el contrabando, la principal organización dedicada al tráfico de marihuana históricamente fue el Ejército mexicano. “La información basada en hechos que el autor reunió durante siete años apunta decididamente al ejército como el principal transportador de cargamentos de marihuana a la frontera”, escribe el estudioso Patrick O’Day, quien se basó en datos reunidos a partir de sus propias investigaciones ante la reticencia de las autoridades y policías del lado norte de la frontera a hablar con él abiertamente sobre el narcotráfico.⁴¹ “La falta de reportes y los reportes incorrectos de hechos relevantes, la desaparición de documentos clave y la extrema paranoia de las autoridades entrevistadas con el propósito de echar luz sobre este tema políticamente tan sensible, se hizo tan evidente durante la investigación del autor que la misma obstrucción se ha vuelto parte de los descubrimientos”, escribió.⁴²

41 Patrick O’Day, “Mexican Army as Cartel”, *Journal of Contemporary Criminal Justice* 17, no. 3, 2001, 284.

42 *Ibid.*, 286.

Finalmente, y también debido al estímulo estadounidense, la producción industrial de marihuana se abrió paso hacia el sur hasta Colombia. Washington administró programas de erradicación en México durante la década de 1970, en Sinaloa, Guerrero y otros sitios,⁴³ y en 1976 comenzó la fumigación aérea de cultivos de amapola en Chihuahua, Durango y Sinaloa, como parte de la Operación Trizo.⁴⁴ Veintidós mil hectáreas de tierra habían sido fumigadas a fines de 1977. Según la DEA, “El gran número de arrestos como consecuencia de la Operación Trizo causó una crisis económica en las regiones de cultivo de amapola en México. Para reducir el malestar social, el gobierno mexicano le pidió formalmente a la DEA que dejara de participar en los vuelos de vigilancia”.⁴⁵

En los años ochenta, EUA lanzó la Operación Cóndor en México, un nuevo programa de fumigación aérea de plantaciones de marihuana. Las operaciones Cóndor y Trizo, junto con los programas de intercepción, fueron pioneras en el uso de tácticas de persecución ratoneras enfocadas en el suministro, como forma de control antidrogas que se usa hasta la actualidad. En *Drug War Mexico*, Peter Watt y Roberto Zepeda argumentan que estos programas estadounidenses dispararon los precios de la heroína y la marihuana, y favorecieron la “cartelización” del narcotráfico. “Para los productores y traficantes con los mejores contactos políticos, las redes más grandes y los recursos suficientes, y para aquellos que se adaptaron a sobrevivir los primeros años de la nueva fase de la política antidrogas, este agudo y repentino aumento en el precio de sus exportaciones fue tanto satisfactorio como tentador”, escriben.

Los primeros programas de fumigación de cultivos emprendidos por EUA también provocaron desplazamientos con secuelas internacionales. “Algunos traficantes mexicanos aparentemente cometieron un error fatal –cosecharon marihuana envenenada y la mandaron al Norte. Las pruebas de laboratorio del gobierno estadounidense encontraron trazos de paraquat [un potente herbicida] en la *ganja* mexicana”, explica Ioan Grillo en su libro *El Narco*.⁴⁶ El paraquat también envenena y pueda matar a humanos y animales que lo ingieren. Grillo continúa: “La mala publicidad obligó a los *dealers* a buscar una nueva fuente de mota para los millones de hippies hambrientos. No tomó mucho tiempo encontrar un país con la tierra, la mano de obra y la ausencia de autoridad necesarias para llenar el vacío: Colombia. Los

43 DEA, “A Tradition of Excellence”.

44 *Ibid.*

45 *Ibid.*

46 Ioan Grillo, *El Narco*, 49.

campesinos llevaban sembrando mota en la Sierra Nevada de Colombia desde principios de los setentas. Conforme México se desplomaba, los colombianos tomaban su lugar, creando un boom en su propia industria de la mariguana conocida entre los historiadores locales como la Bonanza Marimbera⁴⁷. Como muestra del claro nexo entre colonización e introducción del cultivo de narcóticos, las plantaciones de coca aparecieron en Putumayo, una provincia sureña que colinda con Ecuador, y donde vive el pueblo Cofán y actúa la industria petrolera. “Los principales cultivos de coca empezaron a aparecer en los setenta, junto con la colonización de territorios asociados a intereses petroleros. Muchos contratos de trabajo en el sector petrolero eran temporales, y los trabajadores buscaron fuentes de ingreso alternativas, incluyendo el cultivo de coca⁴⁸”.

La región de Magdalena Medio, un área geográfica estratégica repleta de reservas de petróleo, pozos, oleoductos, oro, plomo, mármol, cuarzo, bosques de maderas preciosas, reservas importantes de agua y ricas tierras agrícolas, estaba previamente ocupada por Shell, Texaco y Frontino Goldmines (convertida en Medoro Resources), y ahora la ocupan también los narcotraficantes. Las partes de Colombia ricas en recursos como Magdalena Medio, donde las corporaciones multinacionales distorsionaron las economías locales y donde la población tenía acceso mínimo a los servicios del gobierno, eran territorio de primera para los narcotraficantes. “La presencia del Estado en el área no ha proporcionado un desarrollo equitativo que beneficie a las poblaciones locales que han vivido ahí desde el pasado distante, o a aquellos que han llegado buscando una forma de ganarse la vida, sino que ha favorecido los intereses de grandes compañías de capital extranjero, que introducen un modelo excluyente de desarrollo y dominación social, política y económica. Muchas de estas características condujeron a que estas tierras fueran atractivas para los poderosos del narcotráfico, que hicieron inversiones importantes en terrenos de la zona, agravando todos los conflictos⁴⁹”.

Estos casos ilustran cómo se ha conformado la geografía de los narcóticos en el hemisferio occidental en los últimos 150 años. Aunque es difícil calcular exactamente cuánta superficie se usa para el cultivo de drogas, la Oficina para Asuntos Internacionales y de Aplicación de la Ley en materia

47 *Ibid.*

48 Moritz Tenthoff, “Coca, Petroleum and Conflict in Cofán Territory”, Transnational Institute, Drug Policy Briefing #23, Septiembre 2007, <http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/brief23.pdf>, 2.

49 Asociación de familiares de detenidos, desaparecidos, Colombia, nunca más: Crímenes de lesa humanidad Zona 14a 1966, Tomo 1 (Bogotá: Asfaddes, 2000), 117.

de Narcóticos –Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, parte del Departamento de Estado de EUA– afirma que en 2011, 12,000 hectáreas fueron plantadas con opio y más o menos la misma cantidad con cannabis. Como apunta el economista Peter Reuter, “Ningún detalle se ha publicado jamás sobre la metodología de estos cálculos, más allá del hecho de que son generados a partir de estimados de área sembrada, cosecha por acre, y rendimiento refinado por tonelada de producto en bruto; las fuentes de información, e incluso la tecnología usada para producirlas (las áreas estimadas) se consideran clasificadas”.⁵⁰

En cualquier caso, queda claro que los tratados de libre comercio y la reestructuración neoliberal han ayudado a definir la estructura del mercado de drogas actual. Un estudio de más de 2,200 municipios rurales en México, entre 1990 y 2010, encontró que los precios bajos del maíz, que cayeron tras la implementación del TLCAN, aumentaron el cultivo de opio y cannabis. “Este incremento [en cultivos ilícitos] vino con salarios rurales diferencialmente más bajos, lo cual sugiere que los campesinos plantaron más drogas en respuesta a la disminución del ingreso potencial del cultivo de maíz”, escriben los autores del estudio.⁵¹ Los académicos Watt y Zepeda argumentan que el TLCAN “proveyó tanto la infraestructura como la fuerza de trabajo para facilitar el contrabando”, lo cual desarrolla la idea de una industria de los narcóticos entrelazada con la transformación neoliberal. Las autopistas construidas para llevar exportaciones agrícolas a los mercados de EUA, por ejemplo, también favorecen a los narcotraficantes, y la desigualdad creciente hace que más gente esté dispuesta a trabajar en la economía ilícita.

Este libro explora una perspectiva amplia y a largo plazo de la guerra antidrogas, y plantea que EUA y sus aliados controlan la demanda y crean las condiciones para la producción, tráfico y demanda de narcóticos ilegales.

En gran parte, las políticas estadounidenses son las que crean las redes criminales que trafican drogas, y es la posición de EUA la que genera la violencia extrema. Considérese, por ejemplo, la captura del narcotraficante mexicano Miguel Treviño Morales, alias Z-40. Como miembro de Los Zetas, se decía que Treviño Morales había matado a cientos de personas, y asimismo fue ultimado en 2013. Para poder comprender su muerte, que

⁵⁰ Peter Andreas, “Illicit Globalization”, 5.

⁵¹ Oeindrila Dube, Omar García-Ponce y Kevin Thom, “From Maize to Haze: Agricultural Shocks and the Growth of the Mexican Drug Sector”, Febrero 2014, http://www.cgdev.org/sites/default/files/maize-haize-agricultural-shocks-growth-mexican-drug-sector_0.pdf.

los medios celebraron como un duro golpe contra Los Zetas y una victoria para el gobierno mexicano, entrevisté a Sean Dunagan, un exanalista de inteligencia de la DEA en México y Guatemala, y miembro de Law Enforcement Against Prohibition (una organización sin fines de lucro formada por exmiembros de fuerzas de la ley que se oponen a las políticas antidrogas existentes). “Lo que realmente sobresale, lo que realmente no se reporta, es que nosotros creamos a Miguel Treviño Morales”, dijo Dunagan. “Es un producto de la política antidrogas de Estados Unidos. Sin nuestra política antinarcóticos actual nunca habría existido. Quizá habría sido un robacoches y ya estaría preso en una cárcel mexicana. Nuestra política de prohibición es lo que crea personas así, incentiva la violencia a un grado tremendo, así que no debe sorprendernos cuando surge alguien que comete dos mil asesinatos para llegar a la cima, porque dentro del esquema que hemos creado e impuesto al gobierno mexicano, eso es lo que tiene que pasar. Si queremos que personas como él dejen de aterrorizar al país, necesitamos cambiar nuestras políticas; él no es más que un producto lógico de lo que hemos hecho”.

El impacto de las políticas de EUA obviamente llega más allá de los sujetos involucrados y sus conexiones con los imperios del narcotráfico. La violencia relacionada con la guerra contra el narco se localiza en los lugares en donde EUA inyecta dinero antidrogas, lo que significa que la violencia explosiva en países productores o de paso de narcóticos con frecuencia está directamente vinculada con presiones externas y el aprovisionamiento de recursos a las fuerzas de seguridad locales. Los agentes norteamericanos lo han admitido, reconociendo que los programas antidrogas en Colombia desplazaron el problema hacia México, de ahí a Centroamérica, el Caribe, etcétera. Como veremos, en México, Centroamérica y Colombia, la geografía mutante de la guerra antidrogas propicia la militarización estatal y privada, y puede incrementar el poder de las corporaciones transnacionales para explotar recursos humanos y naturales.

En países donde los programas antidrogas auspiciados por EUA se ponen en marcha –Colombia, México, el Caribe...–, el narcotráfico con frecuencia se incrementa, así como la violencia. En palabras de Peter Dale Scott, con respecto a Colombia en 2003, “El narcotráfico prospera en tiempos de conflictos; y ya es obvio que las intervenciones militares de EUA en áreas de drogas han estado, y seguirán, acompañadas de un aumento significativo del tráfico de drogas hacia [Estados Unidos]. Los nuevos [aumentos en el tráfico] se multiplican gracias a los esfuerzos de EUA más que a pesar de

ellos”.⁵² Scott relaciona los papeles del ejército y la policía, cuyos números y presupuestos aumentan en nombre del control de sustancias ilegales, con la intensificación del narcotráfico, así como de la violencia. Para hacer la conexión dentro de EUA, nos recuerda que los periodos con más homicidios registrados entre 1900 y 1990 son la Prohibición (1915–1930) y los años que siguen a la declaración de guerra antidrogas de Nixon.⁵³

Actualmente, el Comando del Norte de Estados Unidos tiene jurisdicción en EUA, México, Canadá y parte del Caribe, mientras que el Comando del Sur es la principal organización militar de EUA en Centro y Sudamérica. Para el Comando del Sur, el crimen organizado transnacional es el asunto prioritario de seguridad regional, en particular el tráfico de cocaína. Mas a pesar de los miles de millones de dólares que EUA ha vertido en el combate al narcotráfico, la amenaza sigue creciendo; “de acuerdo con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA, hubo un incremento de 483% en los arribos de cocaína a las costas de Florida en 2013, comparado con 2012”.⁵⁴ En vez de aceptar que la guerra antidrogas tiene propósitos distintos de la erradicación del flujo de narcóticos, se nos invita a creer que el enemigo se vuelve cada vez más sofisticado. “Señor Presidente [del Comité], ya han pasado los tiempos de los ‘vaqueros de la cocaína’. Ahora, nosotros y nuestros aliados nos enfrentamos con corporaciones de la cocaína que tienen franquicias en todo el mundo, incluyendo 1,200 ciudades estadounidenses, así como empresas criminales como la violenta pandilla transnacional Mara Salvatrucha, o MS-13, que se especializa en la extorsión y el tráfico de personas”, dijo el general estadounidense John F. Kelly, comandante del SouthCom, en su declaración de postura ejecutiva de 2014 ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.⁵⁵

Si no logramos ver que la guerra antidrogas funciona como instrumento para expandir el capitalismo, nos quedaremos pensando en esta estrategia imperial como un inútil juego de feria estilo “péguele-al-topo”, donde malvados criminales burlan una y otra vez una serie de operaciones militares multimillonarias. En esta representación, los narcotraficantes son

52 Peter Dale Scott, *Drugs, Oil and War: The US In Afghanistan, Colombia and Indochina*, Oxford: Bowman & Littlefield Publishers, 2003, 75.

53 Arthur Benavie, “Drugs: America’s Holy War”, (London: Routledge, 2009), 37.

54 John Kelly, “Posture Statement of General John F. Kelly, United States Marine Corps Commander, United States Southern Command: Before the 113th Congress House Armed Services Committee”, febrero 26, 2014, http://www.southcom.mil/newsroom/Documents/2014_SOUTHCOM_Posture_Statement_HASC_FINAL_PDF.pdf, 6

55 *Ibid.*, 7.

empujados del Caribe hacia México, de Colombia hacia Venezuela,⁵⁶ y del océano Pacífico al Atlántico. Sin embargo, ya sabemos cómo la producción de marihuana, opio y cocaína no sólo responde a los mercados de EUA, sino que históricamente ha surgido y se ha adaptado a la demanda estadounidense. Ahora podemos sumergirnos en las maneras en que la guerra antidrogas reconfigura las rutas del narco, y al hacerlo, propicia la militarización y la violencia en las regiones mencionadas.

56 Natalie Southwick, “Venezuela Destroys 17 Cocaine Labs Near Colombia Border”, InSight Crime, Octubre 23, 2013, <http://www.insightcrime.org/news-briefs/venezuela-destroys-17-cocaine-labs-near-colombia-border>.

Capítulo III

Colombia: una mirada hacia el sur

Fabián Laverde, un hombre de 37 años, alto, serio y bien afeitado, con una pequeña cicatriz en la mejilla, ha sido activista por más de la mitad de su vida. Nos conocimos en el sótano de una casa colectiva en un barrio de moda del centro de Bogotá; nos dispusimos a platicar en una habitación silenciosa mientras que en la sala un grupo de organizadores más jóvenes planeaba una protesta. Una tienda de campaña estaba armada junto a una mesa, indicio de que ese lugar también se había vuelto un refugio informal para alguien desplazado por el conflicto en Colombia. Laverde, que es director de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COS-PACC), a primera vista parecía un profesionalista rígido y de pocas palabras. Cuando visité Colombia ya casi había terminado el primer borrador del libro, y pude explicar a él y a uno de sus colegas la esencia del proyecto. Le pregunté qué pensaba de la guerra contra las drogas, y me dio gusto descubrir que mi impresión de Laverde como un hombre lacónico estaba equivocada. “Es un discurso en función de atacar la producción y todo ese cuento relacionado a la coca, pero realmente lo que se intenta atacar es al movimiento social, el objetivo concreto de esos planes es atacar el movimiento social”, dijo, y carraspeó suavemente antes de continuar. “Si usted observa el mapa de los conflictos en Colombia, va a encontrar que la mayor concentración de fuerza pública uniformada está en las zonas donde más resiste el movimiento social. Va a encontrar entonces que hay una gran concentración militar en el Casanare, que hay una gran concentración militar en Arauca, hacia Catatumbo, hacia el Cauca, y si observa por el otro lado, va a ver que también los movimientos sociales se fortalecen y tratan de resistir de manera organizada en estas regiones”.

Laverde puso de cabeza el discurso estadounidense del suministro al argumentar que su experiencia de la guerra antidrogas no se parece en nada a la que se expone públicamente. “Pero más allá de la militarización bajo el discurso de la lucha contra las drogas, y de hablar de que Colombia es un país productor de cocaína, y que si Colombia no produjera cocaína EUA no viviría este flagelo del consumo, etcétera, [la militarización] tiene que ver también con que la mayoría de estas regiones también son regiones que concentran grandes cantidades de recursos naturales, sobre todo minero-energéticos”.

Como ejemplo de un área donde las compañías petroleras trasnacionales –British Petroleum (BP), Petrobras, etc.– están en el centro del conflicto, Laverde menciona la región de Casanare, donde la COS-PACC trabaja. “Fue posible observar que en Casanare específicamente a medida que la inversión trasnacional, sobre todo la industria de extracción de petróleo fue creciendo, también se fue fortaleciendo el aparato militar, representado en la Brigada 16 del ejército colombiano”, me explicó. “A medida que estos dos grandes gremios, el capital multinacional y el aparato militar se fortalecían, también se fortaleció el paramilitarismo en la región... Llama la atención también que si uno ubica, si uno cogiera el mapa de Casanare y lo dividiera en sus 19 municipios, y empezara a ubicar con algún tipo de símbolo cuántos asesinatos, en ese caso falsos positivos, o desapariciones forzadas se dieron en cada municipio, vamos a encontrar que Agua Azul fue el epicentro, Agua Azul y Yopal. Agua Azul es la segunda ciudad más grande de Casanare, y Yopal es la capital. Pero si revisamos todo eso, todos los casos ocurrieron muy cerca de donde están las instalaciones petroleras, en ese momento de la British Petroleum Company, de la BP”.

Casanare no tiene un pasado de cultivo de coca, pero se considera un punto importante de transbordo de los químicos requeridos para la producción de cocaína, así como de la cocaína misma. También ha sido foco de actividad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de varias organizaciones locales de paramilitares. En Casanare, como en otros lugares del país, los recursos provenientes del Plan Colombia se usaron para perseguir a las guerrillas, y los civiles fueron los que pagaron el precio más alto. Laverde documentó el caso de un municipio llamado Recetor, una población que tenía escasa presencia estatal y actividad guerrillera, hasta que el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) entró en la zona. Entre diciembre de 2002 y marzo de 2003, tras la llegada de ACC, al menos 33 personas fueron desaparecidas. Los sobrevivientes y familiares que no desalojaron el área fueron arrestados en grupo por soldados, policías y miembros del servicio secreto; fueron acusados de ser guerrilleros, y al final los liberaron sin cargos. En 2011, el ayuntamiento de Recetor reportó que 1,235 personas –95 por ciento de la población– fueron desplazadas.¹ Pero como sucede con frecuencia en Colombia, el desplazamiento de civiles en el conflicto no significó que sus tierras y villas permanecieran abandonadas. Al contrario, un año después de que se aterrorizara a la población, la enorme

1 Consejo Municipal de Recetor, “Acuerdo No. 007”, Agosto 24, 2011, <http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/recetorcasanarepiu20082011.pdf>, 22

petrolera brasileña Petrobras abrió una oficina en la pequeña Recetor para coordinar la exploración petrolera. “Dicha empresa estuvo encargada del pozo petrolero Homero 1, ubicado en la vereda El Vegón, donde se cree que en los próximos años realizará nuevas pruebas sísmicas debido a los yacimientos de hidrocarburos existentes en la región; todo esto a cambio de víctimas, quienes se suman a la lista de los miles de desaparecidos en Casanare y Colombia”, establece el informe de Laverde.² El mismo fenómeno se ha dado con regularidad inquietante en diversas áreas, donde comunidades enteras han sido expulsadas de sus hogares y al regresar años después, encuentran que en sus tierras han sembrado palma aceitera o están buscando minerales en ellas.

Las conexiones entre los recursos naturales y la violencia estatal, paramilitar, guerrillera y del Plan Colombia, varían mucho de una región a otra del país, pero los organizadores, activistas y las víctimas directas insisten una y otra vez en que esos vínculos existen. Además de la colusión entre grupos del narcotráfico y las fuerzas de seguridad del Estado, hay poderosas estructuras paramilitares que sostienen tanto al narcotráfico como la represión hacia grupos insurgentes y movimientos sociales. En Colombia también existen múltiples y longevas insurgencias guerrilleras, rasgo que lo diferencia de cualquier otro país en el hemisferio. Así, además de luchar contra los narcóticos, un aspecto importante de la política estadounidense en Colombia implica combatir insurgencias de izquierda y (en términos del discurso oficial) el terrorismo.

En 1997, las FARC fueron incluidas en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de EUA, y tras el 11 de septiembre de 2001, las agencias de seguridad estadounidense califican cada vez más seguido a las FARC como narcoterroristas. Esta concentración en las FARC asumía que las guerrillas eran el principal conducto de cocaína hacia el norte, pero esto no tiene fundamentos reales: en 2001, el gobierno colombiano calculó que los paramilitares controlaban 40 por ciento del narcotráfico, mientras que las FARC controlaban sólo el 2.5 por ciento.³ En efecto, en una entrevista por televisión a principios de los noventa, Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) admitió que el 70 por ciento de los recursos de su organización paramilitar provenían de las drogas.⁴ En 2003, el gobierno y las AUC iniciaron negociaciones para dismantelar la organización y reintegrar a sus miembros a la sociedad, y

² Fabián Laverde Doncel, “Perfiles de algunos municipios de la zona”, en *Casanare: exhumando el genocidio* de Javier Giraldo Moreno (ed.), (Colombia: Editorial Códice, 2009), 68.

³ Scott, *Drugs, Oil and War*, 75.

⁴ *Ibid.*, 74.

en 2006 surgieron las *bandas criminales* (Bacrim). Estos supuestos grupos apolíticos se presentan como libres de ideología, ni de izquierda ni de derecha, pero como veremos, la realidad es que con frecuencia están integrados por paramilitares que no se desarmaron a inicios del presente siglo.

A lo largo de este periodo, el ejército colombiano participó en el narcotráfico, trabajando de cerca con grupos paramilitares, incluso mientras recibía cada vez más financiamiento de Estados Unidos. En muchas zonas, los gobiernos locales y estatales, así como la policía y la policía secreta, estaban al servicio de grupos paramilitares y narcotraficantes. Los gobiernos de EUA y Colombia han continuado experimentando con varios métodos para ejercer control sobre el flujo de narcóticos al mismo tiempo que sobre la sociedad, la economía y la política en Colombia.

Las coincidencias parciales entre antinarcóticos y contrainsurgencia, así como la conexión entre narcotráfico y paramilitarismo, son claramente explicadas por William O. Walker III: “Ya que los narcotraficantes sudamericanos cuidadosamente han establecido rutas de trasiego de drogas a través de Centroamérica y el Caribe, muchas veces con la ayuda de sectores conservadores o reaccionarios en los que también se ha apoyado la Casa Blanca, no es ninguna sorpresa que exista una conexión entre operaciones de seguridad, presentadas bajo el nombre amplio de conflicto de baja intensidad, y el control de narcóticos”.⁵ Quince años después de la imposición inicial del Plan Colombia, entender quiénes eran los participantes en el negocio de las drogas y cómo sus actividades se vinculaban con el Estado vale la pena, pero es aún más urgente que veamos qué papeles han jugado el capitalismo, la adquisición de tierras por medio del despojo y la economía extractiva, en la guerra antidrogas de Colombia.

El Plan Colombia y la guerra antidrogas

El Plan Colombia, conformado por reformas legales y financiamiento estadounidense para Colombia, se basó en una estrategia de desarrollo económico impulsada en primer lugar por el presidente colombiano Andrés Pastrana en 1999. La visión de Pastrana de un Plan Marshall para Colombia fue retomada por los legisladores estadounidenses y convertida en el Plan Colombia, dotado de una estrategia militar, otra legal y otra humanitaria. Diplomáticos de otros países afirmaron que el primer borrador del Plan

⁵ William O. Walker, *Drug Control in the Americas*, (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1989), 221.

Colombia fue escrito en inglés, y luego se tradujo al español.⁶ Mientras que Colombia y Estados Unidos habían mantenido lazos militares cercanos desde la década de 1940, el Plan Colombia, que realmente inició en el 2000, propició una relación mucho más cercana que nunca.⁷

El componente militar se concentró en recopilar inteligencia, obstaculizar las rutas de narcotráfico, entrenar a la policía y fiscales colombianos, y programas de erradicación que incluían fumigación aérea de cultivos de coca. Se le transfirió mucho equipo a las fuerzas armadas de Colombia: radares, artillería pesada y al menos 72 helicópteros.⁸ El Plan Colombia se justificó como un medio para destruir el boyante tráfico de cocaína y para debilitar a las FARC y otros grupos rebeldes. Entre 2000 y 2008, el ejército colombiano recibió el equivalente a 4.9 mil millones de dólares en asistencia de los Departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos, la mayor parte de la cual se suministró dentro del Plan Colombia.⁹ Además, la CIA es responsable de un programa de acción encubierta en Colombia que tiene un “presupuesto secreto multimillonario”, aprobado por George W. Bush al principio de su mandato y continuado por Obama.¹⁰ Significativamente, se han entrenado batallones especiales del ejército colombiano para proteger oleoductos pertenecientes a empresas estadounidenses.

El componente “humanitario” del Plan Colombia fue diseñado para estimular a los agricultores a sembrar plantas legales en vez de coca y opio, y junto con el despliegue militar del Plan Colombia, el programa de fumigaciones aéreas resultó ser el más trágico y devastador para el campesinado pobre de Colombia. El aspecto jurídico del Plan Colombia sirvió como punta de lanza para transformar el sistema legal colombiano y auspiciar reformas económicas. Durante la aplicación del Plan, la compañía estatal Ecopetrol fue parcialmente privatizada y se aprobaron nuevas leyes para estimular la inversión extranjera directa. Durante los años 2000, los medios de comunicación masiva daban la impresión de que el país estaba en medio de una batalla entre los paramilitares de derecha y las guerrillas de izquierda, mientras que el Estado, con apoyo de EUA, intervenía para

6 Noam Chomsky, *Rogue States* (Cambridge, MA: South End Press, 2000), 62.

7 Forrest Hylton, “Plan Colombia: The Measure of Success”, *Brown Journal of World Affairs* 17, no. 1 (2010), <http://democracyinamericas.org/pdfs/Hylton.pdf>.

8 Peter Chalk, *The Latin American Drug Trade: Scope, Dimensions, Impact and Response* (Santa Monica: RAND Corporation [Project Air Force], 2011), 89. http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG1076.pdf.

9 US Government Accountability Office, “Plan Colombia: Drug Reduction Goals Were Not Fully Met, but Security Has Improved; US Agencies Need More Detailed Plans for Reducing Assistance”, Octubre 2008, <http://www.gao.gov/new.items/d0971.pdf>, 17.

10 Dana Priest, “Covert Action in Colombia”, *The Washington Post*, Diciembre 13, 2013, <http://www.washingtonpost.com/sf/investigative/2013/12/21/covert-action-in-colombia/>.

eliminar grupos armados irregulares por medio de la fuerza y de programas de desmovilización. Sin embargo, este retrato del conflicto no incluía el papel del ejército colombiano y de las tropas y mercenarios estadounidenses como protagonistas con sus propios objetivos, que como veremos están directamente vinculados con los intereses comerciales y corporativos. De acuerdo con un estudio, la asistencia militar y antinarcóticos destinada a Colombia se desviaba frecuentemente hacia organizaciones paramilitares que resultaban fortalecidas.¹¹ Los niveles generales de violencia en Colombia se incrementaron marcadamente con el lanzamiento de Plan Colombia, y en 2002, su segundo año, hubo 673, 919 víctimas de la guerra —la mayoría perteneciente al sector más pobre de Colombia—, la cifra más alta registrada para cualquier año en las décadas pasadas (curiosamente, los homicidios en México alcanzaron cifras récord en 2010, dos años después de que comenzara la Iniciativa Mérida).¹²

Un ejemplo de la brutalidad sufrida por los pobladores rurales de Colombia es la fumigación aérea de plantaciones de coca como una forma de guerra química; los campesinos y sus cultivos —tanto ilícitos como legales— fueron envenenados con tóxicos desde el aire. Le pregunté a Sonia López, activista en la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en Saravena, Colombia, qué significó el Plan Colombia para la gente de Arauca, un estado contiguo a Venezuela. “Esa fue una jugada para fortalecer la guerra contra el pueblo; tomándose la supuesta lucha contra las drogas, se generó toda una crisis alimentaria en el país”, me dijo. “Hubo mucha gente que se tuvo que ir, porque lo único que tenían era el pedacito de tierra donde sembraban plátano y lo fumigaron y después quedó eso desolado”. Me explicó que aunque las fumigaciones provocaron la emigración de muchas personas a las ciudades, nunca fueron contadas entre los desplazados del país, ya que la fumigación de sembradíos no se consideraba una causa de desplazamiento. Pero los resultados de estos exterminios agrícolas coinciden perfectamente con los propósitos de la guerra de contrainsurgencia y el interés de despojar a los pequeños agricultores de sus tierras. “A los que no sacaron a plomo los sacaron a fumigaciones, y hoy están allá mendigando en los programas sociales, en Familias en Acción, en Familias Guardabosque, en todos esos programas que buscan adormecer a la gente y hacerle olvidar cuáles son las luchas reales que hay que dar... Aparte de las fumigaciones, pues se aprovechó

11 Oeindrilla Dube y Suresh Naidu, *Bases, Bullets and Ballots: The Effects of U.S. Military Aid on Political Conflict in Colombia*, Diciembre 2013, https://files.nyu.edu/od9/public/papers/Dube_bases_bullets.pdf, 2.

12 Álvaro Sierra, “Seis millones de víctimas y contando”, *Semana*. Febrero 6, 2014, <http://www.semana.com/nacion/multimedia/seis-millones-de-victimas-contando/376351-3>.

para fortalecer todo el aparato militar”, me contó. “Por el aire, fumigando, y por la tierra, los militares matando, violando, desplazando”. Monsanto fabrica el glifosato, el principal herbicida usado en las fumigaciones, el cual “daña el sistema digestivo humano, el sistema nervioso central, los pulmones y los glóbulos rojos de la sangre. Otra sustancia causa cáncer en animales y daño al hígado y riñones humanos”, afirma un reporte sobre la fumigación de plantaciones en Colombia que apareció en el *London Observer* en 2001.¹³

El Plan Colombia terminó oficialmente en 2006, pero ha habido una patente continuidad entre las políticas del presidente Álvaro Uribe, cuyos dos periodos coincidieron con el Plan Colombia, y las del presidente Juan Manuel Santos, que fue ministro de defensa de Uribe.¹⁴ Con el paso del tiempo y gracias a un grupo de valientes periodistas, han salido a la luz detalles de la participación del ejército en asesinatos masivos, desapariciones y otros escándalos. En 2005, cuando el Plan Colombia llevaba cinco años, había alrededor de 800 empleados del ejército de EUA y 600 contratistas militares privados en Colombia, trabajando con un ejército sumido en controversias cada vez más serias.¹⁵

Durante la presidencia de Uribe, mientras que el país recibía cantidades sin precedentes de ayuda estadounidense, se supo que el ejército hacía patrullajes en conjunto con grupos paramilitares de derecha, y que había cometido el “Escándalo de los falsos positivos”, en el que los soldados capturaron, asesinaron y disfrazaron a civiles de guerrilleros para presentar resultados en la guerra. De acuerdo con un reporte de 2009 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los soldados colombianos estaban depredando a la población civil para obtener ascensos: “Enfocados en obtener privilegios, reconocimiento o licencias especiales, los soldados detienen a personas inocentes sin ninguna razón válida y luego las ejecutan. Sus cuerpos aparecen al día siguiente a decenas de kilómetros y son identificados como miembros de grupos armados ilícitos asesinados en combate. Esto le sucede principalmente a individuos vulnerables –indigentes, jóvenes de zonas urbanas marginadas, drogadictos y mendigos– que son vestidos de uniforme y ejecutados. En algunos casos, por ejemplo en Soacha, engañan a los jóvenes con promesas de trabajo para llevarlos a lugares donde son finalmente ejecutados”.¹⁶ En Soacha, veintidós hombres jóvenes fueron

13 Hugh O’Shaunessy, “Colombia: Chemical Spraying of Coca Poisoning Villages”, *The Observer*, Junio 17, 2001, <http://www.corpwatch.org/article.php?id=11081>.

14 Santos fue elegido para un segundo mandato en junio del 2014.

15 Juan Forero, “Congress Approves Doubling U.S. Troops in Colombia to 800”, *New York Times*, Octubre 11, 2004, <http://www.nytimes.com/2004/10/11/international/americas/11colombia.html>.

16 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to

engañosos con ofertas laborales y terminaron asesinados por soldados. La misma práctica horrorosa se repitió miles de veces en otras regiones del país; algunos afirman que continúa hoy en día.

Colombia y Estados Unidos sostenían relaciones extremadamente cercanas mientras que el ejército colombiano cometía atrocidades y los grupos paramilitares sobornaban a suficientes políticos para controlar el Congreso. Los vínculos entre grupos paramilitares y miembros del Congreso de Colombia (un escándalo conocido como *parapolítica*) se volvieron tan comunes que se inició una investigación de 126 miembros del Congreso, y 41 fueron acusados formalmente.¹⁷ No obstante la represión de movimientos de oposición, la corrupción en el Congreso y otras irregularidades, Uribe era el más cercano aliado de EUA en la región, considerado un socio y verdadero demócrata. En Colombia lo llamaban presidente “Teflón”, porque todas las serias acusaciones resbalaban, sin importar las pruebas en su contra.

En los años posteriores al Plan Colombia, la inversión extranjera en las industrias de la extracción se disparó, y se firmaron nuevos acuerdos comerciales, incluidos los tratados de libre comercio EUA-Colombia y Canadá-Colombia. El éxito del Plan Colombia para lograr las metas de política exterior de EUA —aunque no logró los objetivos antinarcóticos— dejó una marca importante en la evolución de décadas de experimentos estadounidenses sobre cómo usar la política antidrogas para influir en la sociedad, la política y la economía colombianas. Es conveniente repasar los factores que condujeron a EUA y Colombia a firmar un pacto y gastar miles de millones de dólares en la supuesta lucha contra el narcotráfico.

Más de veinte años después de su asesinato, el capo de la droga Pablo Escobar sigue siendo emblemático. Líder del Cartel de Medellín, fue el monstruo narcotraficante oficial de EUA durante los ochenta y hasta su asesinato en 1993. Su historia parece una versión temprana de la del mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán: Escobar era el rey incuestionable del mundo de la droga, un criminal buscado en todo el mundo, mencionado entre los hombres más ricos por la revista *Fortune* a finales de los ochenta. Tras la eliminación de Escobar, se atribuyó al Cartel de Cali el control del negocio, hasta que fue atacado de una forma que estimuló la formación de células clandestinas más pequeñas, dedicadas a la producción y tráfico de narcóticos. El ataque contra Escobar y las operaciones contra los traficantes colombianos, apoyadas por EUA particularmente a través de la Operación

Development”, Febrero 16, 2009, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.21.Add3.pdf>, 17.

17 Verdad Abierta. “Estadísticas Parapolítica”. Febrero 2013. <http://www.verdadabierta.com/cifras/3826-estadisticas-parapolitica>.

Snowcap de la DEA en 1987, fueron las que terminaron favoreciendo a los narcotraficantes mexicanos.¹⁸ “Lo que sucedió no fue el menor de dos males: fue el mayor. Nuestro éxito con Medellín y Cali esencialmente les tendió la mesa a los mexicanos, en un momento en que ya tenían mucho efectivo gracias al mercado en ciernes de metanfetaminas en el sur de California”, afirma Tony Loya, el exagente de la DEA que dirigió la Operación Snowcap.¹⁹

La paramilitarización se dio en dos fases en Colombia; primero como grupos creados por el Estado y financiados por las élites en los sesentas y setentas, y después como grupos creados por las élites y financiados por el Estado en los ochentas y noventas.²⁰ En la década de 1960, varios grupos guerrilleros se formaron en Colombia, y se aprobaron leyes para permitir la creación de grupos de autodefensa. “En el marco de la lucha contra las guerrillas, el Estado promovió la creación de llamados ‘grupos de autodefensa’ entre la población civil, y sus objetivos principales eran apoyar a las fuerzas de seguridad en operaciones de contrainsurgencia y para defenderse de los guerrilleros. El Estado les dio permisos para portar y poseer armas, así como apoyo logístico”.²¹ Para mediados de los ochentas ya no era posible para el Estado negar que estos grupos ahora apoyaban al crimen organizado. Oficiales y legisladores prometieron que estos escuadrones de la muerte serían reprimidos por el Estado, negándose a usar el término “paramilitares”, que según ellos no era aplicable.²² Durante este periodo, grupos rurales y urbanos cada vez más organizados empezaron a reclamar la redistribución de la tierra y el derecho a vivir con dignidad, y no por coincidencia fueron fuerzas paramilitares cuyas actividades toleraba el Estado las que reprimieron a estas organizaciones. Entre 1988 y 1994 hubo más de 67,000 asesinatos políticos en Colombia –23.4 al día.²³ “En un periodo anterior, las fuerzas armadas colombianas administraban con mano firme el control social represivo, con el apoyo institucional derivado de un estado de sitio dictado por la Constitución. Ahora, grupos armados extraoficiales hacen el trabajo de los militares, aunque aparentemente no tienen nexos orgánicos con el ejército”.²⁴

18 Nick Reding, *Methland: The Death and Life of an American Small Town*, (New York: Bloomsbury, 2009), 157.

19 *Ibid.*

20 Hristov, *Blood and Capital*.

21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Case of the ‘Mapiripán Massacre’ v. Colombia: Judgment, September 15, 2005”, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_ing.pdf, 37.

22 *Ibid.*, 38.

23 Javier Giraldo, *Colombia: Genocidal Democracy* (Monroe, ME: Common Courage Press, 1996), 17.

24 G. M. Palacio Castañeda, “Institutional Crisis, Parainstitutionality, and Regime Flexibility in

La segunda ola de paramilitarización en Colombia surgió cuando la industria de la cocaína empezó a darles ganancias espectaculares a los traficantes locales, una nueva élite cuyas fuerzas irregulares estaba respaldadas por el Estado. El panorama del conflicto armado comenzó a cambiar dramáticamente para Escobar y toda Colombia en 1989. En agosto de ese año, Luis Carlos Galán, el candidato presidencial más fuerte, recibió un disparo mortal mientras subía con su equipo a una tarima para dar un discurso frente a 10,000 simpatizantes en las afueras de Bogotá. Galán, un progresista, se había manifestado a favor de un tratado de extradición con EUA, y criticaba cómo el dinero de la droga estaba corroyendo la democracia. Su asesinato marcó un momento clave en Colombia. “El asesinato en 1989 de Luis Carlos Galán, senador y principal candidato del partido liberal a la presidencia colombiana, dejó claro que la guerra colombiano-estadounidense contra el narcotráfico había transformado el negocio capitalista de la cocaína en un mecanismo de control para EUA”, escribió Palacio Castañeda en 1991.

Pocos meses después de la muerte de Galán, una bomba explotó en el vuelo 203 de Avianca, y murieron todos los 107 pasajeros a bordo. El atentado fue atribuido a Pablo Escobar, y como había ciudadanos estadounidenses en el avión, sentó las bases para que el entonces presidente George Bush promoviera que EUA tomara un papel más activo en la guerra antidrogas. De inmediato, EUA fortaleció su lucha contra las organizaciones del narcotráfico, con mayor financiamiento y personal. Ya entonces “se usaba la guerra antidrogas para controlar el desorden social en Colombia”.²⁵ A principios de los noventa, estaba claro que el narcotráfico en Colombia era “un instrumento político usado por los gobiernos, particularmente pero no sólo por EUA, para justificar operaciones disciplinarias de control social represivo”.²⁶ La creación de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (CONVIVIR), que fue promovida por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe a mediados de los noventa, preparó el terreno para el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo paramilitar más grande y articulado del país.²⁷ Por la misma época, antes de probar una fórmula después llamada Plan Colombia, Estados Unidos aplicó sanciones relacionadas con los narcóticos contra Colombia. El Consejo de Empresas Americanas –un consorcio empresarial

Colombia” en *Vigilantism and the State in Modern Latin America : essays on extralegal violence* de Martha K. Huggins (ed.), (New York: Praeger, 1991), 110.

25 *Ibid.*

26 *Ibid.*

27 Juan Diego E. Restrepo, “Álvaro Uribe, entre las ‘Convivir’ y las AUC”, *Semana*, Septiembre 19, 2013, <http://www.semana.com/opinion/articulo/alvaro-uribe-entre-convivir-las-auc-opinion-juan-diego-restrepo/358144-3>.

norteamericano en Colombia— reportó que en 1996 sus miembros perdieron 875 millones de dólares en ventas a causa de las sanciones.²⁸ Ese mismo año, el Departamento de Estado reportó que la decisión de decertificación requería que la Overseas Private Investment Corporation y el Export-Import Bank congelaran alrededor de 1.5 mil millones de dólares en créditos de inversión y préstamos. Esto incluyó una pérdida de 280 millones de dólares sólo en la industria petrolera de Colombia.²⁹

Los esfuerzos antidrogas que perjudicaron el crecimiento económico y los intereses de inversionistas estadounidenses y transnacionales estaban condenados a fracasar a largo plazo. El Plan Colombia surgió en 1999 tras el fracaso del programa de sanciones. A pesar de que el gobierno estadounidense ha gastado más de 8 mil millones de dólares en el Plan Colombia e iniciativas relacionadas, el flujo de drogas hacia EUA no se ha reducido significativamente.³⁰ Un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EUA (GAO) publicado en 2008 sobre el Plan Colombia, encontró que éste no cumplió sus objetivos de reducir la producción de drogas, y que “el flujo estimado de cocaína hacia Estados Unidos desde Sudamérica aumentó durante el periodo”, de 2000 a 2006.³¹ La GAO también encontró que en 2006 el cultivo de coca había aumentado 15 por ciento con respecto al 2000, cuando el Plan Colombia comenzó.³² Sin importar la donación de más de 70 helicópteros, entrenamiento policiaco y otros apoyos militares, “Colombia sigue siendo uno de los productores y exportadores de cocaína más grandes del mundo, así como un país de origen de heroína y mariguana”, de acuerdo con un reporte del Departamento de Estado publicado en 2012.³³ Estas cifras son las que han conducido a muchos analistas a declarar el Plan Colombia y la guerra estadounidense antidrogas como un fracaso, pero veremos que existen otras perspectivas según las cuales el apoyo antidrogas de EUA a Colombia se consideran un éxito apabullante.

28 U.S. Government Accountability Office, “Drug Control: US Counternarcotics Efforts in Colombia Face Continuing Challenges”, Febrero 1998, <http://www.gao.gov/archive/1998/ns98060.pdf>, 6.

29 *Ibid.*, 28.

30 Bureau of Western Hemisphere Affairs, “The Colombia Strategic Development Initiative (CSDI)”, Abril 12, 2012, <http://www.state.gov/p/wha/rls/fs/2012/187926.html>.

31 US Government Accountability Office, “Plan Colombia: Drug Reduction Goals Were Not Fully Met”, 17.

32 *Ibid.*, 4.

33 Just the Facts, “Grant Aid to Colombia through International Narcotics Control and Law Enforcement”, http://justf.org/Program_Detail?program=International_Narcotics_Control_and_Law_Enforcement&country=Colombia. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, “2012 INCSR: Country Reports—Colombia”, Marzo 7, 2012, <http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol1/184098.htm#Colombia>.

El conflicto paramilitar de Colombia

Aunque el componente antidrogas del Plan Colombia fue un fracaso indiscutible, el esfuerzo contrainsurgente, que según ciertos cálculos costó más de 500 millones de dólares, redujo los números de las FARC a la mitad. Entonces había un proceso de paramilitarización en marcha, básicamente financiado por la guerra antidrogas, que forzó a comunidades indígenas y afro-colombianas, así como de campesinos que por generaciones habían defendido sus derechos o títulos colectivos de posesión de la tierra, a abandonar sus territorios, dejándolos disponibles para el saqueo corporativo.³⁴ En su excelente libro *Colombia: A Brutal History*, el periodista inglés Geoffrey Leslie Simons da un ejemplo de cómo, a principios de los años 2000, la actividad paramilitar protegió a la enorme petrolera BP tras adquirir una participación del 15 por ciento en Ocesa, una compañía que construyó un oleoducto de 800 km desde los campos petroleros de Cusiana-Cupiagua al puerto de Coveñas. “La construcción del nuevo oleoducto destruyó cientos de fuentes de agua y causó deslaves que arruinaron a los agricultores locales. Para proteger el ducto se creó una zona de exclusión alrededor de él –privando a los campesinos de su tierra. [La abogada Marta Hinestroza] empezó a escuchar las quejas de muchos agricultores, pero resultó imposible defenderlos efectivamente en la corte. Cuatro de sus colegas –defensores en municipios aledaños– habían sido asesinados por los paramilitares. Hinestroza comenzó a recibir amenazas de muerte. Poco tiempo después, los paramilitares llegaron a casa de su tía, la sacaron a rastras, le amarraron las manos a la espalda, la hicieron arrodillarse y le dispararon en la nuca frente al resto de los vecinos. Aunque Hinestroza renunció, continuó representando a sus clientes. BP ha ofrecido £180,000 a 17 familias afectadas por el oleoducto ODC, pero ofrece menos de £100 por persona a otros demandantes que han sido rechazados: unas 1,600 personas esperan la resolución de reclamos que ascienden en total a cerca de £20 millones de libras”.³⁵

En áreas rurales, la presencia de grupos armados que representan al Estado, la guerrilla, el narco u otros intereses, impactó profundamente la vida cotidiana de las personas. “Campesinos y habitantes del campo han sido deliberadamente aterrorizados por estos grupos de hombres armados

34 David Maher y Andrew Thomson, “The Terror That Underpins the ‘Peace’: The Political Economy of Colombia’s Paramilitary Demobilisation Process”, *Critical Studies on Terrorism* 4, no. 1 (2011): 96.

35 Geoff Simons, *Colombia: A Brutal History* (London: Saqi Books, 2004), 322.

y uniformados”, escribió María Victoria Uribe refiriéndose al ejército, los paramilitares y las guerrillas.³⁶ La violencia en Colombia, como se manifestó durante *La Violencia* de los años 50 y la guerra entre facciones armadas hoy en día, ha tomado la forma de actos de terrorismo contra la población, incluyendo asesinatos masivos y la exposición pública de cuerpos mutilados y torturados. “En estas masacres, los perpetradores llevan a cabo una serie de operaciones semánticas, dotadas de enorme fuerza metafórica, que deshumanizan a las víctimas y sus cuerpos. Estas tecnologías del terror buscan expulsar a la población rural de sus hogares para consolidar el control sobre el territorio”.³⁷ De todos los grupos armados, los paramilitares, que operan con el apoyo y complicidad del ejército, son los más efectivos en desalojar personas, y ellos son los responsables de la mayor parte de los ataques.³⁸ En 2014, se calculó que el número total de personas desplazadas en Colombia era 5,368,138, y el número total de víctimas del conflicto durante los últimos cincuenta años alcanzó 6,073,437.³⁹ En un texto de 2014 sobre la memoria, en donde critica al Instituto Nacional de Cine de Colombia por no distribuir el tráiler de un filme sobre la guerra en ese país, el escritor colombiano-mexicano Camilo Olarte escribe: “La sangre de ficción está bien. Es aceptable. La real, no. Y esto no es ficción: 220,000 asesinados, 81,5% eran civiles, casi todos campesinos; 25,007 desaparecidos, más del doble que los de las dictaduras del cono sur; 1,754 víctimas de violencia sexual; 6,421 niños reclutados por grupos armados; 27,023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010; 10,189 mutilados por minas antipersonales, casi los mismos que en Afganistán; 8,3 millones de hectáreas despojadas o abandonadas”.⁴⁰

En Colombia, además de fortalecer el ejército nacional, la paramilitarización ha sido benéfica para las corporaciones transnacionales que quieren evitar la sindicalización de los obreros. “Como parte de la prolongada campaña de contrainsurgencia respaldada por EUA, la violencia paramilitar-estatal continúa atacando sistemáticamente a grupos civiles como los sindicatos laborales, considerados una amenaza a la ‘estabilidad’ política

36 María Victoria Uribe, “Dismembering and Expelling: Semantics of Political Terror in Colombia”, *Public Culture* 16, no. 1 (2004), 91.

37 *Ibid.*, 80.

38 Ana María Ibáñez y Carlos Eduardo Vélez, “Civil Conflict and Forced Migration: The Micro Determinants and Welfare Losses of Displacement in Colombia”, *World Development* 36, no. 4 (2008): 661.

39 Álvaro Sierra, “Seis millones de víctimas y contando”, *Semana*, Febrero 6, 2014, <http://www.semana.com/nacion/multimedia/seis-millones-de-victimas-contando/376351-3>.

40 Camilo Olarte, “La Guerra y la desmemoria en Colombia”, *América Economía*, Enero 21, 2014, <http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/la-guerra-y-la-desmemoria-en-colombia>.

y económica conducente al desarrollo neoliberal de Colombia. Esto ha hecho a Colombia muy atractiva para la inversión extranjera, pues las malas condiciones de trabajo y sueldos bajos mantienen márgenes de ganancia elevados”.⁴¹ De acuerdo con un informe de 2010 del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Sucesos recientes en Colombia [confirman] la situación en deterioro de los defensores de los derechos humanos en los últimos meses, en particular los asesinatos, acoso e intimidación de los activistas de la sociedad civil, líderes sindicales y abogados representantes de las víctimas”.⁴² Los bien documentados casos de Chiquita Brands, la minera Drummond y BP han mostrado los nexos entre grupos paramilitares y corporaciones transnacionales, estadounidenses en particular.⁴³

Hacer el vínculo directo entre los pagos de las multinacionales a los paramilitares y la violencia y masacres que desplazaron a miles de personas es peligroso y complicado. Para aprender más sobre la relación entre, por un lado, el desplazamiento causado por el Estado y la violencia paramilitar, y las operaciones de compañías transnacionales, por el otro, me reuní con Francisco Ramírez Cuellar, un enérgico abogado colombiano y expresidente del Sindicato de Trabajadores de la Minería de Colombia (Sintraminercol). Actualmente, Ramírez dirige Funtraenergética (Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares), y tiene un despacho jurídico en Bogotá. Hace diez años, colaboró en un libro sobre la actividad paramilitar y los beneficios corporativos: *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*.

Tras una cena típica de sancocho y pescado, en la que un astuto ladrón que fingía vender artículos coleccionables de futbol le robó el celular, Ramírez y yo nos sentamos en un café de Bogotá, donde su voz resonaba sobre el bullicio de la concurrida cafetería. Le pregunté qué ha cambiado desde que escribió el libro. “Eso que nosotros intuíamos de la utilización de grupos paramilitares por parte de las compañías que no podíamos decir abiertamente porque no teníamos una prueba contundente, resultó que era no solamente cierto, sino que era una práctica permanente de, yo calculo, el 96 o 98 por ciento de las compañías que operan en este país... De hecho, después de investigar en detalle, averiguamos que aquí los paramilitares crearon una cosa que se llamó el Bloque Norte, y nosotros calculamos que

41 Maher y Thomson, “The Terror that Underpins the ‘Peace,’” 96.

42 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Promotion and Protection of All Human Rights, 12.

43 National Security Archive, “The Chiquita Papers”, Abril 7, 2011, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB340/index.html>.

el 80% del dinero para crear el Bloque Norte de los paramilitares lo pusieron las compañías mineras y petroleras que producen carbón y explotan el gas y el petróleo en toda la zona norte de Colombia y el Caribe”.

Desde entonces, las investigaciones de Ramírez han descubierto evidencia de casos individuales de colaboración entre paramilitares y corporaciones del sector energético, incluyendo Drummond, Glencore, BHP Billiton, Xstrata, Anglo American, Perenco, British Petroleum y Pacific Rubiales, así como Chiquita, Dole, y Del Monte, que tienen grandes operaciones de agricultura intensiva para la producción de palma africana para biocombustibles. “Eso en nuestros cálculos, las operaciones de estas compañías en los últimos 25 años han producido los 2.5 millones de desplazados forzados en las zonas donde ellos operan. Según los cálculos iniciales han asesinado a más de 60,000 personas, y el diez u once por ciento de ellas eran trabajadores afiliados a los sindicatos” dijo Ramírez, que sobrevivió ocho atentados contra su vida y dos estallidos de bomba entre 1993 y 2007. Me habló de un puñado de casos en los que las compañías petroleras colaboraron en la formación de grupos paramilitares, los cuales me dijo que eran financiados muy seguido con dinero del narcotráfico.

Un caso de la industria bananera es particularmente contundente: “Te pongo un ejemplo de los llanos orientales de este país, de Guaviare, Guainía. Toda esa zona hoy está cultivada con palma africana, a través de compañías de fachada, de Chiquita fundamentalmente, de Dole y Del Monte también, pero fundamentalmente Chiquita. ¿Qué hizo Chiquita? Con sus paramilitares, que los creó, que los financió con el narcotráfico, que hizo y deshizo en esta zona de Urabá, los traslada para allá, y por eso la famosa masacre de Mapiripán”.

Aunque algunos detalles de lo que pasó en Mapiripán siguen sin conocerse, mucho ha salido a la luz sobre lo que se ha convertido en una de las masacres paramilitares más emblemáticas del país. Entre el 15 y el 22 de julio de 1997, más de cien miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tomaron control de la pequeña población en el departamento de Guaviare. Los paramilitares llegaron a un aeropuerto controlado por los militares y fueron llevados a Mapiripán en vehículos del ejército. A partir del 15 de julio, los paramilitares mataron al menos 49 personas, los torturaron y desmembraron antes de lanzar sus cuerpos al río Guaviare. Según la declaración del juez municipal de Mapiripán, “Todos los días, alrededor de las 7:30 p.m., estos sujetos, por órdenes superiores apagaban el generador eléctrico, y cada noche yo veía a través de las fisuras en la pared el paso de gente secuestrada, amordazados y con las manos

amarradas detrás de la espalda, que iban a ser cruelmente asesinados en el matadero de Mapiripán. Todas las noches oíamos los gritos de los que estaban siendo torturados y asesinados, pidiendo auxilio”.⁴⁴ El ejército no respondió a las llamadas de ayuda de los pobladores hasta el 22 de julio. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “La incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto planeado meticulosamente meses antes de junio de 1997, y llevado a cabo con trabajo de preparación logística y con la colaboración, aquiescencia y omisiones de miembros del Ejército. La participación de agentes del Estado en la masacre no se limitó a facilitar la entrada de las AUC a la región, ya que las autoridades sabían del ataque contra la población civil en Mapiripán y no tomaron las medidas necesarias para proteger a los miembros de la comunidad”.⁴⁵ Una segunda masacre ocurrió en la aldea La Cooperativa, mientras los paramilitares evacuaban Mapiripán. En esa época, Carlos Castaño, el líder de las AUC, declaró que sus hombres realizaron la masacre para destruir un baluarte insurgente de las FARC que controlaba el ciclo entero de producción de droga y narcotráfico.⁴⁶ Sin embargo, lo que pasó después parece confirmar la versión de Ramírez, ya que las compañías productoras de aceite de palma han sido las más beneficiadas de la masacre.

Cerca de cinco años después de esas tragedias, según Ramírez, “entran las compañías a comprar y los campesinos se ven obligados a vender. Los que quedaron vivos, tuvieron que salir corriendo, de manera que no indemnizan, simplemente a través de testafierros terminan vendiendo, toda una región puede ser, y comienza la siembra de la palma africana”. En Guaviare, como en muchas otras partes de Colombia, la palma africana fue sembrada en tierras pertenecientes a pueblos desplazados cuyas propiedades quedaron abandonadas. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia preparó un reporte sobre las apropiaciones terrenales en la región de Chocó: “Paramilitares, con la complicidad por acción y omisión de la Brigada 17 y de la policía de Urabá, argumentando el combatir a la guerrilla, asesinan, desaparecen, torturan y desplazan; empresarios vinculados con esas estructuras criminales se apropian de los territorios que legalmente y tradicionalmente son de las comunidades; autoridades al servicio de empresarios pretenden la legalización fraudulenta de estos territorios, el gobierno nacional respalda más del 95% del total de la inversión ilegal; se

44 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Case of the ‘Mapiripán Massacre’ v. Colombia”, 45.

45 *Ibid.*, 47.

46 *Ibid.*, 44.

implementa el agronegocio de palma aceitera sobre las ruinas de viviendas, cementerios y locaciones comunitarias”.⁴⁷

El hecho de que Chiquita pagó mucho tiempo a grupos armados ilegales es bien conocido. En marzo de 2007, representantes de Chiquita Brands International se declararon culpables en una corte de Washington, D.C., de hacer pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).⁴⁸ Chiquita fue defendida por alguien muy influyente: Eric Holder, que después se convertiría en fiscal general de Estados Unidos, condujo las negociaciones entre la empresa y el Departamento de Justicia de EUA.⁴⁹ Según Associated Press, “En 2001, Chiquita fue identificada en facturas y otros documentos como la destinataria de un cargamento de Nicaragua de 3,000 rifles de asalto AK-47 y 5 millones de rondas de munición. El cargamento en realidad iba dirigido a las AUC”.⁵⁰ En la sentencia de 2007 puede leerse: “Desde o alrededor de 1997 hasta o alrededor del 4 de febrero de 2004, la acusada Chiquita hizo más de 100 pagos a las AUC por un total de más de 1.7 millones de dólares”.⁵¹ Más de la mitad de esos pagos fueron hechos después de que las AUC fueran designadas una organización terrorista por Estados Unidos en 2001. Fueron los pobres y la clase trabajadora de Colombia los que pagaron el precio más alto por los pagos de la compañía a grupos paramilitares y guerrilleros: Chiquita financió las AUC durante un periodo de siete años en el que más de 4,000 personas, la mayoría civiles en Urabá, fueron asesinadas por los paramilitares, y otras 60,000 fueron desplazadas.⁵²

En 2004, Chiquita vendió sus bienes colombianos a Invesmar, una corporación británica con sede en las Islas Vírgenes, dueña de Banacol, una empresa colombiana que todavía le suministra plátanos a Chiquita.⁵³ Los

47 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “Colombia: Banacol, empresa implicada en paramilitarismo y acaparamiento de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó”, Mayo 2012, http://www.askonline.ch/fileadmin/user_upload/documents/Thema_Wirtschaft_und_Menschenrechte/Lebensmittel_Landwirtschaft/Chiquita/Banacol-Estudio-de-Caso-ES-final.pdf, 4.

48 US Department of Justice, “Chiquita Brands International Pleads Guilty to Making Payments to a Designated Terrorist Organization and Agrees to Pay \$25 Million Fine”, Marzo 19, 2007, http://www.justice.gov/opa/pr/2007/March/07_nsd_161.html.

49 Mario A. Murillo, “Fronting for Paramilitaries: Holder, Chiquita and Colombia”, *CounterPunch*, Noviembre 19, 2008, <http://www.counterpunch.org/2008/11/19/holder-chiquita-and-colombia/>.

50 Curt Anderson, “Chiquita Accused of Funding Colombia Terrorists”, *Associated Press*, Mayo 31, 2011, <http://www.cbsnews.com/news/chiquita-accused-of-funding-colombia-terrorists/>.

51 “United States of America v. Chiquita Brands International Inc.”, <http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB217/indictment.pdf>, 4.

52 William Moore, “Para-Business Gone Bananas: Chiquita Brands in Colombia”, *Council on Hemispheric Affairs*, Agosto 18, 2011, <http://www.coha.org/para-business-gone-bananas-chiquita-brands-in-colombia/>.

53 James Bargent, “Chiquita Republic”, *In These Times* (Enero 7, 2013), http://inthesetimes.com/article/14294/chiquita_republic.

desplazados que regresan a Curvaradó, al norte de Colombia, otra vez están siendo amenazados, y temen ser expulsados de nuevo por paramilitares al servicio de Banacol.⁵⁴ Además de los pagos recibidos de Chiquita, hay documentación de que las operaciones de las AUC han sido financiadas en parte por medio de sacar cocaína del puerto de Turbo en botes de Chiquita. “Éver Veloza García, excomandante del grupo paramilitar Frente Turbo en el norte de Urabá, explicó cómo los paramilitares evadían los puestos de control de las agencias de seguridad amarrando cargamentos de narcóticos a los cascos de embarcaciones bananeras en altamar. En efecto, las autoridades han incautado en barcos de Chiquita más de una tonelada y media de cocaína, valuada en 33 millones de dólares”.⁵⁵

Las compañías mineras trasnacionales se benefician una y otra vez del régimen de terror impuesto por la guerra antidrogas y la paramilitarización en Colombia. En el estado de Guajira se descubrió carbón a principios de la década de 1980, y Carbocol, la compañía minera del Estado, fue vendida a Exxon, que posteriormente volvió a vender a algunas de las mineras más grandes del mundo: la australiana BHP Billiton, la sudafricana Anglo American, y la suiza Glencore (hoy Glencore-Xstrata). “Estas corporaciones mineras entonces aceleraron la explotación de los recursos naturales colombianos. Asentamientos del pueblo Wayuu y de grupos afro-colombianos fueron retirados para facilitar el acceso de las mineras al territorio. Entre el 9 y 10 de agosto de 2001 la localidad de Tabaco fue destruida, expulsando a 350 familias de sus hogares. Doscientos policías y soldados sometieron a los pobladores indefensos mientras los bulldozers de Intercor demolían sus casas, y el desalojo forzado estaba respaldado por la usual panoplia de terror. La mina de níquel de Cerro Matoso, otra operación de Billiton, estaba en un área donde los paramilitares mantenían a la población en estado de terror constante”.⁵⁶ Actualmente, la mina de Cerrejón, que se expandió a tierras despejadas por la actividad paramilitar, produce 32 millones de toneladas de carbón al año, y es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.⁵⁷

El control social en la región carbonífera aún se ejerce por medio de operaciones militares y paramilitares. “La atmósfera de tensión regional, en especial la que rodea los proyectos mineros en César y en Guajira, es

54 *Ibid.*

55 William Moore, “Para-Business Gone Bananas”.

56 Geoff Simons, *Colombia: A Brutal History*, 324.

57 Phillip MacLean, “Colombia” en *Energy Cooperation in the Western Hemisphere*, ed. Sidney Weintraub (Washington, DC: CSIS Press, 2007), 196–197. Cerrejón, “Nuestra Empresa”, <http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa.aspx>.

sofocante, ya que hay un control armado constante que pretende disciplinar a la población, restringiendo, por ejemplo, el uso de caminos adyacentes a los depósitos de carbón”, declara un informe de 2011 del Observatorio Social de Megaproyectos Transnacionales y Derechos Humanos.⁵⁸ Históricamente, Guajira ha sido una región productora de coca donde ha habido esfuerzos antinarcóticos y de contrainsurgencia; más recientemente, el Cesar también ha entrado a la lista de estados productores de coca.⁵⁹

El desplazamiento causado por la paramilitarización y cimentado por la presencia militar del Estado también ha ocurrido debido a la minería de metales preciosos. A mediados de los noventa, fuerzas estatales llegaron al sur del estado de Bolívar, que ha albergado desde hace mucho proyectos mineros a pequeña escala, rodeando comunidades e impidiendo el libre movimiento de los residentes. “Simultáneamente, hubo un fuerte avance de las fuerzas paramilitares en el periodo 1996–2001, que al inicio provocó dos éxodos masivos de la población del campo a los centros municipales. Luego, en 2006, varias áreas explotadas por pequeños mineros fueron militarizadas, y se empezaron a construir varias bases militares”.⁶⁰ La compañía sudafricana Anglo Gold Ashanti tiene operaciones activas en el área, donde pequeños mineros han sido asesinados en lo que la población entiende como intentos de desplazarlos de sus tierras. Según un comunicado de prensa de 2010 de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL), “Estos asesinatos son parte de una larga cadena de hechos de agresión contra los pobladores del sur de Bolívar como lo fue el asesinato de Alejandro Uribe Chacón el 19 de septiembre del 2006 y otros tantos que se vienen presentando en el marco de lo que consideramos una estrategia integral para el despojo del territorio por parte de una alianza macabra entre el gobierno nacional y las multinacionales del oro como la Anglo Gold Ashanti y palmicultoras como el Grupo Dabon que pretenden apoderarse de los recursos naturales del sur de Bolívar”.⁶¹ Anglo Gold, que tiene cerca de 800,000 hectáreas

58 Observatorio Social de Empresas Transnacionales Megaproyectos y Derechos Humanos, *Pica y Pala: Conflictos del modelo extractivista en los sectores de la minería y los agrocombustibles* (Bogotá, Ediciones Desde Abajo, 2011), 143.

59 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2012”, Junio 2013, http://www.unodc.org/documents/colombia/2013/Agosto/censo_de_cultivos_de_coca_2012_BR.pdf, 11.

60 Observatorio Social de Empresas Transnacionales Megaproyectos, *Pica y Pala*, 143.

61 Colombia Solidarity Campaign, “La Colosa: A Death Foretold Alternative Report about the AngloGold Ashanti Gold Mining Project in Cajamarca, Tolima, Colombia”, Diciembre, 2013, recuperado en Febrero 16, 2014, https://www.colombiasolidarity.org.uk/attachments/article/612/LA%20COLOSA_A%20Death%20Foretold.pdf. Fedegromisbol, “Communiqué to National and International Public Opinion: Continued Extermination of Members of Fedegromisbol”, Febrero 18, 2010, <http://londonminingnetwork.org/2010/02/killings-of-small-s>

en concesiones mineras en Colombia, “suele hacer que sus técnicos sean acompañados por personal militar en áreas con potencial minero, incluso durante la fase de exploración.⁶² O, como Ramírez abiertamente lo dice, “parte de la exploración es el montaje del grupo paramilitar”.

Aunque ya no llegan a los encabezados de los periódicos internacionales, la violencia y el desplazamiento siguen siendo comunes en la sociedad colombiana. De acuerdo con las Naciones Unidas, “Mientras que ha habido una caída en la tasa de nuevos desplazamientos, un estimado de 100,000 personas fueron desplazadas internamente en 2010, lo que representa un aumento neto del 35 por ciento comparado con 2009, de acuerdo con el Gobierno”.⁶³ El número de desplazados calculado por la ONG colombiana CODHES al año siguiente representa más del doble que el de 2010, 259,146 personas.⁶⁴

En 2010 y 2011, al menos 271 personas *queer* fueron asesinadas, lo que ilustra un patrón de violencia contra los grupos LGBTI que también se observa en México y Centroamérica.⁶⁵ Entre 2005 y 2010, 265 sindicalistas fueron asesinados, muchos por los mismos grupos paramilitares desplegados para luchar contra las guerrillas y proteger a los narcotraficantes.⁶⁶ Entre 2008 y 2012, 142 activistas de derechos humanos fueron asesinados, y seis desaparecidos.⁶⁷ Curiosamente, al tiempo que disminuían los homicidios paramilitares, aumentaron los perpetrados por policías: “Entre la primera y la segunda mitad de 2010, los homicidios extrajudiciales atribuidos a las fuerzas del orden aumentaron en un 68.18%. Eso equivale a una tasa diaria de más del doble que la que el gobierno previó. UNHCHR confirmó que esta práctica continuaba en 2011”.⁶⁸

En términos de flujo de mercancías hacia dentro y fuera de Colombia, Buenaventura es el puerto más importante del país. También es un lugar donde el desplazamiento forzado todavía es la regla, y un trágico ejemplo

cale-miners-in-colombia/

62 Observatorio Social de Empresas Transnacionales Megaproyectos, *Pica y Pala*, 143.

63 UNHCR, “2012 UNHCR Country Operations Profile – Colombia”, <http://www.unhcr.org/pages/49e492ad6.html>.

64 CODHES, “Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisibilizada”, CODHES Boletín 79. Marzo 2012, <http://nasaacin.org/informativo-nasaacin/contexto-colombiano/4038-desplazamiento-creciente-y-crisis-humanitaria-invisibilizada>, 2.

65 International Platforms and Organizations, “Report for the Universal Periodic Review: The Situation of Human Rights and Humanitarian Law in Colombia 2008–2013”, Mayo 2013, http://www.forum-menschenrechte.de/cms/upload/PDF/ab_02_2012/120920_UPR_English_final_con_firmas.pdf, 6.

66 US Leap, “Background: Violence Against Trade Unionists in Colombia”, <http://www.usleap.org/usleap-campaigns/colombia-murder-and-impunity/more-information-colombia/background-violence-against->

67 International Platforms and Organizations, “Report for the Universal Periodic Review”, 11.

68 *Ibid.*, 6–7.

de cómo el fenómeno del desplazamiento causado por paramilitares no está confinado a zonas rurales. Entre 1999 y 2013, más de 6,000 personas fueron asesinadas en una municipalidad de 359,753. Durante ese periodo, decenas de miles de personas fueron desplazadas. Como ejemplo impresionante de lo que está pasando ahí, durante sólo catorce días a finales de 2012, más de 4,000 personas fueron expulsadas por la fuerza.

Según el censo de 2005, 88.5 por ciento de los habitantes de Buenaventura se identificaban como afro-colombianos o de herencia africana mestiza. Sus ancestros fueron obligados a salir de África entre 1536 y 1540 para explotar los recursos de la costa del Pacífico. Además, más de 40,000 personas se mudaron a la ciudad tras ser expulsados de sus hogares en el campo colombiano.

La violencia estalló en Buenaventura en 1999, cuando dos comandos de las AUC llegaron a la ciudad supuestamente para librarla de las guerrillas; mientras se cometían masacres, la población era acusada de colaborar con los guerrilleros. Después de la desmovilización oficial de los elementos de las AUC en 2004 y 2005, las FARC volvieron a la municipalidad, y una nueva ola de paramilitares no tardó en llegar. La violencia regresó acrecentada. Mientras las fuerzas del gobierno debilitaban las filas de las FARC, otros grupos paramilitares entraron a la ciudad, y actualmente el gobierno atribuye la violencia incesante a luchas entre bandas criminales que se disputan el control sobre los barrios de la ciudad. Los nombres de estos grupos cambian con frecuencia: en tan sólo dos años, por ejemplo, los Verdaderos Urabeños se convirtieron en los Campesinos del Pacífico, que se volvieron Los Gaitanistas, luego Los Chocoanos, y luego La Empresa, lo cual agrega mucha confusión al ya establecido terror. Según reportes, los grupos paramilitares suelen estar encabezados por *paisas* (colombianos de tez clara provenientes de otras regiones, sobre todo Antioquia), y los soldados rasos son jóvenes locales de origen afro-colombiano. Estos grupos tienen acceso al dinero del narco, pues el puerto facilita una considerable exportación de cocaína (aproximadamente 250 toneladas al año).⁶⁹

Las fumigaciones y otras estrategias del Plan Colombia sacaron la producción de cocaína de Caquetá y Putumayo a partir de 2002, y convirtieron Buenaventura y la región del Pacífico en productoras de cocaína e importantes puntos de transbordo.⁷⁰ La ciudad está fuertemente militarizada, pero los

69 James Bargent, “Toxic Mix of Drug Lords, Corruption and Trade Fuels Disorder In Colombian Port City”, *Alternet*, Marzo 5, 2014, <http://www.alternet.org/world/toxic-mix-drug-lords-corruption-and-trade-fuels-disorder-colombian-port-city>.

70 Jesús González Bolaños y Nelson Franco Díaz, “Compilación y análisis sobre crisis humanitaria en el municipio de Buenaventura”, *Arquidiócesis de Cali*, Abril 3, 2013.

soldados y la policía colaboran con los grupos criminales y generalmente agravan la violencia. “Es como tener una pequeña Haití dentro de Colombia. Se siente como otro país”, le dijo el teniente de policía Nikolai Viviescas al *New York Times* en 2007.⁷¹ La movilidad entre barrios controlados por distintos grupos paramilitares está muy restringida, y un civil arriesga la vida si se atreve a pisar territorio enemigo. Las noticias de gente asesinada en pleno día, con motosierras, apuñalados con desarmadores, cortados a pedazos y echados al mar, así como con otras técnicas aterradoras, acechan bajo la superficie, en conversaciones íntimas y reportes inéditos, mientras que las personas temen levantar la voz sobre lo que está sucediendo. Circula una lista de fosas comunes clandestinas, pero las autoridades no han hecho ningún esfuerzo por desenterrarlas. La extorsión es la norma, y los niveles de violencia son tan altos que algunos residentes ni siquiera pueden ir por alimentos al mercado. En algunas partes de Buenaventura parece ser que marcharse es la única oportunidad de sobrevivir.

Los intereses económicos del puerto, de acuerdo con la Arquidiócesis de Cali, se sobreponen a los derechos de la población. “Los intereses de la dinámica portuaria y de los capitales transnacionales se engullen la Buenaventura negra e indígena, la mayoría de sus habitantes están excluidos, son marginales en la vida social, económica y política del puerto”.⁷²

En junio de 2013, Buenaventura fue declarada la capital de la Alianza del Pacífico, un bloque comercial auspiciado por EUA y Canadá que incluye a Colombia, México, Perú y Chile. El nexos entre el terror desplegado contra los afro-colombianos y el perfilamiento de Buenaventura como un puerto neoliberal en crecimiento es irrefutable. Observadores locales afirman que en las áreas donde se están construyendo el nuevo puerto de altura y el aeropuerto, donde se están haciendo autopistas, donde se está levantando el nuevo centro de convenciones y donde se planean otros megaproyectos, han aumentado el desplazamiento forzado, las amenazas, expropiaciones, torturas y homicidios.

En todo el país, los desplazamientos afectan de manera desproporcionada a los indígenas y afro-colombianos: casi una cuarta parte de la población desplazada es afro-colombiana, y alrededor del 7 por ciento es indígena.⁷³ La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) calcula que 64 de los 102 pueblos indígenas de Colombia están en peligro de extinción,

71 Simón Romero, “Cocaine Wars Make Port Colombia’s Deadliest City”, *New York Times*, Mayo 22, 2007, <http://www.nytimes.com/2007/05/22/world/americas/22colombia.html>.

72 Bolaños y Díaz, “Compilación y análisis sobre crisis humanitaria”, 25.

73 International Platforms and Organizations, “Report for the Universal Periodic Review”, 117.

y los pueblos nativos han sido perjudicados de manera muy intensa por el conflicto armado en Colombia.⁷⁴ La violencia en contra de los indígenas es tan desoladora que las organizaciones de derechos humanos la ven como un genocidio en potencia.

Las medidas de éxito del Plan Colombia

A cambio de todos los daños cometidos y el dinero gastado en el país, Plan Colombia no logró reducir significativamente la cantidad de cocaína exportada de Sudamérica a Estados Unidos, y las tasas de homicidio en la nación andina siguen entre las más altas del continente.⁷⁵ Las autoridades de Colombia y EUA siguen alabando el Plan Colombia como una iniciativa exitosa, a pesar de que los objetivos del programa no se han alcanzado. En lugar de conducir a un cambio de estrategia, el fracaso del Plan Colombia se ha minimizado a través de una serie de criterios emergentes de éxito asociado a la seguridad y al mejoramiento del ambiente para los negocios. En respuesta a un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EUA sobre el desastre del Plan Colombia con respecto a la reducción del narcotráfico, el Departamento de Estado argumentó que otros impactos del Plan deberían resaltarse, incluyendo la transición de Colombia a un sistema jurídico semejante al de EUA y al despliegue de las fuerzas policíacas colombianas por todo el territorio nacional. “De muchas maneras, los programas colombianos y el apoyo estadounidense han evolucionado a partir de nuestros objetivos originales más estrechos hacia una estrategia comprehensiva que ahora puede servir como modelo para enriquecer los esfuerzos en otros Estados amenazados o fallidos”, escribió Bradford Higgins, el Subsecretario General de Gestión de Recursos Humanos y director de finanzas del Departamento de Estado de EUA.⁷⁶ La evaluación de Higgins fue reproducida por otra reseña oficial del programa.

“El apoyo estadounidense al Plan Colombia ha fortalecido significativamente el ambiente de seguridad de Colombia, lo que eventualmente podría hacer más efectivos los programas antidrogas como el desarrollo agrícola alternativo”, dijo Jess T. Ford, directora de asuntos internacionales

74 ONIC, “Palabra Dulce, Aire de Vida”, 2010, http://www.abcolombia.org.uk/downloads/C6D_Final_ONIC_report_-_Palabra_Dulce.pdf, 8, 11.

75 Venezuela tiene la tasa de homicidios más alta en América del Sur. “Global Study on Homicide, 2011”, 2011, http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf, 23.

76 US Government Accountability Office, “PLAN COLOMBIA”, 90.

y comercio, como parte de su testimonio ante el Subcomité para la Política Doméstica, Comité para la Supervisión y Reforma Gubernamental.⁷⁷ “El apoyo dirigido a instituciones legales, como cortes, fiscales generales y organizaciones para la aplicación de la ley, en países de producción y de tránsito de droga no es sólo una parte importante de la estrategia antinarcóticos de EUA sino también para avanzar los objetivos estratégicos del Estado en cuanto democracia y gobernabilidad”, agregó ella.⁷⁸

Los cambios al sistema legal implementados entre 2005 y 2007 privaron a los abogados defensores del derecho a la asistencia estatal para investigaciones, y a utilizar la información obtenida por los fiscales antes de comparecer ante los juzgados. “El sistema de acusación criminal fue una copia barata del sistema gringo”, dijo Gloria Silva, abogada del Comité en Solidaridad con los Prisioneros Políticos, una ONG fundada en 1973. Mientras su guardaespaldas vigilaba, Silva me dijo que las reformas dieron como resultado una regresión en términos de acceso a la justicia, resultando en una privatización: ahora la defensa tiene que pagar sus propias investigaciones y asistencia legal, cuando antes no era así. Al igual que con las reformas aplicadas en México, no hay jurados en el nuevo sistema legal colombiano, lo que significa que el poder está concentrado en los jueces. “Las víctimas de crímenes de Estado en este país son gente pobre que no tiene la oportunidad de contratar expertos independientes que los representen, quienes les permitirían demostrar una situación diferente a la presentada por los fiscales del Estado”, me dijo. Junto con las reformas legales apoyadas por EUA, las sentencias a prisión se han vuelto cada vez más duras en Colombia.

Aparte de las reformas al sistema jurídico, la aprobación de las leyes 962 y 963 en 2005 fue crucial para fortalecer la seguridad de los inversionistas en Colombia. La Ley 962 simplificó el proceso de inversión en el país, y la Ley 963 permite a los inversionistas firmar “contratos de estabilidad legal” con el gobierno colombiano, que aseguran que “las leyes aplicables a la inversión en el momento en que se realiza, permanecerán vigentes por un periodo de entre tres y veinte años, dependiendo del tipo y tamaño de la inversión”.⁷⁹

La Inversión Extranjera Directa (IED), el indicador con que se mide el gasto de las corporaciones transnacionales en cada país, se ha incrementado de manera sostenida desde los primeros años del Plan Colombia. “El despegue

77 Jess Ford, “International Programs Face Significant Challenges Reducing the Supply of Illegal Drugs but Support Broad U.S. Foreign Policy Objectives”, US Government Accountability Office, julio 21, 2012, <http://www.gao.gov/products/GAO-10-921T>.

78 *Ibid.*

79 Embassy Bogota, “Revision: Colombia–2009 Investment Climate Statement”, Febrero 11, 2009, https://search.wikileaks.org/plusd/cables/09BOGOTA437_a.html

económico de Colombia después de 2003 no ocurrió por accidente”, alardeó USAID en 2008. Durante el Plan Colombia, 52 áreas del sistema económico colombiano se abocaron a reformas, y “USAID proveyó asistencia técnica [al gobierno de Colombia] para ayudarlo a diseñar e implementar diversas políticas, desde la reforma fiscal hasta el fortalecimiento del sector financiero para mejorar la situación de los pequeños negocios, entre muchos otros”.⁸⁰ Al comienzo del Plan, la IED total se calculó en 2.4 mil millones de dólares.⁸¹ En 2011, la IED de Colombia alcanzó los 14.4 mil millones, el mayor crecimiento del indicador en América Latina.⁸² Este no sólo ha sido un auge para las compañías estadounidenses y transnacionales, también hay una nueva élite colombiana cuyas fortunas se deben al nuevo régimen legal y financiero. “Se pronostica que el número total de millonarios colombianos crecerá 36%, para alcanzar más de 48,600 en 2017... WealthInsight prevé que habrá un fuerte crecimiento de la riqueza de los multimillonarios colombianos; se proyecta que su fortuna crecerá un 28% para alcanzar 89 mil millones de dólares en 2017... El número de multimillonarios, por otro lado, crecerá más rápido”.⁸³

En 2002, más del 40 por ciento del presupuesto colombiano se dedicaba a pagar deuda externa, y un tercio se gastaba en fuerzas de seguridad del Estado como la policía y el ejército. “Incluso entonces, el FMI y el Banco Mundial ejercían presión para crear mayores reducciones en el gasto estatal en salud y educación”.⁸⁴ A media historia del Plan Colombia, en enero de 2003, el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de 2.1 mil millones de dólares a Colombia, y se aplicó un paquete de medidas de austeridad, incluyendo la reestructuración del programa de pensiones, recortes a la fuerza laboral del sector público, y la privatización de un banco importante (BANCAFE).⁸⁵ De acuerdo con el Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo, “aunque no se relaciona directamente con el Plan Colombia, el préstamo de FMI a Colombia empata con el Plan Colombia como parte de una estrategia mayor para revivir la economía colombiana”.⁸⁶

80 US Government Accountability Office, “Plan Colombia”, 101.

81 Banco de la República, “Flujos de inversión extranjera directa (IED) en Colombia – Balanza De Pagos”, 2011, http://www.banrep.gov.co/economia/flujos/C2Flujo_Paises_2007.xls.

82 Julie Gordon, “PDAC-Colombia to award mining concessions gradually”, Reuters, Marzo 5, 2012, <http://www.reuters.com/article/2012/03/05/canada-mining-pdac-colombia-idUSL2E8E57EP20120305>.

83 Andres Schipani, “Colombia: Making Many Millionaires”, *Financial Times*. Octubre 21, 2013, recuperado en Agosto 27, 2014, <http://blogs.ft.com/beyond-brics/2013/10/21/colombia-making-many-millionaires/>

84 Simons, *Colombia: A Brutal History*, 327.

85 Hristov, *Blood and Capital*, 17.

86 Globalize This, “Colombia and the IMF: Policies that Worsen Problems”, *Committee for the Abolition of Third World Debt*, Enero 2002, <http://cadtm.org/Colombia-and-the-IMF-Policies-that>.

En 2002, 300 compañías estatales fueron privatizadas o clausuradas, lo que afectó a más de 150,000 trabajadores.⁸⁷ El año final de Plan Colombia, el gobierno privatizó 30 por ciento del sistema eléctrico y vendió parte de la compañía nacional de gas y parte de Ecopetrol, la petrolera estatal. “La reforma energética más importante de Uribe fue la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la introducción de nuevas maneras de atraer inversionistas privados y extranjeros a explorar y explotar las reservas subterráneas de energía del país”.⁸⁸ En esa época el gobierno introdujo nuevos mecanismos para permitir la coordinación entre el ejército y las compañías de la industria extractiva. Aunque al principio no se hizo explícito, eventualmente se reveló que el Plan Colombia fue considerado un precursor de la firma de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia. Según un informe preparado por el gobierno colombiano, “promover las condiciones para la generación de empleo y la estabilidad social” y expandir “las tarifas preferentes en compensación por los efectos negativos del narcotráfico y para favorecer un tratado de libre comercio que ampliará las oportunidades de empleo” estuvieron entre los objetivos del Plan Colombia.⁸⁹ El Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia entró en vigor en 2011, seguido por el tratado con EUA en 2012.

Gas y petróleo en Colombia

El petróleo y el gas constituyen una porción cada vez más importante de la IED hacia Colombia, desde un décimo a mediados de los noventa hasta casi un tercio en 2010, cuando alcanzó los 4.3 mil millones de dólares.⁹⁰ El petróleo colombiano ha estado en la mira del gobierno estadounidense desde hace mucho, pues “el actual interés de EUA en Colombia comenzó un año después de que Occidental Oil descubriera el campo petrolero de mil millones de barriles de Caño Limón en 1983. Eso condujo a las directrices de seguridad nacional de 1986 y 1989 que autorizaron la presencia militar estadounidense”.⁹¹ Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos) se formó

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ MacLean, “Colombia”, in *Energy Cooperation in the Western Hemisphere*, 206.

⁸⁹ Departamento Nacional de Planeación de Colombia, Departamento de Justicia y Seguridad de Colombia. “Plan Colombia Progress Report, 1999–2005”, Septiembre 2006, http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DJS/DJS_Documentos_Publicaciones/bal_plan_Col_ingles_final.pdf, 9.

⁹⁰ Banco de la República, “Flujos de inversión extranjera directa (IED) en Colombia”. The Economist, “Gushers and Guns: A Boom, and Threats to It”, *The Economist*, Marzo 17, 2012. <http://www.economist.com/node/21550304>.

⁹¹ Scott, *Drugs, Oil and War*, 72.

en 1951, cuando una concesión a Ohio's Standard Oil expiró y no fue renovada. Ecopetrol asumió la concesión, aunque a compañías extranjeras como Mobil, Texaco y Chevron se les siguió permitiendo operar en el país.⁹² En 2010, Ecopetrol era la corporación más grande en Colombia, y controlaba el 100 por ciento de la refinación colombiana, 55 por ciento de la producción de petróleo, 60 por ciento de la de gas, y 79 por ciento de los oleoductos existentes (alrededor de 8,815 kilómetros de oleoducto).

Los pasos hacia la privatización parcial de la empresa le resultarán familiares a quien conozca la industria petrolera. Primero hubo recortes laborales, que le impidieron funcionar adecuadamente. “El 29 de noviembre de 2002 Ecopetrol, la compañía petrolera estatal de Colombia, anunció que deseaba recortar los beneficios de más o menos el 50 por ciento de sus trabajadores afiliados a un sindicato... La empresa ya había iniciado acciones jurídicas para cambiar las condiciones laborales pactadas con el sindicato –desincorporar el mantenimiento de los pozos petroleros, recortar las pensiones para los nuevos empleados, reducir los gastos de seguro médico y poder despedir más fácilmente a los miembros sindicalizados”.⁹³ En el 2003, Ecopetrol fue parcialmente privatizada, y ahora es una empresa mixta, 89.9 por ciento en manos estatales, y 10.1 en manos de accionistas (Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia [BVC] y en la de Nueva York). En 2010, Ecopetrol prometió invertir durante los siguientes cinco años 60 mil millones en exploración, infraestructura, transporte, refinación, producción, mercadotecnia y adquisiciones. Ese mismo año, se empezó a construir un nuevo oleoducto de 3.5 mil millones de dólares desde Ariguaney, en el departamento de Meta, hasta el puerto de Coveñas en Sucre.⁹⁴ Estos cambios convirtieron Colombia en “uno de los ejemplos de desarrollo de más rápido crecimiento y de mayor importancia en el mundo”, según Luke Burgess, un comentarista del sector energético, que en 2010 llamó al país “La frontera petrolera más candente del mundo” (*The World's Hottest Oil Frontier*). A continuación subrayó que los miles de millones de dólares que Ecopetrol y el gobierno planeaban invertir en infraestructura y exploración de gas y petróleo representaban “enormes oportunidades de ganancia fácil” para los inversionistas.⁹⁵

92 MacLean, “Colombia”, in *Energy Cooperation in the Western Hemisphere*, 194.

93 Simons, *Colombia: A Brutal History*, 320–321.

94 World Construction Network, “Colombia to Construct \$3.5 Billion Oil Pipeline”, Marzo 20, 2010, http://www.worldconstructionnetwork.com/news/colombia_to_construct_35_billion_oil_pipeline_100323/. The information in this paragraph was drawn from : Dawn Paley, “Oil, Gas, and Canada-Colombia Free Trade”, *NACLA* (Agosto 11, 2010), <https://nacla.org/node/6694>.

95 Luke Burgess, “Colombian Oil Stocks Are Set to Run: The World's Hottest Oil Frontier”, *Energy & Capital*, Mayo 17, 2010, <http://www.energyandcapital.com/articles/colom->

Las compañías petroleras en Colombia no sólo se vieron beneficiadas por la actividad de los grupos paramilitares y la apertura del sector energético de Colombia, sino también por el apoyo del gobierno de EUA para proteger sus intereses: “Los ataques violentos contra instalaciones energéticas colombianas, previas y contemporáneas a las campañas globales contra el terrorismo tras el 11 de septiembre, han dotado de argumentos a los legisladores y miembros del ejecutivo estadounidense para incrementar la ayuda militar a Colombia y expandir de manera significativa y sin precedentes la misión estadounidense de los antinarcóticos a la contrainsurgencia y antiterrorismo”.⁹⁶

En algunos puntos, la conexión entre el Plan Colombia y la protección de la industria del petróleo fue particularmente evidente. Parte del Plan Colombia estuvo dedicado a acciones de contrainsurgencia para proteger del sabotaje con explosivos el oleoducto Caño Limón–Coveñas, que entonces era operado por Ecopetrol (Colombia), Oxy (EUA) y Repsol (España). Para 2005, las fuerzas especiales de EUA habían “proporcionado entrenamiento y equipo a alrededor de 1,600 soldados del ejército colombiano” cuya misión era proteger el oleoducto.⁹⁷ Las oficinas de asuntos de narcóticos de la embajada de EUA en Bogotá administraron el componente aéreo de la militarización, presidida por EUA, del oleoducto.⁹⁸

Los incentivos económicos para invertir en las industrias extractivas de Colombia tienen un bono adicional: en 2010, el gobierno de Colombia prometió que el ejército entrenaría a una batallón de soldados para ayudar a las compañías a obtener y transportar resultados de pruebas sísmicas en partes del país donde pudieran existir riesgos operativos.⁹⁹ Esta fue la primera vez que el ejército colombiano proveyó tropas a las compañías en la fase de exploración, ya que antes el papel del ejército se limitaba a proteger la producción y transporte de hidrocarburos en la fase de explotación. El gobierno de Colombia anunció que para 2015, instalaría una base militar de radar en Meta (una región petrolera) y construiría aviones no tripulados para la vigilancia de oleoductos y otros intereses militares.¹⁰⁰

bia-oil-stocks/1150

96 Thad Dunning y Leslie Wirpsa, “Oil and the Political Economy of Conflict in Colombia”, in *The Geopolitics of Resource Wars: Resource Dependence, Governance and Violence*, ed. Philippe Le Billon (New York: Routledge, 2005), 84.

97 US Government Accountability Office. “Security Assistance: Efforts to Secure Colombia’s Caño Limón-Coveñas Oil Pipeline Have Reduced Attacks, but Challenges Remain”, Septiembre 2005, www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-05-971, 2.

98 *Ibid.*, 8.

99 Paley, “Oil, Gas, and Canada-Colombia Free Trade”.

100 *El País*, “Colombia tendrá aviones no tripulados y radar militar en el 2015”, Octubre 25,

El despliegue del Plan Colombia en Putumayo, una vasta región que incluye las selvas al sur de Colombia, y que colinda con Ecuador, es una muestra concreta de cómo las iniciativas antidrogas han impactado el paisaje social y económico desde que el Plan se lanzó en el 2000. “En diciembre del 2000, los batallones antinarcóticos entrenados por EUA, los helicópteros proveídos por EUA y las aeronaves de fumigación piloteadas por EUA descendieron sobre el departamento de Putumayo para realizar la campaña inicial de fumigación aérea del Plan Colombia”, escribió el periodista Gary Leech en 2004.¹⁰¹ “Mas aunque el Plan Colombia ha fallado en afectar el precio, pureza y disponibilidad de la cocaína en las ciudades de EUA, su militarización de Putumayo ha contribuido significativamente a incrementar la exploración petrolera de las compañías multinacionales en esta región rica en recursos”. En 2006, había 4,500 soldados resguardando instalaciones petroleras en Putumayo, así como dos brigadas militares adicionales y una especial, entrenada por el ejército estadounidense.

Uno de los puntos clave sobre el conflicto en Colombia es que los civiles no son asesinados y desplazados como consecuencia imprevista de la guerra, ni son “daño colateral”; por el contrario, el desplazamiento de civiles, las amenazas a activistas y líderes comunitarios, las desapariciones forzadas y el terrorismo de Estado son parte integral del conflicto.¹⁰² “El desplazamiento forzado en Colombia no es un producto secundario del conflicto interno. Los grupos armados atacan a la población civil para fortalecer cacicazgos locales, expandir el control territorial, debilitar las bases del oponente, y acumular valiosos activos (i.e., tierras o extracción de recursos naturales). La estrategia bélica de expulsar a la población busca impedir las acciones colectivas, dañando las redes comunitarias, intimidando y controlando a la población civil”.¹⁰³ Al sacar a las personas de sus tierras, nuevos territorios se abren para los llamados inversionistas de frontera. Cuando la gente se ve obligada a dejar su tierra y termina viviendo en campamentos y barriadas, se vuelve mucho más difícil organizarse de forma efectiva para controlar sus territorios.

Parte de las perforaciones petroleras en Putumayo se realizan en la tierra del pueblo Cofán, parte del cual ha sido desplazado como parte de

2012, <http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/colombia-tendra-aviones-tripulados-y-radar-militar-2015>.

101 Gary Leech, “Plan Petroleum in Putumayo”, *Colombia Reports*, Mayo 10, 2004, <http://web.archive.org/web/20070606213622/http://www.colombiajournal.org/colombia184.htm>.

102 Esta sección se deriva en parte de: “Global Capitalism, Oil, and the Canada-Colombia Free Trade Agreement”, un discurso pronunciado por al autora en la decimocuarta conferencia anual del Parkland Institute, Noviembre 2010, http://dawnpaley.files.wordpress.com/2010/11/parkland_paley_2010.pdf.

103 Ibáñez y Vélez, “Civil Conflict and Forced Migration”, 661–662.

una estrategia orquestada para que sus tierras queden disponibles a los megaproyectos. De acuerdo con el programa del gobierno Sistema de Información Indígena de Colombia (SIIC), “La fumigación de su territorio como parte de un plan militar para debilitar la estabilidad de las guerrillas y las batallas entre las FARC y los paramilitares provocó una migración de los Cofán al Ecuador”.¹⁰⁴ No obstante, se ha disputado la afirmación del gobierno de que el desplazamiento de los Cofán de sus tierras ricas en petróleo fue resultado de batallas militares. “El desplazamiento no es sólo resultado de las acciones armadas de las diversas facciones peleando en el área; también debe entenderse como el resultado de una estrategia para expropiar tierras que son parte del territorio ancestral de los Cofán”.¹⁰⁵

Entre los mayores beneficiados del conflicto en Putumayo están las compañías petroleras canadienses: Grand Tierra Energy Incorporated, una firma basada en Calgary, produce aproximadamente 14,000 barriles netos al día en Putumayo, y controla más de 303,515 hectáreas de territorio; Petrobank, también de Calgary, tiene catorce bloques de exploración, que cubren un total de 647,500 hectáreas; Parex Resources Incorporated, también de Calgary, antes llamada Petro Andina, está activa en Putumayo y en la región de las planicies; por último, la compañía petrolera canadiense más importante hoy en día en Colombia, es la Pacific Rubiales, con matriz en Toronto.¹⁰⁶

En diciembre de 2009, Pacific Rubiales se convirtió en la primera empresa extranjera que cotizó en la Bolsa de Valores colombiana. Actualmente, Pacific Rubiales es la segunda compañía petrolera más grande en Colombia, después de la estatal Ecopetrol. Es una pionera en la más reciente fase de exploración y producción de petróleo y gas en el país. En una entrevista de periódico, el presidente ejecutivo Ronald Pantin explicó por qué su compañía opera en Colombia: “Las estrellas se alinearon. Fue una combinación de las políticas de Uribe, las nuevas leyes de hidrocarburos, las políticas de seguridad nacional y una geología muy prometedora”.¹⁰⁷ Pero no

104 Sistema de Información Indígena de Colombia, “Pueblo Cofán”, http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/media/32636/pueblo_cof_n.pdf.

105 Mortiz Tenthoff, “Coca, Petroleum and Conflict in Cofán Territory (Drug Policy Briefing #23)”, *Transnational Institute*, Septiembre 2007, <http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/brief23.pdf>, 2.

106 Antes de convertirse en el mayor barón petrolero privado de Colombia, el CEO de Pacific Rubiales, Ronald Pantin, trabajó en la industria petrolera venezolana durante más de veinte años, y finalmente se convirtió en presidente de PDVSA, la compañía petrolera estatal. También fue presidente de Enron Venezuela hasta que abandonó el país después de la elección de Hugo Chávez.

107 John Otis, “Pioneering CEO of the Year: Ronald Pantin—Oil Expert Striking Success Anew”, *Bravo*, Septiembre 29, 2010, <http://bravo.latintrade.com/2010/09/pioneering-ceo-of-the-year-ronald-pantin-oil-expert-striking-success-anew/>.

fue una cuestión de astrología. El boom petrolero de Colombia es resultado de un conjunto deliberado de prácticas y políticas aplicadas durante los años recientes, algunas de las cuales, como el entrenamiento estadounidense de brigadas militares colombianas para resguardar oleoductos, fueron parte del Plan Colombia. Los 600 elementos militares asignados en una base militar dentro de los campos petroleros de Rubiales ilustran una política de seguridad nacional que Pantin probablemente agradece.

Cuando Pantin mencionó las “nuevas leyes de hidrocarburos” en Colombia, se refería a leyes reescritas con asesoramiento canadiense. En un proyecto financiado por la Canadian International Development Agency, el Canadian Energy Research Institute de Calgary trabajó con Colombia en 2001 y 2002 para “coordinar las regulaciones mineras y petroleras del país”.¹⁰⁸ Esta iniciativa puede entenderse como parte de un esfuerzo multinacional para mejorar las condiciones de inversión en Colombia. Como se mencionó, la aprobación de leyes para estimular la inversión era parte del Plan Colombia. Estas legislaciones aumentaron la seguridad legal para las corporaciones que buscaban garantías a largo plazo de parte del Estado colombiano.¹⁰⁹ Al término del Plan Colombia, las corporaciones disfrutaban de un nuevo régimen legal así como de seguridad aumentada, proporcionada por el gobierno de Colombia.

De la guerra antidrogas a la franca ocupación

En términos de flujo de narcóticos, las políticas de guerra antidrogas apoyadas por EUA en Colombia lograron poco más que crear la percepción de que el narcotráfico estaba siendo afectado por las acciones militares en su contra. Esas mismas políticas fracasaron en crear un ambiente más seguro para las poblaciones rurales, que siguen siendo desplazadas de sus tierras y afectadas por la violencia estatal y no estatal. En 2008, Uribe le comunicó a EUA que Colombia estaría dispuesta a hospedar lo que eufemísticamente se llama una Locación de Seguridad Cooperativa, que Estados Unidos se mostró interesada en aceptar si Ecuador no renovaba el acuerdo de uso de la base de Manta (no lo hizo).¹¹⁰ En 2009, EUA y Colombia firmaron

108 Chris Arsenault, “Digging Up Canadian Dirt in Colombia”, *Colombia Journal*, Noviembre 6, 2006, <http://colombiajournal.org/digging-up-canadian-dirt-in-colombia.html>.

109 Haynes Boone, “The Oil and Gas Industry in Colombia and the Ecopetrol Partial Privatization”, Marzo 18, 2008, <http://www.haynesboone.com/publications/the-oil--gas-industry-in-colombia-and-the-ecopetrol-partial-privatization>, 13.

110 Embassy Bogota, “Assistant Secretary Shannon’s July 7 Meeting With President Uribe”, julio

un acuerdo para permitir el acceso de tropas estadounidenses a siete bases militares en el país sudamericano durante diez años, con posibilidad de renovación.¹¹¹ El acuerdo, que los oficiales colombianos anexaron al Plan Colombia para que no tuviera que aprobarse en el Congreso, fue declarado inconstitucional y se tiró meses después de la firma. Eso no impidió que las tropas de EUA arribaran o que el Pentágono comenzara a construir nuevas bases.¹¹² Personas que entrevisté en Arauca y Meta confirmaron el hecho de que personal militar de EUA está presente en bases en sus regiones, a pesar de que no hay ninguna confirmación oficial de cuántos soldados norteamericanos se encuentran en Colombia.

Lo que ha cambiado es el discurso oficial y de los medios con respecto a la guerra en Colombia: hoy en día, el mensaje general es que los grupos paramilitares y los cárteles de la droga se han desmovilizado y desmantelado. Estas fuerzas irregulares han sido rebautizadas como bandas criminales (Bacrim), que se pintan como grupos criminales apolíticos sin vínculos con el aparato estatal, y como tales pueden ser perseguidas por la policía con permiso de la ley. Según organizaciones internacionales que trabajan en Colombia, desde el final de las negociaciones con las AUC en 2005, gran parte del gobierno colombiano actúa como si los paramilitares ya no existieran. Citan a la oficina del fiscal general: “las organizaciones criminales que emergieron tras la desmovilización de las AUC, se desarrollaron como una nueva forma de paramilitarismo, considerado la tercera generación de grupos paramilitares en Colombia y cuyo propósito inicial era mantener el control de los territorios abandonados por las AUC. Los paramilitares no han sido desarticulados y sus crímenes continúan impunes”.¹¹³ El intento de renombrar a los paramilitares como narcotraficantes sin nexos con el gobierno o las fuerzas de seguridad pública es particularmente interesante porque representa un cambio en Colombia a un discurso de estilo mexicano acerca del crimen organizado, que despolitiza las acciones reaccionarias de estos grupos y crea una distancia discursiva entre ellos y los miembros del Estado.

Le pregunté a Fabián Laverde, con quien abrí este capítulo, sobre la diferencia entre los grupos paramilitares y las Bacrim. “Son exactamente lo mismo”, me respondió. “Si miras quiénes son los comandantes de las

15, 2008, https://wikileaks.org/plusd/cables/08BOGOTA2568_a.html.

111 Ben Dangl, “U.S. Bases in Colombia Rattle the Region”, *The Progressive*, Marzo 2010, <http://progressive.org/danglmarch10.html>.

112 John Lindsay-Poland, “Pentagon Building Bases in Central America and Colombia: Despite Constitutional Court Striking Down Base Agreement”, Enero 27, 2011, <http://forusa.org/blogs/john-lindsay-poland/pentagon-building-bases-central-america-colombia/8445>.

113 International Platforms and Organizations, “Report for the Universal Periodic Review”, 15.

Bacrim, como les dicen, de hecho son los mismos comandantes que estaban en los grupos paramilitares”. Hoy, el aspecto de las tierras es muy parecido al que había durante el Plan Colombia, pero en vez de reconocidos bloques regionales paramilitares, hay grupos locales más pequeños, capaces de trabajar con menos escrutinio mediático. “Las tierras que quitan o las tierras que persiguen, o a los líderes que matan, no benefician ni siquiera al comandante del Bacrim, beneficia a un tercero que en últimas es aquel que les robó la tierra hace 20 años a los campesinos, a través de la mano armada de los paramilitares con la complacencia del Estado, y ahorita quienes impiden que recuperen esas tierras son las famosas Bacrim”, dijo Laverde. Este análisis lo escuché muchas veces entre las personas que conocí en Colombia: el surgimiento de las Bacrim fue una estrategia de relaciones públicas para ocultar las conexiones vigentes del Estado con los grupos armados.

No hay duda de que el Plan Colombia fue un fracaso en detener el flujo de drogas y en incrementar la sensación de seguridad de muchos colombianos en sus hogares –especial pero no exclusivamente del campo. Lo que sí consiguió, sin embargo, fue aumentar la seguridad para los inversionistas, tanto en regiones donde el Estado antes no tenía control, como legalmente, por medio de asegurar la protección de las inversiones y la ratificación de tratados de libre comercio entre Colombia, Estados Unidos y Canadá. El auge económico de Colombia tras el Plan Colombia se relaciona con reformas legales y financieras instituidas como parte del programa “antinarcóticos”, pero también va de la mano con el orden social represivo y la militarización impuesta durante y después de la iniciativa. Por todo el país, los grupos armados despejaron muchos territorios de sus habitantes, y las corporaciones llegaron a ocuparlos y explotarlos. Los sindicatos fueron debilitados, y los movimientos indígenas y populares quedaron afectados por la violencia emprendida contra sus miembros.

¿Qué aprendió el gobierno estadounidense del Plan Colombia? Primero, que la guerra antidrogas puede usarse como un mecanismo de promoción de políticas favorables a los negocios, y segundo, que el paramilitarismo fortalecido por la prohibición puede ayudar a mantener el control sobre los territorios y las poblaciones.

Lo que se ha aplicado en México, Centroamérica y otros lugares a partir de 2007 es una versión refinada de la estrategia comprehensiva de guerra antidrogas apoyada por EUA. Vista desde esta perspectiva, la guerra antidrogas parece ser un remedio sangriento a los males de Estados Unidos. Actualmente, EUA y Colombia financian y promueven cursos de entrenamiento en seguridad a cargo de colombianos en todo el hemisferio.

Para el Departamento de Estado de EUA, “Colombia también es un contribuyente importante al sector de seguridad de Centroamérica y se está convirtiendo en un socio en el abordaje de la seguridad ciudadana en la región”.¹¹⁴

El general Kelly, comandante del SouthCom estadounidense, apunta que “mientras que Colombia asume cada vez más el papel de exportador de seguridad, estamos facilitando el despliegue de equipos de entrenamiento coordinados por colombianos y expertos en la materia y la atención de personal centroamericano a la aplicación de la ley y las academias militares en Colombia como parte del Plan de Acción EUA-Colombia para la Cooperación en Seguridad Regional. Este es un claro ejemplo de una considerable recuperación de nuestra relativamente modesta inversión e involucramiento sostenido”.¹¹⁵

Con esto en mente podemos comenzar a explorar los impactos de la Iniciativa Mérida en México y de CARSI en Centroamérica. Los resultados económicos alcanzados con el Plan Colombia, combinados con su proximidad a los Estados Unidos, hicieron de México el siguiente espacio natural de la guerra antidrogas. Establecer los lazos entre la política antidrogas de EUA y la expansión del capitalismo en México es difícil porque los efectos de estas políticas están dándose actualmente, y aún no tenemos el beneficio de la perspectiva. Sin embargo, sí sabemos que se considera a Colombia un modelo de la guerra antidrogas en México, y podemos ver cuáles han sido los resultados en términos de la estrategia antidrogas para incrementar la integración de Colombia al capitalismo global. En México se nos presenta un escenario confuso y revuelto, razón de más para tratar de analizar los sucesos en curso desde un contexto más amplio.

114 Hillary Clinton, “Remarks at the Central American Security Conference (SICA)”, Junio 22, 2011, <https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/06/166733.htm>.

115 Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Congressional Budget Justification Foreign Operations Annex: Regional Perspectives 2014”, <http://www.state.gov/documents/organization/208291.pdf>, 636.

Capítulo IV

México: las reformas de la guerra antidrogas

En 2010 y 2011 estallaron granadas en los palacios municipales de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, todas localidades del estado fronterizo de Tamaulipas, México. Los atentados fueron atribuidos al crimen organizado, en particular a miembros de Los Zetas y del Cartel de Golfo. Visité la región a principios de 2011, para averiguar qué podría estar conduciendo a los narcos a pelear contra gobiernos locales que están, desde cualquier punto de vista, bajo su control. Fui contra la recomendación de varios periodistas que me advirtieron que la zona era demasiado peligrosa. La mayoría de mis fuentes se negaron a declarar públicamente, y las historias que me contaron en murmullos son capaces de causar escalofríos a cualquier reportero. No fue hasta que conocí a Francisco Chavira Martínez que las cosas comenzaron a adquirir sentido. La primera vez que nos reunimos, sugirió que comiéramos al fondo de un restaurante de Reynosa al que va la gente acomodada de la ciudad. Meseros vestidos de etiqueta nos atendían servicialmente; y la mayoría de los clientes eran hombres maduros. Chavira, que preside una universidad privada con planteles en todo Tamaulipas, me hablaba entre bocados en voz muy alta, sin importarle que pudieran escucharlo desde otras mesas.

Después de un rato de plática casual y un par de tragos de café, le pregunté sobre las explosiones. Los gobiernos locales “utilizan a los roba-carros para todo aquel que está en contra de ellos, les mandan a robar su carro; los ladrones de casa, los ladrones domiciliarios que les llaman, entran a robar tu casa para espantarte; los narcotraficantes, que los utilizan ellos como una forma de que la gente tenga miedo, para que no participes, para que no alces la voz, para que no estés en contra del gobierno, incluso se mandan ellos mismos [los gobernantes] a tirar granadas a las presidencias municipales” me explicó Chavira.¹ Silencio. Tal vez notó el gesto de confusión en mi cara y trató de explicarme más. “¿Por qué?”, preguntó retóricamente e hizo una pausa. “Para que la gente se asuste y no vaya a exigir a la presidencia, ni exijas transparencia de las cuentas públicas, en qué se gastan el dinero,

¹ Dawn Paley, “Off the Map in Mexico”, *The Nation*, Mayo 4, 2011, <http://www.thenation.com/article/160436/map-mexico>.

porque si no, si lo hago, me van a matar, me van a meter una granada”. Meses después de nuestra entrevista, Chavira, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue arrestado por cargos infundados y lo retuvieron en la cárcel hasta que pasaron las elecciones, en lo que él llamó un “secuestro legalizado” por el Estado.

Los miembros del gobierno mexicano han usado muchos medios para defender su posición social, desde bombazos hasta extorsiones y amenazas. Los métodos que Chavira me describió nos ayudan a entender el alcance de estas prácticas, y contribuyen a ilustrar la complicidad entre los miembros del Estado y los grupos criminales. Pero la política de la guerra antidrogas no se trata solamente de granadas y tipos malos. En paralelo a la violencia, hay reformas legales y políticas incluidas en el “Plan México”, enfocadas específicamente a crear un ambiente de negocios más amigable, así como a fortalecer el llamado Estado de Derecho apoyado por EUA.

El objetivo declarado de la Iniciativa Mérida tiene cuatro partes: desmantelar organizaciones criminales; endurecer el control aéreo, marítimo y fronterizo; reformar el sistema jurídico; y disminuir la actividad de las bandas criminales así como la demanda de drogas.² La Iniciativa Mérida (o Plan México) es el marco político y legislativo general para establecer el capitalismo antidrogas en México. Incluye una página directamente sacada del Plan Colombia en términos de priorizar el apoyo para obstaculizar el narcotráfico al mismo tiempo que se transforma al país en tres puntos clave: 1) introducir un nuevo sistema legal y promover reformas estructurales, 2) aumentar la militarización, y 3) como efecto secundario de lo anterior, promueve la formación y multiplicación de grupos paramilitares.

Al igual que el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida no es estrictamente un acuerdo militar. Tiene cuatro “pilares”: perturbar los grupos del crimen organizado, institucionalizar reformas para mantener el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, crear una frontera del siglo XXI, y construir comunidades fuertes y resistentes. Según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EUA, “La Iniciativa Mérida es un paquete de asistencia con diversos componentes de programa que están siendo implementados por un abanico de agencias de EUA, bajo el liderazgo y administración del Departamento de Estado”.³

2 Clare R. Seelke, “Mérida Initiative for Mexico and Central America: Funding and Policy Issue”, *Servicio de Investigación del Congreso de los EE. UU.*, Abril 19, 2010, <http://fpc.state.gov/documents/organization/141560.pdf>.

3 US GAO, “Mérida Initiative: The United States Has Provided Counternarcotics and Anticrime Support but Needs Better Performance Measures”, Julio 21, 2010, <http://www.gao.gov/products/GAO-10-837>, 27.

El primer componente de la Iniciativa Mérida se conoce oficialmente como “Asistencia para mejorar el Estado de Derecho y fortalecer las instituciones civiles”.⁴ De la mano del financiamiento antidrogas –o por lo menos al mismo tiempo– se ajustan leyes y se aplican reformas que alientan la privatización y la inversión extranjera directa. Según el gobierno de EUA, esto “construirá comunidades fuertes y resistentes”, y “fortalecerá las instituciones”.⁵ Un análisis alternativo de este componente del financiamiento de la guerra antidrogas podría llevar un título que represente el espíritu de estos ajustes: en el caso de México estas estrategias pueden llamarse “TLCAN actualizado”, ya que son una forma de profundizar los cambios institucionales formalizados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994. Además, este componente realiza un papel importante de contrainsurgencia, ya que aspira a convencer y capturar las mentes y corazones de la sociedad mexicana.

El segundo componente de la Iniciativa Mérida se llama oficialmente “Aplicación de la Ley y Asistencia de Seguridad”.⁶ Consiste en la militarización de la policía y de las fronteras, así como el aumento del poder policiaco y militar, entrenamiento y artillería. No obstante que estos son acuerdos firmados legalmente entre gobiernos coordinados, pueden llegar a implementarse al margen de la ley en los países donde se llevan a cabo.⁷ El gobierno de EUA nos dice que esta faceta busca “desequilibrar a los grupos del crimen organizado” y “construir una frontera del siglo XXI”,⁸ pero en los hechos tiene toda la pinta de la contrainsurgencia. En 2010, la Secretaria de Estado Hillary Clinton comparó la situación en México con una insurgencia: “Cada vez se parece más a Colombia hace 20 años”, dijo ante delegados en un evento del Consejo para las Relaciones Exteriores. Los cárteles del narcotráfico “muestran más y más rasgos de insurgencias”, agregó.⁹ En 2009, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos afirmó que apoyaba el uso de la contrainsurgencia en México.¹⁰

4 110° Congreso, 2° Período de Sesiones, “An Act to authorize law enforcement and security assistance, and assistance to enhance the rule of law and strengthen civilian institutions, for Mexico and the countries of Central America, and for other purposes”, Junio 11, 2008, <http://www.govtrack.us/congress/bills/110/hr6028/text>, 17.

5 Departamento de Estado de los EE. UU., “Mérida Initiative”, <http://www.state.gov/j/inl/merida/m>.

6 110° Congreso, 2° Período de Sesiones, “An Act to authorize law enforcement...”.

7 Por ejemplo, la llegada de la Marina estadounidense a Guatemala en agosto de 2012: aproximadamente 200 infantes de la Marina de EUA llegaron antes de que se alcanzara un acuerdo. Se convocó una sesión especial en el gobierno guatemalteco para aprobar y legalizar el acuerdo.

8 Departamento de Estado de los Estados Unidos. “Mérida Initiative”.

9 BBC News, “Clinton Says Mexico Drug Crime Like an Insurgency”, Septiembre 9, 2010, <http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11234058>.

10 David Morgan, “US Military Chief Backs Counter-insurgency for Mexico”, Marzo 6, 2009,

La contrainsurgencia puede entenderse no sólo como una forma de combate sino como un tipo de guerra con resultados distintos de los de la agresión bélica ortodoxa. “En el contexto de la guerra contrainsurgente, la victoria se mide no por el número de enemigos derrotados sino por el aumento de la confianza y la simpatía entre los pueblos originarios que se alejan de la influencia de los insurgentes”, escribe Vicente L. Rafael, profesor de historia en la Universidad de Washington.¹¹ Con la definición de “victoria” establecida por Rafael en mente, veamos cómo John D. Feeley, principal secretario adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EUA, describe la estrategia nacional estadounidense de control de drogas aplicada en México. Plantea que el núcleo de la estrategia es aumentar la seguridad ciudadana y fortalecer el Estado de Derecho, “al mismo tiempo que se empodera a los ciudadanos para colaborar con la policía, procuradores y jueces, así como con los maestros, activistas comunitarios, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y defensores de los derechos humanos”.¹² Visto desde una perspectiva diferente, el segmento de aplicación de la ley de la Iniciativa Mérida puede entenderse como la aplicación de una guerra de contrainsurgencia dentro de un marco formalmente democrático. También funciona como un programa para limitar la movilidad humana y facilitar el flujo de mercancías y servicios.

Ambos componentes descritos arriba son reconocidos de manera oficial por los partidarios de la política antidrogas. El componente político y el policiaco se refuerzan mutuamente: conforme las empresas públicas se privatizan y los ingresos estatales se desploman, el Estado requerirá más fuerza para mantener el orden social. Véase por ejemplo Pemex, la empresa petrolera paraestatal. Antes de las reformas en diciembre de 2013, 99 por ciento de las utilidades de la compañía se destinaban a pagar impuestos, la más grande fuente de ingresos del gobierno mexicano.¹³ Hace falta ver cómo las reformas a Pemex afectarán los ingresos y presupuesto del país. Si la fiscalización de compañías petroleras privadas no logra llenar las arcas del Estado en el futuro, podría dar como resultado la aplicación de medidas de austeridad de una dureza nunca antes vista en México, lo cual puede detonar la protesta social masiva.

<http://www.reuters.com/article/2009/03/07/idUSN06397194>.

11 Vicente L. Rafael, “Targeting Translation: U.S. Counterinsurgency and the Politics of Language”, en *Life During Wartime*, 277–278.

12 John Feeley, “U.S.-Mexico Security Cooperation: An Overview of the Mérida Initiative, 2008–Present”, Audiencia ante el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre el Hemisferio Occidental, Mayo 13, 2013, <http://docs.house.gov/meetings/FA/FA07/20130523/100907/HHRG-113-FA07-Wstate-FeeleyJ-20130523.pdf>, 2–3.

13 Morena, “Mural 27: Alerta a todos los mexicanos!”, *Regeneración*, Febrero 27, 2013: 4–5.

Por todo esto, la capacidad de las fuerzas de seguridad para hacer arrestos masivos y encarcelar a los disidentes está siendo aumentada a través de programas de la Iniciativa Mérida. Mientras más personas sean arrestadas por fuerzas policíacas más grandes y agresivas, el sistema de justicia expedita basado en el modelo estadounidense podría resultar útil para procesarlas. La capacidad aumentada de las prisiones, también financiada por EUA por medio de la Iniciativa Mérida, sin duda resultaría útil para encarcelarlas. De este modo, la Iniciativa Mérida parece ser una estrategia a largo plazo para implementar la austeridad y el capitalismo globalizado, al mismo tiempo que se militariza México.

El tercer y último componente de la Iniciativa Mérida es un efecto generalmente no reconocido, pero sí conocido, de la guerra antidrogas: el surgimiento de nuevas formas de control social derivadas de la reorganización del flujo de narcóticos y grupos criminales, que provoca la alteración militarizada de las redes existentes de narcotráfico. En el discurso dominante sobre la guerra antidrogas, todo esto se describe como un asunto de guerra entre cárteles. Sin embargo, desde una perspectiva crítica se puede comprender como algo más parecido a la paramilitarización. Este aspecto de la guerra antidrogas es el más turbio y difícil de describir. Se invita a los periodistas a explicar este fenómeno en términos de cárteles peleándose entre sí, pero con una mirada más atenta se descubre que la paramilitarización es un efecto bien conocido de la militarización del narcotráfico. Como vimos en el caso de Colombia, la paramilitarización puede servir a los intereses de los inversionistas y a las corporaciones transnacionales que buscan prevenir la sindicalización o la movilización comunitaria.

La Iniciativa Mérida sirvió como un catalizador para el incremento abrupto del gasto en la policía y la milicia en México. Antes de la Iniciativa Mérida, EUA estaba dando a México entre 60 y 70 millones de dólares al año.¹⁴ La guerra antidrogas cambió eso rápidamente. En 2010 el gasto de seguridad de EUA en México superó los 500 millones, comparados con los 434 para Colombia, antes de caer a 160 millones o menos (frente a los más de 250 millones en los años siguientes en Colombia).¹⁵ Datos del Banco Mundial muestran que el gasto militar de México en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) ha aumentado de 0.4 a 0.6 por ciento en los años recientes; entre 2012 y 2013 México incrementó su gasto militar “en 5.1 por

14 Chalk, *The Latin American Drug Trade*, 60.

15 Just the Facts, “Military and Police Aid, All Programs, Entire Region, 2009–2014”, undated, http://justf.org/All_Grants_Country.

ciento, a pesar de su más débil crecimiento económico”.¹⁶ “Debe resaltarse que México ha destinado una cantidad considerable de su propio dinero a combatir el crimen relacionado con el narco en el país, incrementando el presupuesto de defensa de sólo 2 mil millones de dólares en 2006 a 9.3 mil millones en 2009. Esta inversión se ha usado para desplegar miles de tropas y policías federales, ratificar la interdicción del transporte marítimo de drogas, implementar reformas institucionales y estimular el intercambio de inteligencia y cooperación entre y dentro de las agencias”, se lee en un informe de la RAND Corporation, vinculada al ejército de EUA.¹⁷ Vale la pena señalar que el gasto militar no incluye la totalidad del gasto en policía. La ofensiva de Calderón “estuvo respaldada por EUA bajo la Iniciativa Mérida y también incluyó el despliegue de 96,000 tropas del ejército, junto con miles de marinos y el nombramiento de decenas de oficiales del ejército como jefes de policía en pueblos y ciudades”.¹⁸

El total de fondos de EUA destinados a la Iniciativa Mérida en México entre 2008 y el final de 2014 alcanzó los 2.35 miles de millones de dólares. El Congreso pidió 115 millones para la Iniciativa Mérida en 2015.¹⁹ Se calculó en 2012 que por cada dólar que EUA gastó en la Iniciativa Mérida, México gastó trece.²⁰ Los fondos para la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI) empezaron a fluir hacia allá en 2008, y para fines de 2014 llegaban aproximadamente a 806.3 millones de dólares, con un adicional de 130 millones solicitados por el Congreso para 2015.²¹ A

16 World Bank, “Global Economic Prospects: Latin America and the Caribbean”, undated, <http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/regional-outlooks/lac>. Sam Perlo-Freeman y Corina Solmirano, “Trends in World Military Expenditure, 2013”. SIPRI Fact Sheet, Abril 2014, <http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1404.pdf>.

17 Chalk, *The Latin American Drug Trade*, 61.

18 International Crisis Group, “Peña Nieto’s Challenge: Criminal Cartels and the Rule of Law in Mexico”, *Latin America Report* 48 (Marzo 19, 2013), <http://www.crisisgroup.org/~media/Files/latin-america/mexico/048-pena-nietos-challenge-criminal-cartels-and-rule-of-law-in-mexico.pdf>, ii.

19 Clare R. Seelke y K. Finklea, “CRS Report for Congress Prepared for Members and Committees of Congress U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond”, *Servicio de Investigación del Congreso de los EE. UU.*, Abril 8, 2014, <http://fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdf>, 7.

20 P. Meyer y Clare R. Seelke, “Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress”, GAO, Febrero 21, 2012, <http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41731.pdf>. Voice of America, “Mérida’s New Direction”, Marzo 3, 2012, <http://www.voanews.com/policy/editorials/MERIDAS-NEW-DIRECTION-141416863.html> (Esto representa una habilidad mucho mayor de EUA para asegurar fondos mexicanos en comparación con el compromiso colombiano bajo el Plan Colombia, que estaba más cerca de una proporción 2 a 1). Ver National Planning Department of Colombia, Department of Security and Justice of Colombia, 9.

21 Meyer y Seelke, “Central America Regional Security Initiative”, 17.

mediados de 2013, EUA había desembolsado 27,151,000 de dólares para la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), una fracción de los más de 157 millones previstos en total.²²

El gobierno de EUA no proporcionó dinero en efectivo al gobierno mexicano como parte de la Iniciativa Mérida, sino que gastó su presupuesto en equipo fabricado en EUA y en los servicios de diversos contratistas privados. Adicionalmente, el Departamento de Defensa de EUA proporcionó asistencia antidrogas fuera de la Iniciativa por un total de 208.6 millones de dólares entre 2009 y 2012.²³ Aunque los reportes periodísticos generalmente se concentran en los aspectos policíacos y militares de la guerra antidrogas (la violencia), un testimonio reciente de William Brownfield, encargado de la política estadounidense antidrogas para las Américas, subraya cómo los motivos del gobierno estadounidense para financiar la Iniciativa Mérida van más allá de la seguridad: “En toda sociedad, la seguridad ciudadana sostiene la estabilidad económica y permite el florecimiento del comercio, la inversión, el desarrollo energético y los intercambios educativos. La sociedad forjada entre Estados Unidos y el gobierno de México en los seis años pasados bajo la Iniciativa Mérida ejemplifica cómo el fortalecer la seguridad ciudadana sustenta estos objetivos más amplios”.²⁴ Los objetivos descritos por Brownfield podrían ser más importantes de lo que parecen. El economista Paul Collier afirma que “es mucho más probable que los conflictos sean causados por las oportunidades económicas que por las dificultades. Si las agendas económicas están propiciando el conflicto, entonces algunos grupos deben de estar siendo beneficiados por el conflicto y por lo tanto tienen un interés en iniciarlo y sostenerlo”.²⁵ Collier se refiere a guerras civiles, pero lo mismo aplica en México. La guerra antidrogas en México no puede denominarse “guerra civil” debido a las fuerzas internacionales involucradas (lo mismo puede decirse de otras supuestas guerras civiles, como las de Guatemala y El Salvador). La escala de la matanza ha llevado el conflicto mucho más allá de ser una guerra sucia. En algunos sentidos, es una guerra sin nombre propio. No obstante, la reflexión de Collier sobre las oportunidades económicas se cumple en México.

22 United States Government Accountability Office, “Status of Funding, Equipment, and Training for the Caribbean Basin Security Initiative”, Marzo 20, 2013, <http://www.gao.gov/assets/660/653173.pdf>, 3.

23 Clare R. Seelke, “Mérida Initiative for Mexico and Central America: Funding and Policy Issue”, *Servicio de Investigación del Congreso de los EE. UU.*, Abril 19, 2010, <http://fpc.state.gov/documents/organization/141560.pdf>, 2.

24 William Brownfield, “Remarks at the Council of Americas”, *Departamento de Estado de los Estados Unidos*, Marzo 22, 2013, <http://www.state.gov/j/inl/rls/rm/2013/207231.htm>.

25 Berdal y Malone, “Introduction”, 91.

En el caso de la guerra antidrogas en Colombia, centroamérica, México y otros casos, es claro que las facciones dominantes en el aparato estatal obtienen beneficios. El poder militar del Estado, la policía y el sistema de prisiones son fortalecidos por la asistencia y la cooperación de la superpotencia militar del mundo. Otro beneficiario de la guerra antidrogas generalmente es el sector corporativo trasnacional, pues obtiene condiciones mejoradas de inversión gracias a las reformas, así como un contexto social cada vez más militarizado y represivo, el cual permite mayor libertad para emprender megaproyectos destructivos y/o controversiales.

Los criminales que mueven las drogas son el tercer grupo de beneficiarios. Ellos son los ganadores de la guerra en los que se concentran los medios dominantes de comunicación y los gobiernos. Pero los grupos criminales en México no son los beneficiarios más importantes. Según un informe de 2010 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia, 85 por ciento de los ingresos brutos en el mercado de cocaína (de 35 mil millones de dólares) se quedaban en Estados Unidos. De esa cantidad, 15 por ciento les correspondía a los grandes distribuidores de EUA y a los comerciantes de nivel medio, y 70 por ciento a los vendedores callejeros que trataban directamente con los consumidores norteamericanos. Compárese esta cantidad con los 4.6 mil millones (13 por ciento) que se quedaba con los que traficaban el producto entre los Andes y EUA, y con el mero 1 por ciento que les tocaba a los productores andinos.²⁶ Estas estadísticas nos permiten entender que los narcotraficantes en México obtienen cantidades de dinero que son, en general, relativamente pequeñas. En todo el mundo existe una desigualdad semejante de las ganancias de los narcóticos. Según la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, “la prohibición de las drogas ha alimentado un comercio ilegal global cuyo valor alcanza, según los cálculos de la Comisión, cientos de miles de millones. Según datos de 2005, la producción representó 13 mil millones de dólares, la industria al mayoreo 94 mil millones y la venta al menudeo valía un aproximado de 332 mil millones”.²⁷

Aunque la mayor tajada del presupuesto y la atención mediática puesta en la Iniciativa Mérida le toca al aspecto militar, vale la pena examinar los aspectos estratégicos que constituyen el primer componente de la Iniciativa. De los 400 millones que Estados Unidos se comprometió a gastar en

26 UNODC, “World Drug Report, 2010”, 2010, http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf, 18.

27 Global Commission on Drug Policy. “Taking Control: Pathways to Drug Policies that Work”. Septiembre, 2014. P. 13.

seguridad en México, 73.5 millones se destinaron a financiar la reforma judicial, la construcción de instituciones y el Estado de Derecho; estos rubros de la Iniciativa Mérida son de vital importancia, pues conjuntan seguridad y economía en lo que posiblemente es una de las mayores innovaciones del Plan Colombia: la militarización de la ayuda y el destino del dinero antidrogas hacia la creación de políticas de inversión y regulaciones jurídicas más amigables. No obstante que no suelen mencionarse en el contexto de la guerra antidrogas, esos cambios legales muchas veces no se relacionan con las sustancias ilícitas, sino con la transformación del ambiente de negocios.

El aspecto político de la Iniciativa Mérida es administrado y coordinado por USAID, con participación de los departamentos de Justicia, Seguridad Doméstica, Defensa, Estado, y la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.²⁸ El objetivo general de USAID es “avanzar los intereses de política exterior de EUA al expandir la democracia y los libres mercados, al mismo tiempo que ofrecer una mano de ayuda a la gente que lucha por una vida mejor, recuperarse de un desastre o vivir en un país libre y democrático”.²⁹ La agencia, junto con el Departamento de Estado de EUA, pidió cerca de 50 mil millones de dólares del gobierno federal en 2014.³⁰ “La política estadounidense hacia el Hemisferio Occidental busca aprovechar y aumentar las oportunidades de crecimiento económico inclusivo, transformando a las clases medias emergentes de la región en nuevos mercados dinámicos para las exportaciones de EUA, y creando fuentes de trabajo en casa”, afirma el Departamento de Estado.³¹ El gobierno estadounidense planeó gastar alrededor de 205.5 millones de dólares en México en 2014, una reducción significativa con respecto al año previo, aunque sigue siendo el tercer lugar en la región, después de Colombia (323 millones) y Haití (300 millones). En conjunto, estos tres países representan más de la mitad del gasto total de EUA en el Hemisferio Occidental.³²

Tras ocho años de desestabilización y terror producidos por la guerra antidrogas, México está experimentando una serie de reformas y firmando nuevos acuerdos que profundizan el TLCAN de 1994. Al continuar la Iniciativa Mérida en 2014, el gobierno de EUA propuso usarla cada vez

28 Lo que describo como el primer componente incluye los “Pilares” Llamados “Institucionalizar reformas para proteger el estado de derecho y respetar los derechos humanos” y “Construir comunidades fuertes y resistentes”. US GAO, “Mérida Initiative”, 33.

29 USAID. “US AID History”. Junio 11, 2012. Retrieved Diciembre 21, 2012, <http://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history>.

30 USAID, “The State Department and USAID Budget”, http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/9276/FactSheet_StateUSAIDBudget.pdf.

31 Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Congressional Budget”, 620.

32 *Ibid.*

más para concentrarse en reformas políticas y legislativas en curso. “En México, la asistencia de Iniciativa Mérida continuará en transición hacia actividades constructoras de capacidad enfocadas a fortalecer las reformas institucionales de México, el Estado de Derecho y la prevención de la violencia en colaboración con el gobierno de Peña Nieto”.³³ Sobran las formas en las que EUA está involucrado en los cambios políticos en México, y ha habido un cúmulo de reformas desde que Peña Nieto fue electo presidente en julio de 2012, incluyendo las reformas energética, financiera, fiscal, laboral, política, educativa y en telecomunicaciones. “Si todo esto se desarrolla exitosamente, Peña Nieto habrá hecho progresar a México más que nadie desde que el TLCAN se aprobó, poniendo a México en el camino a la modernidad económica y democrática”, le dijo James R. Jones, socio directivo de Manatt Jones Global Strategies, a la periodista Eva Hershaw a fines de 2013.³⁴

Además de las reformas, México es parte de la Alianza Trans-Pacífico, un acuerdo comercial reservado entre doce naciones: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. Según la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, “Este acuerdo favorecerá los intereses económicos de EUA con algunas de las economías de crecimiento más rápido en el mundo; expandirá las exportaciones estadounidenses, que son cruciales para la creación y retención de trabajos en EUA; y servirá como una plataforma potencial para la integración económica a través de la región Asia-Pacífico”.

Las economías mexicana y estadounidense están estrechamente ligadas, y su protección y solidez son una justificación frecuentemente utilizada de la guerra antidrogas. Según *Strategic Forum*, un periódico militar estadounidense, “En años recientes, casi el 85 por ciento de las exportaciones de México han ido a Estados Unidos, haciendo que el éxito económico de México dependa del balance entre comercio y seguridad. El éxito económico de EUA también depende de este balance. La prosperidad duradera depende de la defensa y seguridad domésticas confiables, que sólo pueden alcanzarse por medio de mayor coordinación e intercambio de información entre socios militares, así como de la aplicación de la ley y la comunidad entre agencias. El presidente Calderón prometió mejorar la seguridad, aumentando así la prosperidad del pueblo mexicano”.³⁵ Aunque al principio de su periodo Peña Nieto habló

33 *Ibid.*

34 Eva Hershaw, “Aztec Tiger”, *Ozy* (Diciembre 5, 2013), <http://www.ozy.com/fast-forward/mexico-preps-for-a-comeback/4093.article>.

35 Victor Renuart Jr. y Biff Baker, “U.S.-Mexico Homeland Defense: A Compatible Interface”, *Strategic Forum*, National Defense University, Febrero 2010, <http://usacac.army.mil/cac2/call/>

de los vínculos entre violencia y crecimiento económico, cada vez es menos frecuente que los políticos de alto nivel en México y EUA hablen de ellos, pues están tratando de dirigir el discurso hacia lo puramente económico. “Prevenir la violencia y promover el desarrollo económico y social son parte de un círculo vicioso”, declaró el presidente Enrique Peña Nieto a la revista *Time* después de su elección. “Sin mejores oportunidades económicas no puedes tener mejor seguridad pública, y viceversa”.³⁶

Aunque no todo el trabajo de reforma política se está llevando a cabo con recursos de la Iniciativa Mérida, hay coordinación entre los programas de la Iniciativa y los programas de competitividad de USAID, cuyo propósito es crear un ambiente político más favorable al capital trasnacional.³⁷ Uno de los objetivos programáticos de USAID es supervisar que “el gobierno de México se vuelva más efectivo en limitar los monopolios y eliminar prácticas anticompetitivas”.³⁸ De acuerdo con un llamado en busca de propuestas publicado en enero de 2012, “USAID está trabajando con socios mexicanos para mejorar la gobernabilidad económica e incrementar la competitividad del sector privado”.³⁹ El objetivo de la agencia es defender un nuevo régimen regulatorio y privatizaciones adicionales, eficiencia e inversión extranjera directa en los sectores de transporte, financiero, energético y de telecomunicaciones.⁴⁰ “USAID apoya iniciativas mexicanas para incrementar la competitividad del país, por medio de la colaboración con entidades gubernamentales del nivel federal, estatal y local en México, organizaciones no gubernamentales y el sector privado, con el fin de mejorar un ambiente proclive a los negocios en México y formar apoyo sostenible para las reformas políticas en curso y los cambios sistemáticos”.⁴¹ USAID financia la Red Mexicana de Competencia y Regulación (RMCR) y el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), cuyas propuestas de regulación para la economía mexicana parecen extraídas directamente de una

docs/11-23/ch_10.asp.

36 T. Padgett, “Mexico’s Peña Nieto Talks to *TIME*: ‘We Can Move Beyond the Drug War’”, *Time* (Noviembre 30, 2012), <http://world.time.com/2012/11/30/mexicos-pena-nieto-talks-to-time-we-can-move-beyond-the-drug-war/#ixzz2PvNnOdBf>.

37 US GAO, “Mérida Initiative”, 29.

38 USAID Mission to Mexico, “Competitiveness Program: 2nd Quarter FY 2010”, Enero–Marzo 2010, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACR720.pdf.

39 USAID. “USAID/Mexico Annual Program Statement (APS)”, Enero 30, 2012, <http://www07.grants.gov/search/downloadAtt.do;jsessionid=TJgHRLIPMvzGSg2cXvSMjwRHSvGsBKD7hGGqCPfirv8VQ5BnXCrGW!-861966415?attId=113385>, 11.

40 Magdalena Lara Monroy, ed., *Acciones Cruciales en competencia y regulación*, Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., 2011, <http://accionescruciales.cidac.org/documentos/acciones.pdf>.

41 USAID, “Mexico: Country Overview”, <http://transition.usaid.gov/mx/index.html>.

lista de deseos del Departamento de Estado de EUA.⁴² CIDAC promueve las ventajas de la inversión extranjera directa y de programas más agresivos de privatización. Además, USAID transfiere trabajo a firmas privadas cuya tarea es llevar a cabo diversos programas diseñados para facilitar la inversión en México. Esto es significativo porque muchas de las firmas subcontratadas por USAID son contratistas militares que han participado en esfuerzos de reconstrucción en zonas destruidas por la guerra. Estas firmas son las mismas a las que les encargaron apoyar la implementación de reformas una vez que EUA y sus aliados hubieron invadido y ocupado Irak. En México, la destrucción no se debe a ataques aéreos de EUA, no obstante lo cual el país ha sido muy dañado por la guerra antidrogas. Aquí, la reconstrucción y las reformas se implementan al mismo tiempo que continúa el terror y la violencia.

En 2009 USAID le otorgó 17.8 millones de dólares a Abt Associates para realizar el Programa de Competitividad de México, que está formado de cuatro partes: construir gobernabilidad ambiental sustentable, incrementar la competitividad del sector privado, hacer más competitivos a los mercados de materias primas, e incrementar la inversión y el uso de energías limpias.⁴³ Abt refirió la sección de competitividad del sector privado del programa a Casals & Associates; este segmento tiene las siguientes metas:

- Incrementar la transparencia y responsabilidad del gobierno
- Promover la competencia dentro del gobierno a través de reformas políticas y cambios regulatorios
- Mejorar la comunicación gubernamental
- Promover redes de organización no gubernamental y asociaciones público-privadas para fortalecer el papel de la sociedad civil.⁴⁴

42 Monroy, *Acciones Cruciales*.

43 Abt Associates, "Mexico Competitiveness Program", <http://www.abtassociates.com/Websites/2012/Mexico-Competitiveness-Program.aspx>. Abt tiene sus bases firmemente plantadas en la defensa y la guerra: "Abt Associates se concentró en transferir tecnología y sistemas de defensa para la aplicación civil, como en la Guerra contra la Pobreza de la nación", de acuerdo con el portal de internet de la firma" ("Our History", <http://www.abtassociates.com/About-Us/Our-History.aspx>). "Abt también proporcionó reportes que pronosticaron la disponibilidad de cocaína en las Américas para la Oficina Estadounidense de Políticas Nacionales para el Control de Drogas en 2002" (<https://www.ncjrs.gov/ondcpcpubs/publications/pdf/cocaine2002.pdf>).

44 Casals & Associates, "Building More Effective and Efficient Government in Mexico", <http://www.casals.com/2010/03/building-more-effective-and-efficient-government-in-mexico/>.

Tanto Casals & Associates como Abt Associates tienen vínculos directos con el ejército de EUA: Casals & Associates pertenece a DynCorp, un contratista de defensa que, de acuerdo con su página de internet, ha “reclutado, entrenado y desplegado a más de 6,000 pacificadores civiles calificados y entrenadores de policía a 11 países, incluyendo Haití, Bosnia, Afganistán e Irak, para el Departamento de Estado”, mientras que Abt comenzó “transfiriendo tecnología y sistemas de defensa para usos civiles”.⁴⁵

Estas dos corporaciones asociadas al ejército se encuentran activas en el México de hoy, promoviendo reformas políticas diseñadas para mejorar las condiciones de las empresas transnacionales y los inversionistas que buscan hacer negocios en México. Sus programas se están aplicando al mismo tiempo que el país se militariza y paramilitariza debido a la guerra antidrogas.

Otro programa financiado por USAID en México está en manos de Evensen Dodge International, una firma de mercado de capital global que ayuda a los estados mexicanos a conseguir dinero por medio del arreglo de emisión de bonos y préstamos que proveen recursos para invertir en sociedades público-privadas.⁴⁶ Según el Departamento de Estado de EUA, “Evensen Dodge International, una compañía financiera, está trabajando con la Embajada de Estados Unidos en México y con el gobierno mexicano para reformar el marco legal de pensiones a nivel federal. [Fernando J. Gama, de Evensen Dodge] dijo que estas reformas están permitiendo a los estados de México financiar sistemas de energía renovable”.⁴⁷ Si quedaba alguna duda de la benevolencia de USAID y los programas de asistencia exterior, fue disipada en 2001 por el entonces Secretario de Estado, Colin Powell, cuando, con una franqueza inusual, habló del verdadero papel de la ayuda de EUA para el desarrollo: “Justo como nuestros diplomáticos y militares, las ONGs americanas están allá afuera sirviendo y sacrificándose en las fronteras de avance de la libertad... las [ONGs] hacen un gran trabajo multiplicando nuestra fuerza, y son una parte importante de nuestro equipo de combate”.⁴⁸

45 DynCorp, “About Us”, <http://www.dyn-intl.com/about-us/overview.aspx>. And Abt Associates, “Our History”.

46 Evensen Dodge International, “About Us”, http://www.dodgeglobal.com/our_clients.html.

47 S. Goldfarb, “U.S. Center at COP-16: U.S. and Mexico Bi-National Cooperation on Climate Change and Development”, *Dipnote*, Diciembre 9, 2010, http://blogs.state.gov/index.php/site/entry/us_center_mexico_cooperation.

48 Kristian Williams, “Life during Wartime: Resisting Counterinsurgency”, in *Life During Wartime*, 104.

¿Las reformas de Peña Nieto?

Días antes del comienzo de la presidencia de Enrique Peña Nieto, el *New York Times* reportó que “él ha prometido reescribir las leyes fiscales, abrir el sector estatal petrolero a la inversión privada y regular los poderosos monopolios de México”.⁴⁹ Los compromisos de Peña Nieto se alinean casi a la perfección con las propuestas financieras y económicas coordinadas por USAID para México.

Antes de asumir la presidencia, el partido de Peña Nieto (PRI) se unió con el de Calderón (PAN) para aprobar una reforma laboral que introdujo el salario por horas (alrededor de 70 centavos de dólar por hora) en lugar del salario mínimo diario, y disminuyó los requisitos legales de contribuciones corporativas al programa de seguridad social. Este golpe contra la ya precaria clase trabajadora mexicana fue el cierre de Calderón y la antesala de una nueva era de reformas bajo el PRI. En su primer día de trabajo (1 de diciembre de 2012), Peña Nieto lanzó el “Pacto por México”, una coalición de los tres partidos políticos más grandes del país que ha impuesto reformas educativas, financieras, fiscales, políticas y energéticas.⁵⁰ Por mucho, las reformas implementadas en México se basan en el modelo de austeridad y ajuste estructural. La promoción de reformas estructurales en México se consagra en la Iniciativa Mérida y es un ejemplo crucial de cómo el capitalismo antidrogas opera para transformar las economías nacionales en beneficio del sector corporativo.

A principios de 2014 visité a Alejandro Hope en su oficina de Polanco, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. Él es una analista que ha trabajado con muchos grupos de estudio de México y Estados Unidos —incluyendo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Wilson Center— y le pedí su opinión sobre el primer año de Peña Nieto. “Hay mucho *wishful thinking* [sic] y mucho de propaganda. El primer año de Peña Nieto no fue bueno”. Hope señaló que las reformas políticas, de educación y de telecomunicaciones sólo se han realizado parcialmente, pues están atoradas en el nivel de implementación y aceptación estatal. “Si no hubiera aprobado la reforma energética a mediados de diciembre, el primer año de Peña Nieto hubiera sido declarado un fracaso”.

49 Elizabeth Malkin y Randal Archibold, “A New Leader Pushes a Different Side of Mexico”, *New York Times*, Noviembre 27, 2012, http://www.nytimes.com/2012/11/28/world/americas/mexico-seeks-to-recast-relationship-with-us.html?_r=1&.

50 El Partido de la Revolución Democrática (PRD) abandonó el Pacto por México en los preparativos de la reforma energética.

Sin embargo, vale la pena echar un vistazo a algunas de las iniciativas de ley impulsadas bajo el liderazgo de Peña Nieto. El 11 de diciembre, diez días después de su llegada a la presidencia, el gobierno cambió dos artículos de la Constitución, dando lugar a lo que llamaron una reforma educativa. “Lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa disfrazadas”, escribió el columnista Luis Hernández Navarro en *La Jornada*.⁵¹ Hernández afirmó que el cambio constitucional facilita la privatización del sistema de educación pública. Los cambios involucran pruebas estandarizadas y mayor precariedad laboral para los maestros mexicanos, y requieren clases de inglés para sus estudiantes. La reforma fue muy discutida; dos meses de marchas y bloqueos por parte de maestros, especialmente profesores indígenas de Oaxaca y Chiapas, demostraron la resistencia popular en su contra. Se montaron casas de campaña y un campo de protesta en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Durante meses, los maestros se negaron a regresar a clases hasta que sus demandas —de educación plurilingüe (de español y lenguas originarias, no inglés), y contra las pruebas estandarizadas— fueran aceptadas.

Las apuestas son altas cuando se trata del sistema educativo mexicano, y el sector corporativo estadounidense en particular tiene muchos intereses invertidos en la innovación y educación en México. “Con un México capaz de proveer a las compañías de EUA con mano de obra joven, calificada y barata, y con un EUA capaz de jugar un rol potencialmente crucial en la transferencia de tecnología y conocimiento práctico a su vecino del sur, claramente hay muchas oportunidades para que ambas administraciones promuevan una mayor integración económica”, afirma un artículo reciente en el *Financial Times*. General Electric tiene un importante centro de investigación y diseño en Querétaro, ciudad que se está convirtiendo rápidamente en el más importante complejo aeroespacial del país. Los ingenieros —cada año se gradúan 115,000 en México—, son particularmente solicitados, y pueden ser contratados por menos de mil dólares al mes. Este es un elemento crucial en la capacidad de México para atraer inversión extranjera directa en las industrias de manufactura avanzada, como la automotriz y la aeronáutica. Según datos de la Secretaría de Economía de México, el número de empresas aeronáuticas en el país aumentó de 61 a 249 entre 2005 y 2011, y 85 por ciento de las exportaciones aeroespaciales van a Estados Unidos. Estas exportaciones aumentaron más del doble

51 Luis Hernández Navarro, “Las mentiras sobre la reforma educativa”, *La Jornada*, Enero 15, 2013, <http://www.jornada.unam.mx/2013/01/15/opinion/017a1pol>.

en el mismo periodo, alcanzando 4.3 mil millones de dólares.⁵² En 2011, la industria automotriz representó 6 por ciento de la inversión extranjera directa en México y 23 por ciento de sus exportaciones. En un discurso ofrecido el mismo día en que Peña Nieto asumió el papel de presidente, el embajador de EUA en México afirmó esto: “La competitividad creciente le ha permitido a México aprovechar una porción mayor de las importaciones de EUA —cerca de 13 por ciento este año. Esta tendencia es impulsada por el costo creciente de la mano de obra en China y por el impacto de los altos precios energéticos del transporte. Hay sólidas razones para creer que esto no es un fenómeno a corto plazo. Mientras que México ha sido el segundo mayor destino de exportaciones estadounidenses por un tiempo, algunos economistas ahora predicen que México superará a China como la mayor fuente de importaciones hacia EUA en 2018”.⁵³

Ha habido presión de parte de las instituciones financieras internacionales para cambiar el sistema educativo en México; en un comunicado de prensa de diciembre de 2012 que anunciaba la renovación de una línea de crédito de 73 mil millones para México, el FMI lanzó un llamado a favor de las reformas educativas, entre otros puntos.⁵⁴ Peña Nieto ya se ha ganado la admiración del Fondo Monetario Internacional, cuyos líderes dijeron que estaban “muy impresionados con la agenda de reformas estructurales del presidente Peña Nieto”.⁵⁵

La estrategia está funcionando, al menos según las élites económicas. El 8 de mayo de 2013, el Secretario de Hacienda de México, Luis Videgaray, presentó una reforma financiera de 927 páginas al Congreso, que incluía trece decretos y enmiendas a 23 leyes federales. Los cambios al sistema financiero son necesarios no sólo para estimular la inversión extranjera directa, sino también para abandonar el esquema de recaudación fiscal basado en la petrolera paraestatal Pemex, lo que allana el camino a su privatización. El mismo día en que se publicó la reforma, Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de México a BBB+, atribuyéndolo a “un compromiso mayor del

52 ProMéxico, *México: La puerta de acceso al mundo*, Octubre 2012, <http://www.promexico.gob.mx/es/mx/boletin-promexico-comparte>.

53 Anthony Wayne, “Ambassador Wayne’s Remarks to the U.S. Mexico Chamber of Commerce Breakfast attended by CODEL Sessions, Cuellar, McCaul, and Polis”, Diciembre 1, 2012, http://mexico.usembassy.gov/eng/ebio_ambassador/texts/ambassador-waynes-remarks-to-the-us-mexico-chamber-of-commerce-breakfast-attended-by-codel-sessions-cuellar-mccaul-and-polis.html.

54 International Monetary Fund, “IMF Renews \$73 Billion Credit Line for Mexico”, Diciembre 11, 2012, www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/car121112a.htm.

55 International Monetary Fund, “Transcript of a IMF Western Hemisphere Department Press Briefing”, Abril 19, 2013, <http://www.imf.org/external/np/tr/2013/tr041913.htm>.

esperado de la nueva administración y del Congreso a aprobar reformas estructurales”.⁵⁶ Videgaray explicó que la reforma buscar aumentar la competencia en el sector bancario y crear incentivos al préstamo;⁵⁷ dos veces, el secretario invocó como modelo para el sistema financiero mexicano a Chile, que desde hace tiempo es el ahijado latinoamericano del neoliberalismo. “A pesar de las reformas, el desempeño de la economía mexicana en las últimas tres décadas no ha sido satisfactorio” declaraba un informe publicado antes de las reformas por el Banco de México.⁵⁸ En una presentación en marzo de 2012, un representante del Banco de México señaló correctamente que el proyecto de reformas en marcha al banco central del país facilitaría a las compañías hacer negocios en México, removería “obstáculos legales”; propiciaría la flexibilidad laboral, el “fortalecimiento del Estado de Derecho” y la consolidación de las políticas macroeconómicas.⁵⁹ “Un mal historial en el pago de préstamos, consecuencias limitadas de no pagar y un ambiente legal difícil para los cobros también entorpecen el crédito en México”, reportó el *Wall Street Journal*,⁶⁰ por lo que entre los objetivos principales de las iniciativas de reforma está “mejorar los protocolos de juicio en busca de una resolución más rápida de controversias y aumentar los derechos de los prestamistas a través de los juzgados, lo cual puede acelerar los cobros”.⁶¹

La reforma financiera, lejos de llevar el crédito a los mexicanos desfavorecidos y campesinos que poseen la tierra colectivamente —que no tienen títulos de pleno dominio—, estimula el crecimiento del crédito en forma de tarjetas de crédito. Además crea el marco legal para que el gobierno facilite el embargo de propiedades pertenecientes a los deudores, algo previamente no contemplado en México. Citibank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria son los bancos más grandes, y HSBC, Santander y Banorte completan el grupo que prácticamente controla la banca en México. Algunos expertos afirman

56 Ben Bain y Natacha Cattan, “Mexico Credit Rating Upgraded by Fitch to BBB+; Peso Rallies”, *Bloomberg News*, Mayo 8, 2013, <http://www.bloomberg.com/news/2013-05-08/mexico-credit-rating-upgraded-by-fitch-to-bbb-currency-rallies.html>.

57 Luis Videgaray, “Palabras del Secretario de hacienda y crédito público, Dr. Luis Videgaray Caso, en la presentación de la iniciativa de reforma financiera”, Mayo 8, 2013, http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_discurso_funcionarios/secretarioSHCP/2013/lvc_reforma_financiera_08052013.pdf.

58 Manuel Sánchez González, “Economía Mexicana: Una mirada de largo plazo”, Banco de México, Marzo 8, 2012, <http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7B694E563B-9721-B4A2-3023-D914148CCC91%7D.pdf>, 24.

59 *Ibid.*, 22.

60 Amy Guthrie, “Mexico Proposes Financial Reform in Effort to Boost Lending”, *Wall Street Journal*, Mayo 8, 2013, <http://online.wsj.com/article/BT-CO-20130508-713157.html>.

61 Reyes Retana, Roberto Arena, et al, “Mexico’s Large-scale Financial Reform: Greater Availability of Credit, Lower Costs and Certainty of Legal Remedies”, *Lexology*, Mayo 22, 2013, 2013, <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3d7aeea-792e-4b8c-8d02-e1a03b0c32d7>.

que las reformas financieras introducidas el 8 de mayo de 2013 como parte del Pacto por México beneficiarán principalmente a estos grandes bancos. “La financiarización se logrará mediante una penetración más grande en pequeñas y medianas comunidades, incluyendo áreas pobres y rurales, lo que podría significar en última instancia un proceso de endeudamiento más profundo de buena parte de la población de México”, dijo el dr. Luis Ignacio Román Morales, profesor e investigador en el Departamento de Economía, Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Guadalajara. “Se hará mucho más fácil para los bancos e instituciones financieras en general cobrarle al deudor. Eso es muy serio en muchos sentidos”.⁶²

Los *ejidos* también se ven amenazados por la reforma financiera.⁶³ El sistema ejidal significa que hay dueños de forma colectiva de la tierra, parte de la cual es trabajada por familias particulares y otras partes se aprovechan en conjunto. La tierra ejidal solía ser propiedad colectiva de grupos de campesinos, y heredada de una generación a otra. Desde las reformas previas al TLCAN en 1992, fragmentos demarcados de los ejidos pueden convertirse en lotes con título de pleno dominio. Con base en la reforma financiera de 2013, se hizo posible embargar estas tierras a cambio de deudas rurales, aumentando la devastación de la base territorial del campo. “En otras palabras, podríamos volver a tener bancos terratenientes”, dijo Román Morales. Por primera vez, los bancos podrían también tomar posesiones y propiedades por incumplimiento de pago, así como apropiarse de pequeños negocios.

Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) y presidenta del Foro Latinoamericano y del Caribe en Finanzas Rurales (FOROLAC-FR), señala que la reforma financiera no ayudará a los millones de campesinos mexicanos que se han opuesto a convertir sus tierras en terrenos de pleno dominio. “Reciben crédito los que tienen garantías materiales que otorgar, mientras que el 80% de nuestros agricultores tienen propiedad social, es decir, tienen ejidos, y no pueden dejar su tierra en garantía, está prohibido por la Constitución”, me explicó. “Esta reforma financiera nunca les va a beneficiar, nunca, y no hay ninguna acción en esta reforma financiera destinada a lograr que el crédito rural, el crédito agrícola se pueda activar para beneficiar la producción de alimentos”.

62 Dawn Paley, “Til Debt Do Us Part”, CIP Americas Program, Agosto 8, 2013, <http://www.cipamericas.org/archives/10229>.

63 Los ejidos son tierras agrícolas de propiedad colectiva. Los miembros de la comunidad trabajan parcelas específicas, y algunas secciones del ejido se destinan específicamente al trabajo colectivo.

La renovación del préstamo del FMI en 2012 vino con el mensaje de que “una reforma estructural amplia se necesitaría para desencadenar el potencial de crecimiento de México”. El Secretario de Hacienda y Crédito Público de México ha admitido que la reforma financiera es necesaria para otras reformas impulsadas por el Pacto por México.⁶⁴ “Lo que algunos países están haciendo, y este es el caso de México, estamos tratando de impulsar una agenda de reforma estructural que distinga nuestra economía de otras economías del mundo”, declaró el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela Rodríguez.⁶⁵

Como un síntoma de la alegría de Washington ante las reformas de Peña Nieto, en febrero de 2014 la revista *Time* le dedicó su portada. En la foto, la cabeza de Peña Nieto está ligeramente inclinada hacia arriba; se ve arrogante, seguro, apuesto. A la altura de su pecho, gruesas letras blancas gritan *Saving Mexico* [“salvando a México”]. Y debajo: “Cómo las avasalladoras reformas de Enrique Peña Nieto han cambiado la narrativa en su nación narco-manchada”. Los críticos señalaron que el artículo de *Time* parecía un texto de publicidad pagada. El periodista Daniel Hernández escribió: “Extrañamente, sin embargo, no conozco a nadie que llame a esto “el momento de México”, más que aquellos que se benefician directamente de la construcción de la impresión de un boom económico en México, un boom que de hecho no se ha manifestado, y ciertamente no ha llegado hasta el mexicano promedio”.⁶⁶

La portada de *Time* mostró hasta dónde los medios de EUA estaban dispuestos a llegar para crear una idea positiva de México. A partir de 2012 y acelerándose con el regreso del PRI, hubo un movimiento de relaciones públicas para redefinir el país como un Tigre Azteca económico, experimentando un nuevo Milagro Mexicano. Este tipo de mensajes se basan en dudosas afirmaciones de que México tiene una clase media en crecimiento, e ignora la violencia estatal y paramilitar en curso. Según un artículo de posición estratégica de Vianovo, una compañía de publicidad y relaciones públicas, para cambiar la imagen de México, una buena historia “debería subrayar que el crecimiento estable del PIB de México y la boyante clase media representan un verdadero milagro económico a pesar de estos retos. Debería enfatizar que la violencia está contenida en ciertas regiones geográficas, y que la mayor parte del país no se ve afectada. No

64 Amy Guthrie, “Mexico Proposes Financial Reform”.

65 International Monetary Fund, “Transcript of a Press Briefing by G24 Ministers”, Octubre 10, 2013, <https://www.imf.org/external/np/tr/2013/tr101113.htm>.

66 Daniel Hernández, “Saving Mexico? Selling Mexico? Slaying Mexico?”, *Vice* (Febrero 21, 2014), <http://www.vice.com/read/saving-mexico-selling-mexico-slaying-mexico>.

pospondrías un viaje a Nueva York debido a la violencia en St. Louis, ¿verdad?”.⁶⁷

“En India la gente te pregunta sobre China, y en China la gente te pregunta sobre India: ¿qué país se volverá la potencia económica dominante en el siglo XXI? Ahora sé la respuesta: México”, escribió Thomas Friedman en el *New York Times*.⁶⁸ Friedman, un periodista y columnista conocido por su neoliberalismo militante, prosiguió a ensalzar la competitividad de México y a sugerir que Estados Unidos debería mudar su inversión bélica de Afganistán a México. “Una mejor integración de la destreza de manufactura e innovación de México y Norteamérica es un juego en que todos ganan. Hace a las empresas estadounidenses más redituables y competitivas, lo que les permite crecer en casa y en el extranjero, y les da a los mexicanos una razón para quedarse en su país, y reduce la violencia. Diario se mueven 1.5 mil millones de dólares en comercio con México, y hemos estado gastando 300 millones diarios en Afganistán. Mala idea”.

Extracción

Sin la guerra antidrogas, México de todos modos habría implementado reformas neoliberales, pero no hay duda de que el miedo, la distracción y el terror creados por la guerra, así como el financiamiento especial dado en su nombre, ayudaron a agilizar el proceso. También cambió el balance de poder, ya que muchos mexicanos, indignados por la percepción de que la guerra antidrogas era culpa del PAN, partido del expresidente Calderón, volvieron a votar por el PRI, cuya elección cambió el discurso de relaciones públicas —la economía se volvió el tema principal y los retos de seguridad y de la guerra antidrogas se mantuvieron fuera de la discusión. “Es un error limitar nuestra relación bilateral a los temas de drogas y seguridad”, escribió Enrique Peña Nieto en un editorial en el *Washington Post* un mes antes de asumir la presidencia.⁶⁹ “En el TLCAN tenemos un fundamento sólido para integrar más nuestras economías a través de mayores inversiones en

67 James Taylor y Mike Shannon, “How Mexico Can Rescue Its Brand”, Mayo 9, 2012, <http://vianovo.com/news/how-mexico-can-rescue-its-brand>.

68 Thomas L. Friedman, “How Mexico Got Back in the Game”, *New York Times*, Febrero 23, 2013, http://www.nytimes.com/2013/02/24/opinion/sunday/friedman-how-mexico-got-back-in-the-game.html?_r=0.

69 Enrique Peña Nieto, “U.S., Mexico Should Develop Their Economic Bond”, *Washington Post*, Noviembre 23, 2012, http://www.washingtonpost.com/opinions/enrique-pena-nieto-us-mexico-should-develop-their-economic-bond/2012/11/23/248b8ec4-3589-11e2-9cfa-e41bac-906cc9_story.html.

finanzas, infraestructura, manufactura y energía. Juntos, debemos construir una región más competitiva y productiva”. En la primera visita de Obama a México durante el periodo de Peña Nieto, el *New York Times* reportó que los presidentes se concentrarían en “competitividad [sic], educación e innovación, junto con infraestructura fronteriza, comercio, migración y seguridad civil entre otros asuntos de interés conjunto”.⁷⁰ En la Ciudad de México, Obama impulsó la reforma migratoria que estaba a punto de llegar al Senado, donde la Iniciativa de Reforma Migratoria se transformó en un esfuerzo para que Estados Unidos gastara otros 46 mil millones en militarizar la frontera EUA-México.⁷¹ Desde entonces la reforma se ha estancado y es muy poco probable que haya movimiento sobre ella durante lo que queda de la administración de Obama.

Actualmente, los gobiernos prefieren el término “competitividad” cuando hablan de privatizaciones y reformas regulatorias diseñadas para beneficiar al sector corporativo. Antes, la competitividad era conocida como austeridad, un apodo que ha perdido popularidad entre la élite económica debido a la percepción creciente de las duras consecuencias que la austeridad tiene en la sociedad.⁷²

Pemex, la paraestatal petrolera, se fundó en 1938 cuando el presidente Lázaro Cárdenas anunció que la industria del petróleo en México, hasta entonces controlada por compañías principalmente de origen estadounidense, sería expropiada. Ahora Pemex es la joya de la corona del movimiento privatizador.⁷³ Muchos mexicanos prominentes, incluido Peña Nieto, se han mostrado a favor de la privatización,⁷⁴ y algunos como el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores han propuesto usar como modelo la reforma del sector petrolero colombiano.⁷⁵ Según el *Financial Times*, “la apertura del muy protegido sector petrolero de México, dominado por el monstruo estatal

70 Ashley Southall, “Obama to Visit Mexico and Costa Rica in May”, *New York Times*, Marzo 27, 2013, <http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2013/03/27/obama-to-visit-mexico-and-costa-rica-in-may/>.

71 Todd Miller, “Senate Disguises Militarization as Immigration Reform”, *Salon.com*, julio 11, 2013, http://www.salon.com/2013/07/11/the_u_s_mexican_border_is_ground_zero_for_a_domestic_surveillance_state_partner/.

72 Como se ha puesto en evidencia recientemente con la implementación de medidas de austeridad en España, Portugal, Italia y Grecia.

73 Macario Schettino, “El mito de la energía en México”, *Nueva Sociedad* 220 (Marzo–Abril 2009): 146.

74 Flavia Krause-Jackson y Nacha Cattán, “Mexican Presidential Candidate Seeks Private Investment in Oil Industry”, *Bloomberg*, Noviembre 17, 2012, <http://www.bloomberg.com/news/2011-11-17/pena-nieto-pledges-mexican-oil-opening-calderon-found-elusive.html>.

75 Diana Fernández, “PEMEX Can Be More Competitive”, Abril 2, 2012, <http://eng.fundsamericas.com/news/business/8845/PEMEX-can-be-more-competitive>.

Pemex, podría crear oportunidades inéditas para las compañías petroleras estadounidenses así como para la transferencia de tecnología que México desesperadamente necesita”.⁷⁶ Buena parte del 2013 estuvo dedicado a preparar el terreno político para las reformas constitucionales requeridas para abrir el sector petrolero a la inversión privada. En una conferencia de 2013 ante el Consejo de las Américas, Emilio Lozoya, presidente de Pemex, sugirió que compañías extranjeras podrían empezar a extraer gas y petróleo de lutitas en México, una vez que la nueva legislación entrara en vigor. “Pemex deja de hacer muchos negocios, porque como cualquier empresa, tiene una capacidad limitada de inversión. Sin embargo, la legislación no permite que otros jugadores desarrollen los negocios que Pemex deja sobre la mesa por falta de capacidad de inversión. Por lo tanto, no solo no se extraen los hidrocarburos ni se genera una energía más barata, sino que inclusive ni siquiera los empleos son generados. Por lo tanto, explorar la posibilidad de una mayor participación del sector privado sería en beneficio del país, y es parte de la reforma energética que el presidente Enrique Peña estará lanzando este año”, dijo Lozoya.

Una primera reforma energética, firmada por Calderón en 2008, no modificó la Constitución pero sí permitió el aumento de los contratos de servicios entre Pemex y el sector privado. Lozoya, cuyo padre fue Secretario de Energía del expresidente Salinas de Gortari, subrayó que Peña Nieto no está a favor de una privatización completa, pero sugirió que abrir Pemex a una mayor inversión mexicana sería un paso positivo hacia adelante. Hasta antes de las reformas aprobadas en diciembre de 2013, la Constitución Mexicana estipulaba que los hidrocarburos eran patrimonio de todos los mexicanos, lo que se traducía en que las compañías extranjeras operaban con base en contratos preestablecidos y no obtenían ganancias en función de la cantidad de petróleo extraído.

A partir de entonces, ciertas limitaciones a la participación extranjera en México se eliminaron. Antes de la reforma energética, México tenía uno de los sectores petroleros más cerrados —más que el de Venezuela, que fue parcialmente nacionalizado por Hugo Chávez. “No hay comparación en América Latina, el único régimen que sigue siendo notablemente cerrado es el de Kuwait y posiblemente el de Corea del Norte”, dijo la dra. Miriam Grunstein, profesora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la Ciudad de México. “La Venezuela de Chávez era más abierta que Pemex hace dos meses”, comentó mientras platicábamos una tarde

76 Adam Thompson, “Mexico-US: Let’s Talk Trade”, *Financial Times*, Marzo 28, 2013, <http://blogs.ft.com/beyond-brics/2013/03/28/mexico-us-lets-talk-about-trade/?#axzz2VG17jPbo>.

cálida a finales de enero de 2014. Para abrir más los extensos campos de gas y petróleo del país, hacían falta reformas constitucionales a los artículos 25, 26 y 27, que permitirían a compañías distintas de Pemex obtener sus ganancias directamente del petróleo o gas extraído del suelo. Estas reformas, aprobadas en diciembre de 2013, se justificaron con base en la creación de empleos (se auguraron hasta dos millones y medio de nuevos empleos para el 2025 si la reforma se aprobaba),⁷⁷ competitividad, y la promesa de ofrecer gas y electricidad más baratos a los mexicanos.

A Grunstein le parecieron sorprendentes los resultados de la Reforma Energética, y dijo que los expertos de la industria petrolera no creían que una reforma tan radical sería posible en México. “Es una reforma que sin duda cambia el sector energético en México en 180 grados. Por primera vez vamos a tener participación privada desde el pozo petrolero hasta el volante del automovilista, como dicen los norteamericanos: *from the well to the wheel*. Es total, y va a cambiar no únicamente el sector energético sino el orden económico del país”. El hecho de que las utilidades de la compañía petrolera van directo al presupuesto federal, y que representan cerca del 40 por ciento del ingreso total del Estado y 70 por ciento del presupuesto nacional total, es algo a lo que generalmente los medios le dan la vuelta. Las consecuencias a largo plazo de privatizar Pemex, y remover el correspondiente flujo de recursos del presupuesto, serían equivalentes a implementar un programa de austeridad severa, con un impacto masivo en el país. Además de la pérdida de ganancias, recaudar los relativamente altos impuestos para que las compañías operen en México podría ser un problema. “Ahora, el gobierno mexicano históricamente no ha sido un buen ‘tax collector’, no ha sido un buen recaudador de impuestos, entonces es muy cuestionable que sí lo pueda hacer, o que no haya una corrupción fatal y que presionen y cohagan e impugnen...” dijo Grunstein. “Si México no logra retener su parte del ingreso fiscal, va a haber un golpe de Estado” en algún momento dentro de los próximos quince años, pronosticó. En Venezuela, la participación privada en la compañía petrolera estatal se permitió en 1992, y en 1998, Hugo Chávez Frías, un candidato abiertamente socialista, ganó la presidencia. Si México mal administrara de manera semejante los ingresos petroleros y la población se radicalizara hacia la izquierda, la militarización y la expansión del sistema penitenciario en México, que se han dado al mismo tiempo que la guerra antidrogas, podrían utilizarse para reprimir la disidencia.

77 Esther Arzate y Maribel Zavala, “Bienvenido: El Abanico Energético”, *Petróleo y Energía* (Diciembre 2013–Enero 2014):19.

Además de la apertura de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue destrípada como parte de la Reforma Energética. La CFE tenía el monopolio de la generación y distribución de electricidad en México desde 1937, y desde siempre funcionó con pérdidas al proveer a muchos en México de electricidad subsidiada. Hubo protestas contra las presas y las tarifas altas en algunas partes, pero las extremas tensiones que existen en los mercados privados de energía fueron en gran parte evitados (por ejemplo, las protestas y masacre de 2012 en Totonicapán, Guatemala, que fueron motivadas en parte por el aumento de precios de la energía). El monopolio de la CFE fue velozmente desarmado con las reformas de diciembre de 2013. “La CFE va a sufrir un cambio muy importante. Yo creo que la CFE incluso se va a ver debilitada más rápidamente que Pemex en el sentido de que va a haber un mercado ya competitivo para la generación, y de ahí puede haber contratos bilaterales con los usuarios industriales”, concluyó Grunstein. Que las mineras y otras industrias de alto consumo de energía puedan obtener su propia fuente de energía seguramente será un estímulo a la inversión. También podría crear lucrativos negocios secundarios para las corporaciones transnacionales, a las que otras jurisdicciones (como Columbia Británica, Canadá) les permiten, para estimular la inversión, vender al comprador estatal pero a precio de mercado los excedentes de energía generada por presas subsidiadas.

El gobierno mexicano ha promovido activamente la inversión minera, y actualmente el 70 por ciento del sector está en manos extranjeras.⁷⁸ Los proyectos mineros han sido de los espacios más conflictivos de la expansión capitalista en México, y la mayor parte de la producción de oro y plata en el país se da en los estados con las tasas más altas de violencia (Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y Durango). “La producción minera en México se ha disparado hasta en un 50% en 2010, y se produjo más del doble en los diez años que terminan en 2010 que en los tres siglos de minería española. Hoy, ocho de los once mayores productores de oro en el país son canadienses, y la producción áurea creció un 118% entre 2007 y 2012”.⁷⁹ En un movimiento contrario a las políticas de los gobiernos previos, los impuestos a la industria minera, incluyendo un impuesto sobre las regalías (*royalty*) del 7.5 por ciento, se introdujeron como parte de la reforma fiscal,

78 México es el mayor productor de plata en América Latina, y el segundo mayor en el mundo, y es el tercer productor de cobre en la región, de acuerdo con ProMéxico. ProMéxico, *México: La puerta de acceso al mundo*, 2013.

79 Ralph Cuervo-Lorens, “Commentary: A Better Response to Mexico’s New Mining Taxes”, *The Northern Miner*, Febrero 24, 2014, <http://www.northernminer.com/news/commentary-a-better-response-to-mexicos-new-mining-taxes/1002929894/?ref=rss&ctid=1002929894>.

para el disgusto de muchas mineras extranjeras.⁸⁰ Sin embargo, “perdido en el mar de las críticas está el hecho de que hasta un 60% de las regalías serán deducibles de impuestos”.⁸¹ Los activistas contra la minería calculan que hay más de cincuenta conflictos mineros activos en México, y conforme la inversión en el sector siga creciendo, la división a favor y en contra de la minería está destinada a polarizarse aún más.

Como hemos visto, durante los siete años desde que empezó la guerra antidrogas en México se han aprobado una serie de reformas que ayudan a mejorar los indicadores macroeconómicos del país. En febrero de 2014, el índice crediticio de México volvió a cambiar, esta vez a AAA, a raíz de las reformas energética y fiscal. Las grandes instituciones financieras están complacidas con el desempeño de México, cuya economía esperan que crezca gracias a las reformas.⁸² Desde hace mucho se sabe que el buen desempeño macroeconómico no se traduce en mejor calidad de vida, especialmente para los pobres. Durante los primeros seis años de la guerra antidrogas, el número de mexicanos viviendo por debajo de la línea de pobreza aumentó de 42.9 por ciento a 52.3 por ciento, según el Banco Mundial.⁸³ Las medidas de austeridad, la pérdida de derechos laborales y la precariedad creciente, así como el aumento al costo de los bienes básicos de consumo, son formas de agudizar la violencia estructural contra la mayoría.

Reformas legales

También debemos considerar la relación de la Iniciativa Mérida con el sistema jurídico y el Estado de Derecho. En febrero de 2012, el gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo curso de entrenamiento para 8,500 fiscales e investigadores en México.⁸⁴ Para 2016 se espera que un sistema legal semejante al de EUA se use en todo México, lo cual es una complicada transición financiada por la Iniciativa Mérida.⁸⁵ En cierta ocasión, el

80 The Economist, “Mexico: The Sovereign Take”, *The Economist* (Noviembre 2, 2013), <http://www.economist.com/news/americas/21588891-new-royalty-rattles-investors-sovereign-take>.

81 Cuervo-Lorens, “Commentary”.

82 V. Espinosa, B. Bain y N. Cattan, “Mexico Credit Rating Raised After Oil Industry Opened”, *Bloomberg News*, Febrero 5, 2014, <http://www.bloomberg.com/news/2014-02-05/mexico-rating-raised-to-a3-by-moody-s-after-oil-industry-opened.html>.

83 World Bank, “Mexico”, undated, <http://data.worldbank.org/country/mexico>.

84 Embassy of the United States in Mexico, “U.S. Ambassador Wayne and Attorney General Morales Launch Training Program for Prosecutors and Investigators”, Febrero 7, 2012, <http://mexico.usembassy.gov/press-releases/us-ambassador-wayne-and-attorney-general-morales.html>.

85 Dawn Paley, “Legal Battles in Mexico”, *Upside Down World*, 2011, <http://upside-downworld.org/main/mexico-archives-79/3353-legal-battles-in-mexico>.

procurador de justicia Jesús Murillo Karam afirmó que el narcotráfico había agarrado por sorpresa a México, como si fuera un fantasma que asustó a los políticos y policías desprevenidos a mitad de la noche. “Los mexicanos teníamos un sistema de justicia, un sistema de investigación y un sistema policiaco hecho para un país en el que el delito más grave era el abigeato, es decir, se robaban las vacas. Y de repente, sin que nos diéramos cuenta, estábamos sentados en un terreno en donde el narcotráfico, la delincuencia organizada, la organización misma de la delincuencia había rebasado ya todas las instituciones” dijo.⁸⁶ Sus palabras no sólo ignoran el nivel histórico de complicidad entre el Estado y el narco, sino que implican que México era un país sin masacres, despojos ni feminicidios antes de que la guerra antidrogas comenzara, lo que sencillamente es falso.

Los agentes mexicanos usaron el espectro del narco para echarle la culpa de la impunidad estructural y los abusos de las autoridades, y la guerra antidrogas les ha dado una oportunidad para buscar una reforma del sistema de justicia. “Lo que México está haciendo, va mucho más allá de luchar contra las drogas. Sí estamos combatiendo el crimen y la delincuencia organizadas, que son un aspecto del narcotráfico, pero la verdad es que la lucha en México es una lucha por transformar sus instituciones de seguridad y justicia”, dijo Alejandro Poiré Romero, que fue secretario de gobierno durante parte del gobierno de Felipe Calderón.⁸⁷

Muchos grupos de derechos humanos juzgan la transición a juicios orales y a un sistema legal acusatorio como un hecho positivo, y grupos progresistas han ofrecido entrenamientos para promover el nuevo sistema legal. Pero las reformas también tienen detractores: “Así como en el comercio globalizado se quiere un mundo donde en todos lados haya un McDonalds, un Applebees, un Home Depot, un Walmart, un Sams, igual se quiere que los tribunales sean iguales a los de Estados Unidos, para que cualquier despacho de abogados de Estados Unidos perfectamente pueda operar en EUA, en México, en Puerto Rico, en Argentina, en Chile, etcétera”, dijo Óscar Castrejón Rivas, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Chihuahua, en una entrevista a finales de 2011.⁸⁸ Chihuahua fue uno de los primeros estados en adoptar el nuevo sistema legal, a partir de 2007, y

86 Gustavo Castillo, “Evolución de la delincuencia sorprendió al sistema de justicia: Murillo Karam”, <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/01/08/evolucion-de-la-delincuencia-sorprendio-al-sistema-de-justicia-murillo-karam-3326.html>.

87 Los cándidos comentarios de Poiré se dieron en una conferencia auspiciada por el Council on Foreign Relations, la poderosa organización estadounidense que publica la revista *Foreign Affairs: The Economist*, “Shannon O’Neil and Alejandro Poiré: Disrupting the drug war”, *The Economist* (Noviembre 7, 2012), <https://www.youtube.com/watch?v=X1V54Rw-HNQ>.

88 Paley, “Legal Battles in Mexico”.

Management Systems International (MSI), que fue contratada por USAID para promover y gestionar las reformas legales en México, afirma que ese estado tiene lo que “se considera el código penal más avanzado y progresista de América Latina”. Con dinero de los contribuyentes de EUA, MSI mandó políticos de Chihuahua a Chile y Argentina a estudiar sus sistemas jurídicos, ya que en la década de 1990 –apoyados por USAID, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas y el Banco de Desarrollo Interamericano– ambos países sudamericanos adoptaron el sistema legal acusatorio.

Cuando hablé con Castrejón Rivas apenas un año después, me dijo que “el sentir de la comunidad chihuahuense y del foro de abogados es que ha sido una contrarreforma, no muy distinta a lo que se pretendía desde Washington a través de la USAID”. Aumentaron las tasas de encarcelamiento, y “prácticamente se canceló la presunción de inocencia. No existe en realidad la presunción de la inocencia. Ha sido cancelada”. No hay duda de que el sistema de justicia en México está plagado de irregularidades, y grupos de defensa –algunos financiados por EUA– están exigiendo reformas. Pero las estadísticas generalmente se pierden en la avalancha de publicidad que afirma que el modelo impuesto por USAID limpiará el sistema jurídico mexicano.

También es importante recordar que al mismo tiempo que se realizan reformas apoyadas por EUA al sistema legal, la infiltración criminal del poder judicial mexicano aumenta. “En muchos casos, los jueces, oficiales de juzgado y profesionales jurídicos son incapaces de actuar con libertad o completa independencia debido a que enfrentan amenazas, intimidación, acoso y otras formas de presión indebida”, de acuerdo con un informe de 2011 hecho por el observador especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados.⁸⁹ “El ímpetu detrás de proyectos de Estado de Derecho ha sido con frecuencia la idea de que los mercados requieren estructuras legales predecibles para proteger los derechos de propiedad, facilitar las inversiones extranjeras directas y cumplimiento de los contratos –esto es, establecer la ley estadounidense como la ‘lengua franca para los negocios y la política’”.⁹⁰ Además de USAID, la Asociación de Abogados de Quebec, el Consejo de Asuntos Judiciales Federales de EUA, el Instituto Judicial Nacional y el Instituto Democrático Nacional

89 UN Mission to Mexico. “Report of the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers”, Abril, 2011, retrieved Octubre 10, <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/129/33/PDF/G1112933.pdf?OpenElement>, 12.

90 Deborah Weissman, “Remaking Mexico: Law Reform as Foreign Policy”, *Cardozo Law Review* 4, no. 354 (2014): 18.

han estado involucrados en promover las reformas legales en México. Las bases económicas de las reformas han sido establecidas por el Instituto para la Competitividad de México, que “identifica la creación de un sistema jurídico objetivo y confiable como la principal prioridad de México para mejorar la competitividad y para atraer inversión doméstica y extranjera”, de acuerdo con una declaración del director de USAID, Roger Garner.⁹¹ “Nuestros programas Mérida en México están diseñados para apoyar a las instituciones mexicanas fundamentalmente mientras cambian su sistema de justicia entero y entrenan aproximadamente un millón de personas en nuevas, más transparentes y responsables maneras de administrar la justicia”. Garner no mencionó que el Instituto de Competitividad de México recibe fondos del Consejo de Empresarios de México y USAID, y da servicio de consultoría a la Embajada de EUA y al Banco Mundial. Sus comentarios hacen eco de otros muchos comentarios de grupos de la sociedad civil financiados por EUA que refuerzan los lineamientos políticos del Departamento de Estado.

La presión para cambiar el sistema jurídico de México podría afectar sus tradiciones legales, las cuales, de acuerdo con la profesora de derecho Deborah M. Weissman, incluyen “atención permanente a los derechos indígenas, uso colectivo de la tierra fundado en la Constitución, modelos corporativos de relaciones laborales, y pluralismo legal”.⁹² Por otro lado, estos cambios podrían perjudicar la resistencia popular a los megaproyectos de beneficiarios extranjeros. El programa estadounidense de aplicación de la ley en México funciona al unísono con los esfuerzos contrainsurgentes. “Si te fijas en la asignación del dinero para Estado de Derecho, es para vigilancia, es para ‘activar’, quién sabe qué quiera decir eso, nuevas cárceles en México, es para entrenar mexicanos en los sistemas de juicios orales y de adversarios, pero que no incluyen el sistema de jurados”, me dijo Weissman. “Tienes el programa de aplicación de la ley en lo que esencialmente es un plan para militarizar la guerra antidrogas. Puedes verlo en todos lados”.

Considérese este revelador ejemplo de las conexiones entre el entrenamiento policiaco estadounidense y la reforma apoyada por EUA en la década de 1960 en Venezuela: “En primer lugar, el sistema legal venezolano tenía que ser modificado. La ley venezolana requería el arresto de un policía que había matado a un sospechoso, esto, según un reportero de *Los Angeles*

91 Roger Garner, “Statement by USAID Mission Director to Mexico, Rodger D. Garner on USAID/Mexico’s Role in the Mérida Initiative”, Marzo 10, 2009. <http://www.usaid.gov/news-information/congressional-testimony/statement-usaid-mission-director-mexico-rodger-d-garner>.

92 Deborah Weissman, “Remaking Mexico”, 18, 28.

Times, con frecuencia implicaba tres meses en prisión esperando el juicio. Pero ‘bajo la asesoría de EUA, un policía que matara a un terrorista sería examinado en un día por una mesa civil de abogados, y volvería rápidamente a su trabajo’.⁹³

El uso de la tortura para obtener confesiones es una táctica común usada por la policía y soldados mexicanos, y esta práctica no parece estar en declive. En 2008, Felipe Calderón modificó la Constitución para introducir el *arraigo*, una herramienta legal que permite la detención prolongada de sospechosos bajo el pretexto de dar a las autoridades más tiempo para reunir evidencia en su contra. Esto aumenta la posibilidad de que se torture a los individuos o grupos detenidos por el Estado. Según grupos de derechos humanos de México, “Esta medida es claramente una forma de detención arbitraria que va en contra de las obligaciones en derechos humanos que México ha adquirido, y violenta, entre otros derechos, el de la libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, proceso adecuado y el derecho a un recurso efectivo”.⁹⁴

El arraigo puede ser aplicado sin que haya cargos formales en contra del acusado, que se mantiene incomunicado por un periodo de hasta 40 días (que pueden extenderse hasta 80 con una orden judicial). En un reporte de 2011, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos afirmó que “recibió quejas relacionadas con el uso del arraigo para mantener individuos en casas particulares, hoteles e instalaciones militares sin respeto por las garantías jurídicas, indicando que aquellos retenidos de esta manera han sido víctima de tortura con el propósito de obtener confesiones”.⁹⁵

¿Quién se beneficia?

Algunas de las empresas más importantes del mundo se beneficiarán de las reformas legales y financieras en México. El país es el mayor exportador del planeta de pantallas planas de televisión y refrigeradores, y en el sector manufacturero participan firmas como Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, Pioneer, Ericsson, Sony, Sanyo, Panasonic, Xerox, Siemens, Foxconn y

93 Martha Huggins, “U.S. Supported State Terror: A History of Police Training in Latin America”, in *Vigilantism and the State in Modern Latin America*, 265.

94 CMDPDH/Red SOS-Tortura, “Arraigo Made in Mexico: A Violation to Human Rights”, Octubre 2012, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/CMDPDH_OMCT_Mexico_CAT49_en.pdf.

95 Organization of American States, “IACHR Wraps Up Visit to Mexico”, Septiembre 2011, http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2011/105.asp.

Motorola, entre otras. Anuncios recientes indican que las nuevas inversiones en manufactura de autos y aeronaves en el centro del país continuarán en el futuro.

“México entró en una profunda recesión en 2009, cuando la demanda norteamericana de importaciones hechas en México se colapsó. Pero la recuperación con el presidente Felipe Calderón ha sido notable, con un crecimiento previsto de casi 4 por ciento este año, aproximadamente el doble que el de Estados Unidos”, afirma un artículo publicado en el *New York Times* en 2012.⁹⁶ En 2008, antes de que la crisis financiera afectara México, la IED alcanzó los 23.2 mil millones de dólares, y cayó el año siguiente a 11.4 mil millones.⁹⁷ Desde entonces la IED ha rebotado: a 19.43 mil millones en 2011, y en 2013 a más de 35 mil millones, principalmente en la manufactura (73.8 por ciento), minería (7.9 por ciento), y servicios comerciales (4.9 por ciento).^{98 | 99}

Un aspecto importante y poco reportado de la Iniciativa Mérida es la construcción de nuevos cruces fronterizos y la ampliación de los existentes, demandas cruciales de los sectores comerciales de EUA. “Financieramente, la inversión en cruces fronterizos e infraestructura no se ha mantenido a la par del crecimiento exponencial del comercio a través de la frontera cada año”, se lee en un memorándum de diciembre de 2012 emitido por el Consejo de Relaciones Exteriores de EUA.¹⁰⁰ Esta infraestructura es necesaria para la industria de la *maquila* (ensamble) en México, así como para asegurar el abasto suficiente y regular de frutas, vegetales y otros productos a Estados Unidos. Hay enormes subsidios para corporaciones estadounidenses y de otras partes que operan a lo largo de la frontera EUA-México, por lo que EUA requiere la cooperación de México en estos cruces. Con respecto a las aduanas en puertos y fronteras, “el gobierno de EUA financió el desarrollo de entrenamiento para oficiales aduanales; proveyó capacitación para el análisis de riesgos y de esquemas uso-final/usuario-final, y para aplicación de la ley; desarrolló un programa interno de rendimiento para la industria privada; y ofreció donaciones dirigidas de equipo de detección e identificación química y radiológica en colaboración con el programa Megaports del Departamento de Energía de EUA y la Iniciativa Mérida”.¹⁰¹

96 Malkin y Archibold, “A New Leader Pushes a Different Side of Mexico”.

97 Jason Lange, “Mexico sees 2010 FDI bouncing back”, Reuters, Mayo 4, 2010, <http://www.reuters.com/article/2010/05/04/us-latam-summit-mexico-investment-idUSTRE64351D20100504>.

98 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, “Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México”, http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comision_nacional/Informe_2011_IV.pdf.

99 *Ibid.*

100 Shannon O’Neil, “Refocusing U.S.-Mexico Security Cooperation”.

101 Departamento de Estado de los Estados Unidos. “Congressional Budget Justification”, 687.

Los beneficiarios de más alto perfil de la guerra antidrogas probablemente son los grandes bancos. Como se mencionó antes, la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU reportó en 2010 que el 85 por ciento de las ganancias netas del mercado estadounidense de cocaína (que, recordemos, vale 35 mil millones de dólares) se generaron dentro de Estados Unidos.¹⁰² Ahí es donde los grandes bancos estadounidenses obtienen dinero del narcotráfico, y su complicidad, cuando se descubre, queda casi impune. A fines de 2012 HSBC fue declarado culpable de haber lavado más de 880 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa y para narcotraficantes colombianos, principalmente. Según un artículo de *The Guardian*, “Para recibir las ‘impresionantes cantidades de efectivo’, el banco incluso mandó ensanchar las ventanillas de algunas sucursales para que los cajeros pudieran recibir cajas más grandes de dinero”.¹⁰³ HSBC fue absuelta con una multa de 1.9 mil millones de dólares —equivalente a alrededor de cinco semanas de ingresos para el banco— y ningún ejecutivo enfrentó cargos criminales por su papel en facilitar el narcotráfico.¹⁰⁴ De acuerdo con Antonio María Costa, jefe de la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU, el dinero en efectivo del crimen organizado básicamente rescató a los bancos durante el desplome del mercado en 2008. “Préstamos interbancarios se financiaron con dinero que se originó en el narcotráfico y otras actividades ilegales... Hubo señales de que algunos bancos se salvaron de esa forma”.¹⁰⁵

Además del crimen organizado, las grandes corporaciones y empleados públicos también participan en el lavado de dinero en México y otros lugares.¹⁰⁶

102 UNODC, “World Drug Report, 2010”, Naciones Unidas, 2010, http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf, 18.

103 Dominic Rushe y Jill Treanor, “HSBC’s Record \$1.9bn Fine Preferable to Prosecution, US Authorities Insist”, *The Guardian*, Diciembre 11, 2012, http://www.guardian.co.uk/business/2012/dec/11/hsbc-fine-prosecution-money-laundering?CMP=twf_fd&CMP=SOCxx2I2.

104 New York Times, “Too big to indict”, *New York Times*, Diciembre 11, 2012, http://www.nytimes.com/2012/12/12/opinion/hsbc-too-big-to-indict.html?_r=0. Matt Taibbi, “Outrageous HSBC Settlement Proves the Drug War is a Joke”, *Rolling Stone*, Diciembre 13, 2013, <http://www.rollingstone.com/politics/blogs/taibblog/outrageous-hsbc-settlement-proves-the-drug-war-is-a-joke-20121213#ixzz2vZpnNZ7o>.

105 Rajeev Sayal, “Drug Money Saved Banks in Global Crisis, Claims UN Advisor”, Diciembre 13, 2009, <http://www.theguardian.com/global/2009/dec/13/drug-money-banks-saved-un-chief-claims>.

106 Tal vez el caso más conocido es el de Tomás Yarrington Ruvalcaba, que fue alcalde de Matamoros, Tamaulipas, y después pasó a ser gobernador de Tamaulipas y candidato a la presidencia del PRI. Según documentos archivados en una corte de Texas, entre 1998 y 2005, Yarrington —ahora prófugo de la justicia— “obtuvo millones de dólares mientras fungía como gobernante electo, en pagos de grandes organizaciones del narcotráfico que operaban en y a través del estado mexicano de Tamaulipas, y de varios esquemas de extorsión y soborno”. United States District Court Southern Division of Texas, “U.S.A. v. Real Property”, Mayo 22,

Un aspecto clave de cualquier escándalo por corrupción donde servidores públicos roban dinero de cuentas del gobierno, es el lavado de dinero o las cuentas de banco en el extranjero,¹⁰⁷ en los que corporaciones como Walmart han sido acusadas de participar.¹⁰⁸ Los narcos son sospechosos de financiar candidatos por medio de donaciones de campaña (en México, EUA y otros lugares).¹⁰⁹ Se ha documentado que grandes empresas de medios, como la mexicana Televisa, han estado involucradas en actividades internacionales del crimen organizado.¹¹⁰

México es un importante participante en la economía mundial, y si las predicciones de los analistas están en lo correcto, tendrá un papel aún más importante si la industria manufacturera continúa saliendo de China. Una pequeña élite trasnacional en México, encabezada por Carlos Slim, y sectores como el minero y petrolero, se verán beneficiados por las reformas, sobre todo las financieras. Las apuestas son altas, y las reformas implementadas junto con la guerra antidrogas tienen el propósito de reforzar y empoderar el capitalismo trasnacional en una sociedad cada vez más estratificada y desigual.

2012, <http://www.ice.gov/doclib/news/releases/2012/120522brownsville.pdf>.

107 Alberto Nájjar, “El gran negocio del lavado de dinero en México”, *BBC News*, http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/07/130717_mexico_negocio_lavado_de_dinero_ley_an.shtml.

108 Barney Jopson, “Walmart Tackled on Laundering Concerns”, *Financial Times*, Agosto 15, 2012, <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0c949a9a-e6f1-11e1-8a74-00144feab49a.html#axzz-333RM46B9>.

109 N. Miroff y W. Booth, “Mexico’s 2012 Vote is Vulnerable to Narco Threat”, *The Washington Post*, Enero 15, 2012, http://articles.washingtonpost.com/2012-01-15/world/35440426_1_luisa-maria-calderon-drug-cartel-leader-pri-candidate.

110 En 2012 se reportó que una camioneta usada para traficar drogas a través de Nicaragua estaba a nombre del imperio televisivo. Los representantes de Televisa no aceptaron estar involucrados. Homero Campa, “Admite Televisa que vehículos confiscados en Nicaragua podrían estar a su nombre”, *Proceso*, Septiembre 12, 2012, <http://www.proceso.com.mx/?p=319672>.

Capítulo V

Plan México y la Militarización

El 23 de febrero de 2012, las autoridades forenses entregaron los restos de Jessica Leticia Peña García a su madre. Sus huesos ya estaban secos y blanqueados. Había sido asesinada tres años antes y su cuerpo fue abandonado bajo el sol del desierto en el Valle de Juárez, al este de Ciudad Juárez, Chihuahua. En preparación para el que hubiera sido el cumpleaños dieciocho de Jessica, el 5 de febrero de 2013, su madre, María García, pidió a Justicia Para Nuestras Hijas, una organización liderada por madres de mujeres desaparecidas y asesinadas, ayuda para obtener permiso para dejar una ofrenda en el lugar donde el cuerpo de su hija fue encontrado.

Norma Ledezma, la fundadora del grupo, envió una petición oficial por escrito para tener acceso al lugar. “Nuestra solicitud fue muy cuestionada y la hicimos por escrito en la fiscalía, con el fiscal especializado. Primero nos dicen que sí, después que no, mil pretextos nos pusieron” me dijo durante una entrevista en su oficina en la capital de Chihuahua. Ledezma siguió presionando, algo en lo que se había vuelto experta desde que su hija Paloma desapareció en marzo de 2002. Cuando su cuerpo fue encontrado, dieciséis días después de su desaparición, Ledezma juró por el recuerdo de su hija que dedicaría el resto de su vida a encontrar a su asesino. Entonces creía que sería cuestión de unos cuantos meses. “Se cumplieron 11 años este mes y aún no sé quién mató a Paloma”, me dijo. Finalmente, Ledezma agotó todas las instancias hasta llegar al oficial superior del estado, insistiendo en que una madre en duelo tiene derecho a dejar una cruz y un ramo de flores donde los asesinos abandonaron el cuerpo de su hija, y por fin consiguió el permiso. El 4 de febrero, el día anterior al cumpleaños de Jessica, un convoy que llevaba a García, Ledezma, y otras familias de mujeres desaparecidas y asesinadas, junto con policías, psicólogos, arqueólogos y oficiales, salieron de Ciudad Juárez hacia el Valle de Juárez para visitar el lugar exacto en el que habían encontrado los huesos de Jessica.

Los carros se salieron del camino desértico de tierra que conecta Ciudad Juárez con el valle. “Nos dijeron que para llegar a este arroyo, Arroyo el Navajo, tendríamos que dejar los vehículos en un lugar, y caminar entre cuatro y cinco kilómetros”, me dijo Ledezma. Mientras caminaban, las

mamás se preguntaban cómo llevaron los criminales a las mujeres muertas encontradas en Arroyo el Navajo: en burro, helicóptero o camioneta todo terreno. Después de ofrendar las flores y las cruces con el nombre de Jessica, el grupo emprendió el regreso hacia los vehículos. En un punto no lejos de donde los cuerpos fueron encontrados, Ledezma se negó a continuar. “Entonces como que nos marearon, nos trajeron por muchas partes, pero llegamos y a pesar de que nos rodearon mucho, yo me di cuenta de que había una brecha”.

La sospecha de Ledezma resultó ser correcta: había un camino directo a la autopista, a menos de diez minutos caminando de donde el cuerpo de Jessica fue hallado. “Y yo le digo a todo el equipo: yo de aquí no me muevo, yo no voy a caminar otra vez hasta donde están los vehículos, yo ya no me muevo hasta que busquen la entrada y salida de esta brecha”, recuerda. Finalmente, los oficiales y expertos que acompañaban al grupo accedieron a sacar al grupo de mujeres a la autopista por el camino más corto. Mientras caminaban, Ledezma reconoció un hueso humano en la brecha, en un área que las autoridades afirmaban haber repasado una y otra vez. El hueso que Ledezma encontró conduciría a un esqueleto de hombre y otro de mujer, ambos totalmente expuestos y con signos de llevar mucho tiempo ahí. “Fue muy fuerte, muy fuerte, duré días después que no podía mover la cabeza”, dijo María García, la madre de Jessica, que también vio las osamentas cerca de donde se encontraron los restos de su hija.

El grupo siguió el camino hasta un conjunto de casas junto a la autopista. “Pero lo más, ¿cómo le digo?, lo más increíble es que ahí había siempre un retén de soldados”, dijo María García. El retén, que detenía a todos los vehículos que entraban y salían del área, estuvo ahí aproximadamente de 2008 a 2012, durante la ocupación militar del área de Juárez por parte del gobierno federal. Durante el mismo periodo de tiempo, el Valle de Juárez se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del país, con desplazamientos masivos y personas forzadas a pedir asilo en Estados Unidos. “Conociendo el Valle de Juárez, es muy amplio y está en posesión del crimen organizado, pero está vigilado por el ejército, las entradas las tiene vigiladas el ejército”, dijo Ledezma. El rodeo había sido un intento de despistar a las familias; las autoridades, arqueólogos, investigadores y policía eran cómplices en tratar de cubrir las huellas de los asesinos. Me reuní con Ledezma en 2013, justo cuando Felipe Calderón se unió al profesorado de la Universidad de Harvard: “Yo estuve en tres ocasiones con él, y personalmente yo le llegué a decir: [a nuestras hijas] se las llevaron los federales, se las llevaron los soldados”.

La llegada de la policía federal y los soldados a Ciudad Juárez y sus alrededores fue lo que provocó que las tasas de homicidio se dispararan. Los anuncios de personas desaparecidas, muchos de ellos mostrando los rostros de mujeres jóvenes, ocupan los postes y espacios públicos a lo largo de Ciudad Juárez y Chihuahua, la capital del estado. Ciudad Juárez se volvió sinónimo de violencia y tragedia durante el periodo de Calderón. Mientras que lo que los oficiales llamaban violencia ligada a las drogas dominaba los encabezados, más y más muchachas empezaron a desaparecer. “A partir de 2008, cuando el presidente Felipe Calderón, con el consentimiento del gobernador y el alcalde decidió implementar la Operación Conjunta Chihuahua, que es un ataque militar contra los cárteles del narco, los feminicidios aumentaron, pero sobre todo las desapariciones de mujeres jóvenes”, dijo la doctora Julia E. Monárrez Frago, profesora e investigadora del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez.

El viaje a dejar flores en la tierra reseca en la que fue encontrado el cuerpo de Jessica Leticia Peña García es sólo una de las desgarradoras historias que María García compartió conmigo cuando visité su casa en los márgenes de Ciudad Juárez. García, que vive en un cuarto de paredes desnudas en la esquina de un frío almacén vacío con su compañero y su hijo, temblaba llorando mientras me contaba cómo su vida se ha desmoronado desde que su hija fue desaparecida y asesinada en 2011. El almacén da a la carretera, y de la puerta de garaje cuelga un cuadro de plástico con el rostro sonriente de su hija y una rosa roja en su memoria. “No lo quiero quitar, es lo que me mantiene”, dijo. “No sé, no me quiero resignar a que ella no esté aquí”. Para tratar de calmar a María García le comento que su hija era una joven muy hermosa. “Me decían los ministeriales cuando puse el reporte: ‘Con razón se la llevaron, estaba muy bonita. Con esas palabras’”, me dijo con furia en la voz. Como otras madres, incluyendo a las que conforman Justicia Para Nuestras Hijas, García emprendió la búsqueda ella misma, yendo de cantina en cantina, de esquina en esquina con una fotografía de su hija. En algún punto fue mandada a un hotel donde vio a dos jóvenes mujeres salir de una habitación bajo custodia de hombres armados. Cuando llamó a la policía, ignoraron su denuncia. “Me juzgaron de loca”, me comentó. El caso de Jessica Leticia dista mucho de ser un incidente aislado, más bien es una manifestación de la violencia estructural que atrajo la atención pública a Ciudad Juárez tras una ola de asesinatos de mujeres en 1993. Se creó un término para el asesinato de mujeres por una cuestión de género: *feminicidio*, que eventualmente fue adoptado por abogados y activistas alrededor del mundo para describir los homicidios de mujeres jóvenes por el simple hecho de ser mujeres jóvenes.

Cada día de trabajo, Itzel González revisa los periódicos locales en busca de menciones de ataques violentos contra mujeres. Con frecuencia tiene que volverse al pizarrón blanco que hay detrás de su escritorio y actualizar el número total del día anterior de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, la ciudad más grande de Chihuahua. Su tabla de recuento es uno de los pocos elementos en las paredes de la discreta oficina de la Red Mesa de Mujeres, cerca del centro de la ciudad. González es la coordinadora de RMM, una coalición de grupos que trabajan a favor, entre otras causas, de los derechos de las mujeres en la que durante mucho tiempo ha sido considerada la ciudad más violenta de México.

“Efectivamente en los últimos años el discurso dice que el feminicidio ya fue erradicado, que esto es una problemática del pasado, y que esto ya no ocurre,” me dijo. En 2011, 196 mujeres fueron asesinadas en la ciudad, de aproximadamente 1.3 millones de habitantes. “Sin embargo, vemos que en la ciudad permanece el feminicidio. Otro de los discursos o de las cosas que dice la fiscalía del estado es que estas mujeres, la mayoría, un gran porcentaje, son mujeres que están siendo asesinadas porque forman parte del crimen organizado. Pero la realidad es que estos crímenes no están siendo investigados, o sea, 98% de los crímenes no tienen ni siquiera una carpeta de investigación”. Entre 1993 y el final de 2011, 1,344 mujeres fueron asesinadas en Juárez. Un pavoroso 63 por ciento —844— de esos asesinatos sucedió a partir de 2008, el año en que la policía y el ejército llegaron a emprender la guerra antidrogas. Las historias de las mujeres cuyas hijas les fueron arrebatadas están entre las más desgarradoras que escuché durante la investigación, pero concentrarse exclusivamente en lo que ha pasado a estas jóvenes sin mencionar lo que les ha sucedido a los hombres es formar un cuadro incompleto de la violencia en este corto tramo de la frontera entre Texas y México. Durante la década pasada, por cada mujer asesinada en Juárez, hubo nueve homicidios de hombres. Molly Molloy, bibliotecaria de la Universidad del Estado de Nuevo México que lleva un registro de los asesinatos en Ciudad Juárez, apunta que “las víctimas femeninas de asesinato nunca han representado más del 18 por ciento del número total de víctimas fatales en Ciudad Juárez, y en las últimas dos décadas el promedio es menos de 10 por ciento. Eso es menos que en Estados Unidos, donde entre 20 y 25 por ciento de las personas asesinadas en un año son mujeres”.¹ Muchas personas gay y transexuales

¹ Christopher Hooks, “Q&A with Molly Molloy: The Story of the Juarez Femicides Is a ‘Myth’”, *Texas Observer*, Enero 11, 2014, <http://www.texasobserver.org/qa-molly-molloy-story-juarez-femicides-myth/>.

en Chihuahua y todo México también han sido víctimas de asesinato motivado por su género o preferencia sexual.

Es difícil comprender la violencia en México, y no podemos saber si el (o los) asesino(s) de Jéssica Leticia buscaba algo más allá de una emoción mezquina. Sus acciones y la consecuente impunidad, por otro lado, superan el caso aislado y refuerza un clima general de sexismo, racismo y clasismo rampantes. Las acciones de los responsables del asesinato de Jéssica tienen un impacto que permea toda la sociedad, y fueron llevadas a cabo, en parte, debido a que la impunidad es la regla, no la excepción, en México. Cuando le pregunté a Norma Ledezma cómo definía ella la impunidad, fue mucho más allá de acusar al Estado de complicidad. “La impunidad ha sido una carta abierta que las autoridades han dado a los criminales”, contestó. “Les dice: es la tierra de no pasa nada.” Después de nuestra entrevista se fue con su guardaespaldas, quien la protege a lo largo de su atareado día de trabajo.

La respuesta inicial del Estado a los feminicidios representó lo que la geógrafa Melissa Wright interpreta como una versión de género de la necropolítica de Achille Mbembe, por la que la amenaza de muerte violenta es usada como una táctica de gobierno. Ella escribe que el gobernador de Chihuahua “aseguró a las familias mexicanas que no había nada que temer siempre y cuando supieran dónde estaban las mujeres de su familia. El discurso de la mujer pública normalizó la violencia y usó los cuerpos de las víctimas como una forma de justificar las políticas basadas en nociones patriarcales de normalidad. Las familias mexicanas normales, con mujeres normales seguras en casa, no tenían nada de qué preocuparse”.² Este discurso criminaliza a las víctimas del feminicidio, muchas de las que eran trabajadores sin acceso a un medio de transporte seguro y accesible para ir al trabajo. Es como si fueran responsables de su propia muerte. Discursos similares operan en zonas de México afectadas por la guerra antidrogas, y se da a entender en los medios de comunicación y reportes gubernamentales que las víctimas de la violencia relacionada con la guerra son culpadas por su propio fallecimiento.

“Juárez y buena parte del estado de Chihuahua están –y esto debe visibilizarse nacional e internacionalmente– en una verdadera situación de emergencia humanitaria. Los casi 4 mil asesinatos ocurridos en el estado en dos años llamarían la atención internacional en cualquier otro país, salvo en este, donde el gobierno sigue haciéndose tonto, sólo pensando que ya está ganando la guerra que cada vez tiene más características de limpieza

2 Melissa Wright, “Necropolitics, Narcopolitics, and Femicide: Gendered Violence on the Mexico-U.S. Border”, *Signs* 36, no. 3 (Spring 2011): 713–714.

social”, escribió el activista y columnista mexicano Víctor Quintana a finales de 2009.³ Olas de asesinatos de jóvenes, traficantes inexpertos, personas en situación de calle y marginación no están sucediendo sólo en Juárez. Según Gustavo de la Rosa, exoficial de derechos humanos de Chihuahua, “La mayoría de los asesinados... son *malandros* ... gente sin valor en esta guerra... sin ninguna utilidad para los cárteles... gente sumida en la pobreza cuya muerte no se explica más que como parte de una... limpieza social... el exterminio de lo más bajo de lo bajo. Hay escuadrones de la muerte, un tipo de gente matando específicamente a *malandros*, asesinatos planeados de los indeseados. Y si vemos cómo lo hacen, son expertos en las técnicas de homicidio características del entrenamiento militar o policiaco”.⁴ Una diferencia crucial en Juárez es que hay grupos de activistas y organizaciones que se manifiestan juntos para denunciar y documentar lo que está pasando debido a la militarización, y una cultura de periodismo que ha llevado a los escritores a tomar riesgos más grandes que en otros lados para reportar lo que sucede. El secuestro de Jessica Leticia en Ciudad Juárez en 2011 y los sucesos subsecuentes que parecerían apuntar hacia la fe de su madre en las autoridades mexicanas, son relatados aquí para dar un poco de contexto sobre cómo —y por qué— los habitantes de Ciudad Juárez tienen más razones para temer a las fuerzas de seguridad del Estado que para buscar protección con ellas. El escritor Charles Bowden declaró Juárez un “laboratorio del futuro”. La ciudad es sin duda el caso mejor documentado en México para probar lo que pasa cuando la policía federal y los soldados son enviados en masa a patrullar las calles en nombre de luchar contra el crimen organizado.

Programas policiacos que apoya EUA en México

Los grupos no gubernamentales dominantes son categóricos en su valoración de los efectos de la guerra antidrogas: “La ‘guerra antidrogas’ iniciada por el predecesor [de Enrique Peña Nieto], Felipe Calderón, había producido resultados desastrosos. No sólo había fallado en controlar a los poderosos grupos criminales del país, sino que había conducido a un incremento dramático en graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad enviadas a combatirlos”, de acuerdo con un reporte

3 Víctor Quintana, “Sordera calderoniana, movilización ciudadana”, *La Jornada*, Diciembre 2009.

4 Molly Molloy, “The Mexican Undead: Toward a New History of the ‘Drug War’ Killing Fields”, Agosto 21, 2013, <http://smallwarsjournal.com/jml/art/the-mexican-undead-toward-a-new-history-of-the-%E2%80%9Cdrug-war%E2%80%9D-killing-fields>.

de febrero de 2013 de Human Rights Watch.⁵ “En vez de fortalecer la seguridad pública, estos abusos habían exacerbado el clima de violencia, ausencia de ley y miedo”. La Comisión Interamericana para los Derechos Humanos halló que la tasa de asesinatos en México aumentó un 50 por ciento cada año de 2008 a 2010.⁶ Estados Unidos juega un papel importante a través de sus programas de seguridad en México, que se concentran en la profesionalización de la policía y provisión de nuevo equipo, así como alentar más la militarización. La sección policial de la Iniciativa Mérida conduce no sólo a mejorar el armamento de agresores históricos contra el pueblo mexicano (la policía y el ejército), sino que también puede verse como parte de las preparaciones del Estado a largo plazo para implantar las mayores desigualdades que surgirán de la privatización y regímenes de austeridad asociados a las iniciativas promovidas por EUA discutidas en el capítulo anterior. Esto está vinculado a uno de los propósitos de la contrainsurgencia, que es desplegar fuerzas militares y especiales temporalmente para volver a un estado donde la violencia de Estado es llevada a cabo por la policía, no el ejército, y donde aquellos que se resisten son criminalizados y encarcelados o asesinados por la policía.

De manera semejante a como se les exige a los países que adquieren préstamos de instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial que realicen programas de ajuste estructural que empobrecen más a la población, los recursos para la guerra antidrogas conllevan mayor injerencia de EUA en los asuntos internos. Aunque el público generalmente no tiene conocimiento del proceso por medio del que se desembolsa la ayuda, un mensaje confidencial de Departamento de Estado de EUA a Ecuador que se filtró por Wikileaks, ilustra cómo la presión política y la asistencia antidrogas vienen de la mano. El gobierno de Rafael Correa no estaba dispuesto a aceptar las condiciones impuestas a cambio del dinero antidrogas, lo que implicaba una situación problemática para el gobierno estadounidense. En el mensaje, el ex-embajador de EUA en Ecuador describía la siguiente situación: “Correa y los oficiales [del Gobierno de Ecuador] se vieron motivados a objetar a que hiciéramos poligrafías de miembros de unidades vetadas y probablemente se opusieron a un arreglo que asegurara control significativo del gobierno estadounidense sobre las acciones del personal y equipos judiciales de Ecuador. Durante las negociaciones subsecuentes de acuerdos

5 Human Rights Watch, “Mexico’s Disappeared: The Enduring Cost of a Crisis Ignored”, Febrero 2013, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0213_ForUpload_0_0.pdf.

6 Organization of American States, “IACHR Wraps Up Visit to Mexico”, Septiembre 2011, http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2011/105.asp.

con [Departamento de Seguridad Doméstica] y [la Agencia Antidrogas], los oficiales del gobierno ecuatoriano regularmente presionaban [a la Sección de Asuntos Narcóticos] para que les diera fondos anti-narcóticos con pocos controles”.⁷ Al final, el gobierno estadounidense se salió con la suya, por medio de “negarse a desembolsar fondos hasta que los acuerdos estuvieran firmados”.⁸

El entrenamiento de policías, también llamado profesionalización policiaca, es un viejo instrumento en el arsenal de la política exterior estadounidense. “La asistencia policial puede lograr muchos de los mismos objetivos de la política exterior estadounidense que la intervención militar, y al mismo tiempo parecer menos política en el proceso”, afirma Martha Huggins, que ha escrito ampliamente sobre el entrenamiento estadounidense de la policía latinoamericana.⁹ “No hay evidencia alguna de que casi un siglo de asistencia de EUA a la policía extranjera haya mejorado ni la seguridad de la población de los países que la reciben, ni de las prácticas democráticas de su policía y fuerzas de seguridad... El resultado de tal entrenamiento puede sugerir que el entrenamiento de la policía latinoamericana ha sido usado deliberadamente para aumentar el control de EUA sobre los países en cuestión y de control antidemocrático de sus gobiernos sobre la población”. En 1974, después de que la evidencia de tortura, secuestros y asesinatos llevados a cabo por policías entrenados por EUA desbordara a los defensores del entrenamiento de policías extranjeras, el Congreso prohibió el entrenamiento y equipamiento de policías exteriores. Curiosamente, sin embargo, “La prohibición parlamentaria de 1974 no incluyó la asistencia policiaca y militar de EUA para el control de narcóticos”.¹⁰ En 1985, el Congreso durante el periodo presidencial de Ronald Reagan volvió a legalizar el entrenamiento y equipamiento de fuerzas policiacas fuera de EUA, con lo que el entrenamiento policiaco se convirtió de nuevo en una estrategia central del control estadounidense sobre la seguridad internacional. El FBI empezó a entrenar a la policía fronteriza mexicana en 1987, y en 1990, el Departamento de Defensa gastó 17 millones de dólares en “entrenamiento y equipo” en México. “El equipo proporcionado consistía en helicópteros UH-1 y partes de repuestos, municiones, armas cortas, equipo de control

7 Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Ecuador’s Push for Conditions-free Foreign Assistance Has Major Implications for Usg Operations”, Febrero 24, 2010, <http://cablegate-search.net/cable.php?id=10QUITO101#para-6706-12>

8 *Ibid.*

9 Martha Huggins, *Political Policing: The U.S. and Latin America* (Durham: Duke University Press, 1998), 4.

10 Huggins, “U.S. Supported State Terror”, 219.

antidisturbios, radios y equipo personal misceláneo”.¹¹ Durante los años siguientes se implementaron programas para financiar entrenamiento estadounidense de policías, pero no fue hasta la Iniciativa Mérida que el entrenamiento estadounidense realmente se disparó.

El *New York Times* reportó en agosto de 2011 que “los Estados Unidos han entrenado casi 4,500 agentes federales [mexicanos] nuevos y asistido en realizar intervenciones telefónicas, manejar informantes e interrogar sospechosos”.¹² Desde el comienzo de la Iniciativa Mérida, EUA ha entrenado “8,500 elementos del sector de justicia federal; aumentado la profesionalización de las unidades policiacas mediante la provisión de entrenamiento a más de 22,000 oficiales federales y estatales de policía, 4,000 de los cuales son investigadores federales; mejoró la capacidad y seguridad de las prisiones federales, apoyando la expansión de instalaciones federales seguras (de 5 que había con capacidad de 3,500 a 14 con una capacidad de 20,000); proporcionó educación cívica y formación ética a más de 700,000 estudiantes mexicanos; y mejoró la detección de narcóticos, armas y dinero en la frontera, alcanzando casi 3.8 mil millones de dólares en bienes ilícitos incautados”.¹³ Además de Estados Unidos y Canadá, policías de Israel, Colombia, Francia, España, El Salvador, Holanda y la República Checa están entrenando activamente diferentes ramas de la policía mexicana.¹⁴ Sin importar el entrenamiento estadounidense y los procesos de veto, la corrupción generalizada entre las fuerzas policiacas de México no ha disminuido. “No queremos exagerar este hallazgo: no vemos ninguna evidencia de que la corrupción policiaca esté disminuyendo realmente”, se lee en un reporte de 2011 preparado por el grupo de estudios de derecha RAND Corporation.¹⁵ En un incidente notable de 2012, policías federales mexicanos entrenados por EUA emboscaron una camioneta blindada con placas diplomáticas, e hirieron a dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).¹⁶ Hasta hoy no se sabe por qué sucedió la emboscada

11 US GAO, “FOREIGN AID: Police Training and Assistance”, Marzo 1992, <http://www.gao.gov/products/145909>

12 G. Thompson, “U.S. Widens Role in Battle Against Mexican Drug Cartels”, *New York Times*, Agosto 6, 2011, <http://www.nytimes.com/2011/08/07/world/07drugs.html?pagewanted=all>.

13 William Brownfield, “The Future of Mexico-US Relations”, Mayo 20, 2014, <http://www.state.gov/j/inl/rls/rm/2014/226345.htm>.

14 C. Hawley, “U.S. Training Bolsters Mexico’s War on Drugs”, *USA Today*, Octubre 29, 2009, http://www.usatoday.com/news/world/2009-10-28-mexico-police-training_N.htm.

15 Beth Asch, et al, “Mitigating Corruption in Government Security Forces: The Role of Institutions, Incentives, and Personnel Management in Mexico”, 2011, Rand Corporation, http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2011/RAND_TR906.pdf, xii.

16 Ioan Grillo, “Mexican Police Attacked CIA Officers, Ambush Likely: sources”, Reuters, Agosto 29, 2012, <http://www.reuters.com/article/2012/08/29/us-mexico-shooting-idUSBRE->

o qué estaban haciendo los agentes de la CIA en Tres Marías, cerca de la ciudad de Cuernavaca.

Los programas de entrenamiento policial en México ocurren mientras una fuerza policiaca de gran tamaño continúa siendo expandida y reorganizada.¹⁷ En 2010 había aproximadamente 409,536 policías en México de acuerdo con Insyde, una ONG relacionada con el entrenamiento policiaco financiado por EUA.¹⁸ Toda la policía federal, que tiene más de 30,000 elementos, también recibe entrenamiento militar mexicano, y muchos de ellos son, de hecho, soldados vestidos de policías.¹⁹ Estados Unidos opera un Centro de Reunión de Inteligencia (Fusion Center) en México, pero la Agencia de Seguridad Nacional se ha negado a proporcionar más información.²⁰ Un centro de entrenamiento llamado Special Operations Command-North, basado en el US Northern Command en Colorado Springs, Colorado, hospeda al menos a 150 soldados, policías y agentes de inteligencia mexicanos cada año, que obtienen formación en contraterrorismo y realización de redadas. Y si eso no fuera suficiente, a principios de 2012, el gobierno de EUA extendió su programa de entrenamiento antipandillas a los departamentos de policía en México y Centroamérica.²¹

En mayo de 2012, México inauguró la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida General Ignacio Zaragoza, al sureste de la Ciudad de México. El gobierno mexicano calcula que se formarán ahí 6,000 policías cada año.²² La nueva academia está hecha de edificios prefabricados, armados en terrenos recién limpiados que fueron parte de las poco arboladas colinas del campo poblano. Incluye dormitorios para hombres y mujeres, campos de tiro, comedores comunitarios y áreas de entretenimiento, un centro de control y comando, entre otras facilidades. Ahí, la policía mexicana puede recibir lecciones de tiro, acondicionamiento

87S19K20120829.

17 Insyde, “¿Cuántos policías hay en México?”, Septiembre 12, 2010, <http://www.insyde.org.mx/shownews.asp?newsid=319>.

18 *Ibid.*

19 The highest-ranking federal police officer in Mexico today was trained in the United States, Israel, and Spain.

20 Michael Evans, “Mexico Fusion Center: NSA Refuses to Acknowledge ‘Existence or Non-existence’ of Documents on U.S. Intelligence Facility”, Febrero 11, 2014, <http://migrationdeclassified.wordpress.com/2014/02/11/mexico-fusion-center-nsa-refuses-to-acknowledge-existence-or-non-existence-of-documents-on-u-s-intelligence-facility/>.

21 Anthony Wayne, “Ambassador’s Remarks for Opening Ceremony of International Gang Training Conference”, Junio 10, 2013, http://mexico.usembassy.gov/eng/ebio_ambassador/texts/ambassadors-remarks-for-opening-ceremony-of-international-gang-training-conference.html.

22 Puebla Noticias, “Puebla contará con la mejor Academia de Profesionalización Policial del mundo”, Febrero 21, 2012, <http://pueblanoticias.com.mx/noticia/puebla-contara-con-la-mejor-academia-de-profesionalizacion-policial-del-mundo-17149/>.

táctico, técnicas de combate, métodos de transportación de prisioneros de alto riesgo, cursos de investigación policiaca, protección de altos dignatarios, y una clase de “Derechos Humanos y Uso Racional de la Fuerza”.²³ Debe haberseles olvidado que Ignacio Zaragoza, cuyo nombre lleva la Academia, peleó contra Estados Unidos tras la anexión de Texas —definitivamente no el tipo de agresión que están promoviendo. Una “población táctica” financiada por EUA para entrenar oficiales de seguridad fue abierta en la Academia en Puebla a finales de 2013.²⁴ Policías estadounidenses también están entrenando a sus contrapartes mexicanos en un centro similar en el estado de San Luis Potosí, y hay proyectos de abrir más centros de este tipo con recursos y personal de EUA.

La guerra antidrogas en Colombia proporcionó un modelo para México, y los oficiales de seguridad y policías de ambas naciones han trabajado cada vez más de cerca desde 2006. “Colombia y México están más unidos que nunca en la lucha contra el crimen organizado transnacional y también están listos para colaborar con otros países en la región para combatir esta escoria, particularmente con nuestras naciones hermanas en Centroamérica” afirmó el presidente Calderón en 2011.²⁵ En 2012, la policía colombiana entrenó a 12,000 policías mexicanos en temas especializados como seguridad civil, antidrogas y antisequestros.²⁶ La policía francesa y colombiana entrenaron a los 390 primeros comandantes de la Gendarmería Nacional.²⁷ Enrique Peña Nieto nombró al oficial de policía colombiano Óscar Naranjo como asesor durante su campaña presidencial, y declaró que Colombia le dio a él y al mundo un modelo exitoso de cómo alcanzar la paz y la seguridad.²⁸ Naranjo regresó a Colombia a principios de 2014, tras la oleada de grupos de autodefensa en Michoacán.

23 Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Iniciativa Mérida Gral. Ignacio Zaragoza, “Oferta Educativa”, undated, <http://www.academianacionalpuebla.mx/oferta-educativa.php>.

24 Anthony Wayne, “Ambassador’s Remarks at Tactical Village Ribbon Cutting”, Diciembre 10, 2013, http://mexico.usembassy.gov/eng/ebio_ambassador/texts/ambassadors-remarks-at-tactical-village-ribbon-cutting.html.

25 Patrick Corcoran, “Mexico, Colombia Talk Security, Tied by Drug Trade”, Insight Crime, Agosto 3, 2011, <http://insightcrime.org/insight-latest-news/item/1338-mexico-colombia-talk-security-tied-by-drug-trade>.

26 Staff, “Capacitará Colombia a 12 mil policías mexicanos en lucha antidroga”, *Animal Político*, Abril 13, 2012, <http://www.animalpolitico.com/2012/04/capacita-colombia-12-mil-policias-mexicanos-en-lucha-antidroga/>.

27 EFE, “Jefes de la Gendarmería mexicana reciben capacitación de Francia y Colombia”, Marzo 3, 2014, <http://www.efc.com/efe/noticias/usa/mexico/jefes-gendarmeria-mexicana-reciben-capacitacion-francia-colombia/5/50038/2255439>.

28 Belén Zapata, “Un exdirector de la policía de Colombia asesora a Peña Nieto en seguridad”, *CNN Español*, Junio 14, 2012, <http://mexico.cnn.com/nacional/2012/06/14/un-exdirector-de-la-policia-de-colombia-asesora-a-pena-nieto-en-seguridad>.

El despliegue de más de 50,000 soldados, así como miles de policías federales y más de 2,200 policías estatales y locales en nombre del combate al narcotráfico ha dado como resultado un aumento en la violencia en todo México. En algunos estados como Tamaulipas y Veracruz, la policía local ha sido totalmente reemplazada por soldados, marinos y policías militares. De acuerdo con un reporte de 2011 de Human Rights Watch, la política de seguridad militar de Calderón “dio como resultado un incremento dramático en violaciones graves a los derechos humanos, prácticamente ninguna de las cuales parece ser investigada adecuadamente”.²⁹ El reporte documenta “39 ‘desapariciones’ en las que la evidencia apunta contundentemente a la participación de fuerzas de seguridad” y “evidencia plausible en 24 casos de que las fuerzas de seguridad realizaron ejecuciones extrajudiciales, y en la mayoría de estos casos tomó acciones para ocultar sus crímenes”.³⁰ También señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México “recibió 691 quejas de abusos a derechos humanos cometidos por soldados contra civiles entre 2003-2006; la cifra aumentó a 4,803 quejas en el periodo 2007–2010 [precisamente el mismo periodo de la Iniciativa Mérida]. Y mientras que la comisión emitió cinco recomendaciones que concluían que las autoridades federales habían cometido torturas entre 2003 y 2006, emitió veinticinco entre 2007 y 2010”.³¹ Estos números sólo representan una fracción del número total de abusos; según el mismo reporte, “Encuestas nacionales han hallado que casi 90 por ciento de los crímenes en México no se denuncian”.³²

El apoyo de EUA a la policía y al ejército no ha impedido la corrupción o la colaboración de estas instituciones con el crimen organizado. Las relaciones entre las fuerzas estatales y los grupos del crimen organizado en el hemisferio se remontan a los primeros días del narcotráfico. Por ejemplo, tras la revolución cubana en 1959, los traficantes anticastristas mudaron sus operaciones a Miami. “De vez en cuando, los capos eran protegidos por la CIA, ya que representaban un importante baluarte en la lucha contra Castro”.³³ En México se han escrito suficientes libros sobre la cooperación del gobierno con los cárteles como para formar una pequeña biblioteca.

29 Human Rights Watch, “Neither Rights nor Security”, Noviembre 2011, <http://www.hrw.org/reports/2011/11/09/neither-rights-nor-security-0>, 5.

30 *Ibid.*, 6.

31 *Ibid.*, 7.

32 *Ibid.*, 6.

33 German Alfonso Palacio Castañeda, “Institutional Crisis, Parainstitutionality, and Regime Flexibility in Colombia: The Place of Narcotraffic and Counterinsurgency”, in *Vigilantism and the State in Modern Latin America*.

Uno de los clásicos es *Drug Lord* de Terrence Poppa, que muestra cómo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país siete décadas consecutivas, colaboró con los narcotraficantes. El libro *Los señores del narco* de la periodista mexicana Anabel Hernández, aborda el tema desde otra arista, documentando detalladamente cómo el Partido Acción Nacional (PAN), que gobernó México durante doce años tras la caída del PRI en 2000, llegó a pactar con el Cártel de Sinaloa. Sin abundar en detalles, es fácil demostrar cuán pequeña es la dicotomía entre los gobiernos y los traficantes. El profesor William I. Robinson de la Universidad de California en Santa Bárbara lo dice de manera contundente: “No hay una guerra del Ejército Mexicano y de la policía contra el narcotráfico”. Más bien, afirma, lo que está sucediendo es un reacomodo de poder entre los grupos involucrados en el comercio de drogas, que incluyen empleados de gobierno y miembros de las fuerzas estatales.

Al reflexionar sobre este binomio artificial, uno llega a preguntarse: ¿en qué otras situaciones antagónicas han existido tantos elementos de alto nivel estatal, militar y policiaco expuestos como colaboradores trabajando para grupos que supuestamente son “el enemigo”? En la guerra antidrogas no escasean los ejemplos. “El ejército es parte del Estado mexicano, los policías son parte del Estado mexicano, y el PRI y el PAN y los demás partidos políticos están de una u otra forma articulados con el Estado mexicano, y una buena parte de ellos están tan profundamente involucrados [en el narcotráfico] que realmente se trata de una guerra para decidir quién controlará las ganancias de las drogas”, dijo Robinson en una entrevista de 2011 en la Ciudad de México. “Sabemos que el ejército y la policía de hecho protegen a los cárteles a cambio de pagos, eso está muy extendido”. Las acciones para deshacerse de los políticos y policías involucrados en actividades ilícitas son con frecuencia puestas en escena para limpiar la imagen del gobierno, y también puede funcionar para quitarle a un grupo privilegios que rápidamente se redistribuyen entre otros.

En *Los señores del narco*, Hernández señala a Genaro García Luna, que fue Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, como un participante activo en el narcotráfico, y no es inusual enterarse de oficiales de alto rango participando en esta práctica. En 2012, los gobiernos de México y EUA iniciaron investigaciones sobre tres exgobernadores de Tamaulipas por sus presuntas actividades de lavado de dinero y lazos con el Cártel del Golfo y Los Zetas.³⁴ O recuérdese el caso de la Dirección Federal de Seguridad (DFS),

34 Yolanda Figueroa, *El Capo del Golfo*, 31. Sierra Guzmán y Jorge Luis, *El Enemigo Interno: Contrainsurgencia y Fuerzas Armadas en México* (Madrid: Plaza y Valdes, 2003), 120. Re-

la fuerza política responsable de reprimir guerrillas en todo México en los años 60 y 70: “Usando como salvoconductos sus credenciales de la DFS, los agentes regularmente escoltaban cargamentos de narcóticos, y solían incluso vender cargamentos confiscados a organizaciones favorecidas... Después, las investigaciones develaron que la DFS se embarcó en un ambicioso proyecto para extender la protección a escala nacional, organizando tanto territorio del país como fuera posible, bajo un sistema unificado”.³⁵ Los dirigentes de organizaciones de policía y grupos antinarcóticos con frecuencia son acusados de colaborar con el crimen organizado,³⁶ y ciertas unidades antisequestro de la policía mexicana han sido eliminadas porque manejaban bandas de secuestradores. En 1990, el presidente Carlos Salinas despidió al líder de la Marina y a cincuenta marinos por sus lazos con el narcotráfico.

Es bien sabido que muchos oficiales de policía trabajan a la vez para el Estado y para los grupos criminales en ciudades y poblaciones del noreste mexicano.³⁷ Desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) formaron el más temido grupo paramilitar en México, Los Zetas.³⁸ Aunque fueron de las últimas unidades que recibieron ese entrenamiento, miembros del GAFE también fueron entrenados en Estados Unidos entre 1996 y 1998.³⁹ Elementos de los Kaibiles, la fuerza de élite de Guatemala, también entrenada por EUA, han figurado entre Los Zetas, algunos todavía enlistados como miembros activos del ejército.⁴⁰ Muchos narcotraficantes identificados por Estados Unidos y México son soldados retirados o policías, algunos de los cuales han recibido entrenamiento internacional.

La distinción entre el Estado y las fuerzas criminales resulta más cuestionable debido a la conexión de EUA con el negocio de la droga. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EUA (ATF) permitió que 2,000 armas de alto calibre se “escaparan” de las tiendas

porte Indigo, “La DEA detrás de exgobernadores”, *Excelsior*, Febrero 11, 2012, <http://www.vanguardia.com.mx/ladeadetrasdeexgobernadores-1216637.html>. La Redacción, “Exmiembro de Los Zetas incrimina a exgobernadores de Tamaulipas con el narco”, *Proceso*, Febrero 2, 2012, <http://www.proceso.com.mx/?p=296970>.

35 T. Poppa, *Drug Lord* (New York: Pharos Books, 1998), 167.

36 Ver, por ejemplo, Consulate Monterrey, “Border Violence Spreads to Nuevo Leon”, Febrero 26, 2010, <http://wikileaks.org/cable/2010/02/10MONTERREY43.html#par9>.

37 Rubén Mosso, “Detienen a 16 policías por proteger matanzas de Los Zetas en San Fernando”, *Milenio*, Abril 13, 2012, <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/434f5cc48739b1e6f-2b64e6cf286ba60>.

38 Según su propia admisión, los EE. UU. capacitaron al menos a uno de sus miembros: Departamento de Estado de EE. UU., “Subject: Setting the Record Straight on Zetas and U.S. Military Training”, Agosto 21, 2009, <http://wikileaks.org/cable/2009/08/09MEXICO2473.html>.

39 *Ibid.*

40 Dawn Paley, “Strategies of a New Cold War”.

estadounidenses a manos de sicarios y miembros conocidos de los cárteles, supuestamente para obtener información que condujera a capturas, pero estas mismas armas aparecieron en escenas del crimen donde más de 150 civiles fueron lastimados o asesinados.⁴¹ Tanto en México como en otros lados, la DEA y la CIA facilitan el traspaso de narcóticos entre grupos clandestinos bajo la premisa de que redundarán tarde o temprano en arrestos de alto perfil. Por ejemplo, en 2011, el hijo de uno de los dirigentes del Cártel de Sinaloa testificó en una corte de EUA que antes de 2004, el gobierno de EUA llegó a un acuerdo con los líderes del cártel. “Bajo el acuerdo, el Cártel de Sinaloa [por medio del abogado mexicano Humberto Loya Castro], aceptaba proveer al gobierno de EUA información acumulada por el Mayo, Chapo, y otros contra organizaciones rivales del narcotráfico en México. A cambio, el gobierno de Estados Unidos accedía a abandonar el enjuiciamiento del caso pendiente contra Loya, a no interferir con sus actividades de narcotráfico y con las del Cártel de Sinaloa, a no enjuiciar ni a él, al Chapo, Mayo o la cúpula del Cártel de Sinaloa, y a no arrestarlos”.⁴² Los acuerdos entre el gobierno y sectores del narco ilustran cómo la guerra antidrogas también es usada para atacar a ciertos narcotraficantes y miembros de la clase política, mientras que a otros se les dan facilidades para asegurar que su producto llegue al mercado.

Ciudad Juárez es un devastador ejemplo de lo que puede pasar cuando cientos de policías y soldados son enviados a un ambiente urbano a luchar la “guerra antidrogas”. El telón de fondo de la violencia en Juárez, como en otras ciudades fronterizas, es la industria maquiladora. Un reporte informa que “Los municipios con las mayores desigualdades entre los estados fronterizos del centro y este de la República Mexicana son aquellos con el sector maquilador más desarrollado, los que reciben el mayor flujo de migrantes y que a su vez poseen importantes reservas de hidrocarburos u otros recursos naturales”.⁴³ A finales de marzo de 2008, miles de soldados y policías federales llegaron a Juárez como parte de una brigada del gobierno contra el narco. Poco después, la tasa de homicidios se disparó, la violencia aumentó y los secuestros se multiplicaron. “Lo que se ha visto aquí en la ciudad es que se militariza el último día de marzo del 2008, llegan las fuerzas

41 Kim Murphy y Ken Ellingwood, “Mexico Demands Answers on Guns”, *Los Angeles Times*, Marzo 11, 2011, <http://articles.latimes.com/2011/mar/11/nation/la-naw-mexico-guns-20110311>.

42 Bill Conroy, “US Court Documents Claim Sinaloa ‘Cartel’ Is Protected by US Government”, *Borderland Beat*, julio 31, 2011, <http://www.borderlandbeat.com/2011/07/us-court-documents-claim-sinaloa-cartel.html>.

43 Guadalupe Correa-Cabrera, “Desigualdades y flujos globales en la frontera noreste de México”, http://www.desigualdades.net/Resources/Working_Paper/64-WP-Correa-Cabrera-Online.pdf?1393595421.

federales aquí, miles de efectivos del Ejército y la Policía Federal”, me dijo Carlos Yeffim Fong, activista y estudiante, en una entrevista a finales de 2011.⁴⁴ En el clímax de la militarización de Ciudad Juárez, entre 2009 y 2010, al menos 5,000 policías federales y 5,000 soldados ocupaban la ciudad (una fuente en Juárez calcula un total de 13,000).⁴⁵

“En general estamos hablando que antes de que llegaran los soldados, había un promedio de dos asesinados diarios, y cuando llegaron los soldados, empezó a subir a cinco y luego de ahí subió a diez”, me relató Fong, acariciándose la barba mientras hacía una pausa para reflexionar. “Hemos visto varios casos donde el Ejército y la policía federal mataron a menores de edad; y policías y soldados involucrados directamente en robos”.

Con el tiempo me volví a encontrar muchas veces con Fong. Nuestra segunda entrevista sucedió en una casa ocupada por activistas locales en el centro de la ciudad. Muy atento a lo que lo rodea, Fong se mueve cautelosamente, prestando atención a los vehículos; se asegura de que siempre haya alguien que sepa dónde está. Estas medidas de seguridad son una precaución mínima cuando se tiene una posición pública tan clara en un lugar como Ciudad Juárez. La gente también asocia a los federales con el secuestro, que permite obtener dinero con poco riesgo a través de la extorsión. “Cuando sube la ola de secuestros, es porque llega la Policía Federal. O sea, antes de eso no había crecido la ola de secuestros” dijo Leobardo Alvarado, responsable de la plataforma de comunicación independiente *Juárez Dialoga*. Tan solo dos meses antes de nuestra entrevista en Juárez, diez federales desplegados ahí fueron apresados por extorsionar y secuestrar a civiles.⁴⁶ A principios de 2014, 18 soldados fueron acusados y sentenciados por su papel en 2008 en una tortura y asesinato durante la Operación Conjunta Chihuahua, en un raro caso de investigación y enjuiciamiento de soldados por sus crímenes.⁴⁷

En los diez años previos a que la región fuera militarizada, el estado tenía en promedio 586 homicidios por año, y nunca rebasó los 648. Entre 2008 y 2013, Chihuahua se convirtió en uno de los estados más violentos del país. Hubo 2,601 homicidios en 2008; 3,671 en 2009; 6,407 en 2010; y 4,500

44 The first time I met Fong, whose father was a renowned activist in Chihuahua, was at the Autonomous University of Ciudad Juárez (UACJ).

45 Jorge Balderas Domínguez, *Discursos y narrativas sobre violencia, miedo e inseguridad en México* (University of Leiden: Doctoral Thesis, 2012), 123.

46 Marcos Muedano, “A prisión, 10 policías federales”, *El Universal*, Septiembre 29, 2011, <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/189396.html>.

47 Carlos Huerta, “Tribunal confirma la participación de militares en crimen de juareense”, *Norte Digital*, Enero 21, 2014, http://www.nortedigital.mx/59211/tribunal_confirma_la_participacion_de_militares_en_crimen_de_juareense/.

en 2011, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).⁴⁸ Más de 10,000 personas fueron asesinadas en Juárez tras la llegada de tropas entre 2008 y principios de 2012. Las autoridades con frecuencia declaraban que las víctimas estaban involucradas con el narcotráfico, pero los asesinatos casi nunca se investigan. “Sí, ha habido trifulcas de matones contra matones, como dice, o de matones contra soldados que los detuvieron y les respondieron abriendo fuego, pero hay muy pocos casos como esos. La mayoría de los asesinatos son ‘entre’ las personas, bueno, las personas que murieron no estaban armadas”, dijo el doctor Padilla, profesor de la UACJ, con una risa seca. Cuando conocí a Padilla, padre de dos hijos, que reparte su tiempo entre Juárez y El Paso, él estaba trabajando arduamente en un proyecto de investigación para entender cualitativa y cuantitativamente la violencia en la ciudad. “La mayoría son personas que se encontraban en tránsito, o que estaban trabajando, o en su casa y llega alguien y... pum”, dijo, haciendo una pistola con los dedos y apretando el gatillo.

Es muy difícil entender los hechos en Juárez desde el inicio de la guerra antidrogas. Una tarde de 2011, mientras conducíamos por las calles desiertas de la ciudad, Alvarado me expuso su versión. Me describió que la violencia se ha dado en oleadas que se pueden identificar a partir de la cobertura mediática de asesinatos. En 2007 y principios de 2008, se dio una ola de homicidios dirigidos contra abogados, dueños de casas de cambio y otros residentes de clase media. En enero de 2008, hubo una ola de asesinatos contra agentes de policía —particularmente de nivel medio con un historial de vínculos con el narco. “Luego, en mayo de 2008 empieza lo que sería para mí la gran limpieza. Empiezan a asesinar a muchas personas con un perfil de clase social bajo, ¿sí? Estas personas se caracterizaban por estar dentro del sistema de pandillas, vivían en las colonias periféricas, y en ciertos sectores que históricamente fueron conflictivos en la ciudad. Fue increíble cómo asesinaron personas ahí, ahora sí de manera masiva y sistemática. Cuando vemos las estadísticas, vamos a ver con mucha claridad que llega un momento cuando asesinan a personas de esta edad, mayores de 25 años, luego al paso del tiempo, jóvenes (sobre todo hombres) de menos de 25, hasta menos de 15 años”. Alvarado, que ha vivido en Ciudad Juárez desde la adolescencia, me explicó que las pandillas se popularizaron hacia finales de los años 90, y aclaró que no todas las pandillas están involucradas en el tráfico local de drogas, aunque una parte del sistema de pandillas esté

48 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Mortalidad: Conjunto de datos: Defunciones por homicidios”, 2011, http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQuery-Datos.asp?#Regreso&c=2882.

dedicado al narcomenudeo. Después me explicó que otra ola de asesinatos se concentró en secuestradores y extorsionadores que operaban al margen de los grupos del crimen organizado —criminales no sindicalizados, les llama—, gente que sacaba provecho del clima generalizado de inseguridad probando suerte en el secuestro y la extorsión. “Al no estar adentro de las estructuras de la delincuencia organizada, como la llaman, pues fácilmente eran presa de esta limpieza que servía para alimentar el discurso de que algo se estaba haciendo”. La explicación de Alvarado, basada en un cuidadoso seguimiento de los periódicos y de decenas de fuentes formales e informales en la ciudad, es una entre distintas aproximaciones a lo que ha sucedido en Juárez en los últimos años. No obstante, es una explicación que captura lo esencial de lo que sucedió en la convulsa ciudad fronteriza después de que se volviera en 2008 la zona de mayor impacto de la guerra antidrogas: la eliminación extrajudicial de ciertos criminales, policías y sectores populares se expandió trágicamente, transformándose en una limpieza social masiva contra los jóvenes sin recursos en comunidades marginadas. Los perpetradores fueron muchas veces policías y soldados, y los homicidios sirvieron como prueba de que, como Alvarado dijo, “algo” se estaba haciendo para combatir el crimen.

Se cree que en el mismo periodo se ha profundizado la complicidad policiaca en el narcotráfico en Juárez. “Siempre hay una línea muy cercana, pues, o son los mismos”, opina el periodista Julián Cardona, que ha vivido en Juárez más de treinta años. “Es que siempre la policía y todos los aparatos del Estado, todas las instituciones del Estado han sido garantes del narcotráfico”. Según Cardona, conforme crecían el mercado interno de drogas en México por la mayor vigilancia de las fronteras de EUA tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, los policías empezaron a vender drogas ellos mismos, a ejecutar gente, e incluso a transportar cuerpos en las patrullas, todo lo cual se reducía a que estaban ganando más dinero. En vez de eliminar estos fenómenos, la militarización de la ciudad parece haberlas exacerbado. “Lo que pasa es que cuando llegan los federales a Juárez, y el ejército, tienden a desplazar de sus mercados a los policías locales, ya sean estatales o municipales”, me dijo Cardona en 2011. Alto y muy delgado, Cardona ha trabajado como intermediario de algunos de los periodistas de más alto perfil que han visitado Juárez. Cuando nos reunimos en un Starbucks en la autopista Panamericana (que él llama bromeando en parte su oficina), teníamos planeado solamente platicar, pero después insistió en llevarme a conocer algunas de los sitios destacados de la ciudad, incluyendo una narco-cantina casi vacía donde estuvo recordando cómo era vivir en la

ciudad cuando había mucho flujo de dinero. Otro día me llevó a un barrio histórico del centro donde hubo clubes de *table dance* que ahora están en ruinas. Era obvio que sentía nostalgia por los viejos tiempos, y que también estaba muy afectado por la violencia en la ciudad. La última vez que me reuní con él, a finales de 2013, me dijo bromeando que ahora que la policía y los soldados se habían ido de la ciudad, la violencia había disminuido y ya no había mucho trabajo para él.

Ninguno de los reportes de la complicidad de la policía y el ejército en actividades criminales es particularmente sorprendente, pero lo que *sí* es sorprendente es que la mayoría de los informes de los medios y las llamadas opiniones de expertos sobre la violencia en Ciudad Juárez y otros sitios no asociaran el incremento de fuerzas policiales y militares con los picos de violencia. Véase por ejemplo cómo lo aborda Steven Dudley —que trabaja para el grupo estadounidense InSight Crime y en ocasiones colabora con el Woodrow Wilson Center; a principios de 2013, escribió, “El año pasado fue el periodo de 12 meses menos violento desde 2007, pues el gobierno estatal registró 740 asesinatos. Las tasas de homicidio son una quinta parte de lo que eran a principios de 2011. Naturalmente, algunos analistas y autoridades se han concentrado en los grupos criminales para explicar por qué los homicidios han caído tan rápidamente”.⁴⁹ Este reporte ignora el lazo entre el aumento de presencia armada y el de los asesinatos en Juárez; cuando la policía y los soldados fueron retirados de Juárez y enviados a otras partes del país, la violencia en Juárez cayó.

Lo que Dudley no percibió es totalmente obvio para los residentes de la ciudad. Siempre recordaré cómo, cuando le pregunté a Cardona a quién debía entrevistar sobre el papel de la policía en los asesinatos y la violencia en la ciudad, sin pensarlo dos veces me respondió que le preguntara a quien fuera, a cualquiera que me cruzara en la calle. En mis sucesivas visitas a Ciudad Juárez hice caso de su consejo y tuvo toda la razón. Las estadísticas lo confirman: un estudio de 2010 realizado por la UACJ encontró que en promedio uno de cada cuatro residentes de la ciudad habían sido víctimas de la violencia policial.⁵⁰ El velo sobre los ojos tiene que estar muy bien ajustado para no ver la conexión entre el despliegue masivo de policías y soldados para luchar contra enemigos internos y los asesinatos sistemáticos de poblaciones marginadas.

49 Steven Dudley, “Juarez After the War”, *InSight Crime*, Febrero 13, 2013, <http://www.insight-crime.org/reports/juarez.pdf>, 6.

50 Balderas Domínguez, *Discursos y narrativas sobre violencia, miedo e inseguridad en México*, 123.

Al sur del país, en el estado de Guerrero, emergió un patrón similar en relación con la llegada de tropas federales y el incremento de la violencia. En 2012 y 2013, el puerto turístico de Acapulco recibió un flujo de policías federales y soldados bajo el pretexto de luchar contra el crimen organizado. En 2012, Acapulco reemplazó a Juárez como la ciudad más peligrosa de México, con 1,170 homicidios, o una tasa de 142.88 asesinatos por cada 100,000 habitantes.⁵¹ En octubre de 2013 una investigación condujo al arresto de 18 miembros de una banda de secuestradores, y 13 de ellos eran policías federales.⁵² Un vocero del gobierno declaró ante la prensa que el grupo de criminales y policías había llevado a cabo siete asesinatos y cuatro secuestros.

Prisiones

El programa estadounidense de Estado de Derecho en México va a la par de los esfuerzos contrainsurgentes, y es claro que los cambios al sistema jurídico mexicano están vinculados a la expansión del sistema penitenciario mexicano financiado por la Iniciativa Mérida. Recordemos que Estados Unidos ya ha apoyado “la expansión de instalaciones federales seguras, de 5 con una capacidad de 3,500 a 14 con una capacidad de 20,000”.⁵³ Las estadísticas señalan que una transición al sistema estadounidense es avanzar hacia un modelo que encarcela más y más personas. Según el Centro Internacional para el Estudio de las Prisiones (ICPS), las tasas de encarcelamiento en México han ido en aumento —de 186 por cada 100,000 habitantes en 2004; 197 en 2010; y 209 en enero de 2013.⁵⁴ Compárese esto con Estados Unidos, en donde se encarceló alrededor de 716 personas por cada 100,000 en 2011 —por mucho, el índice más alto en el mundo.⁵⁵

51 Seguridad, Justicia y Paz. “La violencia en los municipios de México, 2012”, Febrero 1, 2014, <http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/finish/5-prensa/164-la-violencia-en-los-municipios-de-mexico-2012/0>.

52 R. Fausset, “Federal Police in Mexico Accused of Being Part of Kidnapping Ring”, *Los Angeles Times*, Octubre 8, 2013, <http://www.latimes.com/world/worldnow/la-fg-wn-mexico-federal-police-kidnapping-ring-20131008,0,5728960.story>.

53 William Brownfield, “Security Cooperation in Mexico: Examining the Next Steps in the U.S.-Mexico Security Relationship”, Hearing Before the Senate Foreign Relations Committee Subcommittee on the Western Hemisphere and Global Narcotics Affairs, Junio 18, 2013, http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Brownfield_Testimony.pdf, 2.

54 International Centre for Prison Studies, “Mexico”, Enero 2013, http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=83.

55 *Ibid.*

La guerra antidrogas ha formado parte del programa para dar entrenamiento a los guardianes de prisiones extranjeras de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. Enviados de México, Afganistán y otros países viajaron a una prisión de mujeres convertida en el Centro Internacional de Entrenamiento en Administración de Correccionales en Cañon City, Colorado.⁵⁶ “Las amenazas son diferentes; las culturas son diferentes”, declaró Bill Claspell, coordinador del programa, al *Denver Post*, que reportó que “las estrategias para neutralizar a un capo criminal, un reclutador de supremacistas de raza blanca o un yihadista talibán son las mismas: aislamiento”.⁵⁷ Según un reporte de 2010 sobre el entrenamiento en Colorado de guardias mexicanos de prisión, los ejercicios se llevaron a cabo en una locación secreta, y el objeto principal del curso era la transportación de prisioneros de alto riesgo de una cárcel a otra: “Mucho de lo que aprenden es sobre estrategia. Las emboscadas muchas veces suceden por filtraciones de inteligencia. Los señores del narco les pagan a agentes federales mal remunerados para obtener información sobre cuándo suceden los traslados. En respuesta, las autoridades de Colorado les enseñaron a los agentes mexicanos a limitar cuántos oficiales de prisión saben cuándo suceden los traslados, les mostraron cómo usar señuelos y les explicaron cómo cambiar los periodos de movimiento. A veces tiene sentido hacerlo en medio de la noche”.⁵⁸

El *Wall Street Journal* reportó que para 2012 5,000 agentes de prisión mexicanos habían sido entrenados en Colorado.⁵⁹ También hay instalaciones para guardias mexicanos de prisión en Nuevo México (entrenamientos caninos), California (respuesta en emergencias), y Maryland (formación antipandillas), así como un programa de entrenamiento en Xalapa, Veracruz, financiado por la Iniciativa Mérida.⁶⁰ Además del entrenamiento para guardias de prisión, Estados Unidos ha proveído “equipo biométrico consistente en lectores de tarjetas de huellas digitales, reconocimiento de voz y kits de

56 US Department of State, “Public Notice of a Grant Award to Colorado Department of Corrections”, julio 5, 2011, <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/07/167594.htm>.

57 Kirk Mitchell, “Afghan General, Wardens Learn U.S. Prison Tactics at Canon City Center”, *Denver Post*, Septiembre 23, 2012, http://www.denverpost.com/ci_21610507/afghan-general-wardens-learn-u-s-prison-tactics.

58 Kirk Mitchell, “Mexican Federal Prison Officers Train in Colorado to Combat Drug-gang Attacks”, *Denver Post*, Septiembre 13, 2011, http://www.denverpost.com/ci_16059581.

59 N. Casey, “U.S. Shifts Mexico Drug Fight”, *Wall Street Journal*, Septiembre 17, 2012, <http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443720204578000463890865962.html>.

60 Embajada de México en EE. UU., “Fact Sheet – Corrections Reform”, Agosto 2013, <http://photos.state.gov/libraries/mexico/310329/agosto2013/factsheet-correctionsreform%20-%200813.pdf>.

prueba de ADN... Este equipo será colocado en instalaciones federales y estatales para la identificación segura de prisioneros y el registro en la Base de Datos Nacional”. Esta expansión del sistema penitenciario de México es crucial si las autoridades quieren conservar su control al sur de la frontera.

La frontera

La frontera México-Estados Unidos se ha convertido en un eje de la guerra antidrogas en México. En el proceso de documentar este libro visité y crucé la frontera decenas de veces, entre Juárez y El Paso, Nuevo Laredo y Laredo, y Reynosa y Pharr. De camino hacia Estados Unidos, la experiencia es siempre rígida y generalmente muy tecnificada, y las filas para cruzar pueden tardar horas. De camino hacia el sur la situación se invierte. En la mayoría de los cruces, literalmente no hay ningún obstáculo para cruzar de EUA a México; se puede hacerlo sin pasaporte. La enorme discrepancia entre los niveles de violencia a cada lado de la frontera me llevan a pensar que la porosidad de la entrada a México es un factor para que el nivel de la violencia en EUA sea mucho más bajo. No se trata de que no haya suficientes recursos para que las autoridades mexicanas examinen a todos los que entran, es sólo que no es una prioridad para Estados Unidos que lo hagan —ya que en Washington se decide cómo funcionan estas fronteras. La militarización de la frontera del lado estadounidense, y las duras e injustas restricciones sobre quién (y qué) puede entrar contribuyen a la concentración de grupos criminales (incluyendo policías, soldados y autoridades involucradas en el tráfico) al sur de la frontera.

Por supuesto, hay un sentimiento de mayor seguridad cuando se cruza la frontera de México a Estados Unidos. Muchos mexicanos están huyendo de la violencia, los secuestros, las amenazas y demás, yéndose a Texas. En mi caso, caminé sola por Laredo en la noche y no me sentí amenazada. Cuando visité Nuevo Laredo a principios de 2014, mis contactos se negaron a llevar a pasear por el centro en la noche, e insistieron que fuéramos en coche. Lo mismo me sucedió en McAllen y El Paso, en comparación con Reynosa y Juárez. En un nivel individual, despojado de contexto, es mucho más seguro estar del lado estadounidense, pero eso no cambia el hecho de que lo peor de la violencia en México sucede donde la frontera está militarizada, tanto del lado mexicano como el estadounidense, como en Tamaulipas y Chihuahua.⁶¹

61 Less than 13 percent of the Mexico-U.S. border is militarized on both sides. US GAO, “Border Patrol Strategy: Progress and Challenges in Implementation and Assessment Efforts”, Mayo 8,

Es importante comprender esta militarización dentro del marco de la contrainsurgencia. Laleh Khalili subraya que “Elbit Systems Ltd., la firma israelí involucrada en la construcción del muro de separación en Palestina, también ha estado contribuyendo a la ‘seguridad’ del muro de la frontera EUA-México. En respuesta al pánico moral sobre el terror, muchos programas de vigilancia domésticos adoptan tácticas militares de contrainsurgencia –en especial las de Israel– para el control de las poblaciones urbanas sospechosas”.⁶² En el caso de la frontera Estados Unidos-México, las poblaciones sospechosas son aquellas al sur de la frontera, y, en particular, grupos de mexicanos, centroamericanos y otros migrantes de camino al norte. En su libro *Border Patrol Nation*, el periodista Todd Miller reporta que desde el 11 de septiembre de 2001, el gobierno de EUA ha gastado 791 mil millones en el Departamento de Seguridad Nacional, la agencia responsable del control fronterizo. Miller especifica que “en 2012, los 18 mil millones gastados en seguridad fronteriza y de inmigración [superaron] todos los demás cuerpos federales de aplicación de la ley incluyendo al FBI, el Servicio Secreto, la Administración de Control de Drogas, el Servicio de Jefes de Policía y la Oficina de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego”. *Border Patrol Nation* especifica que antes de 1986 rara vez había más de 2,000 personas deportadas cada año. “A finales de los años 90, el gobierno de EUA estaba deportando más de 40,000 personas anualmente, apenas una fracción de lo que vemos hoy. A principios de los 2010, el Departamento de Seguridad Doméstica estaba expulsando mucho más de 400,000 personas por año de Estados Unidos”. Este drástico incremento en las deportaciones ha sucedido a la par de que varios estados norteamericanos –el más conocido es Arizona, pero también Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah– han aprobado leyes que obligan a las policías local y estatal a aplicar la ley de inmigración. Las comunidades de color, en especial las que viven cerca de la frontera, experimentan con crudeza los efectos de la militarización de la frontera en Estados Unidos. Sin embargo, la violencia al sur de la frontera no debería considerarse un fenómeno totalmente separado, pues de alguna manera se trata de un espeluznante reflejo de la política estadounidense de militarización fronteriza.

El área del Río Grande se ha transformado en un campo experimental para el resto de la frontera de EUA con México, desde el oeste de El Paso y Ciudad Juárez hasta el Atlántico. “El propósito es usar Texas como un

2012, <http://www.gao.gov/assets/600/590687.pdf>.

62 Laleh Khalili, “The Location of Palestine in Global Counterinsurgencies”, *International Journal of Middle East Studies* 42 (2010): 420.

modelo para una campaña nacional que detendrá la intrusión transfronteriza de estos insidiosos y peligrosos grupos criminales”, afirma un documento de 2011 respaldado por el Departamento de Agricultura de Texas. Oficiales superiores de Texas le dijeron a los militares retirados que redactaron el reporte que “gran parte de su esfuerzo se derivaba de la experiencia en campañas recientes en Irak y Afganistán”.⁶³ En 2006, Texas, bajo la gubernatura de Rick Perry, lanzó la estructura de Comando Unificado (UC) en seis centros urbanos a lo largo de la frontera Texas-México, a través de la coordinación de organizaciones federales, estatales y autoridades indígenas reconocidas por el gobierno federal, incluyendo las Fuerzas Especiales Conjuntas contra el Terrorismo, la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, departamentos locales de policía, Parques y Vida Silvestre, fuerzas militares estatales, la Oficina de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego, y el FBI. En el UC estos grupos armados trabajan en conjunto con otras agencias de gobierno, incluyendo el Servicio Postal y el Departamento de Transporte; corporaciones, incluyendo UPS y FedEx; así como grupos no gubernamentales como la reaccionaria Asociación de Ganaderos de Texas y el Sudoeste. Para facilitar el intercambio de información entre los UCs localizados en El Paso, Big Bend, Del Río, Laredo, McAllen, y Coastal Bend, fueron creados seis “comandos tácticos unificados”, conocidos como Centros de Operaciones Conjuntas e Inteligencia (JOIC), uno en cada ciudad. “Los UC/JOICs de hecho replican el sistema militar del comando y control conjuntos que ha sido tan exitoso en Irak y Afganistán”, afirma el reporte.⁶⁴

Las fronteras juegan un papel extremadamente importante en cómo se organizan actualmente las sociedades. En *Undoing Border Imperialism*, la escritora y activista Harsha Walia describe la naturaleza general de los controles fronterizos como imperialismo de fronteras. En resumen, emerge de la confluencia de cuatro prácticas centrales, encabezadas por Estados naciones y acompañadas por procesos activos de acumulación capitalista: la primera es capitalismo e imperio, que sostienen el sistema entero; le sigue la criminalización de los migrantes; la producción de identidades nacionales raciales, sexistas e imperiales; y la negación de la residencia legal y la ciudadanía a los migrantes.⁶⁵ “Los controles fronterizos se usan para disuadir a aquellos para los que migrar es la única opción debido al saqueo

63 B. McCaffrey y R. Scales, “Texas Border Security: A Strategic Military Assessment”, Septiembre 2011, http://texasagriculture.gov/Portals/0/DigArticle/1623/46982_Final%20Report-Texas%20Border%20Security.pdf.

64 *Ibid.*

65 Harsha Walia, *Undoing Border Imperialism* (Oakland: AK Press, 2013).

de sus comunidades y economías por las libertades otorgadas al capital y los militares”, escribe.⁶⁶ Además de su papel como espacios de control social y creación de un sistema laboral de *apartheid*, las fronteras cada vez se usan más en el contexto de la guerra antidrogas como plataformas de lanzamientos para la militarización y la violencia. Por ejemplo, para que la guerra antidrogas se despliegue en el sur de México, se necesitará un programa de militarización fronteriza en los límites con Guatemala y Belice, con el fin de dar al Estado el espacio y las condiciones para interrumpir los flujos de personas y narcóticos. Entre más abiertas estén las fronteras, y haya menos controles de la autoridad al movimiento de personas a través de aquellas, menos violencia experimentarán las comunidades de los alrededores.

Ganancias

Desde hace tiempo está claro que el estímulo a la vigilancia en México está destinado a proteger intereses comerciales. En agosto de 2011, el exsecretario de economía de México Bruno Ferrari declaró a *Bloomberg* en una entrevista en inglés que “Actualmente lo que estamos viendo es que tenemos una gran pelea contra el crimen, así que, como dije, garantiza las inversiones futuras y las inversiones que estamos teniendo ahora porque lo que estamos viendo es que México está peleando para imponerse sobre el crimen”.⁶⁷ La afirmación de Ferrari está respaldada por las experiencias de la élite trasnacional de negocios.

“Las multinacionales en México prácticamente no se han visto afectadas, con excepción del sector minero”, dijo Alejandro Hope, analista radicado en la Ciudad de México. “Sí ha habido algunos casos, pero la extorsión es un fenómeno más bien dirigido hacia las pequeñas y medianas empresas. Ha habido algunos secuestros, pero no muchos”, me dijo en una sala común del Instituto Mexicano para la Competitividad. Rafael McCadden, que trabaja con el grupo de bienes raíces Colliers International, comentó: “No vemos compañías yéndose de México por asuntos de seguridad. Estamos atestiguando expansiones, lo cual significa que están planeando quedarse”.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*, 31.

⁶⁷ Bloomberg, “Mexico’s Ferrari on Foreign Investment, Economy”, *Bloomberg*, Agosto 22, 2011, <http://www.bloomberg.com/video/74229052/> (at 19:45, his comments were made in English).

⁶⁸ North American Production Sharing, Inc., “Manufacturing in Mexico: Industrial Real Estate”, Marzo 8, 2013, <http://news.cision.com/kindling-media/r/manufacturing-in-mexico--industrial-real-estate,c9382673>.

Se afirma con frecuencia que la militarización enfocada a proteger al sector corporativo beneficia a la sociedad en general, como en esta declaración de un periódico militar estadounidense: “El Presidente Calderón prometió mejorar la seguridad, mejorando de esa manera la prosperidad para el pueblo mexicano”.⁶⁹ Los lazos entre los programas antinarcóticos y la economía son cruciales, pero fuera de su mención en la prensa militar y financiera, se les coloca en categorías separadas o se les ignora por completo.

De acuerdo con un artículo de portada de 2009 en *Business Week*, los ataques contra personales y fábricas extranjeras han sido raros en Juárez y otras ciudades fronterizas a lo largo de rutas de narcotráfico como Reynosa, Nuevo Laredo y Tijuana.⁷⁰ Hay policías desplegados con instrucciones especiales de proteger a las corporaciones transnacionales. Tras el secuestro de un ejecutivo empresarial, la policía le sugirió a los gerentes alterar sus rutinas de trabajo, abandonar Ciudad Juárez al atardecer y no salirse de los caminos principales. El patrullaje se reforzó a lo largo de estas rutas, “creando corredores relativamente seguros entra la frontera y los parques industriales”.⁷¹ En otras zonas fronterizas, el nivel de represión y violencia ha sido tan intenso como en Ciudad Juárez, pero la situación está menos documentada. En Nuevo Laredo y otros sitios, los conductores de radio locales han usado mensajes en código como “hace calor afuera” o “el día no está muy bonito” para advertir al auditorio que se quede adentro y no se ponga en peligro. En esa ciudad estratégica, el cruce comercial más activo de la frontera México-EUA, las bazucas, granadas y coches bomba comenzaron a aparecer muy temprano en la guerra. En 2010, el consulado estadounidense fue el objetivo de un ataque con granadas: “Todo lo que está pasando en el país, toda la violencia, empezó aquí en Nuevo Laredo”, dijo un joven abogado de la ciudad que está justo enfrente de Laredo, al otro lado del Río Bravo. En 2003, durante la presidencia de Vicente Fox, Nuevo Laredo se llenó de 10,000 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP, que antecedió a la Policía Federal) y soldados. “En cada esquina había cuatro o cinco PFPs, desde los límites de la ciudad hasta el puente”, me dijo el abogado. “Mientras eso pasaba, la violencia aumentó. La policía local fue infiltrada y se enfrentó con la federal. Con el tiempo nos enteramos de que otro grupo se había infiltrado a la policía federal. En Nuevo Laredo había enfrentamientos entre la policía municipal y el ejército, y con la policía

69 Renuart y Baker, “U.S.-Mexico Homeland Defense: A Compatible Interface”.

70 P. Engardio y G. Smith, “The Other Mexico: A Wave of Investment”, *Businessweek*, Abril 9, 2009, http://www.businessweek.com/magazine/content/09_16/b4127034232864.htm.

71 G. Smith, “Doing Business in Harm’s Way”, *Businessweek*, Abril 9, 2009, http://www.businessweek.com/magazine/content/09_16/b4127034241721.htm.

federal”. En una visita, crucé el puente caminando desde Laredo y fue a un pequeño mercado de Nuevo Laredo que alguna vez había estado lleno de restaurantes y puestos de suvenires para los “gringos” que cruzaban en viajes de un día. En cada uno de los puestos, trataba de entablar plática con los vendedores. Uno de ellos entró en confianza, y empezó a murmurar cuando le dije que era periodista. Me dejó claro que no podía grabarlo, pero quería decirme algo importante, dijo. “El ejército está cazando muchachos en las orillas de la ciudad. Los está cazando como animales, y los matan, así nomás”.

Siempre recordaré una tarde que pasé en Nuevo Laredo a finales de 2011, cuando la ciudad era una de las más peligrosas en México. La presencia del crimen organizado operando en las narices del ejército se notaba de inmediato, justo al llegar a la mitad del puente fronterizo que separa Laredo, Texas, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Gente con la que había platicado en Reynosa decía que ir a la Comisión de los Derechos Humanos local, pagada por el gobierno, era como ir directamente con los narcos —no había diferencia perceptible entre los grupos del crimen organizado y el gobierno estatal. Tamaulipas es conocido, por un lado, debido a historias terribles como la masacre de 72 migrantes y el descubrimiento de una serie de fosas comunes en 2011, pero también se le considera un estado donde “no pasa nada” —donde los periodistas están totalmente controlados por el Estado y los cárteles, y donde los gobiernos locales no llevan estadísticas.

Le pregunté al joven abogado, quien había sido secuestrado algunos años antes, qué pensaba que pasaría en Nuevo Laredo en los próximos años. “Nuestra teoría es que no va a cambiar porque el tipo de gobierno que el PRI históricamente siempre ha soñado tener es con el ejército en las calles; con tener un medio de control donde la gente no pueda rebelarse contra ellos, donde no pueda levantarse en contra de ellos. Un Estado totalitario y el PAN lo hizo para ellos, el PAN sacó al ejército a las calles y ellos ni por accidente lo van a devolver a los cuarteles”, concluyó. Sus amigos son colaboradores de Morena, el grupo disidente del PRD liderado por Andrés Manuel López Obrador. Desde que la violencia cundió, pasan largas tardes encerrados, discutiendo el futuro de la ciudad. “El país está militarizado. En Nuevo Laredo no hay una policía civil; desde hace siete, ocho años, no sabemos lo que es una policía. No tenemos oficiales de tránsito. Todo lo hacen los militares. Obviamente que no garantizan la seguridad, la violencia se disparó, en Nuevo Laredo no había asaltos, antes podías caminar a toda hora y no te asaltaban, ahora no hay hora a la que puedas transitar libremente. Ahora hay violencia diaria, diaria, que no conocíamos: violencia social”.

La guerra antidrogas fortalece el poder de la policía y el ejército, y aumenta la capacidad de la clase política hegemónica para gobernar. El Grupo Atlacomulco, una fracción neoliberalizadora del PRI liderada por Carlos Salinas durante los años noventa, también está detrás de Enrique Peña Nieto, que nació en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México. Al mismo tiempo que la guerra antidrogas criminaliza a la población vinculada al tráfico, venta o uso de drogas, militariza a la policía y moderniza al ejército y al sistema penitenciario. Juntos, estos elementos contribuyen al ejercicio y preservación del poder estatal represivo. En una entrevista con el periodista inglés Ed Vulliamy, la vocera presidencial de Calderón, Alejandra Sota Mirafuentes, dijo: “El presidente lo tiene claro: la lucha no es contra las drogas, es contra la violencia y la habilidad de las organizaciones criminales de subvertir el Estado. El presidente sabe que las drogas no desaparecerán”.⁷² En efecto, las drogas no han desaparecido y no lo harán, todo el mundo lo sabe, pero no puedo dejar de imaginar cómo serían las cosas si esta conclusión sobre la guerra antidrogas fuera el lema repetido una y otra vez en la televisión y los periódicos.

Extractivismo militarizado

Chihuahua, al igual que otras partes de México y Centroamérica, está experimentando una importante expansión de la minería transnacional y la militarización estatal bajo el pretexto de la guerra antidrogas. Mientras que las desapariciones y asesinatos de los activistas ambientales por parte de fuerzas estatales o miembros de cárteles u organizaciones paramilitares son casos claros de la violencia ambiental en México, el aumento general de homicidios, secuestros y amenazas a la sociedad civil es también muy relevante. Creo que eventualmente se podrá probar el vínculo de muchos de estos fenómenos con la violencia ambiental, es decir, la violencia relacionada con el potencial económico de las zonas geográficas en donde ocurre. Los que parecen asesinatos indiscriminados podrían revelar patrones vinculados con la desocupación de territorios a través del terror, para extraer recursos en zonas rurales o para facilitar el flujo de capital en zonas urbanas para proyectos de infraestructura (autopistas, aeropuertos o puentes fronterizos). Cuando las autoridades hablan de reducir la violencia o mejorar la seguridad, por lo general se refieren al envío de policías adicionales y/o soldados y/o marinos.

⁷² Ed Vulliamy, *Amexica: A War Along the Borderline* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010), 39.

Los problemas asociados al despliegue de policías no se limitan a zonas urbanas. La población serrana de Madera, Chihuahua, se encuentra a dos horas de camino en autobús de la capital de estado. Lo que pasó cuando llegaron 10,000 policías federales y soldados al estado de Chihuahua en 2008, muestra cómo el incremento de las fuerzas armadas en un área puede resultar benéfico para los intereses corporativos transnacionales. La vigilancia aumentada puede precipitar el derrumbe de las estructuras comunitarias, en este caso, el de un ejido o el de una asamblea de bienes comunales que ejercen su derecho legal sobre las tierras por medio de asambleas y decisiones colectivas. Una tarde de agosto de 2008, Dante Valdez Jiménez estaba dando una capacitación en una escuela primaria en Madera, cuando irrumpió un grupo de 30 hombres, algunos armados. En los siguientes minutos, Valdez fue víctima de un ataque brutal delante de los estudiantes. Entre golpes y patadas, sus atacantes le gritaban que se mantuvieran fuera de sus asuntos. Valdez tuvo suerte de sobrevivir al incidente. Cinco días después, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la seguridad de Valdez y otros miembros de la comunidad local. El ataque fue político: Valdez es conocido por su activismo en contra de Pan American Silver Corporation, empresa minera de Vancouver que opera una mina de oro a cielo abierto en las cercanías de Madera. Amnistía Internacional afirmó que entre los atacantes había empleados de la empresa minera: “Todas las autoridades, en los tres niveles de gobierno, se han hecho de la vista gorda ante las personas desplazadas y la gente maltratada y golpeada”, me dijo Valdez con voz baja y grave. Señaló que, aunque existe un grupo completo de testigos de lo sucedido, no se ha iniciado ninguna investigación.

El atentado contra Valdez no fue un incidente aislado, sino un patente recordatorio de la represión que sufrieron quienes se organizaron para manifestarse en contra de la minera, que empezó a operar en México en 1994, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 2007, Pan American Silver empezó a trabajar en una mina de pequeña escala cerca de Madera, de la cual extraía oro y plata con el uso de cianuro. Emplazado en las alturas de la Sierra Madre, Madera aparentemente goza de la tranquilidad de un pequeño pueblo maderero. No obstante, la zona es cualquier cosa menos tranquila: se dice que a través de la Sierra Madre corre la sangrienta lucha entre el cártel más poderoso de México, el de Sinaloa, y el grupo de choque del cártel de Juárez, La Línea.

Según el discurso oficial, en la zona se disputaban rutas de narcotráfico, además de extensos campos en los cuales agricultores campesinos e indígenas cultivan plantas de marihuana y opio. Sin duda existe en la zona producción

y tráfico ilícito de estupefacientes, pero hay otros intereses en juego. Para poder construir la mina de Pan American Silver, el pueblo histórico de Dolores tuvo que ser reubicado, lo cual afectó a más de 60 familias. La gente local no era apasionadamente antiminera, sino que sentían que el proyecto no resultaba justo para el ejido Huizopa, el cuerpo representativo de los dueños de tierras en el área. En 2008, cuando se comenzó la extracción de oro, las tensiones entre la empresa y los representantes del ejido llegaron a un punto de quiebre. En mayo de ese año, tras alcanzar un acuerdo mayoritario en una asamblea, los miembros de la comunidad cerraron la ruta de acceso a la mina, exigiendo negociaciones serias y un acuerdo más justo con la empresa. No dejaban pasar a los trabajadores de la mina, pero no obstruían el paso de los soldados.

La minera no tardó en encontrar una solución a las protestas que no incluía sentarse frente a una mesa de negociación. “La barricada contaba con una presencia permanente de soldados, quienes viajaban en camionetas de la empresa, vestidos de civil, [y] hasta ocho camiones de la empresa que vigilaban las manifestaciones y el bloqueo”, informó Valdez. La presencia de los soldados no sólo servía para intimidar a los manifestantes, sino también para que la empresa siguiera accediendo a la mina, ya que los camiones de los trabajadores podían entrar porque llevaban a soldados con ellos.

A partir de que ciertos comandos armados relacionados con los narcotraficantes atacaron a civiles en una población vecina, la policía mantuvo una presencia continua en el bloqueo. La obstrucción duró un año cinco meses, durante los cuales los residentes dicen que la compañía cooptó a pobladores de ejido Huizopa por medio de incentivos monetarios e intimidación. “Cuando la empresa minera se dio cuenta de que teníamos el apoyo de la mayoría [dueños de territorios], empezaron a manipularnos e incentivaron a los propios miembros del ejido para que manipularan a sus compañeros, con el fin de impedir que obtuviéramos la mayoría en las decisiones”, dijo Luis Peña Amaya, un ejidatario que ayudó a organizar el bloqueo.

Como en el bloqueo, la militarización de toda la zona resultó favorable para que la minera obtuviera apoyo para su mina a cielo abierto. “La presencia de la policía federal intimidaba a la gente en muchas ocasiones. Cuando nos juntamos para la asamblea decisiva, tomaron el control y rodearon la sala de la reunión”, dijo Peña Amaya. La intrusión de la policía en la toma de decisiones comunales es un acto anticonstitucional en México. Sin embargo, “cuando cambió la suerte de los otros, el grupo preferido de la empresa minera [la Policía Federal] intercedió para evitar que ejerciéramos nuestros derechos”.

También está el caso de Vasco Gil, una pequeña rancharía en las montañas de Durango. En el verano de 2009, aproximadamente treinta soldados se presentaron y empezaron a vigilar y acosar a los residentes. Días después llegaron otros diez o quince soldados, y doce hombres del área fueron secuestrados. “En denuncia directa hecha a *Río Doce*, comentaron que los soldados llegaron hace aproximadamente una mes a esa zona de la sierra y realizaron trabajos de vigilancia, pero que de pronto empezaron a preguntar dónde estaban los grupos armados, y especialmente si tenían conocimiento de los presuntos narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y Joaquín el Chapo Guzmán”, se lee en un artículo impreso en *Río Doce*, un semanario independiente de Culiacán, Sinaloa.⁷³ Se criminalizó y aterrorizó a los residentes de Vasco Gil y poblados aledaños en nombre de la lucha contra los cárteles de la droga, pero si se investiga con cuidado puede descubrirse que hay un interés mucho más grande en la región.

La minera establecida en Vancouver, Chesapeake Gold Corporation, tiene planes de instalar una mina a cielo abierto en el área, y remover 821 millones de toneladas del mineral a lo largo de diecinueve años de operaciones mineras. Estos planes requerirían el desplazamiento de todos los residentes de Vasco Gil.⁷⁴ “Las condiciones de vida son primitivas en esta aislada zona montañosa, donde los caminos son a veces intransitables durante la época de lluvias”, según el informe que hizo la empresa sobre la viabilidad económica de la mina; después caracteriza equivocadamente la base de la economía local como ganadera, cuando en realidad es la silvicultura.

Los intereses en el área que rodea Vasco Gil son grandes: la compañía necesitará invertir 487 millones de dólares para operar la mina, y se cree que este proyecto, llamado Metates, “es uno de los más grandes depósitos sin explotar en el mundo de oro y plata diseminados”.⁷⁵ Para la Chesapeake Gold Corporation, los residentes de Vasco Gil y sus alrededores son obstáculos potenciales para maximizar las ganancias. Chesapeake tiene 5,776 hectáreas concesionadas en la zona, y realizó perforaciones para obtener muestras en marzo y abril de 2009.⁷⁶ Tal vez sea una coincidencia que casi cuatro docenas de soldados llegaron al pueblo meses después de esas perforaciones de prueba alrededor de Vasco Gil. Tal vez no. Pero resulta fructífero

73 Riodoce, “Secuestra el Ejército a 12 pobladores de Vascogil, Durango”, *Riodoce*, 2009, <http://riodoce.mx/?joomla=/content/view/2687/67/>.

74 M3 Engineering and Technology, “Metates Gold-Silver Project: Updated Preliminary Economic Assessment”, Chesapeake Gold Corp, Abril 21, 2011, <http://chesapeakegold.com/downloads/Metates%20PEA%20Update%20April%202011.pdf>, 49.

75 *Ibid.*, 21.

76 *Ibid.*, 13.

considerar factores alternativos a las drogas (en este caso intereses mineros transnacionales) como influencias potenciales de la violencia dirigida contra la población de áreas ricas en recursos.

Territorio, policía comunitaria y grupos de autodefensa

En el estado mexicano de Guerrero, algunas comunidades han impedido que el ejército entre a sus territorios porque creen que a donde van los militares llegan después las transnacionales. La singular historia de Guerrero ha hecho que la guerra antidrogas tenga un impacto diferente ahí, pues ya había sido escenario de violencia y militarización a niveles desconocidos en el resto del país antes de que la guerra antidrogas comenzara en 2006. “O sea, la guerra del narcotráfico no es más que seguir usando la fuerza militar para contener la inconformidad, los movimientos disruptores, los grupos de resistencia, los colectivos que alzan la voz”, dijo Abel Barrera, director de Tlachinollan, un grupo defensor de derechos humanos localizado en Tlapa de Comonfort, Guerrero. El cultivo de amapola en la región le da a los soldados y las autoridades estatales una justificación para entrar a las tierras comunitarias, pero de acuerdo con Barrera, hace más que eso. “Eso es lo que hemos visto hasta ahora, y que entonces la militarización es precisamente también no solo para entrar a los territorios, sino para imponer megaproyectos. Son el frente ofensivo que va entrando a los territorios para poderle garantizar al capital transnacional su establecimiento, su instalación ya sea vía minas, vía megaproyectos hidroeléctricos, vía todo lo que tiene que ver con proyectos ecoturísticos. Un pueblo no puede, a pesar de que esté en su tierra, no puede atentar contra una minera o contra una empresa multinacional a la que le tienen que garantizar, cómo decir, que vale más el capital que la vida de los campesinos que están bloqueándola”, dijo Barrera, subrayando que el papel de las fuerzas estatales en Guerrero es dar esa garantía. Barrera, oriundo de Tlapa, se viste casualmente y su discurso es elocuente e informal, ocasionalmente condimentado con algo de argot local. Una foto a su derecha lo muestra recibiendo el Premio a los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, que le fue otorgado en 2010 por su trabajo en Tlachinollan, y a su izquierda se encuentra un pesado busto de R. F. Kennedy, situado en una repisa junto a docenas de reportes producidos por el grupo defensor de derechos humanos.

Según Barrera, la remilitarización que está sucediendo como parte de la guerra antidrogas es un pretexto para destruir el control comunitario

sobre la tierra y los recursos. “Lo otro [de la militarización] es precisamente no permitir ahora a los policías comunitarios y los grupos de autodefensa que están controlando el territorio, porque eso es el otro tema, el tema es que los pueblos han entendido que ahora con las reformas y con todas las privatizaciones y con las concesiones mineras, que dice la gente ‘entonces nos vamos a proteger, estamos en nuestro territorio, pero bueno ¿cómo vamos a protegerlo?’ De ahí que las autodefensas y las policías comunitarias están también asumiendo un rol más proactivo, más ofensivo en decir: ‘Bueno no vamos a permitir que entren las empresas mineras.’” Los lugares donde las policías comunitarias y las autodefensas están activas han sido cada día más militarizadas desde que se declaró la guerra antidrogas y se lanzó la Iniciativa Mérida. Barrera insiste, sin embargo, que el séquito de fuerzas armadas en la región se entienda como parte de un contexto en el que grupos armados locales están defendiendo su territorio frente a una militarización del Estado al servicio del capital transnacional. “Vemos que hay un proceso de remilitarización, pero es con esa intención de reconquista de territorios y de reforzamiento de una estrategia de contrainsurgencia. Ya lleva doble vertiente, esta cuestión de contrainsurgencia ahora también con el frente armado del Estado para reconquistar e imponer proyectos”.

Una llamada a su viejo celular interrumpe a Barrera, que contesta señalando que ha terminado la entrevista. Es un hombre conocido por estar muy atento al pulso de los movimientos sociales en Guerrero, y por ir de inmediato a una reunión comunitaria si lo invitan de último momento.

A diferencia de los grupos de autodefensa en Michoacán, la policía comunitaria en Guerrero no surgió de movimientos en contra de los cárteles. Francisco López Bárcenas, abogado indígena y activista por los derechos humanos, afirma que los grupos de policía comunitaria tienen una historia que se remonta a tiempos prehispánicos en muchas zonas de México. “Lo que estamos viendo ahora es la rearticulación de las comunidades”, declaró en una entrevista para *Vice*. “Por un lado, para enfrentar la inseguridad, pero por otro también para la defensa muy específica de los recursos naturales”.⁷⁷ Las policías comunitarias tuvieron un resurgimiento en Guerrero en 1995 cuando se creó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) para formar una estructura regional que incorporara numerosas poblaciones y que incluye entrenamientos y procesos para enjuiciar y rehabilitar a los criminales reconocidos por el servicio comunitario. “Los policías comunitarios de la CRAC tienen que ser nombrados en una asamblea.

⁷⁷ *Vice*, “Mexican Vigilantes Stand Up Against Crime”, Abril 29, 2013, <https://www.youtube.com/watch?v=8XiSnCt9fDc>.

No usamos capuchas. El armamento que usa la policía comunitaria de la CRAC lo adquiere la comunidad”, afirma Pablo Guzmán Hernández, que fue coordinador de la CRAC.⁷⁸

El control territorial y la amenaza que representan para el capital trasnacional es un papel esencial y casi siempre ignorado de estos grupos. “Si dejamos que entre el ejército al territorio comunitario, no se van a ir después. El gobierno tiene en la mira el saqueo de las minas; quieren que nos enfrentemos entre nosotros, entrar y militarizar más el territorio. Eso es el fondo de asunto” concluye Claudio Carrasco, también excoordinador de la Policía Comunitaria de la CRAC.⁷⁹ Hay tres minas productivas en el estado de Guerrero, una serie de proyectos de exploración y vastas áreas montañosas que no han sido asignadas en concesiones mineras.

En sus primeros días como presidente, Peña Nieto anunció la creación de una Gendarmería, una fuerza policial muy bien armada que patrullaría principalmente áreas rurales.⁸⁰ “Aunque estará dentro de la Secretaría de Gobernación, la Gendarmería Nacional está compuesta en su mayoría por soldados que permanecerán bajo comando militar/naval. Estas tropas estarán fuertemente armadas, entrenadas especialmente en tácticas rápidas de asalto (más que en las diligencias estándar) y específicamente autorizadas para operar por encima de los niveles de fuerza que típicamente le corresponden a la policía”.⁸¹ La Gendarmería incrementó la presencia policiaca en áreas rurales ricas en recursos, creando otro sistema de protección para las compañías mineras y otras activas en estas zonas supuestamente no vigiladas. La gendarmería, con 5,000 elementos, fue instaurada en agosto de 2014, y según *The Economist*, “tendrá especial responsabilidad en proteger los intereses económicos de México —petróleo, minas, ranchos y demás— del crimen organizado”.⁸²

Las instantáneas presentadas en este capítulo son un intento inicial de mostrar cómo el despliegue de policías y soldados no ha traído seguridad a las comunidades que patrullan. Por el contrario, estos despliegues funcionan

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Jaime Quintana, “Oro y plata detrás de la persecución militar contra la policía comunitaria”, *Desinformémonos*, Agosto 2013, <http://desinformemonos.org/2013/08/minerales-detras-de-la-persecucion-militar-contra-la-policia-comunitaria/>.

⁸⁰ Vandana Felbab Brown, “Peña Nieto’s Piñata: The Promise and Pitfalls of Mexico’s New Security Policy Against Organized Crime”, *Brookings Institute*, Febrero 2013, <http://www.brookings.edu/research/papers/2013/02/mexico-new-security-policy-felbabbrown>, 7.

⁸¹ Peter Chalk, “Mexico’s New Strategy to Combat Drug Cartels: Evaluating the National Gendarmerie”, *Combatting Terrorism Centre at West Point*, Mayo 23, 2013, <http://www.ctc.usma.edu/posts/mexicos-new-strategy-to-combat-drug-cartels-evaluating-the-national-gendarmerie>.

⁸² *The Economist*. “The Feds Ride Out”. Agosto 23, 2014. <http://www.economist.com/news/americas/21613312-mexico-gets-new-police-force-it-needs-new-policing-strategy-feds-ride-out>.

como una garantía para los inversionistas que buscan asegurarse de que sus instalaciones estarán protegidas de la resistencia comunitaria, a un precio muy alto para los hombres y mujeres de cada lugar. Además, no se ha hecho prácticamente nada para impedir el flujo de drogas, sólo se ha desplazado a otras regiones. En el futuro, estas regiones a su vez podrían ser militarizadas en nombre de luchar contra el narcotráfico, provocando así una especie de guerra perpetua.

Capítulo VI

México: paramilitarización y guerra antidrogas

A principios de 2014 me reuní en una cafetería al sur de la Ciudad de México con Javier Sicilia, acaso el activista por la paz más conocido actualmente en el país. Llegó acompañado de un amigo, y aunque no traía su característico sombrero de ala ancha y chaleco beige, llamó la atención de la media docena de personas que había en el lugar. Mientras conversábamos, un hombre se acercó a Sicilia, le dio una palmada en el hombro y lo exhortó a seguir en pie de lucha. Las circunstancias que llevaron a Sicilia al activismo son trágicas. El 28 de marzo de 2011, su hijo Juan Francisco Sicilia Ortega fue asesinado junto con otros seis en Temixco, Morelos, al sur de la capital. Los siete cuerpos fueron encontrados dentro de un automóvil Honda Civic. El poeta Sicilia declaró que nunca volvería a escribir un verso, y emprendió una campaña nacional llamada Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, conformada por marchas, caravanas y actividades en todo México y Estados Unidos. Sicilia atribuye totalmente el homicidio de su hijo a la guerra antidrogas desatada por Felipe Calderón, y afirma que si el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva no hubiera sido asesinado en 2009, su hijo seguiría vivo: “Yo estoy seguro que si a Beltrán Leyva, que estaba en Cuernavaca, no lo matan, mi hijo no estaría muerto”. Su hijo fue asesinado con seis compañeros más cuando fueron secuestrados después de denunciar un robo. El dueño de la casa donde los tenían secuestrados se asustó y le llamó a un jefe del crimen local, y le pagó 300,000 pesos y le dio dos camionetas para que lo librara de la responsabilidad de los jóvenes secuestrados. Posteriormente, los siete fueron asesinados y metidos en un coche.

Sicilia está convencido de que la guerra antidrogas es la que desató la violencia en México. “Esta es mi hipótesis: ahí están los cárteles. En el momento en que Calderón, con asistencia de las instituciones donde estaban metidos los cárteles, decide sacar al ejército, lo que hace es obligar a los

1 Una de las acciones célebres de Beltrán Leyva fue su participación en el soborno de Noé Ramírez Mandujano, el jefe de inteligencia antidrogas de Calderón: Ken Ellingwood, “Mexico Traffickers Bribed Former Anti-drug Chief, Officials Say”, Los Angeles Times, Noviembre 22, 2008, <http://www.latimes.com/news/nationworld/world/latinamerica/la-fg-bribe22-2008nov22,0,5384359.story>.

cárteles a armarse como ejércitos. Después hace otra cosa terrible en esta estrategia: descabeza a los grandes capos, los que controlaban esos grupos. Entonces lo que quedan son células que no pueden acceder a la droga y diversifican verdaderamente el crimen”.

La paramilitarización que se ha dado desde que Calderón le declaró la guerra a los cárteles de la droga en diciembre de 2006 puede entenderse como un efecto de dos elementos de la militarización promovida por EUA en México. Sicilia mencionó el primer elemento en la entrevista que cito arriba: la paramilitarización de los narcos es resultado de las sucesivas confrontaciones de la policía y el ejército con grupos de narcotráficos bien financiados, que tienen un enorme flujo de efectivo y acceso irrestricto a armamento. Como resultado de los intentos del Estado de militarizar sus rutas de tráfico, los cárteles de la droga reclutaron y armaron mercenarios para proteger su negocio. Esto ha sido cuidadosamente documentado en Colombia, donde “la ayuda militar y antinarcóticos, en vez de fortalecer el monopolio del Estado sobre el uso legítimo de la violencia, se desvía y da poder a actores armados no estatales, aumentando la violencia ilegal con ningún efecto visible con respecto al propósito declarado de limitar la producción de drogas”, afirma un grupo de economistas en un artículo revisado por expertos que se publicó en diciembre de 2012.² “Nuestros cálculos revelan un patrón asimétrico distintivo: cuando la ayuda militar de EUA se incrementa, los ataques paramilitares, conocidos por trabajar junto con el ejército, aumentan más en los municipios con bases militares”. Lo que significa que, entre más gasta Estados Unidos en Colombia, más poder tienen las fuerzas irregulares, generando violencia y terror entre la población local.

El segundo elemento es que, históricamente, la llamada profesionalización de la policía en Latinoamérica, tratada en el capítulo anterior, conduce a la paramilitarización. “La concentración de la profesionalización en actividades policiales centralizadas y especializadas también parece conducir a la descentralización, ya que las actividades de las agencias de policía nacional profesionalizadas, especializadas y autónomas, se distancian progresivamente de los centros de autoridad que las crean... Descentralización de la militarización burocratizada se manifiesta con frecuencia en el surgimiento de grupos de control social vinculados al Estado de manera menos directa, más tenue. Estos se convierten en escuadrones de la muerte relacionadas solamente en cierto grado con la policía, o en justicieros solitarios vinculados a la policía, o partes de sistemas de seguridad interna que se han volteado

² Dube y Naidu, “Bases, Bullets and Ballots”, 3.

contra otras partes —como cuando una organización de seguridad interna espía o actúa contra otra”.³ Visto bajo esta luz, podemos entender que el entrenamiento policial de hecho incrementa la probabilidad de que se formen grupos paramilitares. En vez de llamar ‘paramilitares’ a los grupos armados que trabajan para los narcos, la prensa corporativa y las autoridades (y por su influencia, la mayoría de la población) les llama ‘cárteles de la droga’, o ‘brazos armados’ de tal o cual cártel. Muchos de estos grupos son conformados por desertores de las fuerzas de seguridad estatal, pagados por el crimen. La noción de que son leales a una organización específica (o más absurdo aún, al comercio de cierta mercancía) es muy exagerada en los discursos hegemónicos sobre los cárteles de la droga. (Lo mismo ocurre con los miembros de las fuerzas de seguridad estatal, que como se ha mostrado, con muchísima frecuencia han renunciado para trabajar con el crimen organizado.)

La imagen de los cárteles del narco que se presenta en los medios es muy simplista, y podría decirse que esconde más de lo que revela. Julián Cardona, el periodista que me explicó como en Ciudad Juárez la policía funciona como un cártel de la droga, le dijo lo siguiente al entrevistador Ed Vulliamy. “Simplemente no hace sentido, como piensan los medios y el gobierno, hacer diferencias entre cárteles en Juárez. A lo largo de los corredores de contrabando hacia EUA tal vez sí, pero no en las calles. Ni siquiera los mismos cárteles ya pueden ubicar esas diferencias. Por supuesto existen los narcos, son factores, pero ya no son el motivo principal de la violencia que hay aquí. Tienes un producto y una cadena de producción. Hay jefes, administradores, gerencia, obreros, contadores, banqueros, transportistas —todos son partes del proceso pero nunca se conocen entre ellos y la mayoría no trabajan directamente para la organización. A fin de año tendremos diecisiete mil muertos en esta ciudad [predijo, adecuadamente, en septiembre de 2008] y en la mayoría de los casos, los ejecutores ni siquiera saben para qué cártel están trabajando, si es que lo hay. Si cambian de lado, de estar en el Cártel de Juárez a estar en el Cártel de Sinaloa, no se van a enterar. Lo único que tienen es un encargo, su territorio, hacer esto, lo otro, o matar a alguien. No saben por qué ni para quién. No tienen idea de las grandes cantidades de dinero, ni de quiénes son sus jefes”.⁴

Por supuesto, existen visiones divergentes sobre este tema y hay quienes no creen que los cárteles de la droga funcionen como grupos paramilitares realizando servicios para las corporaciones u otros sectores. En una entrevista,

3 Huggins, *Political Policing*, 18–21.

4 Vulliamy, *Amexica*, 127–128.

Gian Carlo Delgado, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, se mostró escéptico ante la idea de clasificar a los cárteles como grupos paramilitares. “Los paramilitares siempre han existido. Han estado siempre, mientras ha habido movimientos armados, o movimientos de resistencia social, ha habido paramilitares. A mí me costaría trabajo vincular o decir que el crimen organizado es de los paramilitares, si es que podemos incluir estos sicarios del crimen organizado bajo la categoría paramilitar en general, me costaría trabajo hacer el vínculo claro con el Estado”.

La violencia y los pequeños negocios

La violencia ha perjudicado a las economías locales de México, particularmente en el norte. Un sacerdote que entrevisté en Tamaulipas —que prefirió mantenerse anónimo por temor a las represalias— afirmó que las extorsiones y la inseguridad han afectado el espíritu empresarial de la población nortea. “La situación económica ha sido desastrosa para la frontera, sobre todo tomando en cuenta la situación de inseguridad que se está viviendo en las ciudades, que ha hecho que muchos empleos estén disminuyendo, que la gente tenga miedo y no pueda ser emprendedora como es la característica de la gente del norte”.

“Las empresas mayormente afectadas por la violencia son las más pequeñas y aquellas ubicadas en los estados del norte de México. La inseguridad perjudica en mayor medida a pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, debido a que el crimen organizado tiene más facilidad de penetración con ellos que con los directivos de empresas grandes, los cuales, en muchos casos, operan desde fuera del país”.⁵

Según la COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana), 160,000 negocios cerraron en 2011 por asuntos de seguridad. “Hay una transformación de la economía a nivel nacional que está favoreciendo [a las grandes empresas], y está haciendo que haya [más mexicanos] empleados que emprendedores”, afirmó la doctora Correa-Cabrera en una presentación en Baja California Sur en febrero de 2012.

Las observaciones de Correa Cabrera se hicieron evidentes en mis primeras visitas a Reynosa y Ciudad Juárez, ambas en 2011. A diferencia de otras ciudades mexicanas que conocía, ahí me sorprendió encontrar

⁵ Guadalupe Correa-Cabrera, “Flujos de Inversión, Desarrollo Empresarial y Seguridad en México: Las Empresas Mexicanas y Extranjeras en un Entorno Violento”, 1er Congreso Internacional: Gestión y Administración Empresarial para el Siglo 21 (Febrero 2012): 18–19.

grandes áreas densamente pobladas sin ningún puesto de comida o ‘tiendita de la esquina’, que generalmente son muy abundantes. Entre 2009 y 2011, “en Ciudad Juárez han tenido que cerrar casi 6 mil tiendas, de las 7 mil que se hallaban registradas. El motivo: el aumento de robos, secuestros y extorsiones”.⁶

La desaparición de los negocios locales provocó que, cuando visité Ciudad Juárez, el único lugar con una terraza abierta fuera un Starbucks. La terraza daba al estacionamiento de un Walmart, construido sobre una plaza de toros histórica en la ciudad. Por ser el único lugar seguro abierto por la noche, los activistas hacían sus conferencias de prensa en Sanborns, una cadena de tiendas y restaurantes que pertenece al hombre más rico de México. Los que pueden pagarlo usan más el coche, compran en grandes tiendas departamentales y comen en restaurantes, pues generalmente se considera que son espacios seguros fuera del radio de acción del crimen organizado. Es más difícil para los criminales operar con total impunidad, amenazar y extorsionar a los dueños y trabajadores de cadenas internacionales de alimentos y bebidas, que hacer lo mismo con negocios locales cuyos dueños han vivido siempre en el lugar.

La experiencia de Carlos Gutiérrez es uno de los ejemplos más públicos de cómo la extorsión puede arruinarle la vida a alguien. Y es público por dos motivos: primero, porque él sobrevivió a un sanguinario ataque en su contra, y segundo, porque pudo salir de México y obtener legalmente la residencia temporal en Estados Unidos. Estos factores son los que le permitieron hablar públicamente sobre lo que le sucedió. Gutiérrez administraba un exitoso negocio en concesión en la ciudad de Chihuahua, hasta que los extorsionadores empezaron a exigirle pagos de hasta 10,000 dólares al mes. Al cabo de un año, Gutiérrez ya no podía cubrir los pagos, y una noche mientras él se encontraba con amigos en un parque, cuatro hombres armados lo atacaron y le cortaron ambos pies, con lo que probablemente era un machete o un hacha.⁷ Los responsables de extorsionarlo y atacarlo nunca fueron identificados públicamente o capturados. Gutiérrez ha intentado empezar una nueva vida con su familia en Texas.

Correa Cabrera afirma que atribuir la violencia en México sólo a los narcóticos ya no es una manera adecuada de entender el conflicto. “La nueva corporación del crimen organizado en México tiene un carácter transnacional

6 Marcela Turati, “Juárez: Tiendas cerradas, ollas vacías”, Proceso, Junio 28, 2011, <http://www.proceso.com.mx/?p=274273>.

7 Diana Washington Valdez, “Mexican Businessman Who Lost Feet to Violence Going on Bike Journey”, El Paso Times, Octubre 9, 2013, http://www.elpasotimes.com/latestnews/ci_24272527/mexican-businessman-who-lost-feet-violence-going-bike.

e incluye varias divisiones o áreas clave, entre ellas: narcotráfico (venta y compra); lavado de dinero (que sería parte de la división financiera); tráfico de personas; asesinos a sueldo (que funciona como una especie de área de marketing, con el propósito de generar terror y mandar mensajes a diversos actores para negociar con ellos o amenazarlos); una división más reciente, dedicada a la extorsión, el secuestro y el cobro de rentas (que representa una diversificación de las actividades tradicionales de los llamados cárteles de la droga”.⁸

Cuando el negocio del narcotráfico salga de México, como la historia indica que sucederá tarde o temprano, los que puedan pagar a los miembros de los grupos paramilitares serán personas conectadas al Estado y la llamada economía legal. Pero las extorsiones realizadas por estos grupos con impunidad seguramente continuarán, con lo cual serán irónicamente los pobres, la clase trabajadora y la clase media de mexicanos los que serán forzados a financiar la subsistencia de estos grupos paramilitares, sobre todo el de Los Zetas.

El estado de Tamaulipas es un punto crucial para entender la guerra antidrogas en México. Ahí, la división entre el PRI y el crimen organizado está tan corrompida que ya no es posible diferenciarlos. “[Los cárteles] tienen todo el poder, ellos monopolizan el legítimo uso de la violencia, y están realizando actividades que corresponden al Estado”, me dijo Correa Cabrera, profesora de la Universidad de Texas-Brownsville en 2011. De acuerdo con un reporte de 2010 del Comité para la Protección de los Periodistas, “es difícil saber cuándo el Cártel del Golfo obtuvo el poder que ahora tiene sobre la ciudad [Reynosa]; los periodistas dijeron que no sucedió de un solo golpe. La mayoría rastrea el cambio a hace tres o cuatro años. Antes de eso, el Cártel manejaba una especie de gobierno paralelo desde el que influía mucho a instituciones como la policía y el gobierno de la ciudad... Los periodistas dicen que el Cártel está totalmente insertado en el gobierno y que obtiene casi todo lo que quiere”.⁹ El Cártel del Golfo se inició en el contrabando de licor a través de la frontera en los tiempos de la prohibición estadounidense del alcohol en la década de 1920. En los años 80, su principal negocio era el tráfico de marihuana, y en los 90, los cálculos oficiales afirmaban que el Cártel del Golfo era responsable del 30 por ciento de la cocaína transportada a través de México.¹⁰ Durante ese periodo, algunos

8 Correa-Cabrera, “Flujos de Inversión, Desarrollo Empresarial y Seguridad en México”, 22.

9 Carlos Lauría y Mike O’Conner, “Cartel City: Silence or Death in Mexico’s Press”, Committee to Protect Journalists, Septiembre 8, 2010, <http://cpj.org/reports/2010/09/silence-death-mexico-press-cartel-city.php>.

10 Figueroa, El Capo del Golfo, 29.

de los miembros más poderosos del Cártel del Golfo eran exagentes de policía, y los narcos tenían vínculos hasta los escalones más altos del aparato burocrático del PRI.

En 2010 tuvieron lugar en Reynosa los enfrentamientos que originaron al nuevo grupo armado de Los Zetas. Su aparición ha resultado ser un elemento transformador en la reconfiguración de la fuerza militar y paramilitar en México bajo la rúbrica de la guerra antidrogas. La historia oficial dice que los primeros Zetas fueron hombres reclutados en los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE), unidades de élite del ejército creadas para proveer seguridad en la Copa Mundial de la FIFA de 1986 en México. Fuerzas especiales del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional francesas entrenaron a los primeros GAFEs, y tras el levantamiento zapatista en 1994, empezaron a realizar actividades contrainsurgentes contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). De acuerdo con un mensaje del Departamento de Estado de EUA publicado en Wikileaks, Rogelio López Villafana, GAFE convertido en Zeta, fue entrenado en Estados Unidos, posiblemente en Fort Bragg.¹¹

Osiel Cárdenas Guillén, que tomó el mando del Cártel de Golfo en 1999, fue capaz de negociar la participación de fuerzas especiales mexicanas en la protección armada de narcotraficantes. En 2003, el Ejército Mexicano arrestó a Cárdenas Guillén, acusándolo de amenazar de muerte a un agente encubierto de EUA, y de amenazar a agentes del FBI y la DEA a plena luz del día.¹² Fue encarcelado en La Palma, Estado de México, cerca de Toluca, y en 2007 fue extraditado a Estados Unidos.¹³ Cuando Cárdenas Guillén fue encarcelado y ya no pudo mediar entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, sus relaciones empezaron a deteriorarse, y se creó la primera fisura que después provocaría una completa ruptura.

Para cuando Cárdenas Guillén fue apresado, Los Zetas ya se habían apropiado de acuerdos de protección que solía manejar la policía municipal de Nuevo Laredo.¹⁴ Se dice que, en esa época el Cártel del Golfo y Los

11 Entre 1996 y 1998, el USG capacitó a 422 GAFEs, uno de los últimos casos de capacitación a nivel de unidad de soldados mexicanos por parte de los EE. UU. El USG comenzó a mantener una base de datos de soldados mexicanos entrenados por los EE. UU. hasta 1996, momento en que los Zetas ya habían comenzado a formarse. Según el Departamento de Estado de EE. UU., Fort Bragg tampoco mantuvo registros de ciudadanos extranjeros en formación hasta 1996. <http://wikileaks.org/cable/2009/08/09MEXICO2473.html>.

12 US Attorney's Office, "Osiel Cardenas-Guillen, Former Head of the Gulf Cartel, Sentenced to 25 Years' Imprisonment", Febrero 24, 2010, <http://www.fbi.gov/houston/press-releases/2010/ho022410b.htm>.

13 Curiosamente, en la Base de Datos de las Prisiones Federales Estadounidenses, el nombre de Osiel está escrito como "Oziel", como si fuera un homenajee a su legado como Zeta.

14 Carlos Resa Nestares, "El comercio de drogas ilegales en México: Los Zetas: de narcos a ma-

Zetas acordaron que el Cártel de Golfo conservaría el control de las rutas de narcotráfico a través de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas (por la costa del golfo), y Los Zetas controlarían Nuevo Laredo (la ruta comercial más activa en la frontera EUA-México) y tendrían influencia sobre otras partes de Tamaulipas, incluyendo Ciudad Victoria y San Fernando. El pacto se rompió en enero de 2010 con el asesinato de El Concord, lugarteniente de Los Zetas en Reynosa.¹⁵ Tras la ruptura, otros grupos criminales de México como La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa, bajo el nombre de La Nueva Federación, declararon que se unirían a la guerra contra Los Zetas.

Una de las razones por las que Los Zetas son un grupo que se percibe con tanto poder es porque sus miembros con frecuencia tienen entrenamiento militar superior al de otros cárteles, que se supone reclutan muchachos de dieciocho años sin experiencia—no obstante los expolicías y exmilitares tienen un papel importante en el elemento paramilitar de cada cártel de la droga. Los Zetas no surgieron como una típica organización de narcotraficantes, y por lo tanto no ejercen el mismo tipo de control territorial que otros grupos. Esto se debe a que, desde su origen, Los Zetas han estado involucrados en la extorsión y otros tipos de negocio—incluyendo el tráfico de migrantes.

Dentro de la concepción de Correa Cabrera de los cárteles como corporaciones, Los Zetas pueden ser descritos como una operación de franquicias en las que los criminales locales pueden tener acceso a armas y símbolos de identidad (logotipos de ‘marca’) a cambio de una porción de sus ganancias. Afiliarse a la marca ‘Zetas’ le da a los criminales la posibilidad de obtener más dinero por secuestros y otras formas de extorsión, incluyendo el cobro de ‘derecho de piso’ y las cuotas de tráfico de migrantes. Las ‘tarifas’ más altas por extorsión pueden obtenerse con base en la reputación del grupo al que se pertenece y, en el caso de Los Zetas, su ‘prestigio’ se ha establecido por medio de fosas comunes y matanzas terribles.

Las personas asociadas a Los Zetas se han apropiado de los márgenes sumergidos de la economía, incluyendo la ‘economía clandestina’ del tráfico de personas (mujeres y migrantes), y formas de comercio informal como las películas piratas. Colonizar estos segmentos informales de la economía ha creado un nuevo patrón de expansión territorial para Los Zetas, diferente de lo que otros grupos criminales organizados han hecho tradicionalmente (controlar un cierto número de plazas y rutas concretas de trasiego). Con estos métodos, Los Zetas han extendido su zona de influencia a lo largo, dentro y

fiosos”, Abril 2003, http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/nota0403.pdf.

15 Francisco Gómez, “Ejecución de ‘El Concord’ detonó guerra en Tamaulipas”, El Universal, Marzo 7, 2010, <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/176125.html>.

alrededor de territorios que no solían interesar a los narcos, áreas con poco o ningún valor estratégico en términos de transporte de mercancías. Los Zetas también ejercen su propia forma de control en regiones monopolizadas por otros grupos criminales para los que el movimiento de productos siempre ha sido actividad principal, dependiente del acceso a territorios contiguos. En San Fernando, Tamaulipas, por ejemplo, se sabe que la policía local participó en el entrenamiento de Zetas.¹⁶ En Monterrey, la policía estatal se quedó mirando mientras los Zetas colgaban enormes mantas en el Congreso Estatal.¹⁷ La cooperación de la policía local y la impunidad otorgada por los niveles más altos de gobierno, y reforzada por la indiferencia de los poderes trasnacionales, le da a Los Zetas y otros grupos paramilitares la libertad de cumplir y hacer cumplir los deseos de sus superiores.

Los Zetas no son simplemente un producto deforme del capitalismo trasnacional, ni son una organización incomprensible o ilógica. Por el contrario, ha habido un papel trasnacional-estatal-mediático activo en su formación. Como se mencionó antes, se permitió que Los Zetas prosperaran y se consolidaran cuando Estados Unidos apoyó la decisión del gobierno mexicano de convertir Ciudad Juárez en el foco de la lucha contra los cárteles, en vez de oponerse a Los Zetas en Nuevo Laredo. La eliminación de muchos de los miembros originales de Los Zetas ha dado como resultado un grupo cada vez más fracturado y disperso de asesinos entrenados, cada uno de los cuales puede reclutar y entrenar a otros con facilidad para trabajar a las órdenes de quien pueda pagarles, y de hacer lo necesario para obtener ganancias por su propia cuenta. Una de las innovaciones de Los Zetas, que podría venir del modelo de las pandillas centroamericanas, es que crean y mantienen zonas de silencio absoluto: los periodistas no publican nada sobre ellos, y en su nómina tienen a gente que se encarga de saber qué pasa en cada esquina. La intensa vigilancia de áreas urbanas por parte de Los Zetas y sus subordinados, combinada con el terror provocado por sus acciones, es suficiente para ahogar la protesta, la movilidad y la comunicación sobre la vida bajo su régimen.

El estilo y la estructura del control Zeta han sido replicados fuera de su área de influencia original. Grupos que se rebelaron contra el liderazgo Zeta en el estado de Michoacán adoptaron después muchas de sus características al formar La Familia Michoacana, de la que posteriormente se desprendieron

16 Daniel B. Madrigal, "Policías daban clases de tiro a Zetas y eran espías", *Crónica*, Abril 23, 2011, <http://www.cronica.com.mx/notas/2011/574313.html>.

17 Bruce Williamson, "10Monterrey43, Border Violence Spreads to Nuevo Leon", Departamento de Estado de los Estados Unidos, Febrero 26, 2011, <http://wikileaks.org/cable/2010/02/10MONTERREY43.html#par8>.

Los Caballeros Templarios. Lo que ha sucedido en Michoacán es una prueba de que el modelo de Los Zetas puede ser replicado en muchas partes, siempre y cuando las autoridades garanticen la impunidad.

“Los Zetas son una fuerza paramilitar”, de acuerdo con William Robinson, el académico y escritor que entrevisté en 2011 en la Ciudad de México. “Básicamente es la creación del paramilitarismo a la par de la militarización formal, lo cual es el modelo colombiano”.¹⁸ Un medidor de la actividad paramilitar es el nivel de desplazamiento forzado en las áreas donde estos grupos actúan. Los más afectados por la paramilitarización en Colombia son principalmente los pobres en áreas rurales y urbanas, y lo mismo se sostiene para México. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 120,000 personas fueron desplazadas en México entre 2006 y 2014, especialmente de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, y Baja California. “Solamente en Sinaloa 30,000 personas han huido de sus hogares, y en Guerrero, según la CNDH, más de 7,000 personas han cambiado su lugar de residencia debido al miedo creado por los criminales en diversas áreas de la región”.¹⁹

Migración paramilitarizada

Donde hay cárteles y grupos paramilitares, un tipo asombrosamente similar de terror también existe. En Colombia, una importante variable en los esfuerzos contrainsurgentes y antinarcóticos es la presencia de guerrilleros; en México, probablemente la variable crucial es la presencia de migrantes. Los hombres y mujeres que se desplazan a través del país no están necesariamente organizados ni motivados ideológicamente: la presencia de migrantes de Centroamérica, Sudamérica y otros lugares es un hecho significativo en ciertas partes del país. Controlar el flujo de migrantes a través de México es una prioridad para Washington, y los cárteles paramilitarizados están jugando un papel cada día más central en hacerlo. El secuestro masivo de migrantes comenzó al mismo tiempo que la guerra antidrogas de Calderón se diseminaba por el país. Durante un semestre entre 2008 y 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó 198 casos de abducciones masivas, en los que 9,758 migrantes fueron secuestrados.

¹⁸ Dawn Paley, “Drug War Capitalism”, *Solidarity*, julio/Agosto, 2012, <http://www.solidarity-us.org/node/3652>.

¹⁹ Roberto Garduño, “Diputado: fin a la movilidad poblacional por la violencia”, *La Jornada*, Febrero 8, 2014, 11.

Un estudio posterior de la Comisión reveló que entre abril y septiembre de 2010 se registraron 214 secuestros masivos, y 11,333 víctimas.²⁰ Los rescates asociados a estos secuestros son una nueva fue de ingresos para el crimen organizado, y los secuestros disminuyen el flujo de migrantes, generando una suerte de control fronterizo en el límite entre México y Guatemala, algo a lo que el gobierno de EUA no ha objetado hasta ahora.

La situación de los migrantes que atraviesan México desde hace mucho ha incluido extorsiones y abusos, pero en los años recientes la experiencia de la migración se ha transformado a la par que la militarización de la guerra antidrogas ha creado grupos armados mejor equipados y más dispersos. El veterano sistema de ‘coyotes’, en el que los migrantes pagan (con frecuencia gracias a préstamos) para ser conducidos parte o todo el camino por un experto en cruzar a EUA, ha sido desmantelado poco a poco por el crimen que amenaza, asesina y recluta a los coyotes. Las actividades ilícitas de las autoridades migratorias y la policía fueron asumidas por los cárteles o empezaron a funcionar de manera complementaria con aquellos. “En realidad, los migrantes siempre se han quejado del abuso de las autoridades, sobre todo policiacas, no solamente aquí en Nuevo Laredo, sino en Chiapas, en Veracruz, en Tabasco. Son verdaderas historias de todo el miedo que ellos sienten hacia las autoridades”, dijo un hombre que entrevisté y que colaboraba en el refugio de migrantes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. “La situación para ellos se ha complicado a raíz de la existencia del crimen organizado, aunque los secuestros se empezaron a dar en 2005, 2004, anteriormente el grupo más temido por los migrantes eran grupos como los Maras, como la Salvatrucha, grupos temibles para ellos... Sin embargo han sido substituidos por ejemplo por cárteles como los Zetas o los del Golfo, que son quienes han traído todo este desastre, principalmente el tipo de secuestros y la extorsión a sus familiares, ha sido ahora el extra que se ha dado”. Los migrantes generalmente no viajan con efectivo, por lo que al ser atrapados los obligan a dar un número telefónico de un familiar en Estados Unidos; entonces extorsionan a esa persona y le piden sumas cercanas a los 5,000 dólares. En docenas de entrevistas con migrantes, escuché una y otra vez historias de grupos que viajaban arriba del tren rumbo a EUA y que fueron detenidos o acorralados por agentes de migración, sólo para ser entregados a grupos criminales. Explicaban cómo, desde el instante en que pisaban México, eran objeto de abierto reclutamiento por miembros del crimen organizado, y que a llegar a la

20 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Informe especial sobre secuestro de migrantes en México”, 12, 26.

frontera en el norte eran forzados a pagar cuotas a Los Zetas o a otro grupo para poder cruzar al otro lado.

Sucesos dramáticos en Chiapas y Veracruz son muestra de cómo funciona este control fronterizo informal. En la escena del crimen, una de las mujeres yacía boca arriba, su tronco atravesado diagonalmente sobre las vías del tren. La otra estaba boca abajo, con el muslo derecho levantado sobre la vía. Ambas vestían playeras rojas sin mangas y pantalones que llegaban hasta debajo de la rodilla. Un policía con un arma automática vigilaba los cuerpos. Era demasiado tarde para ayudarlas. Pequeños números amarillos, del uno al seis, estaban colocados sobre cada pieza de evidencia balística, dispersa entre las vías. De acuerdo con los medios locales, les dispararon y apuñalaron a las mujeres en la tarde avanzada del 30 de mayo de 2013.²¹ Un reporte preliminar sugiere que se negaron a pagar la cuota exigida por los criminales después de montarse en el trén.²² Sus cuerpos fueron encontrados ese mismo día al norte de la ciudad turística de Palenque, Chiapas. Ambas eran de Honduras —los mexicanos no se arriesgan a viajar en trenes de carga cuando migran a través del país rumbo al norte. La mayoría de los centroamericanos que cruzan México lo hacen como indocumentados, lo cual significa que no tienen derecho al libre movimiento.

Si un migrante indocumentado aborda un autobús en México, se arriesga a ser detenido por soldados o agentes de migración en uno de los numerosos puntos de revisión que hay en las carreteras, y luego ser deportado. Sin papeles no pueden llegar más allá del mostrador de un aeropuerto. Así, el tren es el medio de transporte más accesible para los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y otros que viajan con la esperanza de llegar a EUA y encontrar empleo. Pero el tren representa un conjunto de riesgos, pues está bajo el control del crimen organizado. Grupos de migrantes con los que me reuní en Palenque me explicaron en voz baja que se les exigen tres pagos de cien dólares para llegar hasta el estado de Tamaulipas hacinados en el techo de un vagón de carga, lo cual es comparativamente más caro que comprar un boleto de avión barato de Chiapas al norte de México.

El doble asesinato en las vías del tren de Chiapas sucedió a la sombra de un intento de extorsión colectiva de migrantes en la misma zona el primero de mayo, cuando cientos de migrantes centroamericanos que iban por Veracruz en un tren experimentaron en carne propia un horror absoluto.

21 Genaro Sánchez, “Ejecutan a dos mujeres migrantes en Palenque”, *Tabasco Hoy*, Mayo 30, 2013, <http://www.tabascohoy.com/2/notas/index.php?ID=130334>.

22 *Ibid.*

Después de que anoheciera, el tren pasó por Las Barrancas, una comunidad de 3,000 habitantes al sur del estado. Al aproximarse al pueblo, un grupo de sujetos vinculados a Los Zetas empezaron a exigir a los que iban a bordo el pago de una cuota. Según testimonios directos, miembros de Los Zetas le exigían a cada migrante cien dólares. Mientras el tren seguía avanzando, los que se resistían o no podían pagar eran golpeados, acribillados y apuñalados, y los iban arrojando del tren en un tramo de nueve kilómetros. Alrededor de 25 personas fueron hospitalizadas con heridas, una de ellas de gravedad. Un muchacho sobrevivió porque las balas se alojaron en su mochila. Para protegerse, cientos de personas saltaron del tren al camino de grava que va junto a las vías rumbo a Las Barrancas. Entre la confusión, la noticia llegó a Julio Pérez Zabalza, un ágil septuagenario con la energía de un treintañero. Consiguió usar un altavoz montado en un poste de cuatro metros de altura frente a su casa y empezó a convocar a los migrantes a reunirse en la plaza. “Empecé a vocear, como a los cinco, diez minutos, empezaron a salir los migrantes hacia la cancha municipal. Dentro de una hora, hora y media, ya estaba llena la cancha con entre 500 y 600 migrantes”, relató. Los habitantes de Las Barrancas alimentaron y alojaron a los migrantes, la mayoría de los cuales continuaron después su camino hacia Estados Unidos. Los pocos que permanecieron en la comunidad, debido a que las heridas les impidieron continuar, prefirieron no hablar con los periodistas.

Rubén Figueroa es colaborador de un albergue para migrantes en la frontera guatemalteca, que para muchos es el punto de entrada a México, donde se subirán a un tren rumbo al norte. Él dice que los abusos de migrantes en Veracruz han alcanzado proporciones desmedidas debido a la relación estrecha del gobierno con los criminales. “Naturalmente la migración es una tragedia humanitaria, pero con gobiernos que son cómplices del crimen organizado, esto ya se vuelve un verdadero holocausto”.

Algunos han acusado al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, de encubrir a los culpables del ataque a los migrantes en Las Barrancas el primero de mayo de 2013. Duarte declaró en un comunicado de prensa que el incidente de hecho fue resultado de una trifulca entre los mismos migrantes.²³ Pero Guillermo Cortés Moreno, agente municipal de Las Barrancas, rechazó esa versión y reiteró que el conflicto se debió a la extorsión de migrantes. De acuerdo con los reportes periodísticos, nadie murió en el ataque criminal a los pasajeros del tren. Por otro lado, los periodistas locales

23 Noé Zavaleta, “Asaltan a migrantes en Veracruz; Duarte lo tergiversa: ‘fue una riña’ Asaltan a migrantes en Veracruz; Duarte lo tergiversa: ‘fue una riña’”, Proceso, Mayo 2, 2013, <http://www.proceso.com.mx/?p=340766>.

creen que es posible que haya habido muertos esa noche, pero como la policía tuvo bajo control la zona diez horas después del ataque, los cuerpos pudieron ser desaparecidos. Sin cuerpos no hay muertos, dijeron. Según miembros de Grupo Beta, un grupo financiado y creado por el gobierno que provee comida y agua a los migrantes, lo que sucedió en Las Barrancas no es algo tan inusual. La diferencia estuvo en que fue denunciado por las autoridades locales y los medios le dieron seguimiento. “No son raros, es un acontecimiento que se da comúnmente en este estado”, dijo Figueroa, el activista por los derechos de los migrantes. “Es común que el gobierno trate de desmentir, pero bueno, gracias a los medios de comunicación que también, pues aquí en este estado peligran mucho los periodistas, es uno de los estados con mayor índice de asesinatos de periodistas, los periodistas agarran fuerza y dan a conocer la realidad”. Figueroa trabaja en La 72 en Tenosique, Tabasco, una calmada población en las llanuras húmedas de la frontera México-Guatemala. La 72 comenzó tras el descubrimiento en agosto de 2011 de los cuerpos de 72 migrantes que presuntamente fueron asesinados por Los Zetas, debido a que no pudieron pagar una extorsión o se negaron a trabajar para la organización criminal. Hubo al menos dos sobrevivientes, uno de Ecuador y otro de Honduras. Los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres fueron atados y apilados al fondo de un rancho en San Fernando, Tamaulipas. El albergue fue nombrado en memoria de las víctimas de aquel crimen, conocido como la primera masacre de San Fernando.

“Efectivamente aquí es el punto de inicio de la tenebrosa ruta del Golfo – del infierno, como decimos”, me explicó Figueroa en 2012. “[Los migrantes] tardan alrededor de 25 días para llegar a la frontera norte. Utilizan trenes, autobuses, hay muchas maneras que utilizan para llegar a la frontera norte, y de ahí pues intentar cruzar a los Estados Unidos”. Figueroa me dio más detalles sobre por qué llama la ruta del Golfo, por la que pasan los migrantes hacia el norte a través de Veracruz y Tamaulipas, la ruta a través del infierno. “Aquí hay muchos intereses económicos por parte del crimen organizado; los migrantes para ellos son una mercancía. De lo que [los criminales] no se dan cuenta es que es una migración pobre, una migración forzada, y que no traen dinero. Pero a fuerzas les quieren sacar dinero, los torturan para que les den el número de teléfono de un familiar en Estados Unidos, y si no lo tienen, pues los matan”.

Para llegar a la iglesia del pueblo desde el albergue se puede hacer una corta caminata o subirse a un moto-taxi de tres ruedas, conocido en el lugar como ‘pochimovil’, y llegar en cuestión de minutos. Ahí me reuní con fray

Tomás González Castillo, un franciscano que también apoya a los migrantes que pasan por Tenosique. “Yo he recibido varios testimonios de secuestros masivos en los que narraban las formas, y de verdad que es increíble y solamente después de muchos testimonios uno empieza a creer. Parece que están hablando de películas de terror, gente que te narra las mutilaciones, cómo les rompieron la cabeza con martillos, en fin...” rememoró en la pequeña y mal iluminada sacristía de la parroquia. Este tipo de horrores, enfrentados por los migrantes al cruzar México, generalmente se han mantenido fuera de los encabezados en los medios de México y Estados Unidos.

Extracción paramilitarizada

En el capítulo anterior vimos cómo la militarización formal puede beneficiar a las corporaciones transnacionales, ya que la policía y el ejército establecen áreas y corredores seguros y sofocan la disidencia. También existen casos concretos en los que la paramilitarización ligada a la guerra antidrogas está desplegándose en regiones donde la extracción de recursos es una actividad económica central. Estos casos difieren de la militarización documentada antes, ya que el gobierno se distancia oficialmente de la violencia paramilitar, o se presenta como si estuviera luchando por controlarla. Tómese por ejemplo el norte de Tamaulipas, el baluarte de Los Zetas: ahí se encuentra la cuenca de Burgos, rica en gas y petróleo. El Servicio Geológico de EUA declaró en 2003 que Burgos podría contener más de seis mil millones de barriles de petróleo aún no descubierto, y más de siete trillones cúbicos de gas.²⁴ La cuenca de Burgos tiene su centro en Reynosa, Tamaulipas, y cubre un área aproximadamente del tamaño de Irlanda, en una sección fronteriza que se ha convertido en una de las más peligrosas de México. Buena parte de la violencia en Tamaulipas surge de la división en 2010 del Cártel de Golfo y Los Zetas, así como del despliegue de 8,000 militares en el estado.²⁵ Ciudad Mier, también en la cuenca de Burgos, padeció intensas batallas armadas a plena luz del día a lo largo de 2009 y principios de 2010. “La escala del conflicto aumentó al inicio de noviembre de 2010, cuando Los Zetas amenazaron abiertamente a todos los habitantes de

24 USGS, “Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Burgos Basin Province, Northeastern Mexico, 2003”, <http://pubs.usgs.gov/fs/2004/3007/fs-2004-3007.pdf>.

25 Milenio, “Llegan 8 mil soldados a Tamaulipas para reforzar seguridad”, <http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/llegan-8-mil-soldados-a-tamaulipas-para-reforzar-seguridad>.

Ciudad Mier, afirmando que todos los que se quedaran en la ciudad serían asesinados. Como resultado, cerca de 400 personas que no se habían podido marchar durante el año huyeron a la vecina Ciudad Miguel Alemán, donde encontraron albergue en un auditorio de la comunidad”.²⁶ Las balaceras y los secuestros de trabajadores del petróleo también obligaron a Pemex a suspender operaciones en equipos de perforación de la cuenca de Burgos. “Pemex esconde los casos [de secuestros]. Hay más de veinte personas desaparecidas en nuestro sindicato”, afirmó un hombre con el que conversé en Reynosa, y que ha trabajado en la paraestatal toda su vida. “Nomás ponen que están faltando al trabajo”, me dijo. El robo de derivados del petróleo por parte del crimen organizado también es común. Cerca de un 40 por ciento de la producción de gas natural condensado de Burgos es desviada y robada, algo que generalmente se atribuye a Los Zetas.

En 2011, Pemex levantó una demanda en Houston contra diez compañías estadounidenses de petróleo y oleoductos por colaborar con el crimen organizado al comprarles gas natural robado de la cuenca de Burgos en México. “Los cárteles construyeron túneles y sus propias tuberías para facilitar el robo... Todos los demandados han participado y obtenido ganancias —con conocimiento o sin él— en el tráfico de condensado ilegal en Estados Unidos y por lo tanto han estimulado y financiado a los grupos del crimen organizado mexicano que robaron el condensado”, afirma la queja.²⁷ El significado de esta demanda no puede ser ignorado, pues alega una relación directa entre los grupos paramilitares y varias compañías petroleras de Texas. La cuenca de Burgos es solo una de las áreas ricas en hidrocarburos a lo largo de la frontera norte de México. Los nuevos hallazgos de gas de lutitas son explotables por medio de la fractura hidráulica, o *fracking*, y México ha aprobado reformas para que las empresas estadounidenses puedan hacerlo en esas áreas. Los yacimientos se encuentran principalmente en el norte y noreste de México, en los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.²⁸ Todas estas entidades han sido militarizadas como parte de la guerra antidrogas, y algunas de ellas tienen altos niveles de desplazamiento debido a la violencia vinculada a la guerra.

26 IDMC, “Briefing paper by the Norwegian Refugee Council’s Internal Displacement Monitoring Centre on forced displacement in Mexico due to drug cartel violence”, Diciembre 2010, <http://www.refworld.org/docid/4d2714522.html>, 3.

27 US District Court for the Southern District of Texas, Houston Division, “Pemex Condensate Theft Ring Lawsuit (Complaint)”, <http://www.archive.org/download/PemexCondensateTheftRingLawsuitcomplaint/PEP.PDF>.

28 Noticias Televisa, “México descubre yacimientos de gas natural en frontera con EU”, <http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/355102/mexico-descubre-yacimientos-gas-natural-frontera-con-eu>.

De manera análoga a Colombia, no hay duda de que la capacidad de los residentes de organizarse y protestar contra los miles de pozos que se están perforando en estas áreas desérticas se ha visto muy debilitada por la aguda violencia que precedió a los proyectos.

La confluencia entre la actividad paramilitar y la minería transnacional es particularmente evidente en Chihuahua, el estado más grande del país en términos territoriales. Chihuahua está experimentando al mismo tiempo una importante expansión en la minería transnacional, la militarización y la paramilitarización bajo el pretexto de la guerra antidrogas. Por ello, funciona como un microcosmos de lo que está pasando en diversas partes de México, Centroamérica, Colombia y Perú. El hecho de que hay una fiebre por extraer recursos a la par de la militarización (y paramilitarización) ligada a la guerra antidrogas es un secreto a voces, uno que ayuda a dar una explicación más adecuada de por qué los gobiernos (locales y extranjeros) están promoviendo estrategias de control de drogas que sirven de muy poco para controlar el narcotráfico o disminuir el consumo.

Los Reyes Salazar son miembros de la familia más conocida en haber sido atacada y desplazada por el crimen organizado en Chihuahua. Conocí a Saúl Reyes Salazar en El Paso, Texas, al otro lado de la frontera de donde dos de sus hermanas, dos de sus hermanos y su cuñada fueron asesinados entre enero de 2010 y febrero de 2011. Los Reyes Salazar eran conocidos por su activismo ambiental, pues se habían opuesto exitosamente a la instalación de un depósito de desechos nucleares en Texas, y habían realizado campañas contra la contaminación y el vertido ilegal de toxinas en Juárez. También eran críticos prominentes de la incursión militar en el Valle de Juárez.

Actualmente, Saúl Reyes Salazar vive en El Paso, Texas, con su familia. Él y su familia inmediata obtuvieron el asilo en enero de 2012, y su activismo ahora se concentra en denunciar los asesinatos y la guerra que destruyó a su familia y lo obligó a huir de México. “Ahora no hay prácticamente nadie que hable de esto, pero siguen contaminando el Valle de Juárez a través de un canal de más de cien kilómetros de largo con las aguas residuales de Juárez, y bueno, las tierras de cultivo están contaminadas con diferentes químicos de las maquiladoras que los vierten al desecho, y aceites de los talleres mecánicos, y de por sí los desechos orgánicos de todas las casas de Ciudad Juárez van a dar al Valle, que es prácticamente la fosa séptica de Juárez”, me comentó en marzo de 2013. Las acciones de protesta y ambientalismo en la región fronteriza han disminuido de cara a la violencia, que ha sido extrema en muchos lugares del Valle de Juárez. “No somos los únicos que hemos sufrido esta tragedia. En Chihuahua han sido más de cuarenta derechohumanistas,

activistas sociales y ecologistas que han sido asesinados. Prácticamente consideraría que fue una limpieza, ¿sí? Una limpieza ideológica, y esto aplica tanto a las luchas políticas como las derechohumanistas y ecologistas”.

Para explorar este fenómeno a detalle, veamos con más detenimiento lo que está en juego en Chihuahua. De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, en 2010 Chihuahua fue el segundo estado más importante del país en producción de oro, plata, plomo y cinc.²⁹ Más de la mitad de la tierra en el estado, casi del tamaño de Texas, ha sido repartida en concesiones mineras.³⁰ El volumen de metales preciosos extraídos en Chihuahua se ha incrementado mucho desde 2006 –la producción de plata casi se duplicó entre 2006 y 2010.³¹ La minería y la violencia han aumentado de manera simultánea. Tal como veremos con el caso de Ismael Solorio Urrutia y Manuelita Solís Contreras, la violencia asociada a los cárteles puede resultar benéfica para las compañías mineras o sus promotores en su intento de acallar a sus opositores.

Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras fueron dos víctimas más de la limpieza ideológica descrita por Saúl Reyes Salazar. Ambos exhalaban su último aliento sentados en su camioneta, estacionada a un lado de la autopista a la salida del municipio de Cuauhtémoc. Según los vídeos utilizados en la investigación del asesinato, Ismael se acercó a la orilla de la carretera y le dio la vuelta al vehículo como si fuera a hablar con el conductor de un auto que se estacionó detrás del suyo. Mientras el asesino se aproximaba, Ismael sacó 160 pesos (unos 12 dólares) de su billetera como si fuese a pagarle algo. Cuando encontraron su cuerpo, aún tenía los billetes en la mano.

Cuando le pregunté a Martín Solís Bustamante, miembro de El Barzón y gran amigo de la familia Solorio, cómo murieron exactamente, se levantó de la silla, se puso detrás de mí y presionó dos dedos en la base de mi cráneo. Dos balas atravesaron el cráneo de Ismael y se incrustaron en el pecho y el hombro de Manuela, provocándoles la muerte. Sus asesinatos son los primeros de opositores a la minería canadiense en el estado de Chihuahua. El doble asesinato impactó a los vecinos de Benito Juárez, un pueblo desértico con cerca de 12 mil habitantes. Benito Juárez se extiende en torno a un parque central donde hay vendedores de helados y burritos y los ancianos reposan en bancos bajo la sombra de los árboles. A pocas

29 Servicio Mexicano de Geología, “Panorama Minero del Estado de Chihuahua”, julio 2011, <http://www.sgm.gob.mx/pdfs/CHIHUAHUA.pdf>, 8.

30 *Ibid.*

31 *Ibid.*, 5.

manzanas, las calles asfaltadas que parten del centro se transforman en polvorientas carreteras de grava que se extienden por kilómetros hacia el áspero desierto. A los pies del Río Carmen se eleva una presa que, a través de un pequeño canal, provee de agua a los lugareños para abastecer al ganado, y cultivar chiles y algodón, los pilares económicos de la zona. Benito Juárez, además, es un ejido, lo cual significa que las 53 mil hectáreas de tierra que abarca son propiedad comunal de las 400 familias que las trabajan.

Las concesiones mineras supuestamente otorgan derechos para explorar y explotar minerales debajo de la tierra ejidal, pero para llegar a los minerales, la compañía concesionaria tiene que conseguir derechos de superficie. La carretera que se dirige a donde MAG Silver (compañía minera con sede en Vancouver) realiza pruebas de perforación se extiende por llanuras desiertas bañadas por el sol y flanqueadas por montañas en todas direcciones, un paisaje tan solo interrumpido por matorrales de chaparral y espinas puntiagudas de ocotillo. Sin sistemas de irrigación casi nada crece en esta zona, y garantizar el acceso al agua en el desierto no es una tarea fácil. En Benito Juárez, el esfuerzo por asegurar la supervivencia de la economía local y una forma de vida construida en torno a la familia y la agricultura es multigeneracional e involucra a cientos de habitantes. Ismael Solorio y Martín Solís, por ejemplo, estudiaron juntos en una escuela agrícola en Juárez. Cuando regresaron al ejido a principios de los ochenta, se iniciaron en el activismo organizándose para defenderse de las prácticas depredadoras de los bancos tras la devaluación del peso de 1987, y desarrollaron métodos de acción directa para mejorar la calidad de vida de los miembros del ejido.

Más tarde, Solorio y Solís ayudaron a fundar El Barzón (el barzón es el anillo de hierro unido al yugo empleado en el arado). Los miembros de la organización captaron la atención de todo el país cuando se presentaron a caballo en el Congreso Federal tras 54 días de cabalgata desde la frontera mexicana en Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México. Las estrategias atrevidas de los barzonistas evocaron a los revolucionarios de principios del siglo XX. Así, consiguieron el primer cambio en el presupuesto rural que se recuerde, y más tarde lograron subsidios eléctricos para agricultores cuyo medio de vida se vio amenazado debido a las condiciones desiguales derivadas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante sus últimos años de vida, Ismael Solorio, al que sus amigos llamaban ‘Chuletas’, continuó plantando chiles y criando ganado mientras dedicaba su tiempo libre a los problemas relacionados con el agua y la minería en la región. Lejos de ser un activista de tiempo completo, Solorio se dedicó mayormente a trabajar la tierra, pero alzó la voz siempre que vio que agentes externos amenazaban el futuro de

su comunidad. Primero fueron los pozos profundos clandestinos excavados por los menonitas, los cuales disminuyeron el caudal del río Carmen, que durante mucho tiempo había abastecido de agua a los campos agrícolas de Benito Juárez y otras comunidades del desierto. Luego llegó MAG Silver, la cual llevó a cabo un polémico programa de perforaciones de exploración en su proyecto “Cinco de Mayo”, en busca de plata, oro, cobre, molibdeno y tungsteno en tierras que, según los habitantes, son comunitarias.

Ismael y su esposa Manuela, maestra de escuela y ferviente animadora del activismo de su marido, se habían enfrentado a muchas fuerzas poderosas: bancos, gobiernos y los adinerados perforadores de pozos, pero algo era distinto en esta ocasión. La tensión creció a gran velocidad; el ambiente se caldeó y en poco tiempo Manuela e Ismael estaban muertos. En los meses previos a su asesinato, Solorio denunció amenazas de muerte y agresiones por parte de gente que él señaló como pagada por la compañía minera, y pidió al gobierno que le proporcionara protección. Su petición fue ignorada.

“Desde 1985 anduvimos en diferentes movilizaciones y acciones de resistencia civil”, señaló Solís en declaraciones en la sede central de El Barzón, en Chihuahua. “Siempre nos hemos enfrentado al gobierno, y nunca al crimen organizado”. Dejó claro que la decisión de asesinar a Manuel y a Ismael no provino del líder de ningún cártel. Lejos de ser capos de la droga, el asesino y sus cómplices son lugareños dedicados a hacer el trabajo sucio para una organización criminal conocida como el Cártel de Juárez: “Sicarios, gente armada que en su momento amenazó a Ismael por las actividades que desarrollaban en contra de la empresa minera”, me dijo Solís, pausada y confiadamente.

Las decenas de declaraciones obtenidas por la policía en los meses siguientes al asesinato dejan claro que el programa de exploración de MAG Silver era una fuente de conflictos en Benito Juárez. Los testimonios incluidos en la investigación del crimen, que revisé personalmente, incluyen referencias a individuos que amenazaron a Israel afirmando ser policías federales vestidos de civil sin placa de identificación o una orden de arresto legítima, además de peleas entre trabajadores de la exploración minera y detractores del proyecto. Un geólogo que trabajaba para la compañía también fue interrogado. El presunto homicida de Solorio fue asesinado por la policía el 19 de enero de 2013, pero la familia y amistades de Solorio no han abandonado su lucha para exigir la asignación de responsabilidades. “Planteamos que se tiene que dar una justicia y detener a los otros autores materiales, pero también a los autores intelectuales de este crimen”, declaró Solís.

Manuela e Ismael se han ido; ya no pueden trabajar en el campo ni reunirse con su familia y amigos para comer y platicar. Sus cuerpos reposan bajo la tierra que alguna vez labraron. Sus nombres, junto con decenas más, honran un monumento rebelde erigido para recordar a las víctimas de la violencia en el estado de Chihuahua, entre las cuales también hay otros activistas, miembros de comunidades indígenas y mujeres jóvenes.

En vez de reclamar una investigación adecuada del asesinato del más prominente opositor comunitario del proyecto “Cinco de Mayo” de exploración en Chihuahua, el presidente y director ejecutivo de MAG Silver, Dan MacInnis, achacó los asesinatos a la lucha del gobierno contra el crimen organizado. “Fue una especie de situación extraña que, considerando que entre 60,000 y 100,000 personas han sido asesinadas en México en los últimos seis años por el crimen organizado en la llamada guerra antidrogas, en vez de reportar lo obvio, todo menos eso se estuviera comunicando”, declaró MacInnis a la revista canadiense en línea *ipolitics.ca*.³² Cuando le pedí que aclarara lo que quiso decir, MacInnis respondió: “Actualmente es una realidad muy triste en México que entre 60,000 y 100,000 muertes han ocurrido durante los últimos seis años debido a las luchas continuas del país contra la actividad del crimen organizado. Nos resulta incomprensible que ciertos grupos hayan hecho conjeturas sobre la implicación de las compañías mineras, proveedoras o agrícolas”.³³ En resumen, la posición de la compañía es que es normal que los civiles sean asesinados en el país donde están operando. Cuando cien mil personas pueden o no haber sido asesinadas durante seis años, una o dos muertes más por arma de fuego no pueden hacer ninguna diferencia. Esta posición hubiera sido mucho más difícil de sostener antes de que se emprendiera la guerra antidrogas en diciembre de 2006.

La investigación de la policía también atribuyó a una disputa comunitaria los actos violentos que llevaron al asesinato de Ismael y Manuela, pero también deja claro que el prospecto de los trabajos bien pagados que MAG Silver llevaría a Benito Juárez fue un aspecto esencial de la disputa. “Eso es lo que nos duele, que los mismos compañeros de la comunidad hayan entregado a Ismael y Manuelita, porque eso lo sabemos, que ahí mismo en Benito Juárez se hizo el trato para que los mataran”, dijo en una entrevista

32 James Munson, “Before the Rush: The Rancher’s Rebellion”, *Ipolitics.ca*, <http://www.ipolitics.ca/2013/03/04/before-the-rush-the-ranchers-rebellion-2/>. Un consejero ejecutivo de MAG Silver sugirió que Solorio estaba implicado en actividades criminales —una insinuación que en México es suficiente para implicar que las víctimas de la violencia de algún modo se merecían lo que les pasó.

33 Dan MacInnis, comunicación personal, Marzo 28, 2013.

Siria Leticia Solís, residente de la comunidad desde hace mucho tiempo y miembro de El Barzón. “Estorbamos a la compañía y por eso matan a la gente”.

Desde los asesinatos, la exploración minera en la comunidad se ha suspendido, pero las tensiones no se han disipado. “Ellos [la empresa] nunca se arrimaron a una asamblea general de ejidatarios. Los trámites que hicieron ante las autoridades correspondientes fueron ficticios por el hecho de que no tocaron a la asamblea, que es la máxima autoridad de aquí”, dijo Fausto Albión Jiménez Holguín, comisariado del ejido Benito Juárez. Poco tiempo después del crimen, se llevó a cabo una asamblea con más de la mitad de los miembros presentes, y el ejido de Benito Juárez votó en noviembre de 2012 prohibir la actividad minera en sus tierras durante los siguientes cien años. La compañía reconoce que su programa de exploración en Benito Juárez está actualmente inactivo, y afirma que está “resolviendo retrasos con los permisos de exploración para su proyecto Cinco de Mayo”. Los homicidios de Ismael Solorio y Manuela Solís se dieron en la encrucijada entre el activismo ambiental y el crimen organizado, en una región donde los grupos armados actúan con casi total impunidad. Mientras tanto, los tres hijos huérfanos y el resto de la familia de Ismael y Manuela tendrán que vivir sin ellos para siempre. Su comunidad, Benito Juárez, está profundamente dividida ante el prospecto de la futura actividad minera en el territorio. A pesar del interdicto de cien años, MAG Silver planea continuar sus planes tan pronto como sea posible. Si la compañía intenta que sus trabajadores continúen la exploración, el resultado previsible será más violencia.

Conforme la noticia del doble homicidio se extendió por las redes antimineras en todo México, los nombres de Manuela e Ismael se agregaron a una lista cada vez más larga de activistas antimineras asesinados. En ella ya se encontraban Mariano Abarca, asesinado en noviembre de 2010 en Chiapas por pistoleros conectados con Blackfire, una minera canadiense basada en Calgary, y Bernardo Vásquez, asesinado el 15 de marzo de 2012 debido a su activismo contra la empresa Fortuna Silver (de Vancouver) en el estado de Oaxaca.

Actualmente, a los habitantes de San José del Progreso, Oaxaca, les resulta imposible ignorar la existencia de un proyecto minero en su localidad. El centro de operaciones de Fortuna se encuentra justo frente al camino principal del pueblo, e incluye su propia planta eléctrica, oficinas, y una enorme reserva de mineral, todo rodeado por una reja de alambre muy alta. Vásquez fue asesinado al estilo del crimen organizado, con ráfagas de disparos dirigidas hacia su vehículo. Su prima Rosalinda y su hermano Leovigildo salieron heridos del ataque.

La primera vez que llegó la compañía, los residentes se percataron de que el presidente municipal se estaba reuniendo con gente ajena a la comunidad. “Hubo varias asambleas entre el comisariado y el presidente municipal, y les preguntaban quiénes eran esas personas, hasta que el comisariado ejidal pues informó que efectivamente eran de una empresa minera que quería explotar el material”. Esto fue lo que me dijo Bernardo Vásquez alrededor de un mes antes de ser asesinado. “[La empresa] empezó a agarrar a la gente del comisariado como de manera individual”, es decir, ignorando el proceso de asamblea, según me explicó. Antes del atentado, aparecieron amenazas en su contra pintadas con espray en el muro de una presa, firmadas por “Los Zetas”.

Del mismo modo, la violencia paramilitar se ha disparado en áreas ricas en recursos en todo el país. Se ha desencadenado también contra los miembros del comisariado ejidal en Carrizalillo, Guerrero, cuyo presidente municipal fue asesinado en mayo de 2013.³⁴ El asesinato sucedió tras años de protestas en el ejido, que incluyeron bloqueos contra la subsidiaria local de la empresa de Vancouver Goldcorp Inc. Un par de meses antes, dos trabajadores de la misma mina en Guerrero murieron cuando sus vehículos fueron rociados con más de cien rondas de disparos de fusiles AK-47.³⁵ Otros incidentes incluyen el desplazamiento en julio de 2013 de más de 300 personas –la mayoría menores de edad– de siete pueblos de San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, tras haber recibido amenazas del crimen organizado.³⁶ Aproximadamente 2,000 personas han sido desplazadas de la región.³⁷ “Se dice que hay concesiones mineras, aunque la mayor parte del territorio son ejidos. El Estado deja el trabajo sucio a la delincuencia organizada para despoblar la zona y que cuando las mineras lleguen, ya no haya quien se oponga”, declaró Manuel Olivares, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, al periódico digital *Desinformémonos*.³⁸

En febrero de 2014 viajé a Tlapa de Comonfort para reunirme con una activista local en el estado de Guerrero, quien ve un claro vínculo entre la

34 Rogelio Agustín Esteban, “Investigan escalada de violencia en zona minera”, Mayo 16, 2013, <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/9f20e3acb061086cf7606c9c464e2422>.

35 Notinfomex, “Guerrero: encuentran dos ejecutados en el KL. 170 de la carretera Iguala-Chilpancingo”, julio 18, 2013, <http://www.notinfomex.info/2013/07/guerrero-encuentran-dos-ejecutados-en.html>.

36 Sergio Ocampo y Héctor Briseño, “La violencia en Tierra Caliente, por ‘alianza’ del gobierno con el hampa para explotar minas”, La Jornada, julio 21, 2013, <http://www.jornada.unam.mx/2013/07/21/politica/010n1pol>.

37 Brisa Araujo, “Te sumas al narco, te vas, o te mueres: desplazados en Guerrero”, *Desinformémonos*, julio 2013, <http://desinformemonos.org/2013/07/te-sumas-al-narco-te-vas-o-te-mueres-desplazados-en-guerrero/>.

38 *Ibid.*

llegada de grandes compañías mineras y el ejercicio del control territorial por parte del crimen organizado. “Esta nueva lógica la está imponiendo el crimen organizado, que se está estableciendo de una forma tan distorsionada que ya no están controlando territorios para el tráfico ni de armas ni de estupefacientes, sino para la extorsión”, dijo. Explicó que dos grupos criminales, uno protegido por el ejército y otro por los marinos, controlan el territorio entre Iguala y Chilpancingo, atravesado por el Río Balsas. “Estas partes están cuidadísimas; del río a Iguala está la Marina metida, del río a Chilpancingo está el Ejército”, me comentó. Un grupo criminal asociado al Cártel de los Beltrán Leyva o un grupo escindido conocido como Los Rojos, extorsiona a los habitantes de las comunidades de la zona. “La gente tiene miedo de transitar en esa lógica, y tienes además políticas que hacen que te muevas; una buena parte está en Chilpancingo, pero otra buena parte, por ejemplo la parte agraria, está en Iguala. [Y esas formas de control] del territorio vinculadas al secuestro, a la desaparición y al asesinato, se dan simplemente porque estás apoyando a otro grupo, cuando tu apoyo es más un ejercicio de miedo porque es ‘O me pagas o te secuestro, o te jodo’”.

Para este activista, no es una coincidencia que Goldcorp opere su mina Los Filos-Bermejil cerca del Río Balsas, en medio de esta disputada región. Parte de su trabajo consiste en ayudar a los habitantes y ejidatarios a tratar de impedir la entrada de las compañías mineras. Mas la paramilitarización de la región, con la presencia de grupos del crimen organizado, ha impedido que los activistas se acerquen a las comunidades. Me compartió un ejemplo de esto: “Nosotros estábamos intentando en una región que se llama El Limón hacer un proceso informativo para evitar que la mina entrara. Bueno, en nuestra primera visita ya había cuatro asesinados. Y simplemente no había condiciones de seguridad para que nosotros fuéramos a hacer una asamblea. Eso fue en 2010, y hoy la empresa ya entró”. “Qué empresa?”, le pregunté. “Goldcorp, con una subsidiaria local”.

Controlar la resistencia local a la minería es sólo una de las formas del involucramiento criminal/paramilitar en la minería. También hay casos de grupos criminales que extraen minerales y los comercializan por sí mismos, específicamente en Michoacán y Coahuila. Según Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente del Partido Revolucionario Institucional, los Zetas roban carbón de las minas del estado del norte y lo venden a terceros que a su vez lo venden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).³⁹

39 Redacción, “Carbón, nueva actividad del narco en Coahuila: Moreira”, El Universal, Octubre 26, 2012, <http://www.eluniversal.com.mx/notas/879116.html>.

Los Caballeros Templarios en Michoacán han estado involucrados en situaciones muy similares a las de Los Zetas relacionados con las compañías estadounidenses acusadas de comprarles gas natural robado. En Michoacán, los Caballeros Templarios roban mineral de hierro y lo exportan vía terceros a China. El canal británico Channel 4 entrevistó a un hombre que afirmó que trabajaba en una de las minas de hierro operadas por el cártel. “Las empresas que exportan realmente el mineral son chinas, entonces saben que el mineral es ilegal pero, pues bueno, ahora sí como dice el dicho, encontraron su minita de oro, y las compañías que tú llamas ilegales son las que exportan... se lo venden a compañías que están regularizadas para poder exportar el mineral. Son 13 millones de dólares por barco; al año estamos hablando de treinta buques, más o menos, lo que se va, entonces imagínate la cantidad de dinero que es”,⁴⁰ dijo el minero, que no fue identificado. Calculó que entre 50 y 75 por ciento del mineral de hierro embarcado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue extraído de minas operadas por afiliados a Los Caballeros Templarios. El entrevistador le preguntó al minero si la venta de minerales reportaba más dinero que las drogas, y respondió: “por supuesto”.

En 2013, los líderes de un grupo de autodefensa en San Miguel de Aquila, Michoacán, declararon al sitio independiente de noticias SubVersiones: “Están explotando nuestros recursos naturales, principalmente el fierro. Un día llegó el gobierno del estado y le dijimos que la delincuencia estaba explotando la mina de la comunidad. El gobierno, en lugar de ir por ellos, resguardó a los del crimen organizado y metieron a más personas de ellos a trabajar a la mina. Ya no creemos en el gobierno estatal, por eso le pedimos al gobierno federal que intervenga y que dé garantía para nuestras familias y para los recursos naturales de nuestra comunidad (...) El municipio indígena de San Miguel de Aquila es uno de los más ricos en recursos, pero al mismo tiempo es de los más pobres”.⁴¹

En 2014, el grupo emitió otro comunicado, en el que se declaraba: “Durante el periodo –del 24 de julio al 13 de agosto del 2013– en que la guardia comunitaria de los indígenas de la comunidad de San Miguel Aquila operó en la localidad fue de inmensa calma, las violaciones, secuestros y pagos de cuotas desaparecieron pues los criminales salieron huyendo. Al ver los resultados del movimiento comunitario los avecindados nos comenzamos a animar para apoyar la causa de los comuneros, sin embargo,

40 Channel 4 News, “On the Trail of a Mexican Drug Lord”, Enero 28, 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=jX7dbLW-47M>.

41 José Juan Estrada Serafín, “Estamos en defensa de nuestras familias y de la comunidad indígena: San Miguel Aquila”, Subversiones, Junio 2013, <http://www.agenciasubversiones.org/?p=8080>.

el 14 de agosto en un operativo conjunto el gobierno municipal y estatal, así como también la marina armada de México decidieron ingresar a la localidad de Aquila y desarticular el movimiento de los comuneros, se llevaron presos a 45 de ellos, los hombres del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y judiciales del Estado asesinaron a dos y además golpearon a mujeres, niños y ancianos que pedían les entregaran a sus hombres para que los defendieran del crimen organizado. Cuando la guardia comunitaria de este pueblo originario fue desarticulada, los caballeros templarios auspiciados por el gobierno municipal y estatal decidieron ‘exterminar’ a todos los comuneros de San Miguel Aquila”.⁴² Después del ingreso de las fuerzas estatales, tres hombres de la comunidad fueron secuestrados, torturados y asesinados; otros tres fueron desaparecidos, y los Caballeros Templarios volvieron a controlar la extracción del mineral de hierro, extorsionando a la comunidad para obtener las tarifas que recibían de la compañía Ternium, una acerera trasnacional establecida en Luxemburgo.

Desplazamiento y bienes raíces

De acuerdo con el Consejo Noruego de Refugiados, “La evidencia de desplazamiento forzado en las localidades de El Porvenir y Práxedis G. Guerrero en el Valle de Juárez es incuestionable: prácticamente todas las casas están vacías, quemadas y vandalizadas”.⁴³ Es difícil conseguir cifras exactas: “En los pequeños poblados de Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Porvenir, Esperanza y en las aún más pequeñas rancherías del valle, no ha habido ningún censo oficial en los años recientes, por lo que nadie sabe con precisión cuántas personas se han ido, o cuántos residentes han sido asesinados o desaparecidos por la fuerza”, escribió la periodista Melissa del Bosque.⁴⁴ Ella subrayó que la violencia y el desplazamiento no se podían atribuir fácilmente a los cárteles de la droga. “La versión oficial es que el ejército fue enviado a proteger a los residentes y a expulsar a los cárteles, pero los pobladores cuentan una historia diferente. Ellos afirman que los

42 El Consejo de Autodefensa de Aquila, Michoacán, “Primer Comunicado del Grupo de Autodefensa de Aquila, Michoacán”, Enero 19, 2014, <http://elenemigocomun.net/es/2014/01/autodefensa-aquila-michoacan/>.

43 IDMC, “Briefing Paper By the Norwegian Refugee Council’s Internal Displacement Monitoring Centre on Forced Displacement in Mexico Due to Drug Cartel Violence”, Diciembre 2010, <http://www.refworld.org/docid/4d2714522.html>, 6.

44 Melissa del Bosque, “The Deadliest Place in Mexico”, The Texas Observer, Febrero 29, 2013, http://www.theinvestigativefund.org/investigations/international/1615/the_deadliest_place_in_mexico/.

soldados, en complicidad con el Cártel de Sinaloa, perpetraron buena parte de la violencia”.

Así como los desplazamientos paramilitares en Colombia despoblaron tierras que luego se aprovecharon para el cultivo de palma aceitera y proyectos extractivos, el desplazamiento de miles de residentes del Valle de Juárez no ha transformado la región en una tierra de pueblos fantasmas, cementerios, y tierra de nadie para los cárteles. Por el contrario, está programado el desarrollo del Valle de Juárez, y entre los planes está la construcción de un proyecto de parque industrial y habitacional de 400 millones de dólares en San Agustín, a unos treinta kilómetros del centro de Ciudad Juárez. La zona habitacional, que cubrirá cerca de diez kilómetros cuadrados de tierra ejidal en San Agustín, está siendo desarrollada por la corporación Prudential Financiera (incluida entre las *Fortune 500* compañías más fuertes del mundo), en conjunto con uno de sus socios locales en México.⁴⁵ “Es un proyecto completo, ambicioso, casi como una ciudad nueva”, declaró Leopoldo Canizales, un empleado municipal de San Agustín a *El Diario*.⁴⁶ El proyecto habitacional se construirá a poco más de diez kilómetros de un nuevo puente fronterizo entre Tornillo, Texas, y Guadalupe, también en el Valle de Juárez.⁴⁷ El desarrollo San Agustín responde a la predicción de un auge en la industria maquiladora, ya que se darán grandes expansiones en el sector de la manufactura mexicana si se cumplen las predicciones de los analistas. “[México] tiene la enorme ventaja de colindar con EUA, lo que significa que las mercancías pueden llegar a buena parte del país en uno o dos días, mientras que al menos se tardan 21 días en barco desde China... Además, en 2015 los salarios serán significativamente menores en México que en China”.⁴⁸ Los residentes del área no siempre están contentos con la llegada de más maquiladoras: “Es precisamente debido a la industria maquiladora que las cosas están como están; lo único que las maquilas han dejado es crimen; obligaron a los padres a dejar a sus hijos solos en casa”, afirma Ignacio Ibarra, residente de San Agustín.⁴⁹ “Aquí ahora está tranquilo,

45 Prudential Real Estate Investors, “2011 Sustainability Report”, 2011, http://www3.prudential.com/prei/pdf/2011_PREI_Sustainability_Report.pdf, 19.

46 Sandra Rodríguez, “Nueva ciudad en San Agustín”, Abril 19, 2011, <http://zuelos.com/blog/nueva-ciudad-en-san-agustin/>.

47 Diana Washington, “\$400M Development Planned for Area in Juárez Valley”, *El Paso Times*, Mayo 23, 2011, http://www.elpasotimes.com/ci_18118303.

48 Harold L. Sirkin, Michael Zinser, y Douglas Höhner, “Made in America, Again Why Manufacturing Will Return to the U.S.”, BCG.com, Agosto 2011, <http://www.bcg.com/documents/file84471.pdf>, 12.

49 Sandra Rodríguez, “Demandan no convertir en otro Riberas del Bravo a San Agustín”, *El Diario de Juárez*, Abril 20, 2011, <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=75966555>.

pero si se traen a las maquiladoras y todos los fraccionamientos, entonces sí vamos a ver lo que es bueno”.

Acapulco es otra ciudad que ha padecido lo peor de la guerra antidrogas. “El puerto turístico se ha convertido en un escenario principal de la guerra antidrogas; en un solo fin de semana este año, se encontraron más de treinta cuerpos, incluyendo los de empleados de clubes nocturnos que fueron levantados a altas horas de la noche y fueron encontrados colgando de un puente”.⁵⁰ Catorce turistas fueron atados y amenazados en un solo incidente en 2012, y posteriormente, seis de las mujeres (que eran ciudadanas españolas, razón por la que el hecho se convirtió en un escándalo nacional) fueron violadas. Tras las violaciones, el alcalde de Acapulco declaró que lo sucedido era negativo para la imagen de Acapulco, pero “esto podría haber pasado en cualquier lado, en México o en Acapulco”.⁵¹ El turismo en Acapulco, una ciudad enclavada entre montañas, playas de arena blanca y las aguas del Pacífico, disminuyó un 50 por ciento entre 2006 y 2011.⁵² El auge de la violencia ha sucedido a la par del despliegue de las fuerzas armadas como parte de la Operación Guerrero Seguro. En Acapulco, “componentes [de Guerrero Seguro] incluyen nueva iluminación en la Costera Miguel Alemán, la instalación de más de 600 cámaras de seguridad en áreas turísticas y el despliegue de fuerzas de seguridad federal para vigilar la aplicación nocturna de la ley”.⁵³

Lejos de ahuyentar a los inversionistas, el pico de la violencia inspiró al magnate Carlos Slim, varias veces nombrado el hombre más rico del mundo, a convocar a algunos de los hombres más ricos y poderosos de México a formar un consorcio para la recuperación económica de la ciudad. Mientras miles de familias sufrían la devastadora pérdida de amigos y seres queridos, obligados a vivir en un contexto cada vez más cruel de secuestros, torturas y masacres, Slim se mantuvo concentrado en invertir. “Los que no inviertan y se vayan con cuidado por tener dudas, se van a quedar atrás. No tengo miedo de invertir aquí en Acapulco”, declaró en 2012.⁵⁴ Slim ha invertido

50 Nicholas Casey y Alexandra Berzon, “Mexico Tourism Feels Chill of Ongoing Drug Violence”, Wall Street Journal, Junio 8, 2011, <http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304432304576367710290674534>.

51 Adriana Covarrubias, “Confirman violación a seis turistas españolas en Acapulco”, El Universal, Febrero 4, 2013, <http://www.eluniversal.com.mx/notas/900731.html>.

52 Gay Nagel Myers, “Acapulco Fights Image Woes as It Seeks Return to Glory”, Travel Weekly, Mayo 16, 2012, <http://www.travelweekly.com/Mexico-Travel/Acapulco-fights-image-woes-as-it-seeks-return-to-glory/>.

53 *Ibid.*

54 Dolia Estevez, “Can Billionaire Carlos Slim Return Acapulco to its Past Glory?”, Forbes, Febrero 12, 2013, <http://www.forbes.com/sites/doliaestevez/2013/02/12/can-billionaire-carlos-slim-return-acapulco-to-its-past-glory/>.

mucho en bienes raíces en Acapulco, y posee un hotel y otras propiedades en la ciudad. La violencia contra los pobres en Acapulco, una de las ciudades más desiguales de México, ha proporcionado a los inversionistas como Slim las condiciones idóneas para comenzar un nuevo plan de desarrollo.

Agricultores y rancheros también han sido desplazados de áreas rurales en el norte de México debido a las amenazas y la violencia. A fines de 2010, 5,000 agricultores habían sido desplazados en Tamaulipas, según un reporte preparado por la agencia de inteligencia mexicana, el CISEN.⁵⁵ “Todos los ganaderos y agricultores también han sido víctimas de secuestro, extorsión y todo esto. Ahorita muchos me están pidiendo que venda sus terrenos y sus ranchos, ¿pero a quién se los vendo? ¿A quién vendérselos?”, me dijo un agente de bienes raíces que entrevisté en Tamaulipas en 2011. “Sí están secuestrando a muchos ganaderos y agricultores. Entonces ya no van a sus ranchos, sus ranchos están abandonados...”.

“Me bajaron de mi camioneta cerca de Loma Prieta, un rancho que tengo por Jiménez (ciudad cercana a la capital tamaulipeca)”, declaró un agricultor al periódico *Milenio*.⁵⁶ “Eran varios *huercos* de no más de 20 años, armados con metralletas y acento centroamericano”.⁵⁷ Después de la amenaza, dejó de ir a sus tierras. “No sé si todavía tengo vacas, pero como está el asunto, prefiero perderlas”, señaló. Muchos reportes de prensa afirman que los narcos, especialmente Los Zetas, usan las tierras abandonadas como bases y campos de entrenamiento.

Aguacates y limones a punta de pistola

En 2011, las exportaciones agrícolas de México se valoraron en 22 mil millones de dólares, un poco más de las exportaciones mineras (21.6 mil millones). La presencia de distintos actores armados en algunas de las regiones agrícolas más productivas del país ha tenido severas consecuencias para la vida de los agricultores y ha repercutido en los precios de las frutas y vegetales en México, Estados Unidos y otros países.

55 Castillo García, “Tamaulipas enfrenta diáspora de ganaderos por causa del narco”, *La Jornada*, Noviembre 13, 2010, <http://www.jornada.unam.mx/2010/11/13/index.php?section=politica&article=003n1pol>.

56 Editor, “Otros ganaderos abandonan sus ranchos en Tamaulipas”, *Milenio*, Noviembre 24, 2010, <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d9733f1d182257206a2cdeac-4ff310a5>.

57 Los Zetas have forcibly recruited Central Americans, in addition to Guatemalan special forces who work with the cartels.

Ataques y extorsiones contra pequeños y medianos agricultores están sucediendo en áreas que sufrieron rápidos cambios agrícolas debido a las políticas neoliberales y a las cambiantes estructuras del mercado. Donna Chollett documentó la transformación de la economía local en la zona de Los Reyes, Michoacán, de una donde los trabajadores de la caña de azúcar podían ganar lo suficiente para vivir gracias a los subsidios estatales, a una donde los jornaleros recogían zarzamoras para el mercado de lujo estadounidense. “El retorno de la asistencia del gobierno a los campesinos, eliminación del control de precios y reducción de las tarifas de importación crean mercados en los que los pequeños productores no pueden competir, lo cual abre las puertas a la agroindustria trasnacional... Las agroindustrias trasnacionales de la zarzamora forman una cadena mercantil que establece jerarquías de poder asociadas a iniciativas más amplias de la Organización Mundial de Comercio y el TLCAN. Conforme se desplaza a los hombres de la producción de caña, una fuerza de trabajo segmentada que depende de compensación desigual divide a los trabajadores por géneros y separa a los productores capitalizados de los pequeños campesinos que carecen de los recursos para competir en el nuevo orden trasnacional”.⁵⁸

En la región que Chollett describe, parte de la denominada Tierra Caliente de Michoacán, se cultivan aguacates y limones. El estado es el primer productor de aguacate en México y uno de los más importantes de limón, de hecho, el primer grupo de narcotraficantes de Michoacán, Los Hermanos Valencia, tuvo sus orígenes en el cultivo de aguacate.⁵⁹ Durante la última década, Michoacán ha estado ocupado por diversos grupos armados, desde el Ejército⁶⁰ hasta La Familia Michoacana, que se ha convertido en Los Caballeros Templarios.

Michoacán ha sido un hervidero de actividades políticas que incluyen disputas entre partidos, movimientos indígenas, protestas de estudiantes, entre otras. Así como Tamaulipas y otros estados conflictivos del país, es un lugar donde los profundos vínculos entre el gobierno estatal y el crimen organizado han contribuido a la consolidación y dominio de las economías criminales. Algunos de los más despiadados actos de terror desde 2006 han sucedido en este estado: cinco cabezas humanas fueron lanzadas a una pista de baile en un bar de Uruapan en el otoño de 2006; en Morelia, la capital, varias granadas explotaron en las fiestas del Día de la Independencia en

58 Donna Chollett, “From Sugar to Blackberries: Restructuring Agro-export Production in Michoacán, Mexico”, *Latin American Perspectives* 36, no. 3 (Mayo 2009): 79.

59 Aguilar Valenzuela, Rubén, “Cártel de los Valencia”, *El Economista*, Agosto 30, 2011, <http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2011/08/30/cartel-valencia>.

60 El primer estado al que envió tropas Felipe Calderón fue Michoacán, su tierra natal.

septiembre de 2008, y dejaron ocho muertos. El analista Alejandro Hope afirma que la familia del gobernador Leonel Godoy “tiene vínculos en todos lados con la gente de la Familia que luego se volvieron los Templarios. Del medio hermano hay una llamada grabada con la Tuta, el líder de los Templarios. Hay una llamada donde Julio César Godoy, medio hermano del gobernador, le dice ‘padrino’ y la Tuta le dice ‘usted no se preocupe mi’jo, usted ya ganó, ya hablamos con los muchachos, ya les dijimos’”. El gobierno de Godoy terminó en 2011, y las elecciones llevaron al poder a Fausto Vallejo. “Gana, pero está muy enfermo, entonces deja el cargo temporalmente muy pronto en su mandato. Le deja el cargo a su secretario de gobierno, equivalente al ministro del interior, y este individuo tiene todo género de vínculos con los Templarios”. Hope afirma que, históricamente, “lo que había de delincuencia organizada, lo que había del narcotráfico, estaba muy conectado a la estructura de control priista tradicional”. Como ejemplo tómesese el caso de Tepalcatepec, donde los habitantes acusaron al alcalde Guillermo Valencia de ser el “Gran Templario”. Valencia, que niega las acusaciones, fue electo al congreso por el PRI a la temprana edad de 23 años, luego fue líder de las juventudes del PRI, antes de ser elegido alcalde.⁶¹ Estos vínculos de alto nivel les aseguran impunidad a los grupos criminales, cuyas acciones no amenazan al gobierno estatal, sino que contribuyen al reacomodo económico y de la posesión de la tierra, a un precio muy alto para los pequeños agricultores y la sociedad civil.

Un reporte del sitio independiente de noticias *Sin Embargo* revela que en noviembre de 2013 los Caballeros les cobraban a los pequeños productores de aguacate 3,000 pesos por hectárea si exportaban el producto y 1,500 pesos si se quedaba en el mercado interno. Humberto Padgett y Dalia Martínez, los autores de la nota, le preguntaron a un grupo de agricultores cómo podía saber el grupo criminal cuánto terreno habían plantado cada uno de ellos. La respuesta que los periodistas atribuyeron a todo el grupo fue: “¡Aaah, pues fácil! Saben cuánto tenemos porque tienen acceso directo a las guías [permisos] que otorga la Junta Local de Sanidad Vegetal, que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación [SAGARPA] y los Comités Estatales de Sanidad Vegetal. La Junta lleva el control e inspecciona físicamente cada metro de hectárea, cada mata, cada árbol, y también la calidad de cada fruto”.⁶² Las autoridades agrícolas están

61 Arturo Cano, “‘Me llaman templario mayor por revancha política’, asegura alcalde de Tepalcatepec”, *La Jornada*, Febrero 8, 2014, 9.

62 Humberto Padgett, “Aguacate: el ‘oro verde’ de los Templarios”, *Sin Embargo*, Octubre 11, 2013, <http://www.sinembargo.mx/11-10-2013/780868>.

bajo el control de los criminales que extorsionan a los productores. Según los periodistas, “La incursión de lleno del crimen organizado en la cadena productiva del aguacate ha golpeado especialmente al pequeño productor que posee menos de 10 hectáreas o al que empieza en el negocio pero que, ante los cobros excesivos, ha optado por abandonar las tierras y las ha vendido o rentado”. Las comunidades de indígenas y campesinos en todo Michoacán se enfrentan a grupos del crimen organizado que están tomando cada vez más control sobre la tierra. “Descubrimos, primero, la siembra de marihuana, pero el uso verdadero era el uso del suelo para la siembra de aguacate. Querían apropiarse del territorio. En varios de los pueblos vecinos que tenemos, en Zacapu, ocurrió lo mismo y lo que ahí se cultiva, donde antes hubo bosque, es únicamente aguacate”, dijo Trinidad Ramírez, integrante del Consejo de Cherán.

Cherán, una comunidad purépecha, se hizo famosa en abril de 2011 cuando un grupo de mujeres expulsó a talamontes ilegales asociados a La Familia Michoacana. Margarita Ambrosio Magaña, cuyo marido fue asesinado por taladores ilegales cuando intentó proteger el bosque en 2009, participó en los bloqueos desde un principio. “Antes entraban los talamontes y todos teníamos miedo. Ahora con las barricadas ya no entra gente mala y los niños pueden salir a jugar”, declaró a *Desinformémonos*.⁶³ Cherán fue el primer caso en Michoacán de un grupo de autodefensa formado (en este caso por asamblea) para impedir las operaciones del crimen organizado en el área. Desde el levantamiento, Cherán se ha gobernado de manera autónoma, sin policía estatal ni partidos políticos, y la violencia y la tala ilegal han disminuido considerablemente. Las comunidades rurales han respondido a la presencia de las fuerzas paramilitares y estatales en sus territorios creando sus propios grupos armados, a veces en forma de autodefensas y otras, como policías comunitarias. Los productores de limón en Michoacán han padecido la misma suerte que los de aguacate, obligados a escoger entre conservar sus tierras y fuentes de ingreso y la extorsión bajo amenaza de muerte o secuestro por los Caballeros Templarios. En abril de 2013, ocho productores de limón fueron asesinados y al menos dieciséis salieron heridos al participar en una protesta contra las extorsiones. Tras la masacre, los manifestantes fueron evacuados por el ejército mexicano.⁶⁴ Buenavista Tomatlán, una pequeña comunidad al oeste de Michoacán que

63 Marcela Salas Cassani, “Hablan las mujeres de Cherán, protagonistas de la insurrección”, *Desinformémonos*, Abril, 2012, <http://desinformemonos.org/2012/04/mujeres/>.

64 Administrador, “Fotos limoneros emboscados por los Caballeros Templarios”, Abril 10, 2013, <http://www.historiasdelnarco.com/2013/04/fotos-limoneros-emboscados-por-los.html>.

depende del cultivo de limón, llegó a las noticias internacionales cuando el procurador federal declaró que su grupo de autodefensas estaba cooperando con un cártel del narco en contra de otro. Los productores de la ciudad de Apatzingán afirman que han recibido amenazas para que no reciban limones de las granjas de Buenavista con el fin de empacarlos en la planta local.⁶⁵ En un caso que confirma que no se debe confiar en los letreros atribuidos a los narcos, los productores de limón de Apatzingán supuestamente después colgaron una manta con las mismas acusaciones contra sus vecinos.⁶⁶ En vez de defender a los productores de limón de los Caballeros Templarios, el Estado los acusó de ser cómplices de otro cártel. La violencia continuó después de que el ejército allanara la población y la policía y los soldados tomaran control de las patrullas de autodefensa de la comunidad de 42,000 habitantes. Seis personas fueron asesinadas ahí en julio de 2013, y el mismo mes otros cuatro cuerpos fueron colgados de un letrero de bienvenida en un camino rural, y nueve personas más fueron asesinadas en agosto de 2013.

Los grupos de autodefensa que operan sin un claro control de sus comunidades deben ser juzgados caso por caso. Aunque su nombre evoca el de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar de derecha aliado con el Estado colombiano, y aunque sus playeras blancas pueden parecerse a las usadas por las Damas de Blanco (cubanos reaccionarios de Miami), muchos de los grupos de autodefensa que se han formado en México parecen estar protegiendo la voluntad de las comunidades en contra de la colusión entre el Estado y los cárteles o grupos paramilitares. A menudo provocadas por los secuestros, asesinatos y extorsiones a miembros de la comunidad, estos grupos de autodefensa se organizan para vigilar los caminos de entrada y salida de las comunidades, revisando cada vehículo portando armas rudimentarias y machetes. Por otro lado, la formación de estos grupos armados también puede entenderse como una estrategia para defender a las comunidades y los territorios de pequeños propietarios del robo y pillaje en curso.

“En realidad estamos presos en nuestros propios pueblos, pero en ellos estamos seguros”, dijo un habitante de una comunidad de Michoacán que llevaba ocho meses protegida por un grupo de autodefensa.⁶⁷ Dentro de los límites de cada comunidad, estos grupos pueden asegurarse de que

65 La Policiaca, “Veta crimen a limoneros”, Abril 14, 2013, <http://www.lapolicia.com/nota-roja/veta-crimen-a-limoneros/>.

66 Redacción, “Acusan a guardias comunitarias de Michoacán de obedecer al Cártel de Jalisco”, Proceso, Mayo 2, 2013, <http://www.proceso.com.mx/?p=340789>.

67 Paula Chouza, “El infierno también está en Michoacán”, *El País*, Octubre 28, 2013, http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/28/actualidad/1382921848_799992.html.

sus vecinos no están siendo secuestrados o dominados por los grupos criminales/paramilitares, pero una vez que salen a recorrer los caminos que conectan sus localidades, la población arriesga su vida. Después de que una marcha de las autodefensas desde sus comunidades rumbo a Apatzingán fuera atacada con granadas y disparos, ciertos soldados dijeron a un reportero de *El País* que el ejército no es más que un mero árbitro en el conflicto, y que la situación empeoraría al caer la noche.⁶⁸ Como solución, se acordó que miembros de las autodefensas patrullarían con el ejército para asegurarse de que no dejarían que los criminales llegaran a sus comunidades por las carreteras principales.

Al leer los reportes del gobierno de EUA y los medios de comunicación dominantes, uno se encuentra con que cuidadosamente se repite que la guerra en México no es política. “Las bandas mexicanas están motivadas por las ganancias, y no tienen ninguna agenda ideológica visible. Su único objetivo político es un Estado de Derecho más débil”, afirma un informe del grupo de investigación InSight Crime, financiado por el magnate George Soros.⁶⁹ El esfuerzo por caracterizar a los grupos criminales en México como apolíticos recuerda al proyecto de presentar a los paramilitares colombianos como bandas criminales (Bacrim). Pero es incorrecto atribuir un carácter “político” a una guerra solamente cuando hay un movimiento de liberación nacional o una lucha guerrillera. La guerra en México *sí* es política: es una contrarrevolución con cien años de retraso. Está deteriorando a las comunidades y destruyendo algunos de los pocos logros consolidados de la Revolución Mexicana que quedaban tras la firma del TLCAN en 1994. Concebir a los cárteles de la droga como paramilitares politiza sus acciones y crea un espacio que permite sostener una discusión más adecuada de las ramificaciones de la violencia de la guerra antidrogas en México y otros países.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Patrick Corcoran, “Counterinsurgency is not the Answer for Mexico”, InSight Crime, Septiembre 26, 2011, <http://www.insightcrime.org/news-analysis/counterinsurgency-is-not->

Capítulo VII

El capitalismo de la guerra antidrogas en Guatemala

Tanto México como Guatemala fueron colonizados por el imperio español (y sufrieron así su primer genocidio), pero su historia ha sido muy diferente desde entonces. El acceso a la tierra y la reforma agraria (o la falta de ella), pusieron a ambos países en caminos marcadamente distintos durante el siglo XX. A diferencia de México, Guatemala no tuvo una revolución o un periodo de nacionalizaciones en la primera mitad del siglo, y no fue sino hasta finales de los años 40 y principios de los 50 que el país experimentó lo que algunos llaman “la primavera guatemalteca”. Los presidentes democráticamente electos Juan José Arévalo y el coronel Jacobo Árbenz Guzmán comenzaron a hacer reformas, pero mantuvieron su compromiso con el modelo económico capitalista y con la concepción liberal y occidental de la democracia.

La cúpula de poder en EUA consideró que el principal error de Árbenz fue atreverse a expropiar tierras que pertenecían a compañías bananeras estadounidenses. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “La elección de Árbenz en 1951 conllevó un intenso, aunque breve, periodo de reformas que comenzó con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria (Decreto 900) el 17 de junio de 1952. Los objetivos declarados del Decreto 900 eran 1) eliminar los latifundios; 2) obliterar todas las formas de trabajo acasillado; 3) proveer tierras a los desposeídos; 4) distribuir créditos y asistencia técnica a los pequeños propietarios. Los objetivos de las reformas eran desarrollar una economía capitalista entre los campesinos y en la agricultura en general, y facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura por medio de la renta capitalista de las tierras nacionalizadas. La reforma involucraba la expropiación de tierras *ociosas* y su redistribución entre los desposeídos y propietarios pobres”.¹

Sin importar la naturaleza capitalista de su programa de reforma agraria, Árbenz fue acusado de comunista, y poco tiempo después su gobierno fue

¹ FAO, “The Continuing Need for Land Reform: Making the Case for Civil Society”, FAO Land Tenure Series: Concept Paper, volume 1, <http://www.landcoalition.org/sites/default/files/legacy/legacydocs/odfaomon2guate.htm>.

derrocado por un golpe de Estado planeado en Washington y apoyado por la CIA en una misión denominada PBSuccess.² El golpe guatemalteco que apoyó la CIA en 1954 y la negativa del gobierno de EUA a permitir que hubiera elecciones en 1963 para evitar la participación de Arévalo marcó el comienzo de una serie de hechos que condujeron al país a una guerra civil de 36 años que culminó en genocidio. Más de 200,000 personas fueron asesinadas en ese periodo en Guatemala, principalmente indígenas mayas, así como activistas de izquierda, líderes sindicales y otros. Más de 50,000 personas siguen considerándose como desaparecidas.

Aunque el conflicto en Guatemala con frecuencia se planteaba como una guerra contra los comunistas o insurgentes, en muchas regiones era claro que la motivación del exterminio de los pobladores indígenas era para hacerse de sus tierras. Un ejemplo de esto se dio en el municipio de Rabinal, donde aproximadamente una quinta parte de la población fue asesinada entre 1981 y 1983.

Efraín Osorio Chen es de Río Negro, una comunidad en Rabinal, donde la mayor parte de la población se identifica como maya achi. Osorio tenía diez años cuando sobrevivió a las masacres que acabaron con su familia. Lo conocí mientras viajaba con Jesús Tecú Osorio por el pueblo de Pacux, a donde se restablecieron en los años 80 muchos de los sobrevivientes desplazados de Río Negro. Le mencioné a Tecú Osorio que tenía interés en platicar con algún sobreviviente directo de la violencia, y la primera persona con la que nos topamos fue con Osorio Chen, que venía en bicicleta por el camino. Tecú Osorio lo llamó con un grito y él pedaleó hasta encontrarse con nosotros frente a un monumento dedicado a los muertos —una simple piedra conmemorativa que apuntaba hacia el cielo.

“Yo soy uno también de los sobrevivientes, que perdí toda mi familia. Me mataron mi papá, mi mamá, un hermano mayor, dos hermanas y un mi hermano pequeño. Incluso cuando mataron mi mamá, estaba embarazada”, nos dijo Osorio Chen. “El ejército arrasó con nuestra comunidad. Ellos quisieron eliminar toda la comunidad, pero aun así, pues, gracias a Dios,

2 El pintor mexicano Diego Rivera retrata la escena en una obra titulada “Gloriosa Victoria”: Allen Dulles, que estaba en el consejo de United Fruit Company, está de pie junto a su hermano John Foster, el Secretario de Estado de EUA, que está dándole la mano a Castillo Armas, el presidente elegido por Washington. Frente a los hombres está una bomba pintada con el rostro de Dwight Eisenhower, entonces presidente de Estados Unidos. El embajador estadounidense y el arzobispo de Guatemala contemplan la escena, dándole su bendición al golpe de Estado. En el fondo, jornaleros guatemaltecos cargan pencas de plátano hacia un barco de carga; el primer plano está cubierto de cadáveres. Ernesto “Ché” Guevara, que estaba en Guatemala cuando se dio el golpe, escapó a la relativa seguridad de México con otros progresistas, y fue ahí donde conoció a Fidel Castro.

todavía sobrevivimos, no sé cómo, cómo pudimos sobrevivir, pero gracias a Dios aquí estamos vivos”. Posteriormente se requirió que los sobrevivientes como Osorio se establecieran en la población modelo de Pacux, que él compara con una jaula, un lugar donde los miembros de la comunidad ya no tienen acceso a leña o tierra para cultivar sus cosechas. Comunidades enteras fueron diezmadas y fragmentadas por medio del asesinato en masa, y los sobrevivientes fueron llevados por la fuerza a poblaciones controladas por los militares, como ésta. Después de la masacre, Osorio Chen pasó dos años escondido en las montañas, durmiendo bajo los árboles y comiendo plantas para mantenerse con vida.

Un patrón que se repitió por todo el país fue que los miembros de la comunidad fueron etiquetados como partidarios de la guerrilla y comunistas para justificar las masacres (hubo cinco) en el área de Río Negro. Junto al memorial donde conocí a Osorio Chen se encuentra la sala comunitaria de Pacux, un edificio de una habitación cuyas paredes están inscritas con los nombres de más personas fallecidas. “Aproximadamente estamos hablando de unas setecientas personas. Lo que aparece en la lista son como cuatrocientas cincuenta, pero hay gente que fueron desaparecidos, niños incluso, hasta ahora no sabemos si hay personas que tal vez viven por ahí pero por temor no quieren regresar a Rabinal”, dijo Tecú Osorio, que era un niño cuando atestiguó el asesinato de sus familiares por parte del ejército y la Patrulla de Autodefensa Civil en 1982. Él afirma que el genocidio cometido contra su pueblo, los mayas achi, se realizó para despejar el camino para la construcción de la presa Chixoy, un proyecto financiado por el Banco Mundial. “El comunismo en Río Negro fue la oposición de la comunidad, defender sus territorios. La lucha de los campesinos se dio para defender sus territorios, y mientras el gobierno, con el interés de construir las presas para responder las demandas de las compañías trasnacionales”. Las palabras de Tecú Osorio se quedaron conmigo, resonando mientras navegaba un presente profundamente marcado por las heridas pasadas.

Las masacres no fueron la única estrategia de terror desplegada en Guatemala. En 2012 conversé con José Samuel Suasnávar, subdirector ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Cuando nos conocimos, los antropólogos forenses acababan de exhumar más de 400 osamentas en una base militar conocida desde 2006 como Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ), en Cobán. Esto no tardó en convertirse en uno de los mayores descubrimientos de fosas comunes clandestinas en Guatemala. Durante los 36 años de conflicto armado interno en el país, que condujeron a

muchos actos de genocidio, la base de Cobán fue un centro de coordinación militar e inteligencia. “Nosotros llevamos un poco más de 400 zanjas en las cuales hemos encontrado creo yo ahorita 60 fosas, y hemos encontrado 426 osamentas, en su mayoría como en todos los lugares son hombres, pero también hay mujeres, pero en este lugar en específico, en CREOMPAZ, también hay muchos niños” me dijo Suasnávar. “La diferencia muy radical que tenemos en esta base militar... [es que] aquí hay hasta 62 personas inhumadas en una sola fosa, lo que representa un solo evento”.

Suasnávar me explicó cómo las masacres y las desapariciones forzadas durante el conflicto interno respondían a una lógica económica. La mayoría de las masacres durante la guerra civil sucedieron en las montañas habitadas por comunidades mayas, mientras que muchas de las desapariciones ocurrieron en las fértiles llanuras, en las tierras bajas, donde la élite terrateniente de Guatemala tenía plantaciones de algodón, café y azúcar. Los jornaleros llegaban de todo el país a trabajar durante la temporada de cosecha. Suasnávar afirmó que los costos económicos de desplegar una contrainsurgencia abierta y masiva en las llanuras de la costa del Pacífico fueron mucho más altos que los costos políticos. “Si hacían ahí unas masacres igual que con los otros, ¿quién iba a trabajar entonces en la agro-exportación?”, me dijo. “Pero la desaparición de personas, la desaparición de los líderes, eso sí se iba a estar dando de una manera más selectiva que en los otros lugares”.

Muchos de los desaparecidos pudieron haber sido llevados a lugares como el CREOMPAZ al interior del país, para ser asesinados ahí. Hay pocos orificios de bala entre los muertos; la mayoría de los esqueletos muestran evidencias de haber sido atados, con huesos fracturados que, después de sanar, se habían vuelto a fracturar, un indicador de que las víctimas fueron torturadas (e interrogadas) durante periodos prolongados, antes de ser asesinadas y echadas a las fosas. La excavación en Cobán ha revelado la dolorosa realidad del conflicto armado, donde personas clasificadas como subversivos –activistas políticos y estudiantiles, líderes indígenas y miembros de las comunidades– fueron secuestrados y torturados en masa. También hubo menores de edad torturados y enterrados en las fosas de la base militar.

La tarea de identificar a los desaparecidos es monumental. De los 50,000 desaparecidos, se conoce el nombre de 42,000. 18,000 cuerpos han sido hallados en fosas clandestinas, pero hasta ahora sólo 500 han sido identificados.

Lo que distingue a la excavación de CREOMPAZ es que se trata de una base militar activa: militares y policías extranjeros llegan regularmente a la base para entrenar a tropas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua,

Honduras y la República Dominicana. Todas esas ejecuciones sucedieron dentro de los confines protectores de un área controlada por los militares donde actualmente las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas (conocidas como cascos azules) son entrenadas.

En 2013, el general Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia en la dictadura del primero, fueron enjuiciados por el genocidio del pueblo maya ixil entre 1982 y 1983. La excavación en el CREOMPAZ y el juicio por genocidio son el resultado de los esfuerzos de los activistas y organizaciones no gubernamentales en Guatemala para obligar a que haya reconocimiento oficial, compensaciones, justicia y cierre de un ciclo atroz para los millones de sobrevivientes de la guerra civil. Mientras que algunas autoridades como la procuradora general Claudia Paz y Paz han luchado mucho por hacer justicia, otros en el Congreso y la presidencia de Guatemala niegan activamente el genocidio. Esto se demostró descaradamente cuando la Corte Constitucional anuló la sentencia de la corte de la ciudad de Guatemala contra Ríos Montt con base en un error de procedimiento.

El terror en Guatemala está lejos de ser una cosa del pasado, pues aún existe en la memoria y la vida cotidiana de muchísimos sobrevivientes, y se sigue manifestando en el racismo sistemático, la discriminación y la violencia contra las mayorías indígenas del país.

El presidente Otto Pérez Molina es un ejemplo perfecto de cómo el poder y la impunidad van de la mano en Guatemala. Pérez Molina era mayor y jefe de inteligencia en el ejército guatemalteco y sirvió dentro del territorio conocido como el Triángulo Ixil durante el genocidio por el que Ríos Montt fue procesado. Pérez Molina terminó por ascender a general y fue entrenado en la Escuela de las Américas. Casi treinta años después, en septiembre de 2011, fue electo presidente. “Él tenía cargos importantes dentro del alto mando militar en esos escenarios, por lo tanto, si no participó directamente en una masacre, obviamente tomó decisiones y dirigió y coordinó acciones militares y operativos que condujeron a las masacres”, apunta Luis Solano, periodista e investigador guatemalteco. “Otto Pérez Molina llega a la Presidencia de la República, con un curriculum manchado por su pasado contrainsurgente, su paso oscuro por la inteligencia militar y sus estrechos nexos con una élite empresarial conservadora”.³ Pérez Molina hizo una campaña de manos,

³ Luis Solano, “En manos de quién estará la seguridad en el futuro gobierno PP?”, *Enfoque*, Noviembre 28, 2011, <http://www.albedrio.org/htm/documentos/EnfoqueAnalisisSituacion182011.pdf>, 5.

mente y corazón: un puño de hierro contra el crimen, un plan para el desarrollo y el corazón para apoyar a los más pobres de Guatemala. Pérez Molina describió su propio estilo de gobierno como uno inspirado por el controversial expresidente colombiano Álvaro Uribe. También prometió asignar a los Kaibiles, las fuerzas especiales de élite de Guatemala (cuyos miembros han sido vinculados con Los Zetas) para que participen en la guerra antidrogas. Después de ser electo, Pérez Molina llamó a numerosos militares retirados de su partido, llamado el Partido Patriota (PP), a ser ministros de su gobierno. Uno de ellos, el general Ulises Noé Anzueto Girón, ministro de defensa, fue acusado de participar con otros ocho en la tortura y ejecución de Efraín Bámaca, miembro del desaparecido grupo guerrillero, Organización del Pueblo en Armas (ORPA).

Pérez Molina ha hecho declaraciones públicas a favor de la legalización de las drogas. Algunos analistas consideran que él y su Partido Patriota, que tiene una base de apoyo importante entre los soldados y veteranos, se encuentra entre la espada y la pared: para detener con efectividad el narcotráfico, tendría que ponerse en contra de los suyos, pues se sabe desde hace mucho que el ejército guatemalteco está inmerso en el tráfico de drogas. “Desde mi perspectiva, la propuesta [de Pérez Molina] es una pantalla de humo, diseñada para distraer la atención del conjunto de problemas de la sociedad guatemalteca, y en particular de los que tienen los campesinos”, afirmó Kajkok Máximo Ba Tiul, un profesor universitario y analista del grupo maya poqomchi’, quien vive en Cobán, Alta Verapaz. “Lo que está en disputa es el territorio, y en especial el territorio de los pueblos indígenas, y de esa forma, mientras está consolidando su proceso de control, sale con esta ocurrencia [de legalizar las drogas], sabiendo perfectamente que no puede pelear contra sus amigos y colegas, y que no tiene la capacidad para presionar a los Estados Unidos”. Independientemente de la retórica de Pérez Molina, Guatemala continúa armando a más y más soldados y policías, supuestamente para combatir el narcotráfico, en concordancia con la estrategia del Departamento de Estado de EUA en la región. En vez de combatir al comunismo, la militarización actual se justifica con la guerra antidrogas. Este es un antecedente crucial para comprender la introducción de la guerra antidrogas en Guatemala, la imposición de una nueva guerra en una sociedad todavía herida por el genocidio, donde los perpetradores y cómplices del terror siguen viviendo con impunidad, mientras que sus víctimas enfrentan una nueva oleada de militarización.

Empieza la guerra antidrogas

Los acuerdos de paz, firmados en 1996, contemplaban el recorte del presupuesto militar y la reducción del poder y control del ejército, pero la desmilitarización sigue siendo una promesa incumplida. Desde 2000, el ejército ha vuelto a patrullar las calles con la justificación de la lucha contra el crimen organizado. “El Estado necesita de algo para hacerle creer a los demás que necesita una militarización, sí, para poder controlar todo, para poder controlar. Y ese algo tuvieron que inventárselo, y se llama narcotráfico”, me dijo Ba Tiul cuando lo entrevisté en su casa en 2012. Nos sentamos frente a la mesa de la cocina mientras su compañera preparaba tamales para la comida, y su conversación pasó de las amenazas contra los miembros de la comunidad que se resistían a los grupos de poder, a un camarada que había sido apuñalado por tratar de organizar a su comunidad. Al igual que, en muchos casos, el conflicto interno en Guatemala se desarrolló en áreas consideradas prioritarias para los proyectos energéticos o de extracción de recursos, la militarización actual se está dando en zonas donde hay feroces conflictos sociales y territoriales relacionados con la imposición de megaproyectos.

“Con este gobierno en menos de diez meses se han inaugurado tres nuevas brigadas militares, se habla de una cuarta que estaría poniéndose en funcionamiento a finales de este año, a principios del año entrante, bajo el argumento, y aquí es lo que nos preocupa a nosotros, de la supuesta lucha contra el narcotráfico, que ha sido el pretexto para la integración del ejército a actividades de seguridad ciudadana” dijo en una entrevista a finales de 2012 Iduvina Hernández Batres, de la ONG Seguridad y Democracia (SEDEM), con sede en la ciudad de Guatemala. Hernández subraya que la construcción de nuevas bases militares se está llevando a cabo en áreas inmersas en conflictos sociales. Esta localización estratégica ha disparado la señal de alarma de los activistas locales. Una de estas nuevas bases militares está en San Juan Sacatepequez, centro de una lucha mayúscula contra un proyecto carretero y una compañía cementera; otra está en Panzós, cerca de una potencial mina de níquel en El Estor, y en cuyas áreas circundantes están sumergidas en intensos conflictos relacionados con la producción de palma africana; la tercera se encuentra en Petén, la vasta región norteña del país que está experimentando un boom de inversiones petroleras y de desarrollo.⁴

⁴ Dawn Paley, “Conflict, Repression, and Canadian Mining & Oil Companies in Guatemala”, Mayo 14, 2012, <http://dawnpaley.tumblr.com/post/23043137951/conflict-repression-and-canadian-mining-oil>.

“Si bien es cierto que en la costa atlántica hay narcoactividad, esta zona militar no se ubica en esa zona del territorio, sino más abajo, colindante con una comunidad en la zona de Panzós, que es la Alta Verapaz, y donde hay fuertes conflictos por la presencia de una compañía explotadora de níquel en la comunidad, una compañía que ya ha tenido graves antecedentes de violaciones a derechos humanos, sospechosa incluso de que ha cometido ejecuciones extrajudiciales, y es en esta zona donde se instala la brigada. Sentimos que es un pretexto para volver al despliegue militar que se mantuvo durante la etapa más fuerte del conflicto armado y que derivó en actos de genocidio”, me comentó Hernández en su oficina de la ciudad de Guatemala en 2012.

María Magdalena Cuc Choc vive en una choza de techo de palma cerca del lago Izabal en El Estor, cerca de Panzós. Para ella, esta nueva ola de militarización irrumpe muy cerca de su casa. Su cuñado fue asesinado por agentes de seguridad privada debido a su activismo contra la mina de níquel mencionada por Hernández Batres. Su hermano está en la cárcel por la misma razón. El proyecto minero fue propuesto por primera vez por la canadiense Inco, y luego fue retomado por Skye Resource, con sede en Vancouver, que lo vendió a una tercera minera canadiense llamada HudBay Minerals (ahora en manos de la rusa Solway Investment Group). “Aquí, la verdad, en Guatemala el gran error o la gran pelea que nosotros tenemos, los pueblos indígenas, hacia el Estado de Guatemala, hacia el gobierno y los grandes empresarios, es la tierra. Acá hay muchas empresas multinacionales, transnacionales, empresas extranjeras que están comprando terrenos que pertenecen a nuestros abuelos”, afirmó Cuc Choc. “Acá existen empresas mineras, petroleras, existen empresas de monocultivos como es la palma africana, empresas de monocultivos como es el hule... Entonces entramos en un choque porque nosotros queremos rescatar la tierra... Nos desalojan de nuestras propias tierras”.

Ella me habló de cómo la policía y el ejército defienden los intereses corporativos contra la resistencia indígena, y cómo los grupos paramilitares son formados por las élites que buscan proteger sus intereses. “Cuando sufrimos los desalojos, o cuando desalojan a comunidades, lo primero que hacen es traer fuerzas armadas, ¿verdad?, del Estado, miembros del ejército, kaibiles, como se los llama, la Policía Nacional Civil, pero además de eso, las empresas, o los mismos patrones, o los mismos terratenientes contratan a nuestros hermanos queqchis que han prestado servicio militar, contratan como paraguardias, ¿verdad?, y luego de esto contratan otras personas, ¿cómo les podemos decir?, cuadrilleros, les dan armas, les dan machetes,

les dan pasamontañas, para ir a desalojar, para ir a matar, para ir a abusar, y todo este material que usan es como para decirles ‘Vayan a hacer lo que se les antoje, nadie los va a reconocer’. Las estrategias identificadas por Cuc Choc generalmente son ignoradas por los medios de comunicación y por los análisis de la violencia en Guatemala, los cuales más bien se concentran en los cárteles de la droga y otros grupos armados.

Amilcar de Jesús Pop Ac es un legislador y preside la comisión de transparencia del Congreso. Cuando Pérez Molina llegó al poder, Amilcar fue elegido como el único representante de Winaq, un partido indígena de izquierda. Pop piensa que la política de seguridad nacional en Guatemala está motivada por las industrias extractivas, y no la oposición al narcotráfico. “Este gobierno especialmente, de corte militar, basa la política de seguridad nacional guatemalteca en función y en respuesta a las necesidades de control social dictadas por la industria extractiva, ¿eh?, toda la industria vinculada a la extractiva: hidroeléctricas, minería, petróleo, son hoy en general las directrices de la política de seguridad nacional”. Había acordado una reunión con él después de conocerlo en un bar en el centro histórico de la ciudad, donde se encontraba bebiendo whisky con un grupo de abogados progresistas. “Estamos viendo que el ejército mismo tiene destacamentos en todos los espacios físicos en donde se están asentando estas industrias y estas empresas”, dijo.

Las poblaciones que se resisten al desplazamiento y las industrias extractivas han sido difamadas con acusaciones de estar involucradas con el crimen organizado, y en ciertos casos comunidades enteras de campesinos han sido llamadas ‘narco-comunidades’. “En donde más duro ha tocado en materia de derechos humanos, lo cual ocurría también durante la doctrina de seguridad nacional que aquí ha generado genocidio, es esta idea de que una comunidad completa puede ser la delincuente”, dijo Claudia Samayoa. Ella es la coordinadora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEHUGUA), un grupo dedicado a monitorear las amenazas y ataques contra activistas. “No puedes culpar de narco-comunidad desde al bebé que acaba de nacer hasta el anciano que está muriendo”, me dijo en su bulliciosa oficina de la capital. En los casos investigados por UDEFEGUA, Samayoa dice que podría haber uno o dos miembros de cierta comunidad involucrados en el narcotráfico, y el resto de la comunidad se mantiene en silencio por el miedo y la intimidación. “A la par que ha crecido la oposición comunitaria a los proyectos de extracción de recursos naturales y a la construcción de presas hidroeléctricas, los sectores gubernamentales y privados han venido emitiendo declaraciones públicas

a la prensa para sugerir que el activismo de arraigo local actualmente es de naturaleza inherentemente ‘terrorista’, y alternativamente sugieren que la influencia del narcotráfico está involucrada o que los sentimientos están manipulados y/o financiados por forasteros y específicamente por organizaciones internacionales”, se lee en un informe de 2013 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.⁵ Este patrón se hizo evidente durante los disturbios en Santa Cruz Barrillas en 2012. Cuando los habitantes locales comenzaron a organizar bloqueos para impedir la instalación de una nueva compañía hidroeléctrica en sus tierras, Pérez Molina declaró que los manifestantes estaban apoyados por los narcos y financiados por intereses internacionales.

A principios de 2012 visité Nueva Esperanza, en Petén, que fue denominada ‘narco-comunidad’ por el gobierno del expresidente Álvaro Colom (quien precedió a Pérez Molina). Para llegar a Nueva Esperanza abordé un viejo autobús escolar en un concurrido callejón de Tenosique, en el estado fronterizo de Tabasco, México. El autobús hace dos corridas diarias a través de media docena de pequeñas comunidades agrícolas hasta llegar a la frontera con Guatemala. La temperatura rebasaba los 40 grados Celsius, y el autobús iba tan lleno al salir de Tenosique, que dos muchachos iban afuera, agarrados a la puerta. Dos horas después sólo quedábamos tres en el vehículo. Nos bajamos sobre un camino polvoriento rodeado de casas pequeñas, frente a un campo de fútbol. La diminuta ranchería de Nuevo Progreso acababa a doscientos metros, donde un conjunto de refugios construidos con maderos reciclados, techos de lámina vieja y lonas de USAID marcaban la frontera con Guatemala.

En 2000, cuarenta campesinos sin tierra formaron la comunidad agroecológica de Nueva Esperanza. “Necesitábamos más pobladores, y cuando encontrábamos una persona necesitada pues le decíamos que lo queríamos apoyar para hacer la comunidad, de esa manera pues se llegó a un total de ciento cincuenta familias”, declaró Marcelo Martínez Morales, que se mudó a Nueva Esperanza tras verse desplazado por el huracán Mitch. “Empezamos ya a trabajar la tierra, sembrando maíz, frijoles, chíwa, camote, yuca, macal, maní, ajonjolí; es lo que nosotros sembramos”. Desde sus comienzos, la comunidad intentó dar validez jurídica a las tierras. “Nosotros luchamos por un largo tiempo, y en lugar de darnos asentamiento a la comunidad, en el 2007 nos mandaron a desalojar por primera vez”, me dijo

5 Paula Worby, “America’s Country of Origin Series: Guatemala Background Paper”, Naciones Unidas High Commissioner for Refugees, Octubre 2013, <http://www.refworld.org/pdfid/53832fe84.pdf>, 14.

Martínez. En 2008 se produjo un segundo desalojo. En ambas ocasiones la policía y el ejército los echaron de sus casas, alegando que tenían órdenes de proteger la selva. Algunas familias huyeron presas del pánico, pero sin tener a dónde ir y sin opción alguna, la mayoría regresó.

El último desalojo, que se produjo el 23 de agosto de 2011, fue distinto. En esa ocasión las familias escaparon al son de los disparos. Observaron cómo destrozaban sus hogares con sierras mecánicas, los rociaban con gasolina y les prendían fuego. Muchas familias huyeron hacia las montañas, ocultándose en el bosque durante días, asustados y hambrientos, alimentándose de lo que podían recoger. Una pareja se escondió con su bebé de cuatro meses de edad. La mayoría de las familias de la comunidad tienen hijos pequeños.

Los soldados no abandonaron la remota localidad tras el desalojo, ni lo hicieron los policías ni los guardabosques armados. En lugar de eso, ocuparon los pocos inmuebles que no habían reducido a cenizas. Durante mi visita a la comunidad, atestigüé la presencia constante de hombres armados en las áreas selváticas en los márgenes de la comunidad, con lo que impedían el libre movimiento de los pobladores.

Tras el desalojo de agosto, la comunidad decidió que sólo había un lugar seguro en el que el ejército y la policía guatemaltecos no podría perseguirlos: México. Instalaron tiendas y cobertizos al lado de una franja de cinco metros de anchura que señala la frontera entre ambos países, una zona a menudo definida como tierra de nadie. Este hecho supuso uno de los primeros casos en los que un pueblo completo cruzó la frontera mexicana en busca de una situación más segura desde que el conflicto interno guatemalteco terminó de forma oficial en 1996. En enero, tras ser expulsados forzosamente por las autoridades mexicanas, la comunidad regresó e instaló sus improvisadas chozas a unos cuantos metros de la frontera. Para bañarse y beber extraen agua de pozos poco profundos excavados a lo largo de un riachuelo que atraviesa la frontera desde México. El 10 de abril, apenas una semana después de que me fuera de la comunidad, una niña de un año llamada Yorleni Yolet Zacarías Escobar murió de fiebre, deshidratación y diarrea. Su muerte era totalmente prevenible.

“La gente está cansada. Hay una depresión colectiva. Llevan ya siete, ocho meses en el campamento de desplazados, viviendo bajo lonas, comiendo lo que pueden, sin agua potable”, dijo fray Tomás González Castillo, el franciscano establecido en Tenosique, la población urbana más cercana a de Nueva Esperanza. “Es trágico”. Castillo y otros han organizado apoyo eclesiástico para los miembros de la comunidad a los que se prohibió trabajar la tierra hasta que su situación se resuelva. Algunos hombres trabajan para

los mexicanos como jornaleros cuando es posible, y llegan a ganar hasta cien pesos en un buen día.

Un corto recorrido por un sendero estrecho conduce del atestado y lodoso campo en el que vive la comunidad hasta el antiguo pueblo de Nueva Esperanza. Bajo la maleza todavía se podían ver los restos de los hogares destruidos, como nos indica Mynor Morales, que nos acompañó junto con su hijo y otro muchacho al pueblo. Con los alaridos de los monos aulladores que habitan en el frondoso bosque de fondo, Mynor nos explicó cómo la comunidad intentaba vivir en armonía con la naturaleza y muestra una señal que indica dónde podían pastar los animales. “Lo que estamos viendo ahorita casi solo se ven montes”, cuenta Morales, indicando que la Policía y el Ejército también talaron los árboles frutales de la comunidad. Al acercarnos a un espacio despejados vimos una de las pocas estructuras que se mantiene de pie —el antiguo centro comunitario. La música retumbaba dentro del edificio y podíamos escuchar voces de hombres que parecían estar en plena fiesta cuando llegamos, alrededor de las once de la mañana. Al notar nuestra presencia, un grupo de oficiales acalló el relajo y se acercó a nosotros, nos tomó una foto con una cámara digital y registró nuestros nombres. Quedó claro que la fiesta de hecho era una reunión de las fuerzas de seguridad asignadas a proteger el área.

Le dijimos a la policía que éramos misioneros ayudando a la comunidad, y continuamos nuestro camino hacia un arroyo de agua pura que se ensancha cubierto bajo una densa capa de bosque. Mientras el hijo de Mynor se metió a nadar, se acercaron agentes portando armas semiautomáticas, y nos dejaron saber que no éramos bienvenidos en el Parque Nacional Sierra del Lacandón.

Otros miembros de la comunidad nos contaron que el Ejército aún los molesta, a veces con patrullas nocturnas, y que los soldados han amenazado con violar a aquellas mujeres que intenten acceder al arroyo para lavar, bañarse o beber. A pesar de no tener otra fuente segura de agua y haber niños pequeños, gente como los padres de Yorleni se mantienen lejos del arroyo. “Nos duele mucho en el alma ver dónde estábamos viviendo anteriormente. Aquí nacieron nuestros hijos, aquí hemos vivido por tantos años, aquí se formaron nuestros sueños de que íbamos a superarnos”, relata Mynor Morales.

El motivo oficial del desalojo fue que los habitantes de Nueva Esperanza estaban ocupando ilegalmente propiedad privada. Otros decían que fue una estrategia del gobierno de Colom para despejar la zona en favor de Cuatro Balam, un megaproyecto en el departamento del Petén que incluye el

fomento del turismo en la zona. Tras el desalojo de agosto, Carlos Menocal, exministro del interior, declaró que las familias de Nueva Esperanza estaban implicadas en el narcotráfico. Por su parte, los residentes afirman que han oído que los traficantes de cocaína usan un corredor que atraviesa la reserva, pero apuntan que su comunidad jamás se ha visto implicada en el negocio de la droga. “Un narcotraficante no vive bajo una lona ocho meses, no duerme en el puro suelo ahí”, me dijo Morales señalando la pieza de cartón que servía como cama para toda su familia.

Si actualmente se trafican drogas a través de la reserva, lo cual es un escenario muy plausible, el trasiego se realiza bajo la supervisión directa del ejército, en un territorio bajo el cuidado de Defensores de la Naturaleza, una ONG privada, y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. “Nosotros no somos delincuentes, y nuestro gobierno nos corre de nuestro país como si fuéramos delincuentes, y no lo somos”, me dijo Mynor Morales. “El gobierno nos desalojó... Quería más los animales y no a la gente humana, quiso volver a la guerra interna que tenía por ahí en los ochentas, porque hizo muchos desalojos en todo el país”.

La comunidad aceptó restablecerse en otra zona del Petén en 2012. Quien sea que esté transportando drogas a través del parque en la actualidad lo hace con muy pocas probabilidades de ser visto por un civil.

El factor petrolero

En mayo de 2011, la localidad de La Libertad fue escenario de la masacre más sanguinaria de la historia de Guatemala desde el final de la guerra civil. 27 jornaleros fueron asesinados en un rancho llamado Los Cocos. Cuando las autoridades acudieron al lugar de los hechos un día más tarde, encontraron 26 cadáveres y 23 cabezas decapitadas. En una pared cerca de los cuerpos, estaba un mensaje escrito con sangre: “Q onda Otto Salguero bastardo, te voy a encontrar y te voy a dejar igual, Z 200”, presuntamente firmado por un líder local de Los Zetas. En internet se publicaron imágenes de la masacre. Mostraban cabezas esparcidas sobre el pasto y soldados custodiando cadáveres decapitados con las manos amarradas. Las imágenes estremecieron a la comunidad internacional y evocaron recuerdos de los años más oscuros de la historia guatemalteca, cuando hechos como ese eran cotidianos en algunas zonas rurales. Pero a diferencia de lo sucedido en el pasado, los perpetradores no fueron soldados con uniformes oficiales; en esta ocasión se atribuyó el crimen a Los Zetas.

El aumento de la violencia en Guatemala “tiene que ver mucho con el inicio de la guerra contra las drogas en México, y el interés de control territorial de actores que antes no se metían en el control territorial porque esto era un asunto de los narcotraficantes locales”, dijo Samayoa, la activista guatemalteca por los derechos humanos. Tras la masacre en Los Cocos, el gobierno declaró un estado de sitio en el Petén que duró hasta enero de 2012.

En la introducción de un informe de septiembre de 2011 elaborado para InSight Crime, se explica que “más que controlar las cadenas de distribución y la infraestructura necesaria para las operaciones diarias, Los Zetas tienen como objetivo controlar el territorio”.⁶ El informe, basado principalmente en artículos periodísticos y fuentes gubernamentales, señala que la masacre en La Libertad fue la primera incursión de Los Zetas en el Petén. Al parecer sí hay narcotraficantes afiliados a Los Zetas operando en el Petén, e incluso Fox News reportó una manta colgada en la capital del departamento y firmada por Z200, en la que se amenazaba con matar a población civil.

Pero decir que el Petén es territorio de Los Zetas supone ignorar otros grandes intereses en esta región rica en recursos, que es más grande que Bélgica. Por un lado, hay clanes consolidados que se dedican al narcotráfico en el Petén y que no han cedido el control de tan lucrativo comercio a Los Zetas. Por otro lado, los grupos armados más visibles en la región son la policía guatemalteca y el ejército, y fueron una presencia urbana constante en la media docena de ciudades y pueblos que visité. Rondaban las calles sentados en la caja de camionetas o caminando en grupo.

El Parque Nacional del Lacandón, donde se localizaba Nueva Esperanza, está en la municipalidad de La Libertad, así como el Parque Nacional Laguna del Tigre, donde nos advirtieron que no entráramos porque nuestra presencia en los diversos puntos de control militar de camino al parque podría crear problemas a las personas que deseábamos visitar.

Ambos parques nacionales cuentan con una gran presencia militar, y ambos son presuntos enclaves desde los que se transportan drogas hacia México, pero también son hogar de docenas de comunidades campesinas y se encuentran entre las zonas de Guatemala con más abundancia de recursos naturales. Para muchos, los acontecimientos que se dieron en el Petén son menos conocidos que los de México, y merecen mayor atención.

Para llegar al Parque Nacional Laguna del Tigre hay que pasar por El Naranjo, una ajetreada localidad fronteriza junto a un río que fluye hacia México. Durante nuestra visita, los soldados vigilaban la orilla; viejas lanchas

⁶ InSight Crime, “Special Series: The Zetas in Guatemala”, *InSight Crime*, Septiembre 2011, <http://www.insightcrime.org/special-series/the-zetas-in-guatemala>.

de motor iban y venían; individuos armados sin uniforme aguardaban de pie bajo la sombra de los toldos de las tiendas cercanas, y un pequeño símbolo en una zona de carga mostraba el logotipo de otro grupo poderoso que opera en el área: Perenco. Perenco es una compañía petrolera con sede en París que produjo y exportó más de 3.6 millones de barriles de crudo en 2011, cuando el petróleo sustituyó al cardamomo como el cuarto artículo de exportación más importante de Guatemala, por detrás del café, el azúcar y el plátano. La empresa controla 47 pozos en lo que es conocido como el Campo Xan dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, y crea un impacto ecológico que cualquiera con acceso a Google Maps puede comprobar. El petróleo viaja a través de un oleoducto de 475 kilómetros, también propiedad de Perenco, hasta la refinería que la empresa posee cerca del centro de La Libertad, y luego continúa hacia la terminal de la compañía cerca de Puerto Barrios, en la costa atlántica. Perenco compró el contrato de concesión a la empresa canadiense Basic Resources en 2001.

De acuerdo con un residente local que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, la militarización de la zona tiene más que ver con la protección de los intereses petroleros que con combatir el crimen organizado. “En el caso de Perenco, se trata de una empresa que está financiando al ejército de Guatemala para así asentarse en la zona”, dijo, y señaló que hay seis bases militares y al menos 250 soldados —parte de un supuesto batallón verde dedicado a proteger la vida silvestre— en Laguna del Tigre. Algunos de los soldados han participado en el desalojo forzado de las comunidades que vivían en el parque y actualmente son los encargados de mantener lo que podría denominarse un estado de sitio contra los que aún viven ahí. Las 25 o 30 comunidades que quedan en el parque no sólo no pueden talar ni un solo árbol sin permiso, sino que están sometidos a una presión constante por parte de los soldados y los guardabosques armados.

“En primer lugar, la mera presencia de soldados incomoda a las comunidades, porque les vienen recuerdos, cuando ven un soldado ven a alguien que está ahí para matar”, afirmó el informante, que viajaba con regularidad a la zona. “En segundo lugar, han construido un puesto de avanzada en la carretera, a unos 15 o 17 kilómetros de El Naranjo, desde donde controlan todo lo que las comunidades introducen en el parque”. Afirmó que los soldados impiden que los miembros de la comunidad introduzcan provisiones, herramientas de trabajo y materiales que necesitan para sus casas, como chapa de cinc, ladrillos de cemento, arena y varilla. “Los presionan al negarles el acceso a todo aquello que necesitan, pues es otro modo de ejercer presión para que así abandonen la zona por voluntad propia”, concluyó.

Perenco ha desviado la atención del impacto que sus actividades causan en la reserva al afirmar en su página web que “admiten la dura naturaleza de los problemas a los que se enfrenta el parque, como aquellos que provocan las comunidades itinerantes [sic] y las técnicas ilegales de roza y quema”. El gobierno de Guatemala también culpa a los habitantes del parque de dañar el medioambiente en uno de los mayores pantanos de todo Centroamérica: “No me cansaré de repetir que las principales amenazas para el Parque Nacional Laguna del Tigre son las vacas y no los oleoductos de Perenco”, declaró el antiguo presidente Álvaro Colom en 2010.

Rudel Mauricio Álvarez, exgobernador del Petén, afirmó que durante su mandato, que terminó en 2012, la elección era entre el petróleo o las drogas. Me reuní con Álvarez en una moderna cafetería al aire libre en Flores, la pintoresca capital del Petén, tras un contacto vía Twitter animado por la mención de la palabra “narcoganadería”, la utilización de enormes ranchos como tapadera para el tráfico de drogas. “Te hacías la pregunta: ¿Qué es peor? ¿Qué es más dañino? ¿El petróleo, que sólo te tiene 450 hectáreas donde están los campos, o los narcoganaderos, que tienen 148,000 hectáreas?”, preguntó. “Y todo mundo, ambientalistas y todos, se fueron contra el petróleo... e invisibilizaron el problema real de las áreas protegidas”, dijo, e hizo una breve pausa antes de retomar la palabra. “El problema no es la explotación de petróleo.... El problema es la narcoganadería”.

Ninguna de las personas con las que hablé negó que Laguna del Tigre formara parte de una ruta a través de la que la cocaína colombiana, descargada en pistas de aterrizaje privadas, se transporta a México. Las opiniones difieren al determinar la implicación de las comunidades del parque en el tráfico de drogas. Álvarez afirmaba que la mayoría de las comunidades están formadas por invasores financiados por los narcodólares. Pero a diferencia de muchas zonas de México controladas por el negocio de la droga, no vi un solo ostentoso vehículo todoterreno durante mi estancia en el Petén. Mi informante en El Naranjo decía que los narcos actúan con discreción, tan solo van y vienen en avión, mientras que las comunidades, muchas de las cuales estaban formadas por familias desplazadas durante el conflicto interno, sobrevivían gracias a pequeñas cosechas de maíz, frijoles y calabacín. Una cosa está clara. La presencia de narcotraficantes en Laguna del Tigre no ha perjudicado la producción de petróleo. De hecho, las compañías petroleras tienen un interés renovado en el petróleo guatemalteco. Durante los últimos años, un puñado de petroleras canadienses ha hecho incursiones en Guatemala. Quattro Exploration and Production, con sede en Calgary y muy activa en la región de Saskatchewan, adquirió entre noviembre de

2011 y mediados de 2012 concesiones petroleras en 350,000 hectáreas que incluyen un bloque contiguo a Laguna del Tigre y dentro de la Reserva de la Biósfera Maya. Otras compañías como Pacific Rubiales y Truestar Petroleum Corporation también operan en el Petén.

El petróleo es sólo una de las extraordinariamente lucrativas industrias en Guatemala. El megaproyecto Cuatro Balam propone la utilización de biocombustibles y agricultura a gran escala en el sur del Petén, así como una mayor inversión en infraestructuras para el turismo masivo, financiada en parte por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo. Organizaciones dedicadas a la conservación ambiental vinculadas a grandes corporaciones, como Wildlife Conservation Society, con sede en Nueva York, siguen reclamando enormes extensiones de terreno como parte del parque. También existe la amenaza de nuevos proyectos hidroeléctricos, cuatro de los cuales se desarrollarían sobre el río Usumacinta. Los activistas calculan que las inundaciones expulsarían alrededor de 35,000 personas de sus tierras. Si es que los habitantes pobres del Petén reciben algo de las ganancias de estas actividades económicas lícitas e ilícitas, será muy poco. Son muy vulnerables ante la posibilidad de ser desplazados de la tierra de la que dependen para sobrevivir, y muy probablemente perderán amistades y seres queridos conforme la guerra antidrogas prospere en Guatemala.

Los US Marines más allá de Mérida

En agosto de 2012, 200 infantes de marina estadounidenses fueron destacados en Guatemala como parte de la guerra antidrogas.⁷ El despliegue de tropas de combate de EUA en este país fue parte de la Operación Martillo, un plan militar para dismantelar las rutas de tráfico de cocaína que pasan por Centroamérica, de Colombia a Estados Unidos. “Sentimos que es un pretexto para volver al despliegue militar que se mantuvo durante la etapa más fuerte del conflicto armado y que derivó en actos de genocidio”, afirmó Hernández Batres. El ejército guatemalteco comenzó a luchar contra el narco a principios de 2012. Las fuerzas armadas guatemaltecas fueron llamadas para “poner fin a las amenazas externas y contribuir a la neutralización de grupos armados ilegales mediante la fuerza militar”, declaró Otto Pérez Molina poco después del comienzo de su periodo presidencial

⁷ Romina Ruiz-Goireina y Martha Mendoza, “200 US Marines Join Anti-Drug Effort in Guatemala”, Agosto 29, 2012, <http://bigstory.ap.org/article/200-us-marines-join-anti-drug-effort-guatemala>.

en enero de 2012.⁸ Pérez Molina, exgeneral y exjefe de inteligencia militar, se comprometió a incrementar el gasto castrense, y hasta ahora ha honrado su promesa. Según *Plaza Pública*, una plataforma guatemalteca de periodismo de investigación, el gasto en equipo militar y de seguridad en 2013 rebasó el total de lo gastado entre 2004 y 2012.⁹

El arribo de infantes de marina de EUA a Guatemala en 2012 significa más que una maniobra militar para combatir al narcotráfico. Demuestra que en países aliados como Guatemala, Estados Unidos puede protagonizar una invasión militar justificada por el discurso de la guerra antidrogas, sin ninguna fanfarria ni oposición crítica. El despliegue de elementos en el país centroamericano probablemente es el más patente ejemplo de una estrategia militar en evolución a la que el estamento militar estadounidense le está apostando para continuar ejerciendo su control internacional dentro de un marco de democracia y Estado de Derecho. “Los retos predominantes de seguridad hemisférica ya no provienen de conflictos entre Estados, paramilitares de derecha o insurgentes de izquierda”, se lee en la Declaración de Políticas de Defensa del Hemisferio Occidental de EUA, publicado en octubre de 2012. “Las amenazas actuales hacia la paz regional y la estabilidad surgen de la propagación de los narcóticos y otras formas del tráfico ilícito, pandillas y terrorismo, cuyos efectos pueden ser exacerbados por desastres naturales y oportunidades económicas desiguales”.¹⁰

Tanto Guatemala como el resto de Centroamérica es un campo de prueba para una nueva iteración de las estrategias de control militar de EUA, la cual está siendo implementada de manera selectiva a lo largo del hemisferio. En Guatemala incluye tropas estadounidenses de combate – algo que Estados Unidos no podían hacer en México, cuya Constitución explícitamente prohibía (hasta el 2015) que los extranjeros portaran armas. Como en México, los esfuerzos antidrogas en Guatemala también involucran a agentes militares de Canadá, Chile y Colombia, que fungen como entrenadores en temas de seguridad regional.¹¹

Aunque México ha sido el objetivo principal reciente de los fondos antinarcóticos de EUA y de la atención mediática, sus vecinos del sur no

8 CNN Wire Staff, “Guatemala’s President Calls on Troops to ‘Neutralize’ Organized Crime”, Enero 16, 2012, http://articles.cnn.com/2012-01-16/americas/world_americas_guatemala-military_1_alta-verapaz-peten-civil-war?_s=PM:AMERICAS.

9 Rodrigo Baires Quezada, “Presupuesto: más represión que investigación y justicia”, *Plaza Pública*, Noviembre 7, 2012, <http://www.plazapublica.com.gt/content/presupuesto-mas-repression-que-investigacion-y-justicia>.

10 Department of Defense, “Western Hemisphere Defense Policy Statement”, Octubre 2012, <http://www.defense.gov/news/WHDPSE-English.pdf>, 6.

11 *Ibid.*, 8.

han pasado desapercibidos. El despliegue de infantes de marina de EUA en Guatemala sucedió solo tres meses después de una masacre de civiles en Ahuas, Honduras, cuando salió mal una campaña antinarcoóticos apoyada por EUA. En un incidente que examinaremos en el próximo capítulo, grupos de derechos humanos afirman que agentes de la DEA estaba presentes cuando la policía hondureña comenzó a disparar desde helicópteros del Departamento de Estado, y asesinaron a cuatro indígenas en el noroeste del país en mayo de 2012.¹² “Las aeronaves que se utilizaron en esa operación eran piloteadas en ese momento por oficiales del ejército de Guatemala”, dijo Hernández. “Posteriormente, [la Operación Martillo] aparece públicamente en Guatemala, arrancando ya oficialmente a mediados de este año, pero con un inicio de operaciones previo”. Según fuentes oficiales, entre julio y octubre de 2012, miembros de los Cuerpos de EUA de Infantería de Marina, Sur – el componente naval del Comando Sur de EUA– pilotearon helicópteros destinados a esfuerzos antinarcoóticos en Guatemala, despegando de Santa Elena, Petén. También volaron aeronaves desde La Aurora, en Ciudad de Guatemala, Retalhuleu y Puerto San José, y se coordinaron con la Fuerza Naval de Guatemala en Puerto Quetzal, en la costa del Pacífico.¹³

Aparte de algunos cables periodísticos, las noticias del despliegue de tropas activas de combate por parte de EUA en Guatemala casi no repercutió en los medios.¹⁴ También parece haber pasado casi desaparecido en la misma nación centroamericana. Fuera de los círculos de investigación militar y de seguridad, pocos estaban al tanto de los detalles del acuerdo entre la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

12 Annie Bird y Alex Main, “Collateral Damage in the Drug War: The May 11 Killings in Ahuas and the Impact of the US War on Drugs in La Moskitia, Honduras”, Agosto 2012, <http://www.cepr.net/documents/publications/honduras-2012-08.pdf>, 20.

13 Carlos Hernández, “Estados Unidos concluye ‘Operación Martillo’ en el país”, *Diario de Centro América*, Octubre 23, 2012, <http://www.dca.gob.gt/index.php/template-features/item/5940-estados-unidos-concluye-%E2%80%9Coperaci%C3%B3n-martillo%E2%80%9D-en-el-pa%C3%ADs.html>. Otras pruebas de la localización de los infantes de marina estadounidenses durante la Operación Martillo se basan en imágenes publicadas por el Comando Sur y por la Embajada de EUA en Guatemala. Nótese que la imagen de Santa Elena está mal etiquetada bajo el nombre de RETALHULEU: <http://www.flickr.com/photos/ussouthcom/7979820592/in/photostream/>. El mismo problema de etiquetado aparece aquí: <http://www.2ndmaw.marines.mil/Photos.aspx?mgqs=2207160>. Puerto Quetzal: <http://www.flickr.com/photos/ussouthcom/7979821816/in/photostream>. Ciudad de Guatemala: <http://www.flickr.com/photos/usembassyguatemala/sets/72157631809378179/>.

14 El silencio de los medios con respecto al despliegue de tropas estadounidenses en Guatemala ha sido atronador. Como ejemplo, el artículo de *Los Angeles Times* dedicado a repasar el papel de EUA en actividades antinarcoóticos en Centroamérica ni siquiera lo menciona. Ver: Tracy Wilkinson y Richard Fausset, “US Gingerly Expands Security Role in Central America”, *Los Angeles Times*, Diciembre 4, 2012, <http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-us-central-america-20121205,0,7198665,full.story>.

Nineth Montenegro, segunda vicepresidenta del Congreso guatemalteco, afirmó haberse enterado de las operaciones a través de reportajes en la prensa: “Me enteré por los medios de comunicación escritos, aquí por el congreso nunca pasó una solicitud para el paso de elementos tropa, quizás porque no son tropa, quizás porque no están armados, y quizá porque vienen efectivamente a brindar apoyo a un flagelo que nos está matando como país que es el crimen organizado... Al congreso nunca ha llegado tal discusión, fue un acuerdo gubernamental que el presidente aprobó”, dijo Montenegro. “Algunos aquí piensan que hubo alguna violación, porque el poder legislativo es independiente y es el único que autoriza el paso de tropas o elementos militares o apoyo, pero nunca pasó”, concluyó en una entrevista en la Ciudad de Guatemala.

En vez de procesarse por los medios constitucionales, el 16 de julio de 2012 la Embajada de EUA en Guatemala envió una nota verbal al Ministro de Relaciones Exteriores en donde proponía las condiciones para la regularización del personal de defensa estadounidense en el país. La nota de la embajada, que posteriormente se transcribió y publicó en la gaceta del congreso guatemalteco, hace referencia a acuerdos de cooperación militar y aeronáutica firmados entre los dos países en 1949, 1954 y 1955.¹⁵ Castillo Armas, el dictador militar que tomó el poder tras el golpe de Estado contra el presidente Árbenz en 1954, firmó uno de los documentos citados en el acuerdo. Estas referencias dejan claro que los elementos legales que permiten la participación actual del ejército estadounidense en Guatemala fueron creados a la luz del golpe de 1954, y se han mantenido desde entonces.

Al día siguiente de recibir la petición de la Embajada de EUA, el gobierno guatemalteco respondió afirmativamente. Cuando estuve investigando en la Ciudad de Guatemala, obtuve el intercambio de notas entre EUA y Guatemala que legalizó la presencia de tropas estadounidenses y elementos de seguridad privada contratados por el Departamento de Defensa de EUA, durante un periodo de 120 días que comenzaron el 17 de julio de 2012.¹⁶ El acuerdo permite al personal extranjero portar armas, importar y exportar bienes sin inspección ni aranceles del gobierno, a transitar libremente hacia fuera y a través del país sin la interferencia de las autoridades, y a hacer uso

15 Los acuerdos originales de 1949, 1954 y 1955 están disponibles aquí en español: <https://s3.amazonaws.com/TowardsFreedom/1949+agreement.pdf>; <https://s3.amazonaws.com/TowardsFreedom/1954+agreement.pdf>; <https://s3.amazonaws.com/TowardsFreedom/1955+Agreement.pdf>

16 Organismo Ejecutivo. “Acuerdo por Canje de Notas entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de Estados Unidos de América Relativo a la Operación Martillo”, *Diario de Centro América* 18, tomo CCXCV (Agosto 20, 2012), <https://s3.amazonaws.com/TowardsFreedom/Canje+De+Notas+Martillo+2012.pdf>.

libre e ilimitado de las frecuencias de radio.¹⁷ Los soldados y contratistas de EUA recibieron inmunidad judicial en Guatemala, en caso de que sus operaciones produjeran heridos o muerte de civiles o personal militar.

Según miembros de la Fuerza Naval estadounidense, su misión en Guatemala, liderada por la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur, desde Key West, Florida, representa un regreso a lo que la organización tradicionalmente ha hecho en la región. “Durante décadas, la Marina ha apoyado el involucramiento en Centro y Sudamérica con el fin de construir capacidad de cooperación y mejorar la interoperabilidad”, escribió el capitán Greg Wolf en la página oficial de la Marina norteamericana. “No obstante, en años recientes las guerras en Irak y Afganistán han reducido parte de ese compromiso. Los infantes de marina de la misión Martillo disfrutaron la oportunidad de asociarse con las autoridades guatemaltecas y fortalecer los vínculos en la región”.¹⁸ Según el profesor de la Universidad de Nueva York Greg Grandin, cuyo libro *Empire's Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Empire* documenta el giro del ejército estadounidense de Vietnam y el sudeste asiático hacia Centroamérica a finales de los años 70, el discurso actual de los militares maquilla un intento de controlar a los ejércitos locales y la policía.

“Hemos recorrido un gran trecho desde el lenguaje robusto de la Guerra Fría —que elogiaba a los escuadrones de la muerte y dictadores latinoamericanos como ‘luchadores por la libertad’ en la vanguardia de una cruzada mundial anticomunista— hasta la palabrería anodina de ‘construir capacidad de cooperación y mejorar la interoperabilidad’”, escribió Grandin en una entrevista por correo. “Pero el objetivo básicamente sigue siendo el mismo, coordinar el trabajo de las fuerzas de seguridad nacionales a nivel internacional, subordinadas, de manera directa o indirecta, a la dirección de Washington”. Aparte de eso, Grandin piensa que el poder de EUA en el hemisferio se ha reducido, lo cual aumenta la importancia de lo que sucede en países como Guatemala y Honduras. “Lo que es diferente es el grado en que el alcance de EUA se ha reducido, de todo Latinoamérica a básicamente

17 *Ibid.* Recuérdese que, en febrero de 2011, se encontró que un avión de carga de la Fuerza Aérea de EUA que llegó a Argentina para ejercicios conjuntos de entrenamiento policial, llevaba armas y morfina que no fueron declaradas por los soldados estadounidenses: CNN Wire Staff, “Cargo Sparks Dispute between Argentina, US”, Febrero 16, 2011, <http://www.cnn.com/2011/WORLD/americas/02/15/argentina.us.spat/index.html>. El acuerdo que permite el movimiento de los infantes de marina de EUA en Guatemala impide que las autoridades del país revisen los contenidos de los aviones y otros vehículos que entran al país.

18 Greg Wolf, “After Partnering to Disrupt Trafficking, Detachment Martillo Departs Guatemala”, Octubre 16, 2012, <http://www.hqmc.marines.mil/News/NewsArticleDisplay/tabid/3488/Article/128618/after-partnering-to-disrupt-trafficking-detachment-martillo-departs-guatemala.aspx>.

un corredor que va de Colombia a México, pasando por Centroamérica. Pero incluso ahí la hegemonía de EUA está amenazada por un grado de independencia que hubiera sido impensable unos pocos años antes, ya sea en la Colombia de Juan Manuel Santos o en la Nicaragua de Daniel Ortega”.

La inquebrantable lealtad demostrada por el gobierno de Guatemala hacia Washington, así como la presencia de tropas estadounidenses en Guatemala –tanto de manera oficial como clandestina– tiene sólidos antecedentes históricos. En 1960, la CIA se coordinó directamente con el presidente derechista de Guatemala José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes, quien ofreció apoyo para la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, contra Fidel Castro. Según documentos desclasificados de la CIA, “Guatemala no sólo cortó relaciones oficiales con Cuba, sino que antes de que terminara febrero de 1969, el Presidente Ydígoras ofreció el uso de su territorio para apoyar las actividades de propaganda dirigidas contra Castro; y él también ofreció, a través de la CIA, ‘instalaciones de entrenamiento en el área del Petén de Guatemala [a] grupos de los que tenemos una opinión favorable’”.¹⁹ EUA continuó estando abiertamente involucrado en todo tipo de operaciones militares en Guatemala hasta 1978, cuando la ayuda militar oficial a Guatemala fue suspendida por el Congreso de EUA cuando ya no se pudieron ignorar las evidencias de masacres, violaciones y desapariciones por parte del ejército. Ahora, la asistencia de EUA al ejército guatemalteco se ha dado bajo la forma de apoyos a iniciativas antinarcóticos, incluyendo la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI), un programa de casi 642 millones de dólares, que empezó en 2008 tras la Iniciativa Mérida y continuaba hasta 2014, con asistencia, equipo y entrenamiento a las fuerzas policíacas y militares de Centroamérica.

México le corresponde a la jurisdicción del Comando Norte de EUA, pero al sur de sus fronteras es el Comando Sur, el cual opera desde unas instalaciones de 400 millones de dólares justo al oeste de Miami, el responsable de todas las actividades militares de EUA en Centro y Sudamérica.²⁰ La presencia de las tropas estadounidenses en Guatemala continúa. Por ejemplo, los “ejercicios conjuntos humanitarios/interacción militar extranjera auspiciados por el Comando Sur de EUA” llamados “Beyond the Horizon”, se llevaron a cabo en Honduras y Guatemala, y terminaron dos días antes de que los infantes de marina fueran desplegados

19 Central Intelligence Agency, “Official History of the Bay of Pigs Operation: Participation in the Conduct of Foreign Policy, Volume II”, Octubre 1979, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB353/bop-vol2-part1.pdf>, 13–14.

20 El Comando Norte de EUA, o NORTHCOM, tiene asignado México, así como las Islas Vírgenes de EUA, Puerto Rico, Las Bahamas, Canadá y EUA.

en Guatemala para la Operación Martillo en julio de 2012.²¹ Dos días después de que las tropas de Operación Martillo dejaran el país, miembros de los batallones de construcción de la Fuerza Naval de EUA fueron enviados a Cobán como parte de una “misión de cooperación de seguridad en escenario” con el ejército guatemalteco.²² Pero hay un ingrediente extra en la participación de los infantes de marina en la Operación Martillo. “Este es el primer despliegue de infantes de marina que directamente apoyo el combate al crimen transnacional en esta área, y ciertamente es la mayor influencia que hemos tenido en esa área desde hace bastante tiempo”, le dijo el sargento de personal de la marina Earnest Barnes a AP poco después de que las noticias del despliegue se dieran a conocer en EUA.²³

En un discurso que dio en Virginia en octubre de 2012, Leon Panneta, Secretario de Defensa de EUA, describió los planes militares frente a las restricciones de presupuesto, explicando que los despliegues rotativos y los ejercicios conjuntos con milicias locales se convertirían en un elemento cada vez más importante de la estrategia de defensa de EUA. “Construimos nuevas alianzas, construimos asociaciones, construimos su capacidad y habilidad para defenderse y promover su propia seguridad. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso en Latinoamérica. Vamos a hacer eso en África. Vamos a hacer eso en Europa. Vamos a hacer eso en el Pacífico. Apenas tuvimos un despliegue rotativo de infantes de marina que se fue a Darwin. Vamos a desarrollar la misma capacidad en las Filipinas. Vamos a hacer lo mismo en Vietnam. Vamos a hacer lo mismo en otros lados”.²⁴

La alianza militar EUA-Guatemala contempla una función en la aplicación de la ley. “El papel del ejército no es actuar como una fuerza de aplicación de la ley, pero la desafortunada realidad es que ha sido llamada a lidiar con este problema de manera temporal en muchos países”, dijo el Subsecretario Asistente de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental Frank Mora en junio de 2012. “Cuando les han pedido que hagan un trabajo que muchos de ellos no quieren hacer –que es aplicar la ley, como en El Salvador y Guatemala– han tratado de hacerlo lo mejor que pueden”.²⁵ En 2012, con fondos de CARSI, EUA entrenó a 900 elementos

21 United States Southern Command, “Beyond the Horizon, New Horizons 2012”, Junio 19, 2012, <http://www.southcom.mil/newsroom/Pages/Beyond-the-Horizon--New-Horizons-2012.aspx>.

22 Southcom, “Seabees, Preventive Medicine Specialists Team Up in Guatemala”, Octubre 22, 2012, http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=70228.

23 Ruiz-Goireina y Mendoza, “200 US Marines Join Anti-Drug Effort”.

24 Leon E. Panetta, “Speech: Hampton Roads Chamber of Commerce”, Octubre 19, 2012, <http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1729>.

25 Center for Hemispheric Defense Studies, “12 Questions for Deputy Assistant Secretary of

centroamericanos en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley en San Salvador—capital de El Salvador.²⁶ Las conexiones con Colombia son fuertes, y han sido fortalecidas por CARSI. En 2013, Brownfield, el zar antidrogas de EUA para el hemisferio occidental, declaró que “ahora mismo la policía nacional colombiana está entrenando a más policías y agentes estatales en Centroamérica que todos los agentes de EUA juntos. Ahora, apoyamos algo de eso. Así que básicamente es financiamiento de CARSI, financiamiento del Plan Colombia, o en algunos casos, incluso financiamiento de Mérida el que lo permite. Y lo hace porque es más barato para nosotros que la policía nacional colombiana provea este entrenamiento que hacerlo nosotros mismos. A veces son los colombianos mismos los que dan el entrenamiento. En este punto están entrenando en cuatro de siete países en Centroamérica. Están dando entrenamiento y apoyo en la República Dominicana en el Caribe. Están abiertos a involucrarse más. De hecho creo que obtenemos resultados muy valiosos ya sea por medio de los colombianos dando entrenamiento en otros países o llevando nosotros personal de aplicación de justicia de esos países a entrenarse en muchas de las instituciones colombianas que ayudamos a montar y mantener durante el Plan Colombia del año 2000 a 2010”.²⁷

Una de las problemáticas menos reconocidas que se generan al incrementarse el apoyo de EUA a las fuerzas armadas de Guatemala es el papel que el ejército ha jugado y continúa jugando en el narcotráfico; está ampliamente documentada su participación en el tráfico de drogas, pero eso no ha evitado que EUA se asocie con él y le provea tecnología y entrenamiento destinados a controlar el flujo de narcóticos. “Evidencia de varias fuentes, incluyendo información de reportes de la DEA, indica que a partir de los años 80, los traficantes colombianos obtuvieron acceso a redes de tráfico a lo largo de rutas clave en el sur y oeste de Guatemala”, según un artículo de investigación accesible al público que preparó la agencia vinculada a la Marina CNA Analysis and Solutions. “Estas redes estaban compuestas de agentes militares de inteligencia, sus subordinados y excolegas, así como informantes y socios—incluyendo comisionados militares”.²⁸

Defense for Western Hemisphere Affairs Frank Mora”, Enero 2012, <http://www.ndu.edu/chds/news.cfm?action=view&id=57&lang=PT>.

26 William Brownfield, “Regional Security Cooperation: An -Examination of the Central America Regional Security Initiative and the Caribbean Basin Security Initiative”, Junio 19, 2013, <http://docs.house.gov/meetings/FA/FA07/20130619/101032/HHRG-113-FA07-Wstate-BrownfieldW-20130619.pdf>.

27 *Ibid.*, 40.

28 Ralph Espach, et al., “Criminal Organizations and Illicit Trafficking in Guatemala’s Border Communities”, *CNA Analysis and Solutions*, Diciembre 2011, <http://www.cna.org/sites/default/>

A mediados de los noventa, el capo guatemalteco más poderoso era Byron Berganza, un exmilitar “cuyo perfil se había elevado y su equipo de seguridad estaba conformado exclusivamente por oficiales militares”.²⁹ En esa época, Berganza también era informante de la DEA y mediador local entre los grupos colombianos y guatemaltecos del narcotráfico. Berganza fue extraditado a Estados Unidos en 2003, lo cual abrió un nuevo espacio en el mercado de trasiego de drogas en el país, el cual sería llenado por miembros de un puñado de poderosas familias guatemaltecas. En 2011, la activista y autora Jennifer Harbury dijo que la creciente violencia asociada a las drogas en Guatemala “está siendo desplegada por líderes militares que se quitaron el uniforme después de la guerra, crearon grandes mafias para transportar drogas, y contrataron y entrenaron bandas como Los Zetas –eso está muy bien documentado– para que les ayudaran a mover las drogas”.³⁰ Poco ha cambiado en estos tres años. Además, armas que incluyen misiles y lanzagranadas pertenecientes al ejército de Guatemala han sido encontrados en manos de Los Zetas.³¹

Fue un exkaibil (miembro de las fuerzas de élite de Guatemala) el acusado de dirigir el acto más violento registrado en Guatemala en relación con el narcotráfico. Hugo Gómez Vásquez fue acusado de supervisar la masacre en Los Cocos, Petén, en mayo de 2011.³² Algunos kaibiles se entrenaron en Estados Unidos, así como los miembros originales de Los Zetas, que desertaron de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE) de México a finales de los 90. Los kaibiles también entrenaron a los GAFE, y participaron en entrenamientos con los infantes de marina de EUA.³³ “Se

files/research/IPR%2015225.pdf.

29 Julie López, “Guatemala’s Crossroads: The Democratization of Violence and Second Chances”, in *Wilson Center Reports on the Americas* 29: 151, http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/LAP_single_page.pdf.

30 Democracy Now!, “Genocide-Linked General Otto Pérez Molina Poised to Become Guatemala’s Next President”, *Democracy Now!*, September 15, 2011, http://www.democracynow.org/2011/9/15/genocide_linked_general_otto_perez_molina. En marzo de 2011, Harbury levantó una demanda en Guatemala contra el presidente Pérez Molina, alegando su participación en la desaparición, tortura y asesinato de su esposa, el comandante guerrillero Efraín Bámaca. Ver: Corelia Orantes, “Jennifer Harbury acciona contra Pérez Molina”, *Prensa Libre*, Marzo 23, 2011, http://prensalibre.com.gt/noticias/Acciona-Perez_0_449355088.html.

31 Elyssa Pachico, “How Much Is Guatemala Arming the Zetas?”, *InSight Crime*, <http://www.insightcrime.org/news-analysis/how-much-is-guatemala-arming-the-zetas>.

32 Siglo21, “Fiscal dice que ex kaibil capturado dirigió masacre”, Mayo 19, 2011, <http://www.s21.com.gt/node/39187>.

33 Cpl. Daniel Negrete, “Marines Sweat It Out With Guatemalan Kaibiles”, *Marines*, Septiembre 18, 2010, <http://www.2ndmaw.marines.mil/News/ArticleView/tabid/357/Article/32610/marines-sweat-it-out-with-guatemalan-kaibiles.aspx>. Tim Padgett, “Guatemala-

ha vuelto entonces normal que cuando se encuentran entre Los Zetas a un oficial en activo, o a un miembro de los kaibiles que todavía está en activo, pasan dos o tres días y el ejército dice ‘es que habían desertado’ pero no se documenta, digamos, el proceso interno sobre qué disciplina se habría aplicado, qué procedimientos disciplinarios hay”, dijo Hernández de la ONG Seguridad y Democracia. A pesar de la evidencia de su colaboración con Los Zetas y otros grupos narcotraficantes, y un largo historial de participación en masacres, los kaibiles guatemaltecos conservan una relación privilegiada con el ejército de EUA.

Luego está el papel de las tropas estadounidenses en Guatemala. “Estos señores, los Marines, no solo vienen como te digo a controlar el narcotráfico, sino a instruir militarmente al ejército guatemalteco para lo que yo llamo la continuación de la Guerra Fría”, dijo Ba Tiul. “Una Guerra Fría más refinada, más academizada, más intelectualizada, si quieres. Pero que igual va a ser de salvaje y va a ser dañina para todos aquí en Guatemala, y no creo, te lo digo sinceramente, no creo que sea solo para Guatemala”. Además de sus conexiones con una élite influyente implicada en las industrias extractivas y el sector energético, el gobierno de Pérez Molina tiene importantes nexos con un poderoso sector del crimen organizado.

“Fernández Ligorria, un militar de Cobán, era una de las figuras más importantes en el Partido Patriota, y era muy cercano al presidente en turno, Otto Pérez Molina”, de acuerdo con un analista de Guatemala que pidió mantenerse en el anonimato por seguridad. Ligorria fue instructor de kaibiles, exjefe de la defensa nacional y luego líder de la Policía Nacional Civil (PNC).³⁴ Sylvia Gereda Valenzuela, estrechamente vinculada a una de las familias más poderosas de Guatemala (los Novella, dueños del monopolio cementero Cementos Progreso), vincula a Ligorria con diversas actividades del crimen organizado, así como tráfico de drogas y armas a partir de mediados de los años noventa. Cuando murió en enero de 2011, varios medios de comunicación describieron a Ligorria como cabeza de Los Zetas en Guatemala. “Uno de sus hijos, José Fernández Chanel, es actualmente un congresista en funciones [del Partido Patriota]. Es complicado, porque una lucha directa [contra el narcotráfico] de parte del gobierno implicaría a sus propios colegas, excolegas, y militares de alto rango”, dijo el analista. “Esto podría desatar guerras de otro tipo, disputas de poder que podrían poner en

la’s Kaibiles: A Notorious Commando Unit Wrapped Up in Central America’s Drug War”, *Time*, julio 14, 2011, <http://world.time.com/2011/07/14/guatemalas-kaibil-terror-from-dictators-to-drug-cartels/#ixzz2EguGbDZW>.

34 Sylvia Gereda Valenzuela, “El capítulo negro de Fernández Ligorria”, *El Periódico*, Enero 15, 2011, <http://www.elperiodico.com.gt/es/20110115/opinion/188624>.

riesgo no solo la estabilidad del gobierno de Pérez Molina, sino también la estabilidad del Estado mismo”.

El personal militar de Cobán conforma una parte importante de las bases de apoyo de Pérez Molina. Cobán se encuentra en el departamento de Alta Verapaz, donde el expresidente Colom declaró un estado de emergencia en 2010, supuestamente debido a la presencia de Los Zetas. Para justificar el discurso de una nueva estrategia en la guerra antidrogas, el 30 de marzo de 2012 el Ministro de Defensa de Guatemala anunció la creación de una nueva fuerza llamada “Tecun Uman”, la cual obtendría asistencia técnica y financiera por parte de Estados Unidos.³⁵ Cuatro días después, el 3 de abril, agentes estadounidenses y autoridades guatemaltecas capturaron a Horst Walter Overdick Mejía, un narcotraficante afiliado a Los Zetas que operaba en Alta Verapaz y en el Petén.³⁶ “Tras el arresto de Overdick, los narcos empezaron a reacomodarse, y Los Zetas también, bajo el escrutinio cuidadoso y cercano de los militares”, afirmó Ba Tiul. “No se trata de controlar a los narcos, sino de asegurarse de que el negocio siga en sus manos... y también de controlar la movilización social, que es muy poderosa”.

Como ya se ha descrito, después de una década de ser el campo de experimentación de una política antidrogas estadounidense que ha afectado a millones de personas, en 2014 Colombia tenía la economía de más rápido crecimiento en América Latina. La amarga lección colombiana es que, desafortunadamente, las drogas y el petróleo se llevan bien. “Hemos de recordar que el presidente de Colombia, Santos, al igual que Pérez Molina, quiere extender el Plan Colombia, lo cual no sólo significa fortalecer la lucha contra el narcotráfico; lo que realmente significa es convertir el Plan en una forma de paramilitarismo para generar un nuevo tipo de contrainsurgencia, no contra movimientos sociales sino contra las comunidades indígenas”, precisó Ba Tiul. “Es la remilitarización de Guatemala como proyecto patriótico”.

35 Douglas Gámez, “Crearán Fuerza de Tarea militar contra el narcotráfico”, Marzo 30, 2012, <http://goldcorpoutnews.wordpress.com/2012/03/30/crearan-fuerza-de-tarea-militar-contra-el-narcotrafico/>.

36 Elyssa Pachico, “Key Zetas Ally Walther Overdick Arrested in Guatemala”, *Insight Crime*, Abril 3, 2012, <http://www.insightcrime.org/news-analysis/key-zetas-ally-walther-overdick-arrested-in-guatemala>.

Capítulo VIII

El capitalismo narco en Honduras

En Honduras, la brecha que separa a la reducida élite adinerada de la mayoría pobre es tan grande que prácticamente no se percibe en las calles. Los ricos simplemente no pisan los mismos barrios que los pobres. Viajé a Honduras desde Guatemala para cubrir las elecciones de 2013, y escribí en un diario todo lo que vi mi primer día en el país. Después de un largo proceso de sellado de pasaportes, el autobús en el que viajaba cruzó la frontera y nos topamos con un camión de plátanos con una llanta ponchada; había plátanos verdes tirados por doquier en la carretera. Cuando llegué a San Pedro Sula, estuve mirando discretamente a cuatro policías militares que portaban modernas armas automáticas y que estaban mirando fundas para celulares en la estación de autobuses. Ahí tomé un taxi colectivo que me llevó al centro por cerca de cuatro dólares, y llegué a un hotel con una sola ventana a la calle y un ventilador encendido para refrescar el aire húmedo. A unas cuadras se encontraba la Despensa Familiar (Walmart), en donde sólo tenían algunas frutas y verduras en un rincón. La mayor parte de la tienda estaba llena de comida chatarra y alimentos procesados en empaques de plástico. Me llamó la atención que la leche de fórmula estuviera en una vitrina bajo llave al frente de la tienda para evitar que los padres preocupados por conseguir alimento proteínico para sus hijos pudieran robarlo. En el camino de regreso al hotel conté al menos ocho personas pepenando en la basura. Al anochecer ya casi no quedaban locales abiertos en el centro y pocas personas andaban en la calle. Al amanecer vi desde mi ventana a un hombre cocinando en la calle en una fogata de basura. Todo esto sucedía en el centro de San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras, en el corazón de la zona considerada como el cinturón industrial del país.

En ocasiones se presenta la violencia en Honduras como un fenómeno azaroso y sin sentido, o algo relacionado con las drogas, pero no puede separarse de la aguda pobreza que padece gran parte de la población. La guerra contra las drogas es la más reciente justificación del gobierno para la violencia extrema. No es ninguna sorpresa que la guerra antidrogas funcione como un trasfondo perfecto para la subida abrupta de la tasa de asesinatos

a partir del golpe de Estado de 2009, y de acuerdo con uno de los activistas más respetados del país, sus efectos rebasan las fronteras de Honduras. “En realidad, ese pretexto es peligroso porque ocupa territorios y viola derechos humanos y por supuesto garantiza que los Estados Unidos saque y se apropie de los bienes comunes de la naturaleza. Precisamente por esto están aquí, y por un interés geopolítico, porque Honduras tiene una ubicación privilegiada entre mares, tierra firme y todo, con países como Venezuela, Cuba y Nicaragua cerca. La ocupación en Honduras es para impedir el avance de los procesos emancipatorios del continente”, dijo Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

La guerra antidrogas apoyada por EUA comenzó cuando este país volvió a mandar fondos antidrogas a Centroamérica en 2008, vía la Iniciativa Mérida. Después se dividió la Iniciativa Mérida, y la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI) se convirtió en un programa independiente en 2010. Esta Iniciativa tiene cinco objetivos generales, que son comparables con los de la Iniciativa Mérida: “ayudar a hacer las calles más seguras, perturbar las redes criminales, apoyar el desarrollo de instituciones gubernamentales fuertes, llevar servicios a comunidades en riesgo, y promover mayor colaboración entre los gobiernos de las región, no sólo dentro de Centroamérica, sino con México, con Colombia, y otros”.¹ La ayuda de EUA a Honduras aumentó de 62 millones de dólares en 2010 a 90 millones en 2012, en buena parte gracias a incrementos en el gasto del Departamento de Defensa y de CARSI. Como en los demás sitios, entre más dinero estadounidense fluía hacia la guerra antidrogas, más se incrementaba la tasa de homicidios, y alcanzó su cúspide en 2012, cuando la ayuda de EUA para la guerra antidrogas también llegó a su máximo. Con CARSI, “Honduras recibió \$12.1 millones en el año fiscal 2010, casi \$14 millones en el año fiscal 2011, y un estimado de \$24.8 millones en el año fiscal 2012”.² Para 2014, el financiamiento CARSI ya era nulo, y EUA gastó la mayor parte de los 49.3 millones de ayuda a Honduras en proyectos de desarrollo.³

En el otoño de 2012, cuando Hillary Clinton todavía era Secretaria de Estado, habló frente a la Reunión de Seguridad Ciudadana en Centroamérica y alardeó de las mejoras en la región tras un incremento del

1 Hillary Clinton, “Remarks at her Meeting With Central American Foreign Ministers”, Septiembre 27, 2012, <http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2012/09/198315.htm>.

2 Peter Meyer, “Honduras-US Relations”, *Servicio de Investigación del Congreso de los EE. UU.*, julio 24, 2013, <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34027.pdf>, 21.

3 *Ibid.*

gasto estadounidense a través de CARSI. Afirmó que la tasa de homicidios en Honduras disminuyó un 25 por ciento en el primer semestre de 2012 comparada con los primeros seis meses de 2011. “En algunas comunidades nos dicen que está empezando a desvanecerse el miedo a la violencia por primera vez en muchos años”, dijo Clinton.⁴ Quien fuera que le estaba diciendo al Departamento de Estado que las cosas estaban mejorando era un técnico en estadística muy imaginativo, por decir lo menos. El Observatorio sobre la Violencia de Honduras, una organización conformada por la policía, la oficina del fiscal general y la Universidad Nacional de Honduras, registró 3,594 reportes de homicidios en los primeros seis meses de 2011, y 3,614 en el mismo periodo en 2012.⁵ En diciembre, afirmaban que el número de homicidios en 2012, 7,172, había sido de hecho uno por ciento más alto que el del año anterior.⁶ Estas cifras no incluyen a muchos cuyas muertes no se clasifican como homicidios, como las 360 personas que murieron en el incendio de 2012 en la prisión de Comayagua. No obstante, los números han aumentado consistentemente cada año desde 2,155 homicidios en 2004 hasta su máximo en 2012.⁷ En 2013, el número de homicidios bajó a 6,747, alrededor de diecinueve cada día y un promedio de 563 al mes.⁸ En 2013, el gobierno cambió el sistema que utiliza para contar a las víctimas de asesinato, lo cual no cambió el número de muertos registrado por el Observatorio, aunque ha hecho que la tasa de homicidios en Honduras aparentemente decrezca.

Las ramificaciones devastadoras que tiene la ayuda estadounidense en Honduras actualmente, y el nexo entre la asistencia militar y la inseguridad agudizada, se entienden mejor a la luz de la historia hondureña. La influencia de Washington en Honduras a lo largo del siglo XX estuvo dedicada principalmente a proteger a los inversionistas norteamericanos, a apoyar la formación de una facción transnacional de la élite hondureña, y a usar el país como pista de despeque para llevar a cabo ataques militares contra países vecinos.

4 Clinton, Hillary, “Remarks at her Meeting With Central American Foreign Ministers”,

5 Observatorio de la Violencia, “Mortalidad y Otros”, Enero 2013, <http://iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd28EneDic2012.pdf>.

6 *Ibid.*

7 Observatorio de la Violencia, “Mortalidad y Otros”, Mayo 2006, <http://iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd01EneDic2005.pdf>.

8 Observatorio de la Violencia, “Mortalidad y Otros”, Febrero 2014, <http://iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd32EneDic2013.pdf>.

Historia militar estadounidense en Honduras

La influencia política temprana de EUA en Honduras aumentó con la industria bananera, que alcanzó su apogeo en la década de 1920. Por ejemplo, en 1914, John Ewing, un ministro estadounidense en Tegucigalpa, envió una carta al Departamento de Estado de EUA, donde explicaba el alcance de la United Fruit Company en los siguientes términos: “Con el fin de obtener estas concesiones y privilegios y para asegurar su aprovechamiento sin molestias, [la United Fruit Company] ha considerado pertinente involucrarse activamente en la política interior de estos países, y lo ha hecho de manera tan regular y sistemática hasta ahora, que ya tiene ramificaciones en cada departamento del gobierno y es un factor de la mayor importancia en todos los movimientos y actos políticos”.⁹ En 1924, un pelotón de 200 infantes de marina ingresó en Honduras y se dirigió a Tegucigalpa después de que estallara una guerra civil entre los liberales y los nacionalistas. El tratado de paz entre las facciones hondureñas se firmó bajo supervisión estadounidense a bordo de un barco de guerra yanqui.¹⁰

Después de 1932, los Estados Unidos supervisaron la dictadura de diecisiete años del General Tiburcio Carías Andino del Partido Liberal. La estrategia de Carías contra los partidos de oposición se conocía como “encierro, destierro y entierro”.¹¹ Carías “amordazaba a la prensa y atascaba las prisiones. Creó una dictadura institucionalizada que combinaba la fuerza política, militar y económica.”¹² Se desataron disturbios y los militares le arrebataron el poder al Partido Nacional en 1956 y gobernaron por un año, hasta que fueron remplazados por la presidencia liberal de Ramón Villeda Morales.¹³ En un acuerdo “probablemente aprobado por la United Fruit Company y la Embajada Estadounidense”, Villeda Morales aprobó darle a la milicia la autonomía del control civil.¹⁴ Después de pagar su deuda a los Estados Unidos en 1953, el estado de Honduras, a través de una Alianza estadounidense para el *Progress Program*, de nuevo comenzó a incurrir en la deuda externa en 1958. Desde los 50s hasta los 80s, EUA entrenó al menos

9 Darío Euraque, *Reinterpreting the Banana Republic: Region and State in Honduras, 1870–1972* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996), 43–44.

10 Marvin Barahona, *Honduras en el siglo XX: Una síntesis histórica* (Tegucigalpa: Editorial Guaymaras, 2009), 72.

11 Alison Acker, *Honduras: The Making of a Banana Republic* (Toronto: Between the Lines, 1988), 74.

12 *Ibid.*

13 John Booth, Christine Wade y Thomas Walker, *Understanding Central America: Global Forces, Rebellion and Change*, Fourth Edition, (Boulder, Colorado: Westview Press, 2006), 135.

14 Euraque, *Reinterpreting the Banana Republic*, 73–74.

1,000 miembros del ejército hondureño y proveyó \$6.4 millones en asistencia militar al país.¹⁵ Para 1965, el ejército se había convertido en la “institución política más desarrollada” de Honduras, controló el gobierno entre 1963 y 1971 y de nuevo entre 1972 y 1982.¹⁶ La evolución del ejército hondureño está directamente ligada al entrenamiento militar financiado por Estados Unidos así como sus provisiones de armamento.¹⁷

A principios de los años sesenta, el Banco para la Integración Económica de Centroamérica y la Agencia para el Desarrollo Internacional de EUA (USAID) comenzaron a hacer préstamos sustanciales, cuyos principales beneficiarios fueron la élite de comerciantes y dueños de fábricas de San Pedro Sula, quienes se unieron para crear el Banco Financiera Centroamericana, S.A. (FiCENSA). La creación de FiCENSA fue crucial para facilitar el traspaso de recursos estadounidenses al sector privado hondureño, mientras que previamente los militares habían sido los primeros en sacar provecho de la “ayuda” de EUA a Honduras. El historiador Edelberto Torres Rivas argumenta que la integración de las economías centroamericanas a través del Mercado Común Centroamericano (CACM) después de la Segunda Guerra Mundial, produjo el surgimiento de nuevos grupos sociales, incluyendo “el Estado, la burguesía industrial y financiera local, y los hijos de la oligarquía terrateniente”, que juntos crearon la base social necesaria para la inversión extranjera.¹⁸ Aunque el funcionamiento del CACM se vio seriamente afectado por la guerra del fútbol de 1969 entre Honduras y El Salvador, la base económica y social creada durante este largo periodo de gobierno militar serviría como punto de arranque para el proyecto de la democratización en Honduras. También fue el sustrato en el que germinaría y crecería el proyecto económico transnacional hasta dominar el sistema político bipartidario del país a finales de la década de 1980.

La presión de Estados Unidos obligó a los militares a facilitar una transición a la democracia civil, y “aunque la administración de Carter nunca interrumpió la asistencia militar a Honduras, presionó al general Paz a abandonar el poder”.¹⁹ La transición a la democracia terminó en 1982, con la elección del liberal Roberto Suazo Córdova. Tras las elecciones de

15 Booth, Wade y Walker, *Understanding Central America*, 135, 218.

16 Walter LaFeber, *Inevitable Revolutions: The United States in Central America*, Second Edition (New York: W.W. Norton and Company, 1983), 182. Tim Merrill, *Honduras: A Country Study* (Washington, DC: GPO for the Library of Congress, 1995), 147.

17 Noam Chomsky, *Turning the Tide: The US and Latin America*, Second Edition (Montreal: Black Rose Books, 1987), 40.

18 Edelberto Torres Rivas, *History and Society in Central America* (Austin: University of Texas Press, 1993), 104.

19 Booth, Wade y Walker, *Understanding Central America*, 135, 218.

1981, Estados Unidos comenzó a hacer una serie de recomendaciones “Reaganómicas” para Honduras, transmitidas por el entonces embajador John Dimitri Negroponte, días después de la elección de Suazo.²⁰ No obstante la apertura democrática, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso Estadounidense, “el ejército continuó operando como una institución autónoma”.²¹

El doctor Robinson define un sistema poliárquico como uno exclusivamente concentrado en elecciones, el cual se limita “a la oposición política entre élites por medio de elecciones libres procedimentales; la pregunta de quién controla los recursos materiales y culturales de la sociedad, así como las asimetrías y desigualdades entre grupos dentro de una misma nación y entre naciones dentro del orden internacional, se vuelven ajenos a la discusión de la democracia”. Para los hondureños, la transición hacia la democracia pareció a todas luces una transición a la poliarquía.²² Dio como resultado la clausura de los espacios políticos tradicionales, un aumento de la represión y la imposición de programas económicos y militares contrarios a la opinión popular.²³ En el periodo Suazo/Reagan se implementó una doctrina de “seguridad nacional” en Honduras. Esa doctrina transformó Honduras en un lugar de despliegue para la contrainsurgencia organizada por EUA en el istmo, e incluyó la construcción de doce bases militares donde cientos o miles de soldados estadounidenses o de otros países fueron entrenados. “La sociedad hondureña fue alterada al convertirse en la base de tres ejércitos extranjeros y al transformarse en el agresivo núcleo militar de la política exterior de EUA” en Centroamérica.²⁴ Las tropas estadounidenses en Honduras tenían una misión tripartita: aplastar los movimientos revolucionarios incipientes (armados y populares) dentro del país, proveer una estructura militar estabilizadora durante la transición a la democracia, y hacer la guerra a los movimientos revolucionarios en países vecinos.²⁵

En 1981, la ayuda militar de EUA se disparó, y durante los siguientes cuatro años EUA proveyó 41.48 millones en asistencia militar a Honduras, la

20 Alcides Hernández, *El Neoliberalismo en Honduras* (Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, 1983), 93.

21 Meyer, “Honduras-US Relations”.

22 William I. Robinson, *Promoting Polyarchy*, 62.

23 Tom Barry y Kent Norsworthy, *Honduras: A Country Guide* (Albuquerque: The Resource Center, 1990), 17.

24 Torres-Rivas, *History and Society in Central America*, 127.

25 William I. Robinson, *Transnational Conflicts: Central America, Social Change and Globalization* (New York: Verso, 2003), 123.

segunda cantidad más alta en la región, debajo de El Salvador.²⁶ Entre 1985 y 1992, EUA dio otros 83.33 millones al gobierno hondureño, destinados al gasto castrense.²⁷ En total, durante los años ochenta Honduras recibió 1.6 mil millones en ayuda económica y militar de EUA.²⁸ En 1983 ya existían escuadrones de la muerte en ese país, enfocados a asesinar o desaparecer activistas políticos.²⁹ En esa década hubo al menos 180 desaparecidos, y cientos de disidentes políticos fueron asesinados —una cantidad muy significativa en un país tan pequeño, aunque solo representa una fracción de la violencia desencadenada en Guatemala y El Salvador.³⁰ Según Jack R. Binns, exembajador de EUA en Honduras, “una de las ironías más amargas fue que el historial de derechos humanos de Honduras se deterioró drásticamente con el gobierno democrático, en parte debido a que los legisladores estadounidenses deliberadamente ignoraron los crecientes abusos”.³¹ No solo aumentó la presencia militar estadounidense, sino que EUA también canalizó dinero a la sociedad civil hondureña y al sector privado, con frecuencia por medio de USAID. De acuerdo con el Departamento de Estado de EUA, en ese momento, Honduras se convirtió en sede de la Misión de Paz más grande del mundo, y proliferaron las agencias voluntarias no gubernamentales e internacionales”.

“Esa época fue de desapariciones, de tortura, de la organización de los escuadrones de la muerte”, me dijo el doctor Juan Almendarez sobre la década de los ochenta, cuando lo entrevisté en su clínica en una calle angosta cerca del centro de Tegucigalpa en 2009. Almendarez es un conocido activista y médico que fungió como rector de la Universidad Autónoma de Honduras. Su trata es suave, y al dialogar se remite con frecuencia al pasado para aclarar sus perspectivas sobre el presente. “Soy un sobreviviente de la tortura. Los escuadrones de la muerte me condenaron en los ochentas, y no hay que olvidar que todavía hay algunos [miembros de escuadrones, del ejército y el gobierno] de aquella época que son ahora de los que hicieron el golpe de Estado en Honduras”. Con décadas de experiencia en los movimientos sociales, Almendarez tenía clara la diferencia entre las luchas en los ochenta y las de ahora. “Es importante entender que en los ochentas

26 Booth, Wade y Walker, *Understanding Central America*, 135, 218.

27 *Ibid.*

28 Robinson, *Transnational Conflicts*, 125.

29 Booth, Wade y Walker, *Understanding Central America*, 135, 137.

30 Jorge L. Fernández y Luis M. Martínez, *A veinte años del auge de la maquila en Honduras: La situación de los derechos humanos laborales de las trabajadoras y los trabajadores* (El Progreso, Yoro: Comunicaciones Comunitarios, 2009), 32.

31 Jack R. Binns, *The United States in Honduras, 1980–1981: An Ambassador's Memoir* (Jefferson, NC: McFarland & Company, 2000), 2.

la confrontación directa era más contra el sector político aliado con el ejército. En la actualidad la lucha es contra el modelo económico neoliberal, la globalización imperialista, y toda esta campaña del capital financiero para apoderarse de nuestras tierras, de llevarse nuestros recursos”.

1990: la década trasnacional

Históricamente, la élite hondureña ha sido vista como un grupo de escaso poder y coherencia, y ha sido considerada como la oligarquía más débil de Centroamérica. Con el comienzo de la democracia formal en la década de 1980, un segmento de la élite nacional afín a intereses extranjeros empezó a tomar consistencia en Honduras, y a finales de esa década ya eran el grupo capitalista más poderoso de la nación.³² “Durante los años ochenta, conforme el país se militarizaba, la USAID financió la formación de casi dos docenas de asociaciones de negocios y organizaciones del sector privado que respondían a las demandas del trasnacionalismo”.³³ De acuerdo con el dr. Robinson, de la Universidad de California, entre estas organizaciones estaban la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo (FiDE), el Consejo Nacional para Promocionar las Exportaciones e Inversiones, la Federación de Agroexportadores de Honduras, la Asociación Nacional de Exportadores de Honduras, y la Cámara de Comercio Honduras-Estados Unidos. La mitad de los \$711 millones en ayuda económica entre 1980 y 1990 se transfirieron directamente del gobierno estadounidense a los sectores privados, “puenteando totalmente al gobierno”.³⁴

En una de sus primeras acciones políticas para institucionalizar el trasnacionalismo, el gobierno de EUA firmó la Ley para la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA) en 1984. CBERA fue parte de una serie de políticas conocidas en conjunto como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI), destinada a proveer condiciones favorables para el desarrollo a partir de las exportaciones del sector maquilador. De acuerdo con el Banco Mundial, aunque “esta ley no le daba acceso libre de impuesto a los textiles a los mercados estadounidenses, sí los exentaba del Arreglo Multifibras (MFA), siempre y cuando estuvieran ensamblados con insumos estadounidenses”.³⁵ Al estimular a los países del Caribe a producir prendas

32 Robinson, *Transnational Conflicts*, 118, 125.

33 *Ibid.*, 125.

34 *Ibid.*, 118, 125.

35 Raymond Robertson, Drusilla Brown, Gaëlle Pierre y María Laura Sánchez-Puerta, *Globalization, Wages and the Quality of Jobs: Five Country Studies* (Washington, DC: World Bank

con telas importadas de EUA, la CBI convirtió abiertamente la producción textil en una actividad transnacional. Además, la CBERA implicó una serie de reglas obligatorias para todos los países participantes, que entre otros criterios estipulaba que no fueran comunistas, que no nacionalizaran propiedades de ciudadanos estadounidenses y que firmaran tratados de extradición con Estados Unidos.

No fue sino hasta 1990 que el gobierno de Honduras introdujo medidas económicas y políticas que institucionalizaron plenamente los libres mercados y estrategias de gobierno neoliberales. El presidente Rafael Callejas “aceptó en marzo de 1990 los tres primeros grandes programas de ajuste estructural negociados con el FMI, USAID, y otros prestamistas internacionales”, incluyendo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.³⁶ Este acuerdo, conocido en Honduras como “*el paquetazo*”, estimuló la inversión extranjera directa en exportaciones no tradicionales, turismo, áreas de libre comercio, maquiladoras, e introdujo una devaluación monetaria y medidas de austeridad fiscal. En 1990, las exportaciones de Honduras a EUA, su mayor socio comercial, tenían un valor de 429 millones de dólares, en 2007 alcanzaron los 3,728 millones.³⁷

El Programa de Ajuste Estructural (PAE) firmado por Callejas eliminó el proteccionismo para las pequeñas y medianas empresas en Honduras, que a partir de entonces ya no pudieron competir con las grandes empresas.³⁸ De acuerdo con el economista hondureño Alcides Hernández, el PAE y el programa de estabilización económica emprendido por el régimen de Callejas “legitimó la tasa creciente de desempleo, la caída del salario neto, el deterioro de los servicios sociales en el sector político, y la conversión del Estado en un subsidiario del capital privado de exportaciones, que muy probablemente se convertiría en la fuente emergente de acumulación de capital más importante en la crisis económica en curso”.³⁹

El sector maquilador, operando desde zonas de libre comercio y con pocas cargas fiscales, se convirtió en la contribución de Honduras al capitalismo global. El neoliberalismo continuó profundizándose, y las políticas económicas dirigidas por instituciones financieras internacionales (como el FMI y el BM), promovidas durante los 80 y formalmente

Publications, 2009), 177.

36 Robinson, *Transnational Conflicts*, 129. Booth, Wade y Walker, *Understanding Central America*, 135, 144.

37 SICE. “Honduras: Exports to Partner Countries 1980–2002”, *SICE*, 2005. http://www.sice.oas.org/tradedata/HND_e.asp.

38 Alcides Hernández, *Del reformismo al ajuste estructural* (Tegucigalpa: Editorial Guaymurás, 2007), 75.

39 *Ibid.*, 60.

adoptadas en los 90, se volvieron la norma en Honduras. Incluso mientras las condiciones económicas locales declinaban, la élite trasnacional continuó beneficiándose de las presuntas medidas de austeridad dentro de Honduras. “Crear un buen ambiente para la inversión significa crear un ambiente hostil a la clase trabajadora”, afirmó Yadira Minero, del Centro para los Derechos de la Mujer (CDM) en Honduras, durante una entrevista que le hice en San Pedro Sula. “La inversión extranjera no es nuestra salvación”.

La desmilitarización comenzó en esa época, con apoyo del sector privado y como resultado del hecho de que la militarización se había vuelto “innecesaria e improductiva para los proyectos trasnacionales” cuyos promotores se sentían constreñidos por el ejército.⁴⁰ “En los años 90, sucesivos gobiernos de Honduras tomaron medidas para reducir el poder del ejército. El servicio militar obligatorio fue abolido, la policía y muchas empresas estatales fueron retiradas del control militar, y —tras la ratificación de reformas constitucionales en 1999—, el ejército fue subordinado a un ministro de Defensa civil”.⁴¹ Los recortes militares fueron en parte una respuesta al contexto geopolítico cambiante en Centroamérica durante ese periodo. El financiamiento estadounidense al ejército hondureño empezó a disminuir.⁴² Los movimientos revolucionarios en Guatemala y El Salvador ya habían sido violentamente reprimidos, y se escribieron y firmaron tratados de paz.

Cuando el huracán Mitch golpeó Honduras en octubre de 1998, 11,000 personas murieron y dos millones perdieron su hogar.⁴³ Mitch se usó como excusa para cambiar las leyes, incluida la Ley de Minería, con el fin de mejorar las condiciones para la inversión extranjera directa. No obstante, Honduras pudo suspender los pagos de una deuda de 4.4 mil millones de dólares (equivalente al 46 por ciento de su presupuesto anual) tras el desastre, “esta reestructuración de la deuda de Honduras y la obtención de préstamos adicionales requirió que el gobierno [de Carlos Flores Facussé] emprendiera políticas de ajuste estructural con la promesa de reducir la pobreza”.⁴⁴

40 Robinson, *Transnational Conflicts*, 130.

41 Meyer, “Honduras-US Relations”.

42 Mark J. Ruhl, “Redefining Civil-Military Relations in Honduras”, *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 38, no. 1 (Spring, 1996): 49.

43 Booth, Wade y Walker, *Understanding Central America*, 135, 145.

44 *Ibid.*, 135, 145.

La oligarquía hondureña y el golpe de 2009

Había una creciente desigualdad económica y el descontento social iba en aumento cuando subió a la presidencia Manuel “Mel” Zelaya Rosales, miembro del Partido Liberal, en noviembre de 2005. Un golpe de Estado el 28 de junio de 2009 lo removió de la presidencia. A lo largo de su presidencia pudo haber sido considerado en lo político como un moderado. Aunque sí hizo concesiones: impuso una moratoria en nuevos acuerdos mineros controversiales, propuso un plebiscito sobre la reforma constitucional, aumentó el salario mínimo y el sueldo de los maestros, y recortó las colegiaturas de la escuela primaria. Zelaya pertenece a una familia privilegiada, trabajó en las industrias maderera y agrícola, y después en el gobierno antes de llegar a presidente. De hecho, Adolfo Facussé, uno de los partidarios del golpe, declaró a AP después del golpe que “Mel Zelaya es uno de nosotros y, bueno, solo perdió el control. Pero la gente piensa que es un peón de [Hugo] Chávez y que la lucha es contra Chávez”.⁴⁵

La presidencia de Zelaya comenzó en un periodo álgido de protesta y resistencia por parte de los movimientos sociales hondureños, que estaban infelices con las políticas que empobrecieron a tantas personas. Según la valoración de *The Economist* del primer año presidencial de Zelaya, “las tensiones sociales contenidas se han traducido en alrededor de 200 manifestaciones desde que empezó este gobierno, y se corre el riesgo de que haya más en el futuro”.⁴⁶ Finalmente, Zelaya empezó a conceder más y más terreno a los movimientos populares. Darío Euraque, un escritor e historiador hondureño, me explicó que “por primera vez en la historia hondureña del siglo XX, y de hecho también del siglo XIX, tienes un presidente, aún con todos sus fracasos y problemas y fallas que la oposición repite, pero el hecho es que este presidente, que proviene de las élites de Honduras, desarrolló no solo un discurso sino una serie de políticas que cuestionaron fundamentalmente el sistema político de Honduras”.

Los pasos de Zelaya hacia una asamblea constituyente se toparon con una fuerte oposición de las élites hondureñas. El significado implícito en una *Constituyente* no se les escapó a miembros de la mayoría pobre, muchos de los cuales veían el cambio de la constitución como el comienzo del cambio sistemático necesario para hacer al país más equitativo. El ejército sacó a

45 Morgan Lee y Alexandra Olson, “Honduran Coup Shows Business Elite Still in Charge”, The Associated Press. Agosto 6, 2009, <http://www.utsandiego.com/news/2009/Aug/06/lt-honduras-coup-elite-backlash-080609/>.

46 Economist Intelligence Unit, “Honduras Politics: Mixed Report Card for Zelaya”, *The Economist* (Mayo 10, 2007).

Zelaya de su casa y lo llevó por aire a Costa Rica por la mañana del 28 de junio, el día en que estaba programada una votación preliminar sobre la reforma constitucional. Euraque considera que Zelaya provocó la crisis del ya precario sistema político bipartidario al abrir la posibilidad de una asamblea constituyente.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) sacó un comunicado de prensa al día siguiente del golpe, declarando, “Lo que pasó hoy [sic] no fue el cambio de un presidente por otro; hoy se defendió el respeto a la Constitución, las leyes nacionales y el institucionalismo, en un marco de unidad nacional”.⁴⁷ La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) también emitió un comunicado en apoyo al golpe, afirmando que el suceso marcaba un regreso a la constitucionalidad. “El presidente Zelaya provocó con esta actitud una ruptura en el Estado de Derecho, y como consecuencia, es el mismo expresidente Zelaya quien provocó un golpe de Estado al ignorar y desobedecer la autoridad de la judicatura al ostentar los poderes presidenciales”.⁴⁸ La Asociación Hondureña de Manufactureros (AHM) proveyó una enorme bandera de Honduras y playeras blancas a los que salieron a las calles a participar en marchas sin precedentes a favor del golpe en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En una entrevista poco tiempo después del golpe, Euraque dijo “Nunca en la historia de Honduras habíamos tenido una movilización como la de las playeras blancas... Parte de la manera para ver qué tan nuevo fue, es que ni siquiera tenían una cultura de la movilización, de la resistencia, y mucha de su música, sus pancartas y artículos... ni siquiera eran locales. La mayoría eran prestadas de Venezuela, de los cubanos estadounidenses, mucho estaba en inglés, salpicado de frases en inglés, etcétera, y con mucha producción, las pancartas y todo lo demás”.

El golpe de 2009 fue distinto a los golpes previos en la historia del país, que generalmente fueron realizados bajo presión de Estados Unidos o por el ejército para defender sus intereses. En esta ocasión una parte importante de la élite hondureña, en específico la élite transnacional representada por personas como Camilo Atala, Jorge Canahuati y la familia Facussé, así como organizaciones como la ANDI, AHM y COHEP, animaron al ejército (algunos podrían decir que lo manipularon) para que sacara a Zelaya de su residencia privada. A pesar de que fue muy claro para los observadores de todo el espectro político que las fuerzas armadas violaron la Constitución

47 COHEP, “Press Release”, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Junio 29, 2009, <http://narcosphere.narconews.com/userfiles/70/PressReleaseJuneCohep.2009.pdf>.

48 ANDI, “Comunicado: ¿Golpe de Estado? Manuel Zelaya Rosales ya lo había llevado a cabo”, Asociación Nacional de Industriales de Honduras, julio 1, 2009, <http://nacerenhonduras.com/2009/06/golpe-de-estado-manuel-zelaya-rosales.html>

al llevar a Zelaya a Costa Rica, la élite empresarial y el ejército hondureño, junto con algunos miembros de la judicatura, el Congreso y la iglesia católica insistieron en que el golpe no había interrumpido la democracia del país. Esto también difiere de los golpes previos en Honduras, que fueron operaciones militares patentes en las que los líderes no movilizaron a la población civil para aparentar que estaban cumpliendo un mandato democrático.

Viajé por Tegucigalpa seis meses después del golpe, y me llamó la atención la abundancia de graffitis contra los “turcos” —una manera popular de referirse en Honduras a los poderosos empresarios de origen árabe. También había pintas antisemitas dirigidas contra el puñado de familias judías que hay en la élite hondureña. COHEP ha declarado que el grafiti y las declaraciones públicas contra los “turcos” podrían tomarse como agresiones directas contra la comunidad empresarial de Honduras. “Tradicionalmente, el término ‘turco’ se ha asociado erróneamente con las personas de origen palestino y a los servicios y más específicamente al gran capital generado por ellas”.⁴⁹ Euraque afirma que la aversión hacia este grupo nunca se había hecho pública en el pasado, y que era efecto del papel de estas élites, formadas por algunas de las familias mencionadas antes, incluyendo los Facussé, Ferrari, Canahuati y Atala: “Lo que las élites básicamente decidieron hacer, y en especial el sector árabe que es, como dije, el sector más importante... Básicamente decidieron que no había otra salida que engañar al ejército para que pensara que lo que estaba en juego no era solamente defenderlos a ellos, sino defender a la nación contra Hugo Chávez”.

Desde que el golpe militar de 2009 quitó del poder al presidente Manuel Zelaya, el número de personas en la pobreza se ha incrementado significativamente en esa pequeña nación centroamericana. En otro viaje a Honduras en 2013, me hallé esperando al exministro de finanzas Hugo Noé Pino en el lobby —con aire acondicionado, por supuesto— de uno de los hoteles más elegantes del país. Llegó con apariencia fresca, a pesar de que yo sabía que llevaba muchos días trabajando sin parar, pues nos reunimos un par de días después de unas elecciones en las que él estuvo muy involucrado. Durante una larga y detallada entrevista sobre el estado de la economía hondureña, le pregunté a Noé cómo describiría a la élite del país. “Es una élite que ha diversificado sus inversiones, pero que tiene como característica principal el uso del Estado como un mecanismo o bien sea de acumulación directa o bien sea de facilitación de la acumulación. Una élite que no paga impuestos, o que los paga a niveles mínimos, y eso les representa una gran

49 COHEP, “Documento de Posición”, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Agosto 19, 2009, <http://narcosphere.narconews.com/userfiles/70/PositionPaper.pdf>.

ganancia, de tal forma que no es sorpresa ver en el coeficiente de Gini que el diez por ciento con más altos ingresos en Honduras controle el cuarenta y dos por ciento del ingreso nacional, y que el diez por ciento de ingresos más bajos únicamente reciba el cero punto diecisiete por ciento del ingreso nacional”. El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) sacó un informe a finales de 2013 que mostraba que Honduras se ha convertido en el país más desigual de Latinoamérica. La diminuta élite controla las maquilas, posee los medios y controla las telecomunicaciones, la banca y el sector energético.

Durante meses después del golpe, a diario se congregaron activistas en Tegucigalpa para marchar contra el cambio de gobierno y contra la facción de la élite percibida como responsable. La represión del gobierno contra los activistas antigolpe era intensa, e incluye aún detenciones, desapariciones, el uso de la tortura, la golpiza y asesinato de activistas sociales y ciudadanos. Entre junio y diciembre de 2009, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) documentó 708 violaciones a los derechos humanos, incluyendo el asesinato de 54 activistas. El 29 de noviembre de 2009, el gobierno de facto presidió las elecciones presidenciales programadas regularmente, que condujeron a la elección del líder del Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa. Almendarez, el doctor que alguna vez fue candidato a la presidencia, consideró las elecciones de 2009 un segundo golpe de Estado. “Nos enfrentamos a una situación que es muy delicada, donde hubo un golpe militar en el que se nombró a un presidente, y luego hubo un segundo golpe que fue la elección, la elección fraudulenta”. El movimiento de resistencia contra el golpe activamente promovió un boicot de las elecciones. “No hay duda de que hubo un fraude, porque fueron elecciones ilegítimas”, me dijo. La Organización de Estados Americanos no envió monitores, y muchos países de la región tardaron años en reconocer el gobierno del presidente Lobo. Canadá y EUA, sin embargo, rápidamente celebraron las elecciones como un regreso a la democracia.

Los rasgos característicos del gobierno de Lobo fueron la intensificación del programa neoliberal y de la militarización del país. Por ejemplo, en 2011 el gobierno aprobó la Ley para la Promoción y Protección de las Inversiones, que da a los grandes inversionistas certeza legal y garantías de que no tendrán aumentos de impuestos o demandas. La ley fue aprobada con un nombre en inglés, bajo el eslogan “*Honduras is Open for Business*”, con el pronóstico de beneficiar a más de 350 inversionistas extranjeros. Con esta ley, las empresas extranjeras pueden abrir una subsidiaria en cuatro días, y los megaproyectos valuados a partir de 50 millones de dólares tienen acceso a

un proceso acelerado de certificación, lo que les permite conseguir todos los permisos estatales y locales en menos de treinta días.⁵⁰ El gobierno de Lobo también sacó leyes que debilitan los derechos laborales y permiten a las empresas extranjeras comprar tierras y recursos pertenecientes a la nación.

A lo largo de la presidencia de Lobo, las iniciativas legislativas y ejecutivas progresivamente desvanecieron los límites entre la Secretaría de Seguridad, que controla a la policía, y el Ministerio de Defensa. Primero, la asignación de soldados a tareas policíacas, práctica iniciada durante el gobierno de Zelaya, se convirtió en la norma. Después, este uso de las fuerzas militares fue oficialmente aprobado. “[Lobo] ha desplegado al ejército para realizar operaciones conjuntas con la policía en muchas ocasiones, y a finales de noviembre de 2011, el Congreso Nacional de Honduras aprobó un decreto para permitir temporalmente que el ejército realizara redadas, arrestos, desarmara personas y actuara en contra de oficiales de policía involucrados en actividades criminales”.⁵¹ Lobo designó a Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como “El Tigre”, como jefe de la policía de Honduras en mayo de 2010. Bonilla, que estaba acusado de haber participado en escuadrones de la muerte, se convirtió en el “contacto del gobierno de EUA en Honduras para la guerra contra el narcotráfico”.⁵² Esta es la guerra financiada por CARSI, la cual volvió a tomar ímpetu en 2010, cuando los esfuerzos para combatir al narco se volvieron una prioridad en un país donde las instituciones del Estado y la legitimidad ya eran extremadamente débiles. Como en otros sitios, la guerra antidrogas proveyó una justificación poderosa para incrementar el número de soldados en las calles. En octubre de 2013, se desplegó el primer contingente de policías militarizados, llamado Policía Militar de Orden Público (PMOP). “La nueva policía militar está mejor armada que la policía civil que reemplazará en esta misión. Por ejemplo, estará equipada con rifles de asalto israelíes Galil ACE 21 con 35 rondas por cartucho, capaces de disparar 700 tiros por minuto”.⁵³ La policía y los soldados hondureños han sido entrenados por las fuerzas armadas colombiana y chilena, a partir de que la cooperación en seguridad ha aumentado entre Centro y Sudamérica.

50 Adrián Burgos Padilla, “Honduras: promoción y protección de la inversión”, julio 4, 2012, http://www.centralamericalink.com/es/Legales/Honduras_promocion_y_proteccion_de_la_inversion/.

51 Meyer, “Honduras-US Relations”, 13.

52 Alberto Arce, “AP Exclusive: Honduras Chief Denies Death Squads”, The Associated Press, Noviembre 2, 2013, <http://bigstory.ap.org/article/ap-exclusive-honduras-chief-denies-death-squads>.

53 Rosemary Joyce y Russell Sheptak, “Re-militarizing the Police: Turning the Clock Back in Honduras”, *Upside Down World*, Octubre 7, 2013, <http://upside-downworld.org/main/honduras-archives-46/4495-re-militarizing-the-police-turning-the-clock-back-in-honduras>.

Resistencia política vía LIBRE

En los años que siguieron al golpe de Estado, durante la presidencia de Porfirio Lobo, los hondureños atestiguaron el nacimiento de un nuevo partido político: LIBRE, por Libertad y Refundación, surgido en 2011 del acuerdo entre amplios segmentos de la resistencia y miembros del Partido Liberal opuestos al golpe. Zelaya, quien acababa de volver del exilio, se volvió líder del partido, y su esposa Xiomara Castro se convirtió en su candidata a la presidencia. LIBRE es un partido socialista democrático que le prometió al electorado superar el pasado y enfocarse en la salud y educación. Además, las fuerzas de movimiento social dentro del partido propusieron un “proyecto refundacional” que incluiría una nueva constitución.

Cinco años después del golpe, el día electoral en Tegucigalpa comenzó con un espíritu festivo de carnaval, una atmósfera extraña en una ciudad donde la gran mayoría padece pobreza extrema, extorsiones de pandillas, y una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Frente a cada casilla electoral, carpas de los varios partidos políticos ofrecían sombra y música a todo volumen para los jóvenes y voluntarios que andaban ahí. La policía, el ejército y la policía militar incógnita vigilaba a las multitudes mientras los coches que pasaban por ahí hacían escándalo con sus bocinas, y los pasajeros ondeaban banderas de Honduras y de los partidos políticos. Para Marta de Jesús Raudales Varela, que vive en una pequeña casa en lo alto de una empinada calle sin pavimento, fue un día desgarrador. En enero, su hijo Ángel Francisco Durón Raudales, un activista afiliado al partido LIBRE, había sido asesinado junto con otros cinco a una cuadra de su hogar en el barrio Las Ayestas.

Entrevisté a Raudales frente a su casa, en una terraza bajo la sombra de un árbol. Los tres activistas locales que nos llevaron a conocerla insistieron en quedarse cerca, pues creían que el fotógrafo que me acompañaba y yo habríamos corrido peligro de habernos quedado solos en la zona. “Los pusieron boca abajo como adorno, y dicen que les dijeron ‘pónganse boca abajo’ y se pusieron boca abajo, y los bolsearon a todos, para que dijeran que era un asalto, imagínate. Y ellos andaban enmascarados, por eso nadie los reconoció, porque todo el mundo miró”, dijo Raudales. Los asesinos les dispararon a los seis en la espalda y la cabeza mientras yacían boca abajo sobre la banqueta. Dos días después de la masacre, las pandillas callejeras desplegaron avisos y repartieron panfletos que advertían a la población que se impondría un toque de queda a las 7 p.m. Casi un año después de la masacre, nadie se atreve a mencionar la participación de las pandillas en

el asesinato por temor a las represalias. Raudales Varela, que es una abuela dura de roer, fue asaltada a punta de pistola cuatro veces en un solo año mientras volvía a casa caminando después de vender billetes de lotería a unas cuadras de su domicilio. Ella lloró discretamente en nuestra entrevista, y se secó los ojos con su delantal. Durón Raudales fue un trabajador de la construcción que organizó un comité local de base e hizo banderas para apoyar al partido LIBRE. Su madre cree que pudo haber sido atacado por su activismo político. “Sí voy a ir a votar en la tarde”, dijo. “Me siento mal hoy”. El asesinato de Durón Raudales fue uno de al menos 38 homicidios de personas activamente involucradas en campañas electorales previas a la elección de noviembre. Entre los partidos, el más afectado por la violencia fue LIBRE. La intensa violencia política refleja una tendencia general en Honduras, donde de acuerdo con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, la tasa de homicidios aumentó de 37 por cada 100,000 habitantes en 2004 a 77.5 en 2010 –la más alta en Latinoamérica por más de diez puntos. Para 2013 ya era la más alta en el mundo.

Los resultados oficiales publicados por las autoridades electorales dieron a LIBRE el 29 por ciento de los votos, y con ello, casi un tercio de los asientos en el Congreso. El Partido Nacional obtuvo 37 por ciento, los Liberales el 20 por ciento y casi un 14 por ciento para el nuevo Partido Anticorrupción. “Eso no tiene precedente”, dijo Noé con respecto a la ruptura del régimen bipartidario. La tarde después del día electoral, cientos de manifestantes con banderas rojas marcharon por las calles de Tegucigalpa en apoyo de Xiomara Castro, la mujer que ellos reconocían como la presidenta legítima del país. Al día siguiente, cientos de estudiantes salieron a protestar contra el fraude electoral, enfrentándose a policías y gas lacrimógeno. Un día más y la protesta estudiantil aumentó, en un *crescendo* de indignación que ha barrido el país entre acusaciones de compra de votos por parte del partido ganador, fraude electoral y asesinato sistemático de partidarios de la oposición. La elección del 24 de noviembre de 2013 estaba destinada a ser un momento significativo para Honduras, la primera vez desde el golpe militar apoyado por EUA en que los ciudadanos tendrían una oportunidad real de expresar su voluntad política.

A partir de entonces, todos los signos apuntan a una profundización de la guerra antidrogas enfocada a que el Estado mantenga el control sobre la gente y sus movimientos. Durante su discurso inaugural en enero de 2014, el nuevo presidente Juan Orlando Hernández dijo que aproximadamente 70 por ciento de los asesinatos en el país están ligados al narcotráfico. La realidad, sin embargo, es otra. De acuerdo con un informe

reciente realizado por organizaciones de derechos humanos, solo uno por ciento de los crímenes en Honduras son investigados por la policía.⁵⁴ Lo que Juan Orlando no quiere admitir es que un número importante de los asesinatos en Honduras son ataques política o ideológicamente motivados contra campesinos, trabajadores, activistas políticos, periodistas y personas sexualmente diversas.

Afuera de una sala de conferencias en el prestigioso Hotel Maya de Tegucigalpa, hablé con Rossana Guevara, una de las tres nuevas vicepresidentas de Honduras, en el día de su elección. Su argumento a favor de la presencia de tropas estadounidenses en Honduras fue tan franco que sería inaceptable en la mayoría de los países soberanos del mundo. “Tienen que combatirlo, ¿por qué vamos a ser víctimas cuando nosotros ni siquiera somos considerados como un gran mercado por el narcotráfico? El gran mercado es Norteamérica, entonces creo que tienen una responsabilidad histórica en apoyar el combate del narcotráfico, pero en apoyarlo verdaderamente, no solamente con cositas pequeñas”, dijo. El Pentágono está atendiendo al llamado, y hay nuevas bases militares de EUA en construcción en varias partes del país.

No obstante la nueva fuerza de oposición, el presidente Hernández está consolidando el *status quo*. De manera similar a las reformas recientes en México, se emprendieron grandes reformas al sector energético en Honduras inmediatamente después de las elecciones, antes de que el nuevo gobierno tomara el poder. “El Congreso actual aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica en un solo debate el 20 de enero, literalmente en la víspera de la transición del Congreso. La ley ordena la transformación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en una corporación privada y luego en compañías independientes de generación, transmisión y distribución –todo para mediados del 2015”.⁵⁵ Además, se comenzó a preparar la privatización de HonduTel, la compañía pública de telefonía, y se anunció un puñado de asociaciones público-privadas.

54 Kaitlin Owens, *Honduras: Periodismo bajo la sombra de impunidad* (Toronto: IHRP/Pen Canada, 2014), 7, defensoresenlinea.com/cms/documentos/Honduras_Periodismo_sombra_impunidad.pdf.

55 Sandra Cuffe, “Congress’ Last Stand: Privatizations among New Laws in Honduras”, *Upside Down World*, Enero 28, 2014, <http://upside-downworld.org/main/honduras-archives-46/4668-congress-last-stand-privatizations-among-new-laws-in-honduras>.

Control pandillero y asesinatos

Tegucigalpa, la bulliciosa capital de Honduras, es un ejemplo de cómo funciona el control moderno de la mafia en América. Durante el día hay mucha actividad en las calles, pero al caer la noche se quedan tenebrosamente vacías. Proliferan los taxis, que pueden ser usados colectiva o particularmente (a unos 50 centavos de dólar por viaje). Generalmente los taxistas son fuentes de información nada más para los periodistas más flojos, pero en esta ciudad es totalmente sensato averiguar sus puntos de vista. Por un lado, los taxistas son de los pocos habitantes dispuestos a hablar de las pandillas, pues se les exige que paguen cuotas, generalmente por semana, ya sea a la Mara Salvatrucha (MS-13), la Barrio 18 (M-18) o a ambas, que son las pandillas más importantes de la ciudad.

Cuando me encontraba sola en un taxi, le preguntaba al conductor de las cuotas. Todos me hablaban abiertamente, y decían que el efecto de no pagar era simple: la muerte. Conocí a un joven taxista que pagaba 200 dólares mensuales de extorsión, un pago semanal de 25 dólares a la M-13 y otro a la M-18. Me dijo que era más que lo que pagaba de renta al mes. Pero pagaba puntualmente, cada sábado, en los dos sitios de taxis en los que trabajaba. Por supuesto, los taxistas no son los únicos miembros de la sociedad hondureña que viven bajo el terror de las pandillas, pero son los únicos a los que conozco que tienen la privacidad necesaria para hablar de ello en sus lugares de trabajo. Las pandillas regularmente extorsionan a los pequeños y medianos negocios y a los trabajadores en todo Tegucigalpa y San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país. La gente casi no se atreve ni a insinuar que está siendo extorsionada, por medio a ser descubierta. Así que pagan e intentan salir adelante. Las grandes tiendas, cadenas estadounidenses de comida rápida y abarrotes, son las únicas que parecen librarse de pagar el llamado “impuesto de guerra” a las pandillas. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, en 2012 había un estimado de 12,000 pandilleros afiliados a la MS-13 y M-18 en Honduras.

Una buena cantidad de políticos, fiscales y policías están inmiscuidos en el negocio, y se llevan una tajada de las ganancias a cambio de no interferir con las actividades de las pandillas. Marvin Ponce, exvicepresidente del Congreso, dijo en 2011 que al menos el 40 por ciento de la policía hondureña está coludida con el crimen organizado. Un artículo de 2014 en el periódico hondureño dominante *El Heraldo*, explora las actividades ilícitas de la policía hondureña, y asegura que su participación en los negocios criminales se desarrolla bajo la supervisión de los altos mandos. “Estos servidores públicos

pusieron el poder, el uniforme y las armas que les dio el Estado para proteger a la ciudadanía al servicio de lo más oscuro del narcotráfico y del crimen organizado, en muchos casos contando con la complicidad y tolerancia de los altos mandos”.⁵⁶ Un informe policiaco interno que fue liberado a los medios vinculó a oficiales de diversos rangos al “narcotráfico, al crimen organizado, al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito, cometiendo un rosario de delitos como el sicariato, secuestro, asesinatos, asaltos bancarios, extorsión, venta de droga, narcomenudeo, robo de vehículos, robo a narcotraficantes, a diputados...”.⁵⁷

Los policías también son acusados de participar en escuadrones de la muerte y en crímenes de odio contra la comunidad gay y transgénero. Human Rights Watch señala que “de acuerdo con defensores locales de derechos, más de 70 miembros de la población lesbicogay, bisexual y transgénero (LGBT) fueron asesinados entre septiembre de 2008 y marzo de 2012. La presunta participación de miembros de la policía hondureña en algunos de estos violentos abusos es particularmente preocupante”. Además de la policía en la actividad criminal, “el ejército ha sido ligado al narcotráfico en Honduras desde los años 80, y reportes recientes sugieren que algunos sectores continúan participando en actividades ilícitas”.⁵⁸ Armas de uso militar como granadas, rifles de asalto y antitanques vendidas al ejército de Honduras han sido confiscadas posteriormente a narcotraficantes en México y Colombia.⁵⁹

La presión que la violencia de las pandillas y la policía ejerce en la gente pobre es muy intensa. En 2013, entrevisté a un hombre de 33 años debajo de un árbol junto a las vías del tren en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras esperaba un tren de carga que lo llevara al norte. Sólo me dijo su nombre de pila, Alexander, que quiso respaldar mostrándome una copia maltratada de su credencial de estudiante. Alexander había dejado un trabajo de tiempo completo en una maquiladora en San Pedro Sula, harto de pagar de su salario de 100 dólares a la semana el “impuesto de guerra” a los pandilleros. Otros que conocí en el camino reconocieron que en parte la razón por la que habían salido de Honduras era la violencia y la extorsión. Sin las remesas que

56 Redacción, “Honduras: Redes del narcotráfico penetraron a altos oficiales”, *El Herald*, Febrero 5, 2014, <http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Honduras-Redes-del-narcotrafico-penetraron-a-altos-oficiales>.

57 Redacción, “Honduras: La lista de policías vinculados a delitos es escalofriante”, *El Herald*, Febrero 5, 2014, <http://www.elheraldo.hn/content/view/full/217348>.

58 Meyer, “Honduras-US Relations”, 11.

59 G. Ramsey, “Cable: Honduran Military Supplied Weaponry to Cartels”, *InSight Crime*, Abril 25, 2011, <http://www.insightcrime.org/news-analysis/cable-honduran-military-supplied-weaponry-to-cartels>.

los migrantes hondureños que trabajan fuera del país (sobre todo en EUA) envían a sus hogares, la pobreza sería mucho peor, de acuerdo con Noé, el exministro de finanzas. En 2012, afirmó, los migrantes enviaron a casa alrededor de 2.8 mil millones de dólares; en 2013, 3.15 mil millones. “Ese es casi el equivalente a dos tercios del presupuesto del gobierno central”, me dijo. Actualmente más de 700,000 personas de origen hondureño viven en Estados Unidos; sólo dos de cada diez son ciudadanos estadounidenses. Esto nos remite a cómo la discriminación enfrentada por esta comunidad en EUA ha conducido a Honduras al conflicto en el que se encuentra hoy.

La actividad pandillera en Honduras tiene una historia que se remonta al interior de Estados Unidos. Personas deportadas a Centroamérica de EUA iniciaron tanto la MS-13 como la M-18. El número de pandilleros en ciudad como es Tegucigalpa creció dramáticamente a partir de que en 1996 se emprendiera la política de la era Clinton del doble castigo (deportar a los migrantes indocumentados después de haber cumplido una sentencia en la cárcel, aunque hubieran pasado casi todas sus vidas en Estados Unidos) La imposición del sistema penitenciario a la juventud encarcelada, seguido de la deportación, y aunado a la pobreza agudizada, el desempleo y el crecimiento descontrolado de las áreas urbanas en Honduras, ha alimentado las filas de las pandillas. Esto se hace patente al comparar la afiliación a pandillas entre Honduras, Guatemala y El Salvador por un lado, y Nicaragua por el otro. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EUA (GAO) reporta que “Nicaragua tiene un número significativo de pandilleros, pero no tiene grandes cantidades de miembros de la MS-13 o M-18, tal vez debido al hecho de que Nicaragua ha tenido una tasa de deportación de Estados Unidos mucho más baja que los países del ‘triángulo norte’”.

Aunque mucho mejor consolidadas que muchos cárteles, las pandillas callejeras con frecuencia son erróneamente vistas como ligas juveniles de las organizaciones del narco en México, como Los Zetas. Aquí está un ejemplo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen: “Los Zetas tienen una escasez crónica de mano de obra, por lo que pueden reclutar *mareros* prometedores, pero a nivel institucional lo más probable es que continúen utilizando a las *maras* instrumentalmente”. Al estar en Tegucigalpa, tratando de entrevistar a las personas sobre la violencia, noté intrigantes semejanzas entre las áreas controladas por las pandillas y lugares presuntamente controlados por Los Zetas: víctimas y residentes acallados por el terror, el cobro regular de extorsiones, la complicidad de la policía local en el crimen, y vigilancia en cada esquina. Pero las Maras tienen una historia mucho más larga que la de un grupo como Los Zetas, que ha existido

como una organización independiente desde hace menos de una década. De muchas maneras, parece que, en lugar de que Los Zetas intenten formar pandilleros dentro de su organización, son las pandillas centroamericanas las que les proveen un modelo de control territorial y una estrategia económica a largo plazo que no esté sujeta al trasiego de drogas. Ahora bien, las pandillas también están involucradas en el narcotráfico; la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen reportó en 2012 que los narcotraficantes en la región de Aguán, presuntamente contrataban miembros de la Mara 61 para proteger sus operaciones.

En cualquier caso, son los pandilleros y narcotraficantes los presuntos culpables de la violencia en Honduras, no obstante que las condiciones económicas y las actividades de las fuerzas de seguridad del Estado son factores muy importantes en la inseguridad. “Al culpar a la juventud urbana, las pandillas y los pobres, el Estado impide otras posibles definiciones de violencia que puedan incluir críticas de las políticas que perpetúan la violencia estructural implícita en la desigualdad extrema”, escribe la académica Sarah England. “Al negar cualquier significado social o político en las actuales tasas y tendencias criminales, el Estado puede aplicar políticas del tipo ‘mano firme’, que permiten el arresto de jóvenes que parecen ser pandilleros sin un procedimiento adecuado, sin que la sociedad perciba esto como un regreso al terrorismo de Estado”.⁶⁰ Aunque England escribía específicamente sobre El Salvador, su análisis también es aplicable a Honduras y Guatemala. El gobierno de Honduras ha adoptado una legislación antipandillas que permite a la policía hacer arrestos preventivos basados en las redes sociales de las personas, en el hecho de que tengan un tatuaje o con base en muchos otros criterios subjetivos dejados a la discreción de policías, fiscales y jueces. “Pasamos la ley ‘anti-maras’. Realmente es una ley de asociación ilícita. En términos comunes, se trata de conspiración para cometer un crimen”, declaró Óscar Álvarez, exministro de seguridad de Honduras, a InSight Crime. El 23 de octubre de 2013, la policía militar hondureña allanó la casa de Edwin Espinal, miembro del partido LIBRE y un conocido activista comunitario. La orden de allanamiento autorizaba a la policía a entrar a casa de Espinal en busca de drogas y armas (ninguna fue hallada), y mencionaba específicamente una bandera de LIBRE en su residencia. Los activistas criticaron al gobierno por usar las drogas como pretexto de la persecución política, y usaron el lenguaje usado en la orden judicial para fundamentar sus acusaciones.

60 Sarah England, “‘Worse than the War’: Experiences and Discourses of Violence in Postwar Central America”, *Latin American Perspectives* 39, no. 6 (Noviembre 2012), 246–247.

Violencia rural y control social

Al recorrer las carreteras de Honduras, admiraba constantemente las grandes áreas de bosque y los caudalosos ríos, que contrastan dolorosamente con la extrema pobreza de las áreas urbanas. En algunas zonas rurales del país hay más calma y la violencia y los asesinatos se consideran un problema urbano. En otras, sin embargo, sobre todo donde las fuerzas de seguridad del Estado y las tropas de EUA han sido desplegadas con el supuesto propósito de combatir al narcotráfico, hay una atmósfera de guerra. “El narcotráfico ha sido un pretexto para militarizar porque en realidad no han bajado los niveles de tráfico, de inversión debido a la narcoactividad, por ejemplo en Mosquitia, hoy más que nunca hay bases militares, ocupación gringa, con el pretexto del narcotráfico”, me dijo Cáceres, la líder de COPINH, durante una breve entrevista en Siguatepeque, una pequeña ciudad al centro de Honduras. Para Cáceres y otros involucrados en la lucha contra la perforación petrolera, las compañías mineras, los proyectos hidroeléctricos, las granjas eólicas, la maderería a gran escala y la explotación de madera petrificada, la militarización de Honduras conlleva consecuencias directas y fatales. Tres de sus cuatro hijos viven fuera del país por temor a la inseguridad. Cuando platiqué con Cáceres a fines de 2013, ella estaba manteniendo un perfil bajo, tras haber sido detenida por cargos falsos, en lo que ella describió como un intento de evitar que participara en movimientos de resistencia. Fue liberada después de que la orden de captura pendiente fuera retirada.

La asistencia de EUA a Honduras en el ámbito de la guerra antidrogas ya ha tenido consecuencias fatídicas, incluyendo la masacre de 2012 en Ahuas, en la región Mosquitia de Honduras, cuando le dispararon y asesinaron a cuatro indígenas desde un helicóptero, en un incidente supervisado por la DEA estadounidense. Nadie niega que haya pistas de aterrizaje clandestinas que los narcotraficantes usan en la región para transportar sus mercancías, pero esta actividad tradicionalmente se ha llevado a cabo al margen de la vida cotidiana de los habitantes de la zona, que viven de la pesca, la peligrosa práctica del buceo para atrapar langostas, y la agricultura. Los tiempos están cambiando, pues los narcotraficantes cada vez juegan un papel más activo en la expulsión de la gente de sus tierras. Según dos periodistas que visitaron Mosquitia en 2013, los narcotraficantes están en la vanguardia del despojo, forzando a la gente a irse de sus tierras. “En nuestras últimas visitas a la región, las dinámicas de narcodespojo eran imposibles de ignorar. Los residentes contaban historia tras historia de ser obligados –con dinero o violencia– a renunciar a sus tierras. En la población Miskitu de Brus Laguna

(con 11,000 habitantes), por ejemplo, pocos aún cultivan sus campos, pues la mayoría de las tierras agrícolas fueron compradas por el narco. Si los locales quieren pescar en la laguna del pueblo, deben pedirle permiso a los narcos. En otra comunidad, un narcotraficante presionó a un propietario indígena a que le vendiera su tierra. Se negó y fue asesinado por sicarios. Su aterrorizada esposa vendió entonces la tierra a muy bajo precio. En la Reserva de la Biósfera de Río Plátano, comunidades enteras han dejado sus tierras debido a las amenazas de los narcos”.⁶¹

Un reporte escrito por activistas solidarios de EUA que visitaron Ahuas poco después de la masacre dice: “En general, la política de militarización aumentada de las leyes antidrogas se percibe negativamente en la región de Mosquitia, y pone a las comunidades vulnerables por su aislamiento y extrema pobreza en un riesgo mucho más grande. Esto es particularmente alarmante en una época donde hay más interés por explotar los recursos naturales que las comunidades Miskitu defienden”.⁶² Tras el golpe de Estado, se construyeron seis bases militares en Honduras. “Una de ellas justo en la Mosquitia donde el presidente Chávez, que en paz descansa, pensaba trabajar con Honduras la extracción de petróleo, además de que en esta zona tenemos gas natural”, dijo Carla García de la Organización Fraternal Negra Hondureña, (OFRANEH) en un panel auspiciado por el Centro para los Derechos Constitucionales.⁶³ “Entonces esta comunidad indígena, simple y sencillamente, es como una piedra en el zapato para poder continuar con los trabajos de regalar esta tierra. Estados Unidos ha negado siempre la participación de sus soldados en esa masacre, pero nosotros somos victimizados porque somos pobres, porque somos indígenas, y porque estamos justo en el camino de las inversiones”.

Los movimientos de campesinos e indígenas son los sectores más firmes de la resistencia en Honduras, y se niegan a ceder incluso ante los asesinatos, las amenazas y encarcelamientos. La Chicago Religious Leadership Network on Latin America publicó un informe que documenta 229 asesinatos políticamente inspirados durante la presidencia de Porfirio Lobo.⁶⁴ Además,

61 K. McSweeney y Z. Pearson, “Prying Native People from Native Lands: Narco Business in Honduras”, *NACLA*, Febrero 4, 2014, <http://nacla.org/news/2014/2/4/prying-native-people-native-lands-narco-business-honduras>.

62 Annie Bird y Alex Main, “Collateral Damage of a Drug War”, *Center for Economic and Policy Research*, Agosto 2012, <http://www.cepr.net/documents/publications/honduras-2012-08.pdf>.

63 “The Drug War: Policing and US Militarism at Home and Abroad”, event, Febrero 20, 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=xD7JaAwSh30> 43:00

64 CRLN, “229 Politically Related Murders in Honduras Under President ‘Pepe’ Lobo”, *Chicago Religious Leadership Network on Latin America*, Noviembre 20, 2013, retrieved Marzo 11, 2014, http://www.crln.org/story/229_Murders_Honduras.

organizaciones campesinas locales calculan que más de 3,000 campesinos en Honduras enfrentan cargos criminales relacionados con disputas por la tierra. “Después del golpe de Estado, el congreso y el gobierno de facto han implementado una serie de leyes y mecanismos para perseguir y para criminalizar a las organizaciones y a todos los espacios que hacemos lucha territorial, a los que han tomado las organizaciones como alternativa para enfrentar a las grandes transnacionales y los grandes megaproyectos”, le dijo Aurelio Molina de la COPINH a una delegación de observadores electorales de EUA. Además de las hordas de soldados que recorren los caminos rurales y carreteras secundarias, una característica notable del campo hondureño es el número de ríos y la cantidad de agua dulce disponible: según Molina, el gobierno de Honduras ha otorgado un total de 800 concesiones mineras y 70 concesiones más para manejar presas en áreas rurales.

Una de las más observadas batallas rurales en Honduras se está desarrollando en los exuberantes valles selváticos al este del país, donde una comunidad indígena no está dispuesta a suspender su lucha contra una presa. “Las comunidades de ahí, el pueblo Lenca, han tomado la decisión de defender el sagrado río Gualcarque de la construcción de un proyecto hidroeléctrico llamado Agua Zarca” dijo Molina, que junto con Cáceres y otra persona enfrentan cargos criminales por sus esfuerzos para apoyar la lucha de la comunidad contra la presa. Tomás García fue asesinado y otro salió herido cuando el ejército abrió fuego contra el bloqueo de la comunidad en julio de 2013. En marzo de 2014, la hermana de García fue atacada y herida por hombres con machetes, así como su esposo e hijo que corrieron a defenderla. Cuando hablamos en noviembre de 2013, Molina me dijo que temía que lo peor aún estaba por venir, pues “Han habido reuniones de alto nivel y han determinado que después de las elecciones nos van a sacar vivos o muertos de Río Blanco para que se construya el proyecto eléctrico”.

Mientras tanto, en la fértil región de Aguán a lo largo de la costa norte del país, las organizaciones campesinas han ocupado 26 granjas en 3,000 hectáreas de tierra. Aguán es un frondoso valle fluvial que desemboca en el Mar Caribe. En 2010, más de 2,000 familias campesinas empezaron a ocupar tierras concedidas a ellos por medio de un programa de gobierno. Cuando visité la zona en noviembre de 2013, 113 de los ocupantes habían sido asesinados. Entramos a La Confianza, una de las ocupaciones más grandes, después de una breve revisión por parte de guardias comunitarias en una calurosa y húmeda tarde entre semana. Había un aire tranquilo en el asentamiento, donde los residentes empezaban a levantar casas de concreto junto a sus chozas originales de muros y techo de palma. Los miembros de

la comunidad estaban trabajando para formar una cooperativa para cultivar las frutas de las palmas; toda esta organización autónoma de campesinos marginados ha incomodado al magnate del aceite de palma, Miguel Facussé. La región está militarizada, en parte, bajo el pretexto de que el gobierno necesita combatir al narcotráfico. No es raro (ni ilegal) ver a civiles portando armas en Honduras, pero en el departamento de Colón, donde se localiza Aguán, se introdujo una nueva ley en agosto de 2012 que prohíbe la portación de armas, pero no aplica a la policía, los soldados o los guardias de seguridad privada. El papel de la seguridad privada no puede subestimarse: el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de las Naciones Unidas recalca que los guardias de seguridad privada en Honduras superan numéricamente a los policías en una proporción de cinco a uno.

“Las fuerzas de seguridad aplican la ley de manera injusta, criminalizando a los campesinos al tiempo que protegen a los empresarios locales, algunos acusados de participar en el narcotráfico”, según un reporte de Rights Action, un grupo de justicia social con una larga historia de apoyo a las luchas locales en Centroamérica.⁶⁵ En esta región hay una línea borrosa entre policías, militares, guardias de seguridad privada, paramilitares y miembros de escuadrones de la muerte.

Una tarde cálida en La Ceiba, parte de la misma región atlántica usada por los narcotraficantes, me encontré sentada en un amplio sofá frente al escritorio de madera del segundo comandante de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC). Mientras el inspector Miguel Enrique Suazo se quejaba de que sus hombres no tenían suficientes vehículos y equipo para realizar su trabajo, buscaba una y otra vez en la misma pila de papeles. Aunque ambos sabíamos que la violencia relacionada con el narcotráfico se había disparado en la región, casualmente me dijo que el narco y la violencia no eran un asunto muy grave. Conforme se acercaba el final de nuestra entrevista, se inclinó hacia adelante y me dijo “Si alguien sale diario a beber en las calles, y tiene una vida bohemia, no es raro que le vaya a pasar algo malo”. Me pareció que sus palabras implicaban que a la policía no le molestaría si los llamados ‘bohemios’ son asesinados en las calles. Tal vez él mismo se dio cuenta, pues hizo una pausa y añadió: “No es que esté justificando los asesinatos”.

También existen fuerzas especiales hondureñas, organizadas como parte del 15º Batallón y la Fuerza Tarea Xatruch III, y algunas de las cuales han sido

65 Annie Bird, “Human Rights Violations Attributed to Military Forces in the Bajo Aguan Valley in Honduras”, Febrero 20, 2013, http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_130220_Aguan_Final.pdf, 4.

entrenadas por Estados Unidos, aunque los colombianos son los entrenadores principales de policías y guardias de seguridad privada en Honduras. “No se sabe si solo visten el uniforme o son policía, o son militares o son delincuentes”, dijo Yoni Rivas, líder del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), que obtuvo un asiento en el Congreso con el partido LIBRE. Lo entrevisté en una oficina de cemento de un solo cuarto, con el aire acondicionado trabajando al tope contra el calor húmedo. Rivas me contó que alrededor de 60 hombres con uniformes militares secuestraron a uno de sus camaradas. Después, German Alfaro Escalante, que era entonces comandante de la Fuerza Tarea Xatruch III, afirmó que los secuestradores eran parte de un grupo criminal. La hibridación entre soldados, policías y agentes de seguridad privada es común en la zona. De acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de las Naciones Unidas, el día en que cinco personas fueron ejecutadas en el rancho El Tumbador, “Miembros del 15° Batallón fueron vistos con guardias de seguridad de Orión en el sitio, y se reportó que algunos de ellos se quitaron el uniforme militar y se pusieron el uniforme de Orión antes de que empezara la ejecución”.⁶⁶

Además de los ataques a miembros de las ocupaciones de tierras en Ahuán, las fuerzas de seguridad son acusadas de participar directamente en el narcotráfico. Los locales dicen que el ejército participa en contrabando de drogas a lo largo de la costa. “En octubre estábamos organizando una conferencia de prensa, y el mismo día una avioneta supuestamente cargada con drogas aterrizó de emergencia en una pista clandestina en una de las propiedades de Miguel Facussé. Luego 25 hombres vestidos con trajes militares, entraron en cinco vehículos, recogieron las drogas y quemaron la avioneta”, dijo Rivas, quien ha sobrevivido cinco intentos de asesinato. Los reportes de la participación militar en el narcotráfico se remontan a 1978, e investigaciones de la DEA hallaron oficiales del ejército que participaban en el tráfico, incluido un caso en que se transportaron 50 toneladas de cocaína durante un periodo de 15 meses.⁶⁷ Los gobiernos de EUA y Honduras hicieron muy poco para castigar al ejército, temiendo que una crisis pudiera afectar el papel de ejército hondureño en el apoyo de las Contras de Nicaragua.⁶⁸ EUA empezó a usar la base aérea Soto Cano en Honduras central a principios de los 80, y para seguir teniendo acceso a la base continuó

66 UN Working Group on Mercenaries, “Report of the Working Group on the Use of Mercenaries as a Means of Violating Human Rights and Impeding the Exercise of the Right of Peoples to Self-determination on its Mission to Honduras”, *UNHR*, 18–22 Febrero 2013, 13.

67 Michael R. Fowler, “Honduras”, in *Bribes, Bullets and Intimidation*, eds. Julie Bunck y Michael Fowler (University Park, PA: Penn State University Press, 2012), 265.

68 *Ibid.*, 273.

financiando al ejército hondureño, a pesar de saber de su participación en el narcotráfico. Hasta hoy, “los oficiales del ejército y sus familias inmediatas y extendidas han formado una poderosa élite inmune al Estado de Derecho. En consecuencia, han tenido una posición privilegiada para trabajar con los traficantes, proteger cargamentos, transportar drogas en valijas diplomáticas, y funcionando como engranes vitales en los esquemas de transportación”.⁶⁹

Entre la confusión y proliferación de actores armados en Honduras están los soldados y fuerzas especiales estadounidenses. El Comando Sur de Operaciones Especiales de EUA opera en Aguán y en otras partes del país, y la Fuerza Aérea de EUA tiene la base regional estratégica del Comando Sur en Soto Cano, cerca de Tegucigalpa. Hay un puñado de bases norteamericanas en construcción en el país, y los fondos de CARSI han estimulado los esfuerzos antidrogas en Honduras bajo la supervisión estadounidense. En 2014, el Departamento de Estado solicitó un poco más de 54 millones de dólares para Honduras, 5 millones de los cuales estaban específicamente destinados a financiar al ejército y a los programas de entrenamiento militar. Todos estos factores en conjunto —la violencia política, pandillas, guerra antidrogas, presencia militar estadounidense y el debilitamiento de los derechos civiles— han creado un laberinto de militarización e impunidad que finalmente produce más obstáculos para los hondureños que habitan las ciudades y para los campesinos que se organizan para asegurar su capacidad de obtener agua potable, madera de los bosques y otros recursos. También socava cualquier intento de emancipación política y afecta desproporcionadamente a los sectores más humildes de la sociedad.

⁶⁹ *Ibid.*, 307.

Conclusión: Pensar desde la paz en tiempos de guerra

Este libro es un proyecto en desarrollo, y el proceso de documentarlo y escribirlo me ha dejado con más preguntas que las que tenía cuando comencé este recorrido hace casi cuatro años. El texto representa mi mejor intento de presentar a los lectores los sistemas que operan a la hora de introducir una guerra a lo largo del hemisferio americano bajo el pretexto de la lucha antidrogas. El capitalismo antidrogas difiere de previas iniciativas de carácter internacional y represivo porque se desenvuelve junto con políticas globales, esquemas de ayuda legislativa e internacional cristalizados en el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica y otras iniciativas estatales. A lo largo de este libro, arguyo que existen tres mecanismos principales por medio de los que la guerra contra el narco sirve a los intereses del capitalismo neoliberal: por medio de la imposición de cambios en la legislación y la aplicación de la ley, por medio de la militarización formal, y de la paramilitarización consecuente. La violencia y el desplazamiento forzado producidos por la guerra antidrogas afectan principalmente a las personas humildes, la clase trabajadora y los migrantes, con frecuencia en áreas ricas en recursos naturales o geográficamente estratégicas. Otros impactos centrales de la guerra antidrogas incluyen la restricción de la movilidad y duras limitaciones a la libertad de expresión en los medios o por medio de actividades y manifestaciones públicas. Las ideas que me han guiado en el proceso de entender, teorizar y escribir sobre el capitalismo antidrogas se han formado a través de años de conversaciones y decenas de viajes como reportera a regiones afectadas por la guerra antidrogas. No son exclusivamente mías, sino que pertenecen a las muchas personas que han compartido conmigo su tiempo y espacio durante estos años.

Conforme me acercaba al final de este libro en la primavera de 2014, me encontré con que cada vez conocía más personas que compartían un análisis similar al que presento en estas páginas. El viaje que hice a Colombia en febrero de 2014 me hizo evidente el impacto de la guerra antidrogas y del Plan Colombia en ese país. Las personas que entrevisté articularon con claridad las conexiones entre el Plan Colombia y la preparación de las

condiciones para la inversión extranjera directa y las industrias extractivas. Unos meses después, durante un viaje a Nuevo Laredo, México, conocí a un hombre joven que me habló de cómo él pensaba que la violencia ahí estaba relacionada con la posible extracción de gas a través del *fracking* en la zona. Me dijo que era la única explicación que él y sus compañeros podían encontrar para el modo en que las cosas se habían deteriorado en la región fronteriza justo al sur de Laredo, Texas, donde se encuentra el depósito de esquisto bituminoso de Eagle Ford. Y fue la última entrevista que realicé para el libro, con Carlos Fazio, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la que más me ayudó a sintetizar mis propias ideas sobre el tema. Bajo la luz fluorescente de un auditorio universitario, Fazio me compartió su visión de lo que la guerra antidrogas representa en México. “Yo creo que lo que se encubre tras esta guerra es una fase del imperialismo actual que tiene que ver con el despojo; es una forma de neocolonialismo que tiene que ver con la apropiación de tierra y territorios, y dentro de los territorios, de la tierra como mercancía, la tierra para abrirla a la agroindustria, para abrirla a la explotación de palma africana, maderas preciosas, pero también tiene que ver la tierra y el subsuelo con el tema de la minería”. Esta guerra se trata del control de la sociedad y el territorio mucho más que de la cocaína o la marihuana.

Sin embargo, las opiniones como la de Fazio continúan siendo minoritarias en México y otros países, mientras que el discurso mediático y los supuestos expertos en la guerra antidrogas se concentran casi exclusivamente en la violencia entre los cárteles y en los triunfos del Estado en el sometimiento de los criminales. La dicotomía entre el Estado y el crimen organizado que presentan los medios posiblemente es la mayor debilidad metodológica en los reportes periodísticos y análisis dominantes sobre la guerra antidrogas. Esta división presenta a las fuerzas de seguridad del Estado como actores legítimos bienhechores (proveedores de seguridad), y a los bien organizados y nefastos cárteles del narco como entidades totalmente separadas del Estado. La imagen del Buen Estado contra los Malos Narcotraficantes provee un marco dentro del cual los gobiernos pueden justificar el aumento en el gasto militar y los ataques contra civiles desarmados como necesarios para la seguridad nacional. La mayor parte de los trabajos periodísticos no le permite al público analizar los sucesos en su contexto, y en vez de mostrar las redes subyacentes, aísla como ‘elementos corruptos’ a las autoridades, soldados, banqueros o burócratas que son descubiertos como cómplices o protagonistas de las actividades de los grupos criminales. El teórico social Immanuel Wallerstein afirma que si los temas como la globalización y el

terrorismo “se definen en un tiempo y alcance limitados, tendemos a sacar conclusiones tan efímeras como los periódicos”.¹ Esto impide, según su análisis, que entendamos cómo estos temas y sucesos encajan dentro de un contexto mayor. No dudaría en agregar la guerra antidrogas al análisis de Wallerstein, y este libro es precisamente un intento de entender este tipo de guerra a lo largo del tiempo y desde una perspectiva analítica amplia.

Los límites entre los gobiernos y los grupos del crimen organizado son lo suficientemente imprecisos como para obligarnos a una revisión completa de las categorías utilizadas para explicar lo que está pasando en México. Un marco teórico alternativo para entender la guerra antidrogas no necesita ser revolucionario. Reconocer cómo y dónde los perpetradores de la violencia están ligados al Estado, así como entender cómo la impunidad estructural sirve para permitir el terror y la violencia ayudaría a clarificar la situación de las regiones afectadas por la violencia. Al hacerlo, podríamos empezar a librarnos de los atolladeros lógicos y éticos que se presentan al apegarse a la perspectiva dominante sobre la guerra antidrogas.

El discurso oficial en Colombia ahora hace énfasis en el hecho de que el país está en un proceso de pacificación, que los paramilitares se han desmovilizado, que el presidente Santos es un reformador en el tema de política sobre narcóticos, y que la guerra está prácticamente terminada. Mi investigación presentada en el capítulo sobre Colombia señala las inconsistencias de este discurso, pero sigue siendo un discurso difícil de refutar cuando los medios, los grupos de estudio, gobiernos y sectores de poder continúan promoviéndolo. Cuando viajé a Arauca para reportar la violencia en curso, me reuní con los líderes de una ocupación de tierra perteneciente al Ministerio de la Defensa colombiano; ellos viven en un contexto típico de guerra: “El problema que hay aquí en Arauca es que Arauca en Colombia es zona roja, y cualquier líder aquí que oriente a la gente, que al menos le enseñe a ir a una alcaldía, con eso ya dicen que es guerrillero, que es guerrillera, y lo persiguen hasta matarlo”, dijo John Carlos Ariza Aguilar, vicepresidente de la comunidad ocupada de Héctor Alirio Martínez. Sus palabras me remitieron a las funciones del terror en Guatemala, descritas por los escritores Gomís, Romillo y Rodríguez a principios de la década de 1980:

Con la dominación por medio del terror, además de la eliminación física de los que se oponen a los intereses del régimen, también se da una búsqueda del “control de un universo social, hecho posible por medio de la intimidación

1 Immanuel Wallerstein, *World-Systems Analysis: An Introduction* (Durham, NC: Duke University Press, 2004), ix.

inducida por actos destructivos... [y con] los actos de terror hay un impacto general en el universo social—a un nivel social y generalizado—, de una serie de presiones psicosociales que imponen un obstáculo a la posibilidad de la acción política”.²

Las palabras de Ariza Aguilar me recordaron también la explicación de Francisco Chavira de cómo los actos de terror realizados en palacios municipales de Tamaulipas tenían un mensaje poderoso para la población, el cual los instruía a no pedir transparencia a los gobiernos locales.

El terror estatal y paramilitar continúa utilizándose contra amplios grupos de la población de México, Colombia, Honduras y Guatemala, así como en regiones fuera del espectro de análisis de este libro. Los discursos oficiales han comenzado a enfocarse en la paz y la prosperidad; los medios dominantes de comunicación y los gobiernos quisieran hacernos creer que la paz ha sido alcanzada en Colombia y que las cosas se han calmado en México. Cualquiera que lo mira desde una perspectiva más amplia, como lo sugiere Wallerstein, se da cuenta de que un lugar como Ciudad Juárez, donde más de 10,000 personas fueron asesinadas en unos cuantos años, no se recupera tan fácilmente. Para empezar, los asesinatos no han desaparecido, sino que continúan siendo un problema serio. Luego están los miles de niños huérfanos por la violencia, así como las personas que perdieron a sus parejas y las madres y padres en duelo por la muerte de sus hijos. La casi absoluta impunidad con que se cometieron estos crímenes impiden que los amigos y familiares de las víctimas sientan que se ha hecho justicia y puedan seguir adelante. Aparte de esto, las condiciones sociales imperantes en Juárez no han cambiado, incluyendo la gran desigualdad en los servicios a las corporaciones transnacionales, la ausencia de oportunidades educativas y profesionales para los habitantes, y la falta de un sistema de transporte regular y seguro. Aunque Ciudad Juárez se convirtió en la capital mundial de los homicidios, hay muchos otros lugares donde la paz también es una promesa distante. Para Francisco Ramírez, el abogado sindical que investiga los vínculos entre el desplazamiento y la actividad corporativa en Colombia, las voces que promueven la paz de manera más activa son las responsables de sabotearla, y la usan solo para limpiar su propia imagen. “Los que hablan del posconflicto son los autores intelectuales del crimen: los gobiernos de los países desarrollados, los voceros de las multinacionales, los voceros del establecimiento, etc.

2 R. Gomis, M. Romillo, and I. Rodríguez, “Reflexiones sobre la política del terror: El caso de Guatemala,” *Cuadernos de Nuestra América*, Vol 1. (1983).

Ellos hablan del posconflicto porque quieren decirle a la gente: ‘tápanse los ojos, esto se acabó, esto ya pasó, nos vamos a perdonar, miren estos perros lo que hicieron, nosotros somos buenas personas’”.

Desenredar los discursos hegemónicos sobre la paz y la prosperidad se complica mucho debido a la autocensura de la prensa, así como a los ataques contra los periodistas. Es difícil saber qué está sucediendo en las áreas rurales remotas que son afectadas por la guerra antidrogas. Mientras la guerra continúa, esclarecer las transformaciones sociales, políticas y económicas que acompañan a las políticas de guerra antidrogas es una tarea crucial. En este sentido, el libro es un trabajo de carácter preliminar, y con suerte será uno de muchos esfuerzos emergentes para entender y analizar los factores políticos y económicos que impulsan la guerra antidrogas. Es inevitable que con el tiempo surja más evidencia de la complicidad de los intereses corporativos y el capitalismo antidrogas; en cualquier caso, se trata de una historia en progreso que requiere que sigamos prestándole atención. En junio de 2014, al tiempo que yo terminaba los últimos detalles del libro, se aprobó en el Senado de México una serie de leyes secundarias vinculadas a la reforma energética, las cuales facilitan la expropiación de tierras a favor de compañías energéticas. La reforma sólo se discutió 55 minutos, mientras un partido de la Copa Mundial de Fútbol se transmitía en televisiones de todo el país. Que esta legislación se aprobara después de seis años de extrema violencia y terror no es una mera coincidencia. Este libro es un intento de explicar cómo la violencia de la guerra antidrogas estableció los cimientos para la expansión del capitalismo neoliberal en México, Centroamérica y Colombia; espero que ayude a inspirar acciones y reflexiones futuras en defensa de la tierra y de espacios autónomos en contra o más allá del capitalismo.

La resistencia de las comunidades a lo largo de estos países está siendo atacada por la guerra antidrogas, y a pesar de ella siguen en pie de lucha, día tras día. Este libro podría dejar a algunos lectores con una sensación de desesperanza o impotencia, y sería deshonesto fingir que existe un movimiento unificado de resistencia contra la guerra antidrogas a lo largo del continente. Más bien, es desde muchas autonomías y comunidades que se están construyendo los desafíos más fuertes al capitalismo. Espero que esta obra incite discusiones más profundas sobre la guerra antidrogas y apunte hacia nuevos espacios desde los que las comunidades y sus aliados podamos luchar.

Epílogo: México después de Ayotzinapa

“Es necesario accionar en este momento porque nos están aniquilando.

Es necesario que nosotros sí hagamos algo.”

–Nadia Vera, antropóloga social, torturada y asesinada junto con el periodista Rubén Espinosa, Alejandra Negrete, Yesenia Quiróz y Mile Virginia Martín el 31 de julio de 2015 en la ciudad de México.¹

Han pasado más de tres años desde que dimos los toques finales al manuscrito de la edición en inglés de *Drug War Capitalism*, y durante este periodo ha continuado la campaña de terror contra el pueblo de México en nombre de la lucha contra las drogas.

Poco antes de que la primera edición del libro se fuera a imprenta, comenzaron a oírse rumores de que el ejército había masacrado a 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. Los primeros reportajes afirmaban que los asesinatos habían tenido lugar durante una balacera, y el gobernador del Estado de México inicialmente declaró que el ejército “en su legítima defensa abatió a los delincuentes”.² Una testiga cuya hija estaba entre los fallecidos, declaró posteriormente que los soldados habían formado a los 22 antes de ejecutarlos uno por uno. La testiga ocular afirmó haber pedido a los soldados que no lo hicieran, que no mataran a los interrogados. De acuerdo con ella, los soldados respondieron que “esos perros no merecen vivir.”³ El encubrimiento de estos hechos involucró a burócratas de varios niveles del gobierno. Fue solamente gracias a los reporteros de la revista *Esquire* y el trabajo de los periodistas en México que llegó a saberse la verdad sobre lo que había pasado en Tlatlaya. Se cree que ocho soldados estuvieron directamente involucrados en los asesinatos; siete han sido acusados, tres de ellos por homicidio.

Poco tiempo después de que se destapara el papel del ejército en la masacre de civiles en Tlatlaya ocurrió la desaparición de 43 estudiantes,

1 Rompeviento TV. “Fragmentos de la entrevista a Nadia Vera, en reportaje Veracruz: la fosa olvidada”. Rompeviento TV. 2 de agosto, 2015. <http://rompeviento.tv/Rompeviento-Tv/?p=2026>

2 <http://aristeguinoticias.com/2210/mexico/cronologia-del-caso-tlatlaya-desde-el-30-de-junio-al-21-de-octubre/>

3 <http://www.sinembargo.mx/19-09-2014/1121286>

y el asesinato de otros tres, en Iguala, Guerrero. La noche del 26 de septiembre de 2014, seis personas fueron asesinadas, tres de ellas estudiantes en una escuela normal cercana. El rostro de uno de ellos fue desollado. A otros se les negó atención médica. Al día siguiente, 43 estudiantes más de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa estaban desaparecidos. Fueron vistos por última vez cuando estaban siendo arrestados por la policía municipal, presuntamente por participar en la toma de autobuses para transportarse a una marcha en la ciudad de México. La policía entregó a los estudiantes a un grupo local de paramilitares, identificado por los medios de comunicación como los Guerreros Unidos.

Los restos de uno de los 43 desaparecidos, Alexander Mora Venancio, han sido descubiertos e identificados, y los otros 42 estudiantes continúan desaparecidos. En la búsqueda de los estudiantes, grupos de policías comunitarias y otras organizaciones sociales iniciaron una de las primeras campañas de localización de fosas comunes. En las semanas y meses posteriores a la masacre y desaparición forzada de los normalistas, docenas de fosas comunes llenas de cuerpos recién enterrados fueron descubiertas en los alrededores de Iguala.

El procurador general Jesús Murillo Karam planteó que un grupo criminal había confundido a los estudiantes como miembros de un grupo rival, y que por eso los había desaparecido. Pero no debe quedar duda de que *fue el Estado*. Fueron oficiales de policía los que dirigieron el asesinato de seis personas el 26 de septiembre, incluyendo la tortura y desollamiento de Julio César Mondragón. Fue la policía quien detuvo a los jóvenes, y fue la policía, en complicidad con un grupo local de paramilitares, quien desapareció a los estudiantes. El gobierno mexicano creyó que podían sortear la desaparición forzada y la masacre en Iguala de la misma manera en que lo había hecho en matanzas anteriores. Semana tras semana, las autoridades lucharon por mantener su versión de los hechos. Intentaron vincular a los estudiantes con actividades criminales: “Ya habían ido al municipio, tampoco son hermanas de la caridad” dijo Murillo Karam, refiriéndose a los normalistas de Ayotzinapa.⁴

No se debe subestimar el impacto de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Detonó la mayor crisis de legitimidad que el gobierno mexicano ha enfrentado desde que comenzó la guerra contra las

⁴ Ortiz, Sergio. “‘Desaparecidos de Ayotzinapa No Eran Hermanas de La Caridad’: Murillo Karam.” *Revolución 3.0*, enero 2015. <http://revoluciontrespuntocero.com/desaparecidos-de-ayotzinapa-no-eran-hermanas-de-la-caridad-murillo-karam/>

drogas en diciembre de 2006. Pese a los esfuerzos de Murillo Karam y otros, el gobierno federal perdió, por un par de meses, la capacidad de producir un discurso hegemónico sobre los acontecimientos en Guerrero.

Cinco meses después, con 42 de los estudiantes aún desaparecidos, el gobierno federal cerró la investigación. Tiempo después, un equipo forense contratado por las autoridades municipales de Iguala determinó que la fauna nociva había mutilado el rostro de Mondragón.⁵ Las madres, padres y aliados de los 46 jóvenes desaparecidos o asesinados continúan rechazando las versiones oficiales del incidente.

Lo que sucedió en Iguala en septiembre pasado no es un caso de algunas ‘manzanas podridas’ en la policía municipal. Por el contrario, Ayotzinapa es apenas la gota que derramó el vaso, la que sacó a la luz cómo el ejército, la policía federal y la municipal actúan en conjunto con los grupos criminales para sembrar el terror. Ayotzinapa no es un caso excepcional: es paradigmático. Ahondemos: los grupos que el estado llama ‘cárteles del narcotráfico’ o ‘grupos del crimen organizado’ pueden ser entendidos como algo más cercano a organizaciones paramilitares. No amenazan ni buscan controlar al estado; más bien son capaces de fortalecer el aparato represivo del estado. Esta complicidad estructural entre grupos paramilitares y fuerzas de seguridad estatal hace que la responsabilidad por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de 6 personas entre el 26 y el 27 de septiembre de 2015, no pueda recaer en nadie en particular. Más bien, esta violencia extrema fue posible debido a formas solapadas de dominación, capitalismo, impunidad, racismo, militarización y paramilitarización. Estos fenómenos no son creados ni mantenidos sólo por el gobierno de México, sino también por el de EUA y otros, y en *Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo* afirmo que su existencia pueda resultar benéfica para el capital transnacional.

Después de Ayotzinapa hubo manifestaciones en todo el país cuya afluencia no se había visto desde el levantamiento zapatista veinte años atrás. Edificios de gobierno fueron incendiados. Las escuelas normales entraron en huelga indefinida a nivel nacional. Las mayores universidades del país suspendieron labores en días de protesta. Bachilleratos y colegios fueron clausurados por los estudiantes, que organizaron asambleas, bloquearon caminos y organizaron eventos culturales. Se organizaron manifestaciones en otras partes del mundo, con una gran respuesta de

⁵ Petrich, Blanche. “‘Fauna nociva’ mutiló el rostro del normalista César Mondragón: peritos”. *La Jornada*. 26 de junio, 2015. <http://www.jornada.unam.mx/2015/06/26/politica/004n1pol>

parte de las organizaciones chicanas, latinas y mexicanas en Europa y especialmente en EUA.

Hay un México antes y otro después de Ayotzinapa, un México en el que una parte cada vez mayor de la ciudadanía comprende que el estado es el responsable de buena parte de la violencia atribuida a la guerra antidrogas y al crimen organizado.

...

Es importante subrayar que México no es un “estado fallido”. Sin duda es un estado que le ha fallado a gran parte de su pueblo. Pero no ha fallado en absoluto al cumplir su tarea dentro del sistema capitalista global. México es un discípulo ejemplar del Fondo Monetario Internacional, que en diciembre de 2014 afirmó que “Las políticas macroeconómicas y marcos legales de México continúan siendo muy sólidos”.⁶ Tras la desaparición de los 43 normalistas, el presidente Enrique Peña Nieto dio un Mensaje a la Nación, en el que, apelando al terror estatal desplegado en Iguala, hizo un llamado a profundizar la violencia estructural y la desigualdad en el sur del país. Aseguró que iba a mandar más policías federales a Guerrero y Michoacán, lo cual, ya sabemos, ha sido un factor clave en el estallido de la violencia.

Hay otro aspecto que Peña Nieto abordó casi al final del Mensaje y que atañe directamente al tema del libro: la expansión capitalista que subyace a toda estrategia estatal de terror y control social. Cito al presidente:⁷

Sin embargo, los trágicos acontecimientos en Iguala también revelan una dimensión social y económica detrás de la violencia y la debilidad institucional. La justicia que queremos va más allá del ámbito legal. Incluye también la reducción de la pobreza, la marginación y la desigualdad que padecen los estados del Sur del país. Hoy existen dos Méxicos: Uno. Inserto en la economía global, con crecientes índices de ingreso, desarrollo y bienestar. Y por el otro lado, hay un México más pobre, con rezagos ancestrales que no han podido resolverse por generaciones.

6 International Monetary Fund. “Mexico: Arrangement Under the Flexible Credit Line and Cancellation of the Current Arrangement-Staff Report and Press Release”. December 1, 2014. <http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=42466.0>

7 Peña Nieto, Enrique. “Mensaje a la Nación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto: Por un México en paz con justicia y desarrollo”. 27 noviembre, 2014. <http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mensaje-a-la-nacion-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-por-un-mexico-en-paz-con-justicia-y-desarrollo/>

Las sugerencias que hizo Peña Nieto son varias. Primero, que las partes del país más acopladas al capitalismo global corresponde a las áreas donde hay paz y seguridad; hemos visto que esto no es cierto, basta considerar por ejemplo los niveles de violencia en Ciudad Juárez u otros lugares en la frontera norte de México. Segundo, que la pobreza no existe en las partes de México insertas en la economía global, cosa que tampoco es verdad, pues basta considerar que el salario de los trabajadores en las maquilas ronda los 5 dólares por día de trabajo. Y tercero, que la pobreza material que existe en algunas partes del sur de México se debe a “rezagos ancestrales” y no a procesos de colonización, despojo y capitalismo salvaje. Sin ninguna evidencia, Peña Nieto concluyó que: “La mayoría de los conflictos sociales y políticos más graves del país tienen su origen, precisamente, en la falta de desarrollo de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.” Sería más exacto aclarar que la organización social ha hecho que estos tres estados sean más conflictivos para el dominio del capital, y no ignorar que los estados norteros “insertos en la economía global” como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, y Sonora) también han experimentado periodos de extrema violencia relacionada oficialmente con el combate al narcotráfico.

En este contexto, ceder más territorio a las empresas transnacionales aparece como la solución a la desigualdad económica planteada por Peña Nieto. En su discurso propuso nuevas inversiones en carreteras, hospitales y gasoductos. Luego dijo que:

...por primera vez en nuestra historia, propongo que se establezcan tres zonas económicas especiales en la región más atrasada del país. Éstas serán: el Corredor Industrial Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, que conectará al Pacífico con el Golfo de México; la segunda, en Puerto Chiapas; y la tercera, en los municipios colindantes al Puerto de Lázaro Cárdenas, tanto de Michoacán, como de Guerrero. Una zona económica especial, es un área en la que se ofrece un marco regulatorio e incentivos especiales para atraer a empresas y generar empleos de calidad.

Hay pruebas contundentes que apuntan a que el desarrollo económico impulsado en beneficio del capital global contribuye a la violencia estructural. Ahora, lo propuesto por las élites mexicanas y los capitalistas transnacionales a través de su vocero en Los Pinos confirma que están dispuestos a aprovechar una crisis nacional como la de Guerrero para promover cambios sistémicos que favorecen aún más al capital. Al concluir su mensaje, Peña Nieto pronunció el lema “Todos somos Ayotzinapa”, y con esto promete incrementar la conflictividad y el despojo como solución a la violencia.

Mientras que la tragedia de los estudiantes desaparecidos dominaba los titulares y los debates en México, el gobierno federal aprobó las últimas leyes para permitir la privatización de la industria petrolera de México y la participación de empresas privadas en proyectos de petróleo y gas en el país.⁸ “La constitución fue aprobada rápidamente y las leyes secundarias fueron aprobadas a velocidad de relámpago, y las regulaciones se están implementando”, declaró un asesor de Pemex que vive en Calgary, Canadá. “Todos los que conozco en el gobierno mexicano están trabajando dieciocho horas al día para sacar esto adelante”.⁹

El terror estatal no acabó en Iguala. El 6 de enero de 2015, la policía federal abrió fuego contra miembros de las Fuerzas Rurales que estaban manifestándose en la plaza central de Apatzingán, Michoacán. Las Fuerzas Rurales surgieron de una cooptación de parte del movimiento de autodefensas, el levantamiento armado en el campo michoacano que atrapó la atención mundial a comienzos del 2015.¹⁰ Los manifestantes estaban exigiendo sus pagos pendientes. En dos ataques, ese día al menos 16 personas fueron asesinadas por la Policía Federal en Apatzingán. Decenas salieron heridas. La versión oficial de los hechos plantea que hubo nueve decesos en total, y que se debieron a “fuego amigo” o “fuego cruzado” entre las Fuerzas Rurales y la policía. Esa versión se sostuvo a nivel nacional por más de tres meses, hasta que la periodista Laura Castellanos sacó una investigación a finales de abril, que destruyó la coartada de gobierno.¹¹

Noticias de otras masacres y desapariciones grupales se han filtrado a pesar del bloqueo mediático que existe alrededor de la guerra contra las drogas. En julio del 2015, el ejército atacó a la comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán. “A la comunidad no se le perdona el haberse atrevido a organizarse y empezar a recorrer un camino propio, lejos de partidos políticos y de mañas electorales,” escribieron los periodistas Alejandro Amado y Heriberto Paredes después de la agresión militar.¹²

8 Barboza, César. “Inician licitaciones de la Ronda Uno”. *Vanguardia*. 4 de noviembre, 2014. <http://www.vanguardia.com.mx/inicianlicitacionesdelarondauno-2200213.html>

9 Hussain, Yadullah. “Mexico: North America’s last energy frontier is ready to dance.” *Financial Post*. November 1, 2014. http://business.financialpost.com/news/energy/mexico-north-america-last-energy-frontier-is-ready-to-dance?_lsa=5696-bdcd

10 Redacción AN. “El gobierno cooptó autodefensas y desacredita a Mireles: Mesa MVS”. *Aristegui Noticias*. 12 de mayo, 2014. <http://aristeginoticias.com/1205/mexico/el-gobierno-coopto-autodefensas-y-desacredita-a-mireles-mesa-mvs/>

11 Castellanos, Laura. “Las ejecuciones de Apatzingán: policías federales, los autores”. *Proceso*. 18 abril, 2015. <http://www.proceso.com.mx/?p=401646>

12 Amado, Alejandro y Paredes, Heriberto. “Embestida del ejército contra la comunidad nahua de Santa María Ostula”. *SubVersiones*. July 20, 2015. <http://subversiones.org/archi->

Durante 2014 a 2015, cincuenta personas han sido registradas como desaparecidas en el municipio de Chilapa, Guerrero, y se calcula que otras 44 personas han sido desaparecidas en la misma región pero no están registradas como tales.¹³ Los conflictos en Chilapa han aumentado desde que civiles que se identifican como policías comunitarios tomaron control de la seguridad local en cooperación con la Policía Federal, en medio de un abierto conflicto entre grupos del crimen organizado. Este conflicto se ha convertido en un emblema de la cooptación del término “comunitario” por parte de los grupos armados. “En dos años —a partir de la primera ruptura de la CRAC-PC— el término «comunitarios» se ha visto en distintos medios desvirtuado, perdió su sentido original que por 15 años fue sinónimo de justicia. Los enfrentamientos entre estas fracciones y los resultados fatídicos de ello, han corrompido a la *comunitaria*”, según un reportaje publicado en el portal independiente *Subversiones*.¹⁴

La violencia ha desplazado a cientos de personas de San Miguel Totolapan, también en Guerrero, que pertenece a un distrito rico en oro, plata, hierro y cinc, donde se han concedido múltiples concesiones para la exploración minera. Ataques de la policía en nombre de líderes de carácter feudal hirieron a 70 personas en San Quintín, Baja California, a principios del 2015, provocando protestas en muchos lugares. En cambio, el país no reaccionó cuando más de 2,000 personas fueron expulsadas de sus tierras comunales en la ciudad fronteriza de Sonoyta. De acuerdo con locales desplazados, 40 cuerpos fueron colgados del quiosco de la plaza central del pueblo el 30 de abril, pero la cifra oficial fue de tres muertos.¹⁵ Por la misma época salieron a la luz reportes de otra masacre perpetrada por la Policía Federal, esta vez en un rancho entre Ecuandureo y Tanhuato en Michoacán. El resultado: la muerte de 42 civiles, algunos de ellos armados, y de un agente de la policía federal.¹⁶

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México reportó más de 121,000 homicidios durante el sexenio de Calderón, cifra que duplica la del sexenio de Vicente Fox (2001-2006). De acuerdo con un informe del del

vos/117214

13 de Dios Palma, Arturo. “Son en total 50 las desaparecioines que han documentado en Chilapa”. *La Jornada de Guerrero*. 17 de julio, 2015. <http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2015/07/17/index.php?section=sociedad&article=005n1soc>

14 Santillán, José Luis y Paredes, Heriberto. “Chilapa, entre la violencia y el poder del narco”. *Subversiones*. 19 de mayo, 2015. <http://subversiones.org/archivos/116018>

15 Escobar, Amalia. “Le clamamos a Dios para que la violencia termine”. *El Universal*. 5 de julio, 2015. <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/2015/07/5/le-clamamos-dios-para-que-la-violencia-termine>

16 Hernández, Daniel and Serafin Estrada, Juan José. <https://news.vice.com/article/42-dead-suspects-1-dead-agent-suspected-shootout-in-mexico-is-under-suspicion> *Vice News*. 23 de mayo, 2015.

Proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego, “Ningún otro país en el hemisferio ha experimentado un aumento tan grande en el número o tasa de homicidios durante la última década”.¹⁷ Mientras preparaba este epílogo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó que hubo 23,101 homicidios entre enero y noviembre del 2017, menos que la cumbre de más de 27,000 homicidios en 2011, pero un tasa de 18.7 homicidios por cada 100,000 habitantes se mantiene muy por arriba de las tasas previas a la guerra.¹⁸

La investigación empírica está empezando a señalar la responsabilidad del estado en las cifras de asesinatos en México. Un informe reciente publicado en *American Statistician* encontró que hubo más asesinatos en donde hubo intervención militar durante la guerra contra las drogas del sexenio de Calderón.¹⁹ De acuerdo con el artículo, “las intervenciones militares tuvieron como resultado un incremento en la tasa promedio de homicidio” en 18 regiones del país. Uno de los detalles reveladores del informe es que no existe una “lista comprehensiva de intervenciones”, lo que significa que ni siquiera sabemos de todas las intervenciones militares que han tenido lugar en México desde diciembre de 2006.

El desplazamiento interno también ha seguido aumentando. De acuerdo con el Centro Internacional de Monitoreo del Desplazamiento (IDMC), en 2014 hubo al menos 281,000 personas desplazadas por la violencia en México, y las cifras también son impresionantes en Centro América. Colombia, que comenzó un proceso de paz con las FARC en diciembre de 2014, terminó con 137,200 personas desplazadas ese año, para alcanzar un total de 6,044,200 personas desplazadas internas.²⁰ Así como la tasa de homicidio, el número de personas desplazadas en México podría ser mucho más alto que el reportado. Según el IDMC, en México “aparte de los 23 eventos masivos [que condujeron a desplazamiento

17 Shirk, David, Molzahn, Cory, and Heinle, Kimberly. “Drug Violence in Mexico: Data and Analysis through 2014.” University of San Diego: Justice in Mexico Project, Abril 2015. <https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2015/04/2015-Drug-Violence-in-Mexico-Report.pdf>.

18 Barragán, Sebastián. “Repuntan homicidios dolosos 22% en 2017, indican nuevas cifras del SNSP”. *Aristegui Noticias*, 23 de diciembre, 2017. <https://aristeginoticias.com/2312/lomas-destacado/repuntan-homicidios-dolosos-22-en-2017-indican-nuevas-cifras-del-snsp/>

19 Espinosa, Valeria, and Donald B. Rubin. “Did the Military Interventions in the Mexican Drug War Increase Violence?” *The American Statistician* 69, no. 1 (January 2, 2015): 17–27. doi:10.1080/00031305.2014.965796

20 IDMC. “Global Overview 2015: People internally displaced by conflict and violence”. Internal Displacement Monitoring Centre. May 2015. <http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf> p. 16

interno] registrados en 2014, se sabe que muchas personas huyen en pequeños grupos y encuentran sus propias soluciones, lo cual los hace efectivamente invisibles y dificulta la tarea de calibrar la verdadera escala del desplazamiento”.²¹

Las matanzas y el terror perpetrados por el estado en México suceden en una época de cooperación sin precedentes en entrenamientos de policías y militares entre México y Estados Unidos. Entre 2008 y 2014, Estados Unidos entrenó más de 22,000 policías federales y estatales en México. *The Intercept* reportó que cinco elementos del batallón involucrado en la masacre de Tlatlaya fueron entrenados por el Comando Norte de EUA.²²

Se nos dice que este entrenamiento conducirá a una mejor policía, una idea que ha tenido una aceptación sorprendente dadas las circunstancias. Conforme emerge cada vez más evidencia de masacres promovidas por fuerzas de seguridad mexicanas, en Estados Unidos la policía ha sido objeto de abierta resistencia y protestas masivas a la sombra de numerosos asesinatos cometidos por policías contra hombres y mujeres jóvenes, mayoritariamente afroamericanos. El problema de la violencia policiaca en Estados Unidos ha conducido a crecientes llamados a desarmar y desarticular grupos policiacos y abolir las prisiones. La polémica Ley de Seguridad Interior, aprobado a finales del 2017, propone legalizar la ya existente militarización del país.

El modelo de los comandos SWAT estadounidenses se ha replicado localmente en estados como Coahuila, con resultados desastrosos. Tómese el caso de Hortensia Rivas Rodríguez, cuyo hijo Víctor fue secuestrado en su casa por miembros del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de Coahuila, formado en 2009. Cuando Rivas Rodríguez fue al centro de mando de los GATEs en Piedras Negras, fue recibida por uno de los sujetos que participaron en la desaparición de su hijo. Alcanzó a reconocer por un instante a su hijo dentro de uno de sus vehículos, pero no ha vuelto a saber de él.

“He sabido, todo el mundo sabe, es un secreto a voces, lo que está pasando en Coahuila,” declaró Rivas en una entrevista en la ciudad de México, refiriéndose a los GATEs. “Es un grupo que el gobernador permitió que

21 IDMC. “Global Overview 2015: People internally displaced by conflict and violence”. Internal Displacement Monitoring Centre. May 2015. <http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf> p. 18

22 Currier, Cora and Franzblau, Jesse. “Mexican Authorities Implicated in Violence, But U.S. Security Aid Still Flows”. *The Intercept*. 8 de mayo, 2015. <https://firstlook.org/theintercept/2015/05/08/ayotzinapa-mexico-u-s-security-aid-keeps-flowing/>

operaran en Coahuila, para más seguridad, él dijo. Pero en realidad lo que se está haciendo es desapareciendo. Ellos son los delincuentes, porque ellos son los que se llevaron a mi hijo, a todos nuestros desaparecidos, la mayoría, ellos se los llevaron. Es la autoridad, es lo que está pasando en Coahuila”.

La Asociación de Familias Unidas afirma que los miembros de los GATEs han estado involucrados en al menos 60 casos de desapariciones forzadas en la región. El grupo también ha sido acusado de llevar a cabo amenazas, detenciones arbitrarias, intimidaciones, robos y golpizas, e incluso de colocar dispositivos explosivos en una estación de policía y un palacio municipal en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.²³

Hay cada vez más casos de resistencia comunitaria a la violencia y abusos de la policía. Familias Unidas de Coahuila ha desarrollado una estrategia de respuesta rápida que consiste en que sus miembros se dirigen directamente a la comandancia de los GATEs cuando se reporta una desaparición, y esto en ocasiones funciona. La resistencia comunitaria a la violencia estatal también ha creado organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria (CRAC-PC). También ha conducido a periodos de organización como los que involucraron la creación de los grupos de *autodefensa* en Michoacán—entre las primeras acciones de muchos de estos grupos fue desarmar a las policías locales, considerados los principales depredadores de los miembros de la comunidad. El escándalo policiaco más reciente en México —la masacre de miembros de las facciones de autodefensas que cooperaron con el estado para legalizarse— es un mensaje a los diversos grupos de autodefensa de que ni siquiera la cooperación garantiza la supervivencia.

Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Ostula representan algunos ejemplos de la crudeza de la violencia estatal en México. No sabemos cuántos otros sucesos como estos han sucedido en los últimos años. El número de fosas comunes que se están descubriendo (fuentes involucradas en las búsquedas afirman que en los medios de comunicación sólo se da cuenta de una fracción de todas las que se encuentran) y la cantidad de personas que han sido desaparecidas en México desde 2006 (oficialmente más de 32,000, la cifra extraoficial puede ser muchas veces más alta) sugieren que estos

23 Jiménez, Eugenia. “Denunciarán ante la OEA a grupo de élite de Coahuila”. *Milenio*. 4 de enero, 2014. http://www.milenio.com/policia/Denunciaran-OEA-grupo-elite-Coahuila_0_272972747.html

Redacción. ¿Qué son los GATEs? *Estado Mayor*. 20 de agosto 2013. <http://www.estadomayor.mx/31846>

eventos podrían no ser más que la punta del iceberg de la violencia de estado en una guerra desplegada contra la población.

•••

Por otro lado está la historia del malvado. Cuando Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue capturado en febrero de 2014, yo iba muy avanzada en la escritura de *Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo*. Una persona cercana se puso en contacto conmigo para preguntarme si iba a incluir su captura en el libro. No lo hice, y le expliqué que se debía a que los impactos reales de las actividades del Chapo son escurridizos, basados en la especulación, y de hecho casi imposibles de conocer. Construir un análisis de lo que está pasando en México con base en un solo hombre limita mucho el entendimiento de la forma que tiene esta guerra.

Y qué bueno que no lo incluí: según los medios, El Chapo escapó de la prisión por un túnel en julio de 2015. Yo considero que fue soltado por oficiales de la prisión, quienes luego fueron despedidos. La investigación de su fuga dominó la atención mediática en México muchas semanas. Analistas y periodistas afirmaron que su huída había arruinado los avances logrados en una década de relaciones entre México y Estados Unidos. También dijeron que era el hecho más vergonzoso con lo que el gobierno de Peña Nieto había tenido que lidiar (como si Ayotzinapa no hubiera pasado y 42 de los normalistas no siguieran desaparecidos).

La cobertura mediática de la huída del Chapo eclipsó los ataques contra civiles en Michoacán y Guerrero y la primera subasta de contratos de producción petrolera en 75 años, lo cual es un ejemplo de cómo las narrativas dominantes de la guerra antidrogas sirven para distraer de importantes sucesos que tienen lugar al mismo tiempo. La aproximación de los principales medios de comunicación a la guerra antidrogas incluye darle prioridad a ciertas historias como la huída del Chapo y las rivalidades entre cárteles, mientras se ignoran las masacres, los desplazamientos y las desapariciones, así como los sucesos económicos que están transformando a la sociedad mexicana.

Mientras la búsqueda del Chapo continuaba, el gobierno mexicano publicó los resultados de la primera ronda de asignación de contratos de exploración petrolera. Se otorgaron dos concesiones de campos marinos a un consorcio de empresas de México, EUA y Reino Unido. Esta es la primera vez desde la expropiación petrolera en 1938 que se permite la exploración petrolera a empresas privadas en México. Se trató de la primera

y más pequeña de las cinco subastas de bloques petroleros que se llevarán a cabo como parte de la primera ronda de concesiones otorgadas en el nuevo sector privado del petróleo en México.

La siguiente porción de la Ronda 1 de subastas de campos petroleros convencionales y no convencionales, corresponderá a Tamaulipas y Nuevo León, a lo largo de la frontera con EUA, así como a Veracruz, algunos de los estados más conflictivos del país. Se cree que buena parte de esta región rica en hidrocarburos está bajo el control de Los Zetas, un grupo denominado ‘cártel’ que ha secuestrado a trabajadores en turno empleados por Pemex. Está por verse cómo se relacionarán Los Zetas con las compañías privadas que reciban las concesiones de explorar los bloques subastados. De manera análoga, muchas de las regiones de Michoacán y Guerrero que han experimentado el terror dirigido por el estado y otras formas de violencia son ricas en minerales o áreas agrícolas muy productivas.

Más allá de las balaceras que a veces llegan a los noticieros, poco se sabe sobre la violencia y la represión enfrentada por los residentes de ciudades y áreas rurales en Tamaulipas, que desde hace tiempo se considera territorio prohibido para los periodistas. El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de cuatro mujeres, incluida Nadia Vera (citada en el epígrafe) en una colonia céntrica de la ciudad de México el 31 de julio de 2015, de nuevo atrajo la atención pública a los ataques contra periodistas. Espinosa había escapado de Veracruz en busca de cierta seguridad en la capital tras haber sido amenazado por policías municipales en la ciudad de Xalapa en junio. Desde el año 2000, al menos 110 periodistas han sido asesinados en México.



Los ataques a migrantes en tránsito por México han continuado junto con las masacres, desapariciones y desplazamientos colectivos. Entre octubre de 2013 y octubre de 2014, 60,000 menores de edad sin acompañantes cruzaron la frontera México-EUA.²⁴ La mayoría provenía de Honduras, seguido por Guatemala, El Salvador y México. Este periodo marcó el punto máximo de menores centroamericanos tratando de cruzar la frontera. (El número

24 American Civil Liberties Union. “Unaccompanied Immigrant Children Report Serious Abuse by U.S. Officials During Detention.” June 11, 2014. <https://www.aclu.org/news/unaccompanied-immigrant-children-report-serious-abuse-us-officials-during-detention?redirect=immigrants-rights/unaccompanied-immigrant-children-report-serious-abuse-us-officials-during>

de menores mexicanos se ha mantenido estable; los niños mexicanos son deportados sin que haya audiencias judiciales de por medio, por lo que no permanecen detenidos tanto tiempo.)

Muchos de los jóvenes mantenidos en custodia por la Patrulla Fronteriza de EUA (CPB) fueron sometidos a medidas que serían consideradas cuestionables con cualquiera, incluso si fueran adultos convictos. Las acusaciones contra la CPB incluidas en una denuncia hecha en junio en nombre de cien menores por la American Civil Liberties Union y otros grupos defensores de derechos humanos son realmente grotescas.²⁵ Incluyen “la negación del cuidado médico necesario a niños de incluso 5 meses de edad, el rechazo a proveer pañales para los infantes, confiscar y no devolver documentos legales y pertenencias personales, hacer insultos racistas y amenazas de muerte, desnudar, y asegurar con grilletes en tres partes del cuerpo a los niños durante el transporte”.²⁶ Durante una visita a McAllen, Texas, que hice hace algunos años, enfermeras y trabajadores sociales me informaron que los niños son mantenidos en jaulas para perros.

Después de llegar a un tope en junio de 2014, el número de menores no acompañados que llegan a EUA ha decrecido de más de 10,000 a algunos miles cada mes.²⁷ Esto se debe en buena medida a que México esta deportando más menores centroamericanos. Como cada vez llegan menos muchachos de Centroamérica a la frontera estadounidense, su difícil situación ha perdido visibilidad, pero no antes de que el ex-vicepresidente Joe Biden y los líderes centroamericanos usaran la crisis para promover una versión actualizada del capitalismo de la guerra antidrogas, que bautizaron Alianza por la Prosperidad.

Según Biden, que pidió al Congreso mil millones de dólares para financiar la Alianza por la Prosperidad, el plan promueve la seguridad, la gobernabilidad y el crecimiento económico en El Salvador, Honduras y Guatemala. (El plan fue autorizado el otoño pasado por los presidentes de estos países.) Se proyecta que el financiamiento total para la Alianza por

25 Perez, Evan. “Number of unaccompanied minors crossing into U.S. tops 60,000.” CNN. August 2, 2014. <http://www.cnn.com/2014/08/02/us/border-crisis-milestone/>

26 American Civil Liberties Union. “Unaccompanied Immigrant Children Report Serious Abuse by U.S. Officials During Detention.” June 11, 2014. <https://www.aclu.org/news/unaccompanied-immigrant-children-report-serious-abuse-us-officials-during-detention?redirect=immigrants-rights/unaccompanied-immigrant-children-report-serious-abuse-us-officials-during>

27 Chishti, Muzaffar, Hipsman, Faye. “Unaccompanied Minors Crisis Has Receded from Headlines But Major Issues Remain.” *Migration Policy Institute*. 25 de septiembre, 2014. <http://www.migrationpolicy.org/article/unaccompanied-minors-crisis-has-receded-headlines-major-issues-remain>

la Prosperidad durante cinco años será de 25 mil millones de dólares. Los recursos estadounidenses constituyen 20 por ciento de la inversión total planeada, y el 80 por ciento restante corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo, otras instituciones financieras internacionales y los gobiernos locales. Biden fue uno de los “arquitectos” del Plan Colombia, y comparó la transformación necesitada en Centroamérica a la de Colombia. A partir de 2000, EUA gastó 9 mil millones de dólares en el Plan Colombia, y el país “reformó sus cortes de justicia, renovó sus fuerzas policíacas, y reformó sus reglas comerciales para abrir la economía”, de acuerdo con Biden.²⁸

Pero hay algunos detalles que Biden no mencionó sobre la actual situación de seguridad en Centroamérica. Omitió que EUA ya ha estado financiado un programa al estilo de Plan Colombia en Centroamérica, conocido como Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI). Tampoco mencionó que la violencia y en particular los homicidios en Centroamérica han ido al alza desde que el financiamiento estadounidense apareció. La primera llamada a una “Alianza por la Prosperidad y la Paz” entre EUA y Latinoamérica vino del presidente colombiano Juan Manuel Santos, en diciembre de 2013. Santos se basó en revivir la idea controversial de John F. Kennedy de una “Alianza por el Progreso”. Tras una reunión en Washington con representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, el presidente Santos declaró que “Acordamos buscar cómo podemos materializar esa iniciativa; creo que podría ser una iniciativa muy productiva para todas las Américas”.²⁹

No es ninguna coincidencia que la primera mención de una Alianza por la Prosperidad viniera de Colombia. Su posición de vanguardia para los intereses de EUA en el hemisferio tomó forma durante el Plan Colombia. Como documento a lo largo del libro, el propósito declarado era interrumpir el flujo de narcóticos a EUA, pero el Plan Colombia no hizo casi nada para reducir la cantidad de drogas que entran a Estados Unidos. Tuvo éxito, por otro lado, en alcanzar las metas globales de la política exterior de EUA. A partir del trabajo del profesor William I. Robinson, entiendo que esas metas

28 Biden, Joseph Jr. "Joe Biden: A Plan for Central America." *New York Times*. January 29, 2015. http://www.nytimes.com/2015/01/30/opinion/joe-biden-a-plan-for-central-america.html?smid=pl-share&_r=2

29 Santos, Juan Manuel. "USA: Colombian President Juan Manuel Santos calls for Alliance for Prosperity and Peace to forge better relations between U.S. and Latin America." December 4, 2013. ITN Source. <http://www.itnsource.com/en/shotlist/RTV/2013/12/04/RTV041213004/>

están esencialmente vinculadas a asegurar la expansión del capitalismo transnacional en todo el mundo.

La pieza central de la Alianza por la Prosperidad es la construcción de un nuevo gasoducto de Salina Cruz, en el estado mexicano de Oaxaca, a Escuintla, Guatemala. Salina Cruz está frente al Océano Pacífico, tiene la refinería más al sur de México, y está conectada a la principal infraestructura de ductos del país. Un gasoducto a Escuintla atravesará más de 650 kilómetros, buena parte de ellos en las regiones costeras de Chiapas y Guatemala. El argumento es que el ducto de gas natural reducirá los costos de la energía en la región. Por supuesto, esto es una especulación. Lo que puede afirmarse con certeza es que el gasoducto tiene como fin abrir un nuevo mercado para el gas de lutitas de EUA (y eventualmente del mismo México). No ayuda en lo absoluto a reducir la dependencia energética de Centroamérica a la hora de comprar hidrocarburos, pero sí asegura que los negocios podrán usar este combustible a precios más bajos.

La Alianza por la Prosperidad propone la expansión del suministro común de electricidad en Centroamérica, y su interconexión con México y Panamá. Esto significa más líneas eléctricas, más presas y más conflictos ambientales. El asesinato de una defensora ambiental más conocido recientemente es el de Berta Cáceres en Honduras. Entrevisté en el transcurso de escribir este libro, fue asesinado en marzo del 2016, y Gustavo Castro, un luchador social de Chiapas, sobrevivió el atentado. La interconexión con México significa, de hecho, la vinculación al mercado de EUA, y la interconexión con Panamá representa la unión de los mercados energéticos andinos y centroamericanos, y representa una serie de terrenos de lucha en el continente.³⁰

La Alianza por la Prosperidad contempla nueve corredores logísticos nuevos, es decir, autopistas en El Salvador, Honduras y Guatemala; propone una sola ventana para encauzar las inversiones; diseña la educación según las necesidades corporativas; promueve nuevas áreas de libre comercio, más maquiladoras y reducciones de impuestos para los inversionistas corporativos; además plantea mejorar la infraestructura para los visitantes, a la que denomino “sanitarios para turistas”; por último, propone más entrenamiento para la policía, más profesionalización; somete la seguridad nacional en estos tres países a la lógica de la guerra antidrogas. Y parece que lo más difícil está por llegar, con un fraude electoral en Honduras a favor del candidato más cercano a EEUU a finales del 2017, y una serie de luchas

³⁰ US Department of State. “Mesoamerican Investors Summit Deepens Commitment to Energy Integration.” 31 de octubre, 2014. <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/10/233613.htm>

abiertas en Guatemala contra la corrupción y los cambios constitucionales que perjudicarán a las autonomías a lo largo del país.

Hasta la fecha, el gobierno de Trump en EEUU ha seguido con la Alianza por la Prosperidad, debemos de seguir prestando a ella en los años venideros. Desgraciadamente para el pueblo centroamericano, es improbable que este plan mejore los problemas estructurales que alientan la migración. Más bien, la Alianza por la Prosperidad es otra fórmula que agrava los conflictos ambientales e incrementa los riesgos ecológicos, profundizando la brecha entre los ricos y los pobres, y promoviendo el modelo de la guerra antidrogas en la seguridad pública, el cual como hemos visto, se basa en criminalizar a los segmentos de la sociedad más pobres, así como los más organizados.

El año 2018 es año electoral en México, por el cual sentimos mucha urgencia en sacar este texto, después de varios años de diálogos y decepciones con varias casas editoriales. Después de la elección de Trump en EEUU, hemos visto intentos desde el poder en México de demostrar un rechazo al racismo abierto del nuevo presidente y sus propuestas de deportar más gente, construir un muro en la frontera norte, y salir del TLCAN. En realidad, las relaciones de cercanía entre los élites políticos en México y el gobierno de Trump siguen de pie, y muchas de las políticas de Trump son una continuación más ruda de lo llevado a cabo durante los ocho años de Obama. Llegando a las elecciones mexicanas del 2018, tenemos por qué preocuparnos: en el plano político de los últimos años hemos presenciado la legalización de un fraude electoral a favor del PRI en Coahuila, la fuga de varios ex-gobernadores tras su mandato y las conexiones entre estos y grupos de crimen organizado, y también el desvío de fondos federales a favor de las campañas y los oficiales del PRI en Chihuahua. Está máquina electoral, en conjunto con la militarización y la paramilitarización del país, nos hace claro que los intereses políticos de los grupos más poderosos en México no se someten a procesos democráticos, sino se imponen sobre los pueblos.

Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo es una propuesta, una provocación. Nos invita a aceptar el hecho de que los conflictos en México y Centroamérica están entre los más sangrientos del mundo, pues ambos fueron los que causaron más pérdidas humanas en 2014, después de Siria e Irak.³¹ La clave central de este libro es no enfocar los conflictos actuales desde el narcotráfico, sino desde la guerra antidrogas, cuyo formato sigue

31 IISS. "Armed Conflict Survey 2015 Press Statement". *The International Institute for Strategic Studies*. 19 de mayo, 2014. <https://www.iiss.org/en/about%20us/press%20room/press%20releases/press%20releases/archive/2015-4fe9/may-6219/armed-conflict-survey-2015-press-statement-a0be>

expandiéndose por el mundo: en la primera edición del libro señalé que África occidental podía experimentar en el futuro próximo una guerra contra el narco. Ahora es un hecho que EUA está a punto de exportar el capitalismo de la guerra contra el narco a esa región. En julio de 2015, Washington anunció la West Africa Regional Security Initiative (WACSI), un plan similar al Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, que será desplegado en Benin, Cabo Verde, Costa de Marfil, Ghana, Liberia, Nigeria y Togo.³² *Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo* desafía las ideas convencionales sobre la guerra contra el narco, pero no es el primero ni el último de los posibles acercamientos al tema. Me llena de emoción que por fin, ya se pueda leer en castellano.

Dawn Paley
Puebla, México
Diciembre del 2017

32 Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. "The West Africa Cooperative Security Initiative (WACSI)." 16 de julio, 2015. <http://www.state.gov/j/inl/rls/fs/2015/194687.htm>

